

Titulillo: DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL EN BRASIL

Doctrina de Seguridad Nacional: Su férrea aplicación en América Latina y Brasil

Juan Manuel Zuluaga Robledo

Universidad Pontificia Bolivariana

Medellín

2014

Nota del Autor

Juan Manuel Zuluaga Robledo, Departamento de Ciencias Políticas Universidad Pontificia

Bolivariana

Correo electrónico: juanmaz21@hotmail.com

A mi esposa Sandra Milena Zuluaga y a mi hijo Jerónimo Zuluaga: por su paciencia, acompañamiento y comprensión en este trabajo de investigación. A mis padres y a mi abuelo. Gracias a todos por ser mi inspiración.

*“No sé si con anterioridad, pero en enero de 1964, cuando llegué aquí, teníamos conciencia de que en Brasil estaba produciéndose un rápido desgaste que llevaba al comunismo. Incluso antes de mi llegada habíamos instrumentado ya una política destinada a ayudar a ciertos gobernadores estatales. Tampoco brindamos ayuda financiera para respaldar la balanza de pagos, presupuesto nacional, etc., que pudiera beneficiar al gobierno central del Brasil. Todo eso se interrumpió en la época de Goulart”. **Thomas C. Mann, Secretario Adjunto de Estado de los Estados Unidos para asuntos interamericanos***

*“Existen reformadores oportunistas que, por medio de su acción antinacional ininterrumpida, procuran socavar y reemplazar a las Fuerzas Armadas e instituir un ejército popular con una milicia de imitación, con una ideología dudosa, destinada a agitar el país con pronunciamientos rebeldes y a perturbar, por medio de la subversión y el amotinamiento, la existencia de la población”. **General Castello Branco***

*“El ejército brasileño está más allá de la lucha de clases”. **Teniente Coronel Adyr Fiuza de Castro***

*“Debéis tener siempre presente que es locura que una nación espere favores desinteresados de otra, y que todo lo que una nación recibe como favor lo tendrá que pagar más tarde con una parte de su independencia”. **George Washington***

Contenido

Capítulo 1 La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina y Brasil	7
Definir el concepto	9
Cuestiones doctrinarias	16
Etapas de la Doctrina de Seguridad Nacional	21
Antecedentes: Del viejo militarismo latinoamericano del siglo XIX al XX	21
Germinación en la Guerra Fría	23
Influencias de la Revolución Cubana	29
El ocaso de la Doctrina de Seguridad Nacional	30
Realismo: ¿Cómo se construyó doctrinariamente?	32
Geopolítica y Doctrina de Seguridad Nacional	43
Los teóricos de la Doctrina de Seguridad	46
La Escuela de las Américas y otros centros de adoctrinamiento	48
Doctrina de Seguridad Nacional vs Teología de la liberación	58
Cautiverio y liberación. Un clero comprometido con los pobres: oposición directa a la Doctrina de Seguridad Nacional	63
Un nuevo giro hermenéutico: despojarse de la dependencia	68
Capítulo 2 Doctrina de Seguridad Nacional en Brasil	78
Un abre bocas: Las tesis de Golbery Do Couto e Silva	78
La era de Getulio Vargas y el gobierno de Dutra	109
El golpe militar de 1964 a Goulart. Fuerzas Armadas Brasileñas, Escuela Desarrollista y relaciones cívico militares	125

Los militares después del golpe de 1964: Sus políticas de gobierno e implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional	145
La alianza anticomunista y contrainsurgente con los Estados Unidos	158
Capítulo 3 . La Escuela Superior de Guerra, últimos gobiernos militares y la transición democrática	167
La Escuela Superior de Guerra del Brasil	167
La administración de Artur da Costa e Silva	189
Hacia la transición democrática y el final de la Doctrina de la Seguridad Nacional: El gobierno de Ernesto Geisel	207
El último gobierno militar: Joao Batista Figueredo	215
La transición democrática	217
Conclusión	232
Referencias	237

Resumen

La Doctrina de Seguridad Nacional fue la estrategia militar más preponderante que impulsó el gobierno de los Estados Unidos en América Latina para contener la expansión del comunismo en la región durante la Guerra Fría. Dicha Doctrina se aplicó en los años 60 y 70, con la irrupción de las dictaduras latinoamericanas. Conllevó la utilización de herramientas contrainsurgentes para contrarrestar al enemigo comunista.

Las cúpulas militares latinoamericanas y algunos oficiales de los ejércitos de la región, comenzaron a capacitarse en centros militares de los Estados Unidos. Estudiaron las estrategias militares para derrotar al enemigo comunista y a la subversión armada, cuyo modelo y base de estudio fueron las herramientas contrainsurgentes que utilizaron los militares franceses en Argelia.

En Brasil, la Doctrina de Seguridad Nacional, encontró eco en las ideas propuestas por el importante estratega militar, general Golbery do Couto e Silva, en su libro *Geopolítica del Brasil*. Proponía la creación de un bloque interamericano de defensa contra la expansión del comunismo soviético.

Los militares brasileños detentaron el poder desde 1964 hasta 1985, mientras aplicaron la Doctrina de Seguridad Nacional, eliminando todo intento de oposición. Al final del régimen militar, los militares decidieron que era el momento para realizar una apertura política. En 1985 el país era gobernado por un presidente civil, luego de 21 años de dictadura militar.

Palabras claves: Guerra Fría, contrainsurgencia, dictadura, represión, Doctrina de Seguridad Nacional.

Abstract

The National Security Doctrine was the most remarkable army project that coordinated the United States government in Latin America to combat the communist expansion during the Cold War. That Doctrine worked strongly since the 60 and 70, with the beginning of the Latin American dictatorships. This conduct use counter-insurgency methods like torture, violation of human rights, army repression, death forced and the use of intelligence tools to defeat the communist enemy.

The high range of Latin-American military and some t members of the armies of the region studied in military centers of the United States. They studied the strategies to defeat the enemy, the armed subversion while the students analyzed the counterinsurgency methods that the French Army practiced in Algeria. The National Security Doctrine dictates the suppression of the communism in the Latin American countries, the combat against the guerrilla; the political opposition.

At the beginning, in Brazil in the 50, The National Security Doctrine had an important author: General Golbery Do Couto e Silva that wrote *Brazil' s Geopolitics*. That Brazilian military writer argued that was necessary the alliance of Brazil with the United State government to protect the occidental civilization front the invasion of the communism.

The Army took the control and governed between that year and 1985. They applied strongly the National Doctrine Security and eliminated the opposition forces, the protest in the public areas, defeated the guerrillas and the subversion. Occurred cases of torture, violation of the human rights and forced death. At the end of the regime, the army decided that the country must live a political transition. In 1985, Brazil was ruled by civilian government, after 21 years of dictatorship and the National Security Doctrine was over.

Keywords: Cold War, Counterinsurgency, Dictatorship, repression, National Security Doctrine.

Capítulo 1 La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina y Brasil

La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional es un caso peculiar en el contexto latinoamericano, pues fue allí donde aplicó por primera vez. ¿Por qué se construyó y se aplicó una Doctrina de Seguridad especial en el Brasil? ¿Qué motivó al cuerpo castrense brasileiro para la construcción de esta doctrina exclusiva en territorio brasileño? Lo cierto es que algunos hechos políticos y geopolíticos en el orden mundial, llevaron a su declive. La idea es analizar estas problemáticas desde los postulados del realismo y neorrealismo político.

La Doctrina de Seguridad Nacional en Brasil fue una estrategia política, militar y económica durante la Guerra Fría, en un contexto bipolar, utilizada para repeler al comunismo. Para ello se crean Institutos de guerra y se controla la economía. Adicional a lo anterior, se hace necesario demostrar y comprobar que su declive está emparentado con la etapa de transición democrática latinoamericana en momentos en los que las dictaduras eran incompatibles con los postulados geopolíticos de Washington.

Esta investigación intenta interpretar el surgimiento, desarrollo y declive de la Doctrina de Seguridad Nacional en Brasil y su impacto en el quehacer político durante los años de la dictadura y en los años posteriores a su debacle. Busca analizar el concepto de Doctrina de Seguridad Nacional desde la teoría política –desde el realismo y neorrealismo político– en el contexto de Guerra Fría en América Latina y su aproximación al caso brasileiro. Determina el impacto de la Doctrina de Seguridad Nacional en el caso de las libertades civiles y políticas en territorio brasileiro. Identifica la Doctrina de Seguridad Nacional en la sucesión consecutiva de gobiernos militares en Brasil y su posterior caída.

Esta tesis sigue una metodología cualitativa ya que su objeto es la descripción del fenómeno que llamaremos Doctrina de Seguridad Nacional, su aplicación tanto en América Latina como en Brasil. Se ha utilizado una metodología investigativa de recopilación de fuentes, clasificación y filtrado de las mismas, para, con un ejercicio inductivo, realizar una consideración más global del fenómeno mencionado.

¿Qué es la Doctrina de Seguridad Nacional? ¿Fue hija, producto y una de las manifestaciones más evidentes de la geopolítica de la Guerra Fría en América Latina bajo la tutela de los gobiernos estadounidenses? ¿Cómo influyó en el país más grande de Sudamérica: Brasil?

Lo cierto es que en los círculos académicos donde se estudia la Ciencia Política, al pronunciar el concepto, de inmediato se le relaciona con regímenes autoritarios, dictaduras, detenciones arbitrarias, vejámenes opresivos contra los derechos humanos, desapariciones forzadas y una lucha inquebrantable contra el comunismo internacional. También se le equipara con la lucha intensa por contrarrestar las ideas de la Revolución Cubana en territorio latinoamericano. De inmediato, se vienen a la cabeza imágenes de madres afligidas que protestan en las plazas públicas por las desapariciones de sus hijos, o imágenes truculentas dignas de “Garage Olimpo” y “La noche de los lápices”¹.

Es difícil definirla y dispendioso estudiarla. Comprender todos los elementos que la integraron, implica rigor y esfuerzo intelectual: dilucidar a plenitud el contexto en el que fue formulada tanto en América Latina como en Brasil cuya clara manifestación se materializó luego del golpe de Estado contra el presidente Goulart en 1964.

¹ Garage Olimpo (película argentina dirigida por Marco Bechis) y La noche de los lápices (filme argentino dirigido Héctor Olivera). Ambos relatan los atropellos y vejámenes contra los derechos humanos propiciados por la dictadura militar de Videla.

A eso le apunta este texto: desentrañarla a la luz de una interpretación histórica y con base en lo que atañe a la Ciencia Política, revisar textos históricos, documentos emblemáticos del realismo político y estudiar su aplicación, desarrollo y ocaso en el Brasil (etapa que está estrechamente ligada a la democratización acaecida en las naciones sudamericanas durante la década de los 80). Esto se traduce en un estudio serio de sus períodos de implementación (formulación, desarrollo y declive), analizar el contexto bipolar propio de la Guerra Fría donde tuvo su mayor auge. Asimismo analizarla desde una perspectiva de las teorías políticas y desde lo doctrinario.

Será éste un repaso narrativo y analítico para comprender el concepto difícil e inasible de “Doctrina de Seguridad Nacional” y que intentará beber de posturas contrarias y disímiles entre sí, en medio de lo que en la filosofía hegeliana se conoce como la dialéctica de “tesis-antítesis-síntesis” y formular entonces, un texto equilibrado y coherente, capaz de construir su naturaleza e implementación.

Definir el concepto

En el año 2005, el sociólogo colombiano Francisco Leal Buitrago en su obra *La Inseguridad de la Seguridad*, plantea que la Doctrina de Seguridad Nacional es un concepto difícil de definir, que sirvió para identificar acciones militares en el contexto bipolar latinoamericano propio de la Guerra Fría. En su opinión fue la doctrina militar contemporánea de mayor impacto en la región. Por consiguiente, la Doctrina de Seguridad Nacional se consolida como una categoría política (los militares se apropian de la política), en las zonas de influencia de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, en este caso particular, América Latina.

En opinión de sus gestores, era determinante para la defensa militar y la seguridad interna de los países latinoamericanos y en este contexto, era consecuencia directa de los conceptos de

contención (esbozados en un principio por George Kennan, ex Secretario de Estado de los Estados Unidos en la postguerra) para contrarrestar la disuasión nuclear soviética y la revolución guerrillera.

Pedro Rivas Nieto —investigador español— afirma que la Doctrina se gestó en medio de un ambiente de desconfianza mutua entre las naciones latinoamericanas y fue la base fundamental para la consecución de las relaciones internacionales de la época. Para la Doctrina, nación y patria venían siendo lo mismo y los problemas sociales —observados por los militares— son manifestaciones insurgentes y subversivas que deben ser combatidas (Rivas, 2009).

Al estudiar a profundidad su texto llamado *Doctrina de Seguridad Nacional y regímenes militares en Iberoamérica*, es posible comprobar que los años 60 y 70 (Guerra Fría en su máxima expresión) fueron los tiempos de mayor aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Posteriormente, algunos sectores sociales —víctimas, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y medios de comunicación— la utilizaron y encasillaron para dar a conocer a la opinión pública los vejámenes y excesos de los ejércitos y para descalificar cualquier acción militar.

En palabras de Calderón (2009), politólogo de la Universidad Autónoma de Honduras, “esta doctrina predicaba que la proliferación de la ideología socialista en los países latinoamericanos constituía una amenaza para la seguridad nacional de estas naciones, para lo cual creía necesario una contraofensiva política y militar” (p. 4).

Su declive se evidenció en los 80, ya que los gobiernos estadounidenses la consideraron obsoleta para impulsar las economías de libre mercado. Además, declaró el gobierno Carter en su momento, atentaba contra los derechos humanos, uno de los intereses más preponderantes de este presidente demócrata. Más aún, tiempo después, su declive vino acompañado por una crisis

institucional de los cuerpos castrenses latinoamericanos en pleno gobierno de Ronald Reagan que, a diferencia de su antecesor, se diferenci6 por utilizar una l6nea dura contra el comunismo. Cabe recordar la creaci6n de *contras*, fuerzas paraestatales financiadas desde Washington. No obstante, la Doctrina en ese per6odo ya se encontraba completamente desdibujada ante el colapso comunista en 1989. No hab6a un enemigo patente al que reprimir y extirpar y la lucha guerrillera ya no se justificaba. Se fue desacreditando en la regi6n, a excepci6n de Colombia y en menor medida en el Per6 (Rivas, 2009).

Cabe destacar que la Doctrina de Seguridad Nacional se dividi6 en cuatro etapas hist6ricas:

- 1) El viejo militarismo del siglo XIX que cobij6 buena parte del siglo XX.
- 2) La influencia pol6tico-militar de los Estados Unidos en Am6rica Latina despu6s de la Segunda Guerra Mundial.
- 3) El triunfo de la Revoluci6n Cubana.
- 4) La declinaci6n de la Doctrina de Seguridad Nacional a finales de los 80.

Francisco Leal Buitrago menciona, en aras de encontrar una 6ptima definici6n del concepto, que 6ste est6 estrechamente relacionado con la Teor6a de Contenci6n del ya mencionado George Kennan, pol6tica que trataba de contrarrestar la expansi6n sovi6tica a trav6s de m6todos de disuasi6n y recompensas para delatar al enemigo. En ese sentido, Kennan la definir6a en los siguientes t6rminos: “contenci6n prolongada, paciente pero firme y vigilante de las tendencias expansivas rusas” (citado por Leal, 2005, p. 25). Bajo la l6gica de estas premisas, se podr6a aseverar que la Doctrina de Seguridad Nacional, en el contexto de la Guerra Fr6a, fue una de las caracter6sticas m6s predominantes de las relaciones internacionales establecidas entre los Estados Unidos y los pa6ses latinoamericanos.

Fue también una expresión clara de confrontaciones armadas motivadas por el gobierno estadounidense y soviético (sin hacerse mucho daño, lo cual también hacía parte de la disuasión y del adjetivo “fría” en los países del llamado Tercer Mundo). El concepto conlleva a malentendidos semánticos y a tergiversaciones en cuanto a definiciones: por ejemplo, confundía la seguridad del Estado con la seguridad de la sociedad. Intentaba detallar, monitorear y contrarrestar amenazas exteriores que minaran y atentaran directamente contra la Seguridad del Estado, confundiendo todo el tiempo los conceptos de nación y patria.

Se podría afirmar que la Doctrina correspondía —fue la antesala— a lo evidenciado en la *guerra preventiva* que padeció recientemente el mundo actual con la “Guerra al terrorismo” de la administración de George W. Bush. Es decir, atacar al enemigo comunista antes que adelantara acciones que comprometieran la seguridad del Estado y de la sociedad. Por eso, una síntesis apropiada para analizar este tipo de confrontación, radica en reconocer que son actos militares en los que previamente —antes que los enemigos inflijan golpes estratégicos— se les ubica y se les neutraliza a través de toda clase de movilizaciones bélicas. Para lograr esos fines, es indispensable un fuerte control militar del Estado (Rivas, 2009).

En ese sentido, el Pentágono y las cúpulas militares latinoamericanas consideraban que el enemigo a derrotar y eliminar era el comunismo internacional —cuyo epicentro en América Latina era Cuba— cuestión incluida en el destino manifiesto de los Estados Unidos. Por tanto, providencialmente, la nación del norte estaba llamada a dirigir en un plano continental la lucha anticomunista y participar decididamente en esa cacería. En ese contexto, los militares latinoamericanos debían combatir a sus enemigos internos: donde cabían y se confundían los vocablos *guerrilla*, *sindicatos*, *oposición democrática* o simplemente ciudadanos que se opusieran a las ideas de los gobiernos militares. De esa manera, consideraban los problemas

sociales como manifestaciones subversivas que ponían en peligro la seguridad del Estado, acciones que había que reprimir y eliminar tajantemente.

Este tipo de gobiernos militaristas ocuparon por la fuerza todos los organismos del Estado, y consideraban abiertamente que eran los refundadores de la nación y del propio Estado (Leal, 2005). En el amplio espectro latinoamericano, La Doctrina de Seguridad Nacional variaba de acuerdo al lugar donde fuera aplicada; por eso se puede inferir que la Doctrina no fue un programa sistematizado y aplicado de la misma manera en toda Latinoamérica. Acto seguido, algunos sectores sociales que tenían aspiraciones políticas, comenzaron a relacionar todo tipo de acciones militares con la Doctrina. Por consiguiente, la relacionaron con arbitrariedades y realizaron denuncias públicas sobre supuestas violaciones a los derechos humanos por parte de los militares y, en casos extremos, a restarles importancia y a desaprobar cualquier clase de acción emprendida por aquellos militares (Leal, 2005).

Llegarían los tiempos de agotamiento para la Doctrina de Seguridad Nacional. En los años 80 —etapa final de la Guerra Fría— los gobiernos estadounidenses consideraron inviable avalar los regímenes dictatoriales del continente y comenzaron a restarle importancia a las instituciones armadas. Éstas se vieron seriamente afectadas en sus presupuestos (Leal, 2005). Se hace entonces evidente la ausencia de ayuda internacional a los regímenes militares que comienzan paulatinamente a deteriorarse. En la mayoría de los países —a excepción de Perú y Colombia— ya no existe una amenaza subversiva patente.

Desde luego, la Doctrina de Seguridad Nacional fue el motor que motivó la irrupción de regímenes dictatoriales y autoritarios en Ibero América, después de la Segunda Guerra Mundial en pleno contexto de la Guerra Fría. La Doctrina, como ya fue expuesto, es un concepto difícil de definir (no hay una explicación única que indique el sentido del término, más bien ésta se impuso

a la fuerza, sin contar con el consentimiento de la sociedad civil que fue la más afectada por sus procedimientos represivos). Lo claro es que fue una teoría de control interno (supeditada a los Estados Unidos) aplicada por dictaduras militares —también democráticos— latinoamericanos en las décadas de los 60, 70 y 80 (Rivas, 2009).

Ante ese panorama, los medios de comunicación denunciaban los atropellos sin que estas denuncias surtieran efecto. Asimismo algunas comunidades defensoras de los Derechos Humanos hicieron denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones que años más tarde tuvieron consecuencias penales para algunos militares en los estrados judiciales.

Por otro lado, ciertos teóricos no le encontraban una lógica clara a la Doctrina de Seguridad Nacional. Otros la veían como un cuerpo doctrinario eminentemente fascista. Lo claro es que todos los regímenes obedecían a una doctrina específica que les permitió estar en el poder durante mucho tiempo (las décadas del 60, 70 y 80). Las dictaduras eran militares, obviamente, pero en muchos casos la Doctrina fue organizada e ideada por grupos de civiles influyentes. También, en un principio, era una Doctrina pensada para mantener la paz y el orden establecido (*statu quo*) ante la amenaza subversiva, pero que inevitablemente desencadenó en un motor de violencia y represión. Se podía decir que tenía un valor netamente simbólico (Leal, 2005).

Sus antecedentes vienen de la guerra contrarrevolucionaria de Argelia (los militares en la Escuela de las Américas, y otras instituciones castrenses, estudiaron a fondo la represión francesa a los grupos insurgentes en este país africano). Por eso, dicho antecedente contrainsurgente fue ampliamente difundido por militares estadounidenses a los altos mandos castrenses de Latinoamérica. Aunque la Doctrina también puede ser observada como un cuerpo

teórico coherente, amparado en la violencia y en un proyecto político sistemático, atentó contra la democracia y sus instituciones (Velásquez, 2002).

El conflicto argelino fue bastante estudiado y puesto como ejemplo en las “escuelas de guerra” de América Latina. De esa manera, el famoso político y diplomático chileno Genaro Arriagada Herrera en un trabajo académico presentado en los 70, sostuvo que ese era el modelo que los teóricos y militares buscaron para implementar la Doctrina de Seguridad Nacional. En su opinión, la guerra contrainsurgente en el país africano era

Sobre la materia, la teoría más formalizada. Fue también la primera en el tiempo y la que mayor influencia ha ejercido sobre los ejércitos regulares del mundo occidental. Sus principios se irradiaron desde Europa hasta Norteamérica y desde ahí a no pocas fuerzas armadas hispanoamericanas (Arriagada, Santos, Orregón, López & Orrega, 1976, p. 53).

En ese sentido, es pertinente la explicación de Edgar de Jesús Velásquez cuando afirma que la Doctrina de Seguridad Nacional “fue una síntesis política, económica, social y de estrategia militar que cubrió todas las áreas de acción, desde el desarrollo económico hasta la educación o la religión y determinó los criterios fundamentales que debían ser tomados en cuenta, para, de una manera integrada, proponer el afianzamiento del proceso para combatir al enemigo interno” (Velásquez, 2002, p. 24).

De esa manera, en Latinoamérica, para combatir a dicho enemigo, también se conformaron autodefensas que tenían el objetivo inicial de proteger a la población de los vejámenes impuestos por los guerrilleros y que actuaban de manera conjunta con los ejércitos. Estos grupos operaban bajo cuatro premisas básicas: Reacción inmediata, apoyo mutuo con los pelotones del ejército, alarma oportuna y vigilancia continua y total. Entre los años 70 y 80, estos grupos fueron los

autores de masacres y sometieron a través del miedo y el terror a la población civil. Edgar de Jesús Velásquez cita por ejemplo el caso concreto de Guatemala, donde surgieron autodefensas como los “grupos Mano Blanca, Ojo por ojo, Escuadrón de la muerte, Buitre justiciero y Fraternidad. Entre 1970 y 1988 desaparecieron aproximadamente 40.000 personas” (Velásquez, 2002, p. 24).

Cuestiones doctrinarias

Como ya fue expuesto, la Doctrina fue ideada, expuesta y aplicada luego de la culminación de la Segunda Guerra Mundial. Eran los inicios complicados de la Guerra Fría. Estados Unidos se convertía rápidamente en una potencia imperial en franca disputa con la Unión Soviética, que también empezaba a expandir sus tentáculos en sus áreas de influencia vía el Pacto de Varsovia. Era una de las piedras angulares de los aires expansionistas de la nueva potencia.

Según afirmaba la Escuela Superior de Guerra del Brasil (citado por Lituma, 1974), la Seguridad Nacional se definía como:

El grado relativo de garantía que, a través de acciones políticas, económicas, psico-sociales y militares, un Estado puede proporcionar, en una determinada época, a la Nación que jurisdicciona, para la consecución y salvaguardia de los objetivos nacionales, a pesar de los antagonismos internos o externos existentes o previsibles (p. 75).

En buena medida, la Doctrina también es formulada en un clima de pánico generalizado, causado por la disuasión nuclear de las dos potencias. Sumado a lo anterior, ante el eventual apoyo de la Unión Soviética a los grupos subversivos en Latinoamérica, se diseña una política de represión en la región.

Eso se hizo evidente desde las presidencias de Harry Truman, Eisenhower, pasando luego por Kennedy y Lyndon Johnson. Se hablaba entonces del concepto “La Doctrina” como inseparable de la guerra contrainsurgente. Pasado el tiempo, en la era de Nixon y Kissinger, la Doctrina era primordial para establecer el entramado de las relaciones internacionales impulsadas en todo el continente por Washington.

Para la administración del presidente Nixon su implementación era una prioridad superior. La Doctrina —observada desde posturas realistas y neorrealistas estudiadas en centros de adoctrinamiento, de la mano de importantes teóricos como Kenneth N. Waltz, Stanley Hoffman, George Kennan, Hans Morgenthau, y Henry Kissinger. Por tanto, se disertaba y estudiaba un cuerpo teórico de clara tendencia maquiavélica, que no le importaba utilizar todo tipo de fines y métodos con tal de lograr sus metas y repeler a toda costa los movimientos del enemigo (Rivas, 2009).

A su vez, al estar inscrita en medio de las tendencias realistas y neorrealistas de la Teoría Política, era contraria a concepciones idealistas y pacifistas como la postura kantiana que había encontrado eco en las ideas del presidente Woodrow Wilson tiempo atrás. Luego de la firma del Tratado de Versalles (capitulación de la Primera Guerra Mundial), el estadista estadounidense consideraba que el mercado y el *laissez faire* traerían prosperidad a todas las naciones de la tierra, sin involucrar a las tendencias bélicas y expansionistas.

De esa manera —siguiendo estas posturas realistas que Rivas Nieto menciona en su obra— el conflicto era inevitable en las relaciones humanas y estatales. Por eso consideraba que la guerra es un estado permanente en todos los pueblos que se encuentran diseminados en la faz de la tierra. Los promotores de la Doctrina estipulaban que ella era una piedra angular capaz de traerle equilibrio al orden mundial. Siguiendo el pensamiento de Morgenthau, las relaciones

entre países nunca serían morales pues es inevitable que éstos siempre busquen el poder, y el egoísmo estará presente en las relaciones internacionales. Al respecto, Morgenthau (1963) asevera:

We cannot conclude from the good intentions of statesman that his foreign policies will be either morally praiseworthy or politically successful. Judging his motive, we can say nothing about the probability of their success. If we want to know the moral and political qualities of his actions, we must know them, not his motive (p. 6).

Al ahondar más en estos criterios y en autores que apoyaban estas ideas, es posible comprobar que para ellos fue fundamental considerar que uno de los fines más perseguidos de las relaciones internacionales, estaba dado por la consecución irrefrenable y egoísta de los intereses nacionales.

En este caso, la lucha contrainsurgente era una política indispensable del gobierno de los Estados Unidos cuando estrechaba vínculos con gobiernos en América Latina.

En medio de ese contexto realista, el gobierno de los Estados Unidos acoge las ideas propuestas por George Kennan, sintetizadas en la “Teoría de la contención” durante las administraciones estadounidenses de los años 60. Una contención sigilosa, sutil, hacia todo lo que provenga de la Unión Soviética, hacia todo lo que sea considerado como insurgente y subversivo.

Son los tiempos del surgimiento de la *Central Intelligence Agency* (CIA) y de las agencias de inteligencia norteamericanas propias de la Guerra Fría. Por eso era importante lanzar tentáculos de inteligencia y contrarrestar los movimientos de los enemigos, incluso antes de que ellos se animaran a actuar.

La Doctrina es uno de los postulados más importantes para mantener la hegemonía estadounidense que ya llegaba a su edad imperial (Rivas, 2009). Hay que reconocer ciertas inclinaciones en los Estados Unidos, en su calidad de imperio, en plena disputa con el poder soviético. Para los funcionarios del Pentágono, la Doctrina no necesitaba ser reflexionada y deliberada en la rama legislativa. En una suerte de macartización, todo aquel que la cuestionara era considerado sospechoso. Con el auge de la Revolución Cubana y su incondicional ayuda a los movimientos insurgentes en América Latina, algunos teóricos y militares estadounidenses consideraban que ante situaciones de peligro, o escaladas guerrilleras, su implementación debía ser total y sin contemplaciones.

Washington lanzaba así el concepto de “situaciones de peligro” que debían ser repelidas y controladas en todo momento. Entonces en los países latinoamericanos más azotados por los grupos guerrilleros, se fueron minando cada vez más las vías de derecho y se emprendieron acciones enmarcadas en la vías de hecho —todas extremadamente violentas— implementadas por gobiernos netamente dictatoriales. En América Latina, el conflicto guerrillero tuvo períodos de recrudecimientos y períodos de relativa calma que los Estados Unidos aprovechaban para intervenir sigilosamente en los países e implementar la Doctrina.

En ese sentido, tal y como sucede ahora, la potencia del norte daba o negaba ayuda militar y económica a los países latinoamericanos, siempre y cuando colaboraran en el ataque y las refriegas hacia los enemigos. Asimismo en las escuelas militares —tipo la Escuela de las Américas y la Escuela Superior de Guerra del Brasil— se adoctrinó al cuerpo castrense latinoamericano y a los integrantes de las cúpulas militares de estos países. Había que conocer a plenitud al enemigo. Por eso, se enseñaban todos los postulados marxistas, principios comunistas que consideraban que la revolución debía ser librada en un contexto global. Se estudiaban libros

claves para entender los frentes guerrilleros como la “Guerra de Guerrillas” de Ernesto “Che” Guevara.

No obstante, según el planteamiento de Rivas Nieto, se hace necesario analizar aquellas características (acordes con la Doctrina) que permitieron llegar a la edad imperial a los Estados Unidos: El imperio es la forma más eficaz que se haya conocido para mantener la hegemonía de un pueblo sobre otros. La más eficaz y la más duradera si tomamos ejemplos como el Imperio Romano, el Bizantino, las dinastías milenarias chinas, el Imperio Otomano, entre otros. Un imperio puede coexistir sin problema con una democracia liberal. Se evitaría dificultades, pues si trataran de instaurar un gobierno autocrático, dictatorial y autoritario, de inmediato se escucharían voces de protesta. Todo imperio —en este caso, los Estados Unidos— aspiraba a convertirse en el centro del orden mundial. Los imperios siempre intentarán dominar amplias porciones de territorio (que consideran importantes para sus intereses) por medio de métodos represivos. Por consiguiente, la Guerra Fría se puede entender como una disputa en la que uno de los imperios se quería imponer al otro bando, costara lo que costara (Rivas, 2009).

Asimismo, para comprender los vericuetos de la Doctrina, hay que tener en cuentas las opiniones del ex Secretario de Estado Henry Kissinger —durante la administración Nixon— sobre la Doctrina y su estrecha comunión con las relaciones internacionales. De esa manera, la relación con otras naciones nunca tendrá como fin perseguir la paz. Busca en realidad la estabilidad y el control de cualquier situación anómala que atente contra los intereses estadounidenses, lo cual se opone a la instauración de grupos de fuerte raigambre revolucionaria en América Latina. “Cuando estalla la guerra, la diplomacia no funciona”, eso pensaba Kissinger (1994, p. 19).

Etapas de la Doctrina de Seguridad Nacional

Se hace pertinente incluir cuatro etapas de desarrollo que el investigador Francisco Leal Buitrago en su libro *La inseguridad de la seguridad en Colombia* esboza de manera acertada para entender la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional. Este sociólogo clasifica el asunto de la siguiente manera: Antecedentes (viejo militarismo latinoamericano del siglo XX), gestación (La Guerra Fría y la fuerte influencia estadounidense en América Latina, antes de la aparición de la Revolución Cubana), desarrollo (aplicación arbitraria en medio del surgimiento de grupos subversivos motivados por la Revolución Cubana), por último, la declinación (surge con el gobierno de Carter y la elección democrática de gobiernos civiles en la región) (Leal, 2005).

Antecedentes: Del viejo militarismo latinoamericano del siglo XIX al XX

Al ser un factor clave y determinante en los procesos de independencia en el siglo XIX, los ejércitos consideraron pertinente participar abiertamente de la vida política de las naciones. En medio de un clima de inestabilidad política y económica propia de los primeros años de vida republicana, consideraban su intervención política como un derecho legítimo pues se autoproclamaban de manera abierta como vencedores y forjadores de las naciones al libertar a sus países del yugo español.

La tradición de la época motivaba a los militares a intervenir en la política interna todo el tiempo. Las instituciones por su naturaleza, en apariencia, parecían débiles ante el poder militar y éste continuamente las avasallaba (Velásquez, 2002). Por eso siempre equiparaban en un mismo lugar los conceptos de patria y de nación y creían que su función natural era salvaguardarlos de toda amenaza. Mientras se desataban guerras civiles y conflictos entre regiones (entre capitales y regiones periféricas durante el siglo XIX), los militares fueron una

fuerza viva en los gobiernos. Posteriormente a partir de la década de los 30 del siglo XX, los cuerpos militares fueron incorporando ideas del franquismo.

Es posible encontrar otras posturas diferentes desde la izquierda. El investigador Velásquez (2002) tiene una visión particular sobre el asunto. Desde luego los militares al apropiarse y aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional, introdujeron a sus países a un ambiente constante de militarismo. Este concepto está en pleno uso en el momento en que la institución castrense está al servicio de las clases dominantes y de la oligarquía —a través de una filosofía represiva— en aras de controlar toda la vida nacional. Esta situación acaece en un sistema cuya cúspide es oligarca y continuamente brinda prerrogativas a las fuerzas armadas, lo cual conlleva a la consecución de atropellos y violaciones de los Derechos Humanos hacia la sociedad civil.

En ese sentido, Calderón (2009) sostiene que:

“la Doctrina de Seguridad Nacional propagó una visión amplia del enemigo: no sólo se consideraban terroristas insurgentes a las personas con armas como bombas o revólveres, sino también a las personas que difundían ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tenía el gobierno” (p. 9).

En su momento, aún antes de la dictadura franquista, en medio de su propio régimen dictatorial en España, J.A. Primo de Rivera aseguraría que los militares tenían la obligación de participar en la política “cuando aspectos permanentes y no accidentales de la sociedad están en peligro”. Esta idea caló hondamente en las filas de los militares latinoamericanos (Leal, 2005, p. 31).

En ese contexto, los militares estudiaban con pasión las ideas de Erich Von Ludendorff y su concepción sobre “La guerra total” que “contemplaba los aspectos psicológicos y la visión

monolítica de la sociedad, basada en la fuerza anímica del pueblo y la eliminación de la oposición” (Rivas, 2009, p. 32).

En ese período, por ejemplo, al analizar la situación del Caribe, se hace notoria la intervención militar estadounidense. Edgar de Jesús Velásquez Rivera en su texto anteriormente citado, afirma que “la guerra se asumió como la integración de las distintas esferas de la acción militar, económica, psicológica e ideológica; así surge el concepto geopolítico de guerra total que ya había sido considerado por Hitler” (Velásquez, 2002, p. 12).

En opinión de este investigador de la Universidad del Cauca, esa asociación de elementos se mantuvo bajo el prisma de la guerra total y permanente, que siempre fueron tópicos sobresalientes de la Doctrina, que desplegó ciertos radios de acción: primero surge una guerra militar, para luego mutar a la guerra total y permanente propia de la Guerra Fría que también encontró eco e influenció los campos económicos, financieros, políticos y psicológicos de las naciones donde se aplicó férreamente (Velásquez, 2002).

Germinación en la Guerra Fría

La Doctrina de Seguridad Nacional germina en un juego continuo de bipolaridad propio del contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que las dos superpotencias (Estados Unidos y la Unión Soviética) se disputaban el poderío geopolítico continuamente y buscaban, a través de un sistema de bloques de países alineados de parte y parte, el control de territorios estratégicos. Leal (2005) localiza los inicios de la Doctrina de Seguridad Nacional con la promulgación del Acta de Seguridad Nacional en Estados Unidos en 1947. La firma de este acuerdo detalla la génesis de la concepción del Estado de Seguridad Nacional. Asimismo, dicho estatuto permitía que el gobierno incluyera al ejército en cuestiones referentes a la economía y la política ante la posibilidad del estallido de una guerra.

En ese contexto bipolar, la Doctrina consideraba oportuno el absolutismo de Estado. La autoridad del Estado era limitada, no se podía debatir por la vía democrática y tampoco disentir sobre las directrices del régimen. Por su parte, la Doctrina en este contexto bipolar se caracterizaba por la disuasión, persuasión y subversión. La Doctrina era impulsada desde Estados Unidos quienes consideraban que era una manera de darle orden a Latinoamérica, que siempre había estado colmada de inestabilidad, rebelión y cuyo mayor ejemplo era la Revolución Cubana. Había que aplastar cualquier tipo de revolución.

En ese contexto, entre los años 1964 y 1984, la mayoría de las naciones latinoamericanas eran regidas por dictaduras militares y regímenes de facto. Caso contrario a las dictaduras que motivaron la continuidad del orden oligárquico creado en el siglo XIX, o de aquellas que entorpecieron el respeto de los derechos de los ciudadanos, puesto sobre el tapete por algunos movimientos sociales. No obstante, en algunos países del continente —el caso brasilero— se buscaron transformar económica y políticamente las sociedades en las cuales se produjeron dichas dictaduras (Calderón, 2009).

Al ser producto de la Guerra Fría, tuvo soporte en dos postulados básicos y delineadores de la misma: la ya mencionada bipolaridad (Velásquez, 2002) (una lucha permanente entre el occidente cristiano en cabeza de los Estados Unidos y oriente de la mano de la Unión Soviética y sus preceptos comunistas) y la guerra total. Este tipo de enfrentamiento estaba concebido para no generar una guerra de aniquilamiento. Por tanto, ante un posible debacle nuclear que sumiera al mundo en el caos y la destrucción, en América Latina las luchas de la Guerra Fría se vieron reflejadas en buena medida en las luchas armadas de la época entre los enemigos internos potenciales (grupos insurgentes y subversivos) y las fuerzas armadas de cada país.

Es importante tener en cuenta que a la Doctrina de Seguridad Nacional se le incorporó el componente mesiánico para darle un sentido trascendental y fundamentalista a cada una de sus acciones, ante la temeridad de considerar la posibilidad de otras formas de gobierno, de actuar y de pensar (Velásquez, 2002, p. 15).

Era una teoría que atentaba todo el tiempo contra las libertades civiles pues consideraba como sospechosos e insurgentes los actos individuales o colectivos de los ciudadanos. Los conflictos sociales siempre eran catalogados de peligrosos y susceptibles de ser reprimidos. Por eso, no contemplaba actos neutrales y operaba tanto en tiempos pacíficos, sin mucha alteración del orden público, como en momentos donde había escaladas en el conflicto armado. Al considerar los conflictos con el rótulo de peligrosos, los clasificaba en tres grupos: Los conflictos estructurales, representados en las huelgas, marchas, protestas y aquellas contiendas electorales reñidas que exacerbaran los ánimos de los electores y debían ser controladas por los militares para evitar desmanes. Asimismo, incluía los conflictos personales de grupo que afectaban al sector económico. Eran motivados por grupos de presión y opuestos a los regímenes militares y abarcaba agremiaciones de comerciantes, industriales, exportadores e importadores. Por último, también se puede traer a colación los conflictos estatales que se desarrollaban al calor de disputas territoriales y jurisdiccionales, recursos naturales, problemas fronterizos, étnicos y también podían surgir debilitados por malentendidos en la comunicación. Algunos teóricos como Velásquez (2002), aseguran que esos conflictos eran propiciados por el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar a la región, motivar el comercio de armas y garantizar para su dominio vastas zonas de recursos naturales y de amplio potencial energético.

Tal como ya fue expuesto, cabe destacar que la puesta en marcha del Acta de Seguridad permitió crear organismos de inteligencia y espionaje como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) que adelantaron misiones en toda el área de influencia de los Estados Unidos y que identificaban a la Unión Soviética como el enemigo que era necesario repeler. En este ambiente caracterizado por la disuasión nuclear, Leal (2005) es claro cuando afirma que después de todas estas acciones tomadas en Norteamérica

Se determinó, además, que el medio fundamental para su control sería la aplicación del concepto de contención, mediante el cual se utilizaban los medios disponibles para evitar su expansión. Poco después apareció la concepción de guerra limitada — que excluye la confrontación atómica— como el instrumento principal del conflicto (p. 33).

Para garantizar una lucha y defensa efectiva contra la infiltración comunista y sus consabidos ataques, los Estados Unidos no solo propusieron un bloque unificado de defensa interamericano, tal es caso de la Organización de Estados Americanos (OEA); también lo hicieron en otras latitudes del mundo y pusieron a su disposición todo su poder militar y dinamogénico arsenal de defensa: La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización del Tratado del Sureste Asiático (OTASE). Suscribieron pactos multi o bilaterales como el ANZUS, el Pacto de Bagdad, la Alianza Balcánica, los acuerdos con la España franquista y la China nacionalista. Fueron determinantes la Doctrina Truman, la Resolución de Taiwán y la Doctrina Eisenhower (Do Couto, 1978). Estados Unidos estructura un mundo anticomunista en contra de la expansión soviética por América Latina (de ahí la idea de estructurar la Doctrina de Seguridad Nacional), para evitar posibles contagios comunistas en Australia, África, Europa occidental junto al Estado euroasiático de la Turquía moderna. No se

escapan vastas regiones asiáticas y del Medio Oriente como son Irán, Pakistán y Tailandia. A la par, el espectro comunista soviético, se solidifica alrededor de la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia (las naciones de la Cortina de Hierro) y también por parte de la gran China comunista de Mao Tse-Tung que abarcan a todo el oeste junto a la Unión Soviética (pese a los violentos conflictos de ambos para unificarse y luchar juntos) y con la ayuda comprensible de Corea del Norte y el Vietnam del Vietcong (Do Couto, 1978).

A la luz de estos argumentos, se puede entender la Doctrina de Seguridad Nacional como el producto de una serie de tratados y convenios que demuestran la total subordinación de las cúpulas militares latinoamericanas a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Cabe citar aquí los acuerdos más preponderantes suscritos en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría (Leal, 2005 & Velásquez, 2002).

1) A principios de la Segunda Guerra Mundial, ante la amenaza nazi, se lleva a cabo la Conferencia Interamericana de Panamá donde se discutió el concepto de “seguridad continental”.

2) Al final de la confrontación, se firma el Acta de Chapultepec. En su octava resolución tenía como prioridad la defensa en bloque de todo el continente, mientras aún no finiquitaba la Segunda Guerra Mundial.

3) El Plan Truman en uno de sus apartes designaba la unificación militar continental.

4) El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en Río de Janeiro y la Creación de la OEA son muestras claras de unión y cohesión en bloque para atacar al enemigo comunista. TIAR había establecido en 1947 una clasificación de las acciones de seguridad que le correspondería a cada una de las partes que firmaron el acuerdo, es decir, a los Estados Unidos y los países latinoamericanos. Norteamérica se encargaría del ámbito global y Latinoamérica de mantener la seguridad interna de cada país. La situación adquirió vigencia en los 60, con la

aparición de los primeros focos guerrilleros. Para asfixiarlos y eliminarlos tajantemente no quedaba otro camino que estudiar la llamada “guerra revolucionaria”, comprender sus métodos de ataques, sus emboscadas y ofensivas y contrarrestarlos a través de “la guerra sin cabeza” que solo consideraba la aniquilación total del enemigo (Leal, 2005).

5) América Latina quedó cobijada e incluida en 1950 en el Consejo de Seguridad Estadounidense que en su memorando 68 estipulaba la estrategia militar de la potencia en todo el ámbito internacional.

6) Otros mecanismos para tener en cuenta fueron los Programas de Ayuda Militar Bilaterales (MAP) que buscaba a principios de los 50 que los ejércitos latinoamericanos trabajaran conjuntamente con las fuerzas armadas norteamericanas. Los convenios fueron fortalecidos con la Ley de Defensa Mutua que constituye el primer indicio para el entrenamiento y adoctrinamiento de militares latinoamericanos por parte de expertos castrenses de Estados Unidos. La consecuencia de esto fue la creación años más tarde de la Escuela de las Américas (Leal, 2005).

7) También se suscribieron actividades conjuntas y tratados como la Reunión de Comandantes en Jefe, la JID, las Operaciones Unidas y el Colegio Interamericano de Defensa (Velásquez , 2002).

La Doctrina surge en este momento coyuntural y es hija y producto fidedigno de la Guerra Fría (Rivas, 2009). Era el tiempo propicio para su formulación que obedecía y seguía los lineamientos de un cuerpo político-militar estructurado, con coherencia y amparado por ideas políticas y militares. Sin embargo, es complicado definirla y se aplicó de manera diferente en cada país. Era una teoría sencilla y su sencillez llevó a que muchos adeptos en América Latina acogieran sus postulados. Su sencillez era ampliamente seductora en los círculos castrenses

latinoamericanos y hacía parte integral de una política expansionista ideada en el plano académico que desencadenó en la creación de academias militares, donde la Doctrina se estudiaba ciegamente y sin encontrar resistencia.

Estos centros de adoctrinamiento se conocieron como las “Escuelas de Seguridad Nacional”. La Doctrina era aplicada de manera semejante en cada país, pese a tener diferencias nimias. Se implementó más que todo en gobiernos de fuerte tendencia represiva y dictatorial, en contextos en los que las relaciones cívico-militares estaban completamente desequilibradas a favor de los cuerpos castrenses. Por ejemplo, La Escuela Superior de Guerra del Brasil teorizó y configuró una doctrina ampliamente estructurada y aplicada con eficacia en todo el territorio del vasto país sudamericano. Cabe considerar que fue orquestada desde Washington y era estudiada sin modificación alguna en las cúpulas militares de América Latina. Su cuestionamiento de inmediato traía sanciones y penalidades.

Asimismo, se gestó en medio de un ambiente de sospecha generalizada. Rechazaba que la sociedad civil participara en la vida pública y económica. No había cabida para el disenso y continuamente motivaba la censura en los medios de comunicación. En la década de los 50, tal como lo expone Leal (2005), América Latina era vista como una región inestable y dicha inestabilidad era propiciada por el comunismo que había que despojar y expulsar utilizando todos los medios que estuvieran a su alcance.

Influencias de la Revolución Cubana

Surge entonces la crisis de los misiles en 1962 —aquel conflicto de disuasión militar y nuclear entre Estados Unidos y la URSS— contienda que puso todas las miradas del mundo centradas hacia Cuba y América Latina. Entraría así todo el orbe latinoamericano y estaría incluido en el juego bipolar de la Guerra Fría. El triunfo de Fidel Castro escandalizó a los

expertos de defensa y seguridad norteamericanos y la consecuencia directa en el polo opuesto fue la formulación de otras doctrinas como la “Teoría de la dependencia”, un híbrido neomarxista en confabulación con ideas económicas aportadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) (Leal, 2005).

Palabras más, palabras menos, asegura que la dependencia ejercida por una potencia lleva a los otros países a situaciones de subdesarrollo y se basa en doctrinas marxistas-leninistas y maoístas que justifican el accionar de los insurgentes. Tuvo como libros de cabecera *La guerra de guerrillas* de Ernesto “El Che” Guevara y ciertas ideas de Régis Debray en su texto *La revolución en la revolución*. Cuba constituyó el punto de referencia y la guía a seguir de todo grupo subversivo e insurgente que fuera reprimido con métodos similares a los utilizados por los militares franceses en su lucha contrainsurgente en Argelia (Leal, 2005). La lucha contrainsurgente fue ampliamente estudiada en las escuelas castrenses. Al despojar a Batista del poder y al imponerse el régimen de Castro en Cuba, de inmediato Estados Unidos lanzó en la región su estrategia de “contención” —tal como la concibió Kennan— que tenía por objeto central la disuasión. Entonces para lograr atemorizar con esa premisa, el país que la promulgara debía tener una fuerte capacidad armamentística y militar: Ese era el caso de los Estados Unidos que comenzaba una fuerte carrera armamentística (Leal, 2005).

El ocaso de la Doctrina de Seguridad Nacional

Después del gobierno demócrata de Jimmy Carter, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a ceder un poco ante los resultados de las fuerzas militares latinoamericanas que repelían toda forma de comunismo. Todo esto obedecía a la descomposición de la estructura militar interamericana orquestada desde Washington. Luego de esta crisis, las fuerzas militares

de cada país se encargarían de sus propios asuntos. La situación se revirtió del todo con la hecatombe producida tras el fracaso de la guerra de Vietnam.

Luego de esta crisis, la contrainsurgencia sería olvidada casi por completo. Se podría inferir que los objetivos que el TIAR perseguía originalmente no se cumplieron a cabalidad y que su intención de configurar una fuerza conjunta que operara en toda América fue un fracaso rotundo del gobierno de los Estados Unidos que no encontró materialización en la realidad. Durante la administración Carter se le empieza a dar prelación al respeto de los Derechos Humanos, lo cual empieza a diezmar el apoyo económico, militar y logístico a las fuerzas militares latinoamericanas. No obstante, con la llegada de Ronald Reagan al poder y con el triunfo de la revolución sandinista, se le da un nuevo auge a la Doctrina de Seguridad Nacional (Leal, 2005) que se va agotando en la medida que discurren los años 80.

Así fue que la Doctrina de Seguridad Nacional sufre una variación especial: Ante las problemáticas evidenciadas en Centroamérica y los problemas de consolidación del TIAR, deciden impulsar un concepto que se conoció en su momento como “guerras de baja intensidad” en estas áreas de intenso conflicto (Leal, 2005). La implementación de este tipo de políticas militares coincidió con el declive de la propia Doctrina ya que los Estados Unidos empezaron a establecer relaciones bilaterales con los países latinoamericanos en detrimento de la misma Doctrina. No obstante, luego de la culminación de la Guerra de las Malvinas, los países de la región comenzaron a manejar sus asuntos con mayor autonomía y se inicia una etapa gradual de desmilitarización en los gobiernos. A mediados de los 80 y a principios de la década siguiente, se inicia el proceso de redemocratización en el subcontinente que vino acompañada de la publicación de denuncias sobre transgresiones contra los Derechos Humanos, acaecidas durante las dictaduras militares. Entonces, la Doctrina de Seguridad Nacional se redujo a su máxima

expresión y llegó a su culminación. Ya no era viable ante el desplome de la Unión Soviética y ante el fracaso de las luchas guerrilleras y del comunismo en general. Para el gobierno de los Estados Unidos, ya no se necesitaban dictadores, no se hacía patente la amenaza de una agresión comunista. El Bloque Soviético entraba en crisis. Cambiaría entonces la agenda: Se hace necesario implementar la democracia y el libre mercado.

Realismo: ¿Cómo se construyó doctrinariamente?

La Doctrina de Seguridad Nacional tuvo su sustento en teóricos como Kenneth Waltz, Hans Morgenthau, Stanley Hoffmann, entre otros, quienes fueron malinterpretados en las altas esferas militares de Latinoamérica. También contempló experiencias del pasado como la guerra contrainsurgente en Argelia, ignorando que cada contexto geopolítico e historia difiere en el momento de su aplicación, pues las ideas del pasado en una perspectiva militar, deben ser revaluadas en el presente.

Es bueno estudiar el contexto de aparición del realismo en los Estados Unidos. Aparece en las primeras décadas del siglo XX como respuesta a las ideas promovidas por el idealismo político en franca oposición de los postulados del presidente Woodrow Wilson (durante la Primera Guerra Mundial) y el presidente Roosevelt (Segunda Guerra Mundial). Luego de un periodo de intensas guerras que desangraron a Europa –incluidas las guerras mundiales- se tuvo la idea de instaurar “marcos institucionales internacionales” que le dieran a la humanidad y al sistema de Estados nacionales, la posibilidad de alcanzar la pacificación y por ende que el mundo lograra vivir en armonía y paz. (Muñoz & Frasson, 2011). En este sentido, Olmer Albeiro Muñoz Sánchez y Florent Frasson sostienen que:

Al tener en cuenta el hecho efectivo de la firma de la Paz de Westfalia, podemos afirmar que al finalizar toda confrontación bélica se define un modelo de orden

internacional. Es así, como en el siglo XX se formuló un primer modelo de orden internacional después de la Primera Guerra Mundial, diseñado por el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson, quien fijó un nuevo orden internacional basado en el respeto al derecho internacional, la justicia y la cooperación, por medio de la extensión del modelo político democrático-occidental (Múñoz & Frasson, 2011, p. 81).

Los presidentes norteamericanos al seguir ciertas premisas del pensamiento kantiano, aseguraban que los países que componen el orden mundial, tienen la obligación de vivir en armonía. Los realistas consideraban estas ideas contrarias a la naturaleza humana y a la naturaleza de los Estados y sus intereses nacionales. Luego de ese ambiente bélico y de marcadas hostilidades, se funda un organismo cuyo objetivo sería mantener la paz y la tranquilidad de la humanidad, conocida como La Liga de Las Naciones. Su primer bosquejo fue ideado curiosamente por el presidente norteamericano Woodrow Wilson. El estadista norteamericano en clara sintonía con el idealismo propuesto por Kant, propuso su proyecto, en el que incluía la libre determinación de las naciones, su derecho a no ser agredidas ni invadidas, libre navegabilidad en aguas internacionales, las reconstrucciones de aquellos países europeos que fueron devastados por Alemania y las naciones austrohúngaras; el sueño de expandir el modelo del liberalismo democrático y económico y en clara contravía a las estructuras dictatoriales y monárquicas. El modelo de Wilson fracasa debido al rearme de las naciones europeas y también al poco interés prestado por los Estados Unidos a la doctrina esbozada por su presidente. (Múñoz & Frasson, 2011). En ese sentido, Olmer Albeiro Múñoz y Florent Frasson argumentan que el orden internacional creado después de la Primera Guerra Mundial naufragó definitivamente en 1939. No hubo una estructura de poder internacional comprometida con

hacer cumplir las decisiones y mandatos de la Liga de las Naciones; ésta al carecer de poder militar no podía actuar por medio de coerción. (Múñoz & Frasson, 2011).

Por eso, por su parte, Estados Unidos, en medio de los fragores de la Guerra Fría, desarrolló un modelo geopolítico de marcada tendencia clásica, de origen alemán e inglés, que fue finamente mezclado con la teoría realista de las relaciones internacionales. Leal (2005) explica de manera detallada que “ese modelo parte de considerar un mundo anárquico, en el cual cada Estado-nación es responsable de su propia supervivencia, al confiar sólo en sí mismo para protegerse de los demás. Plantea además la necesidad de mantener el *statu quo* como la situación más segura, tanto en el plano nacional como internacional” (p. 35). Toda la teoría realista aseguraba que la democracia sólo podría configurarse en los Estados modernos. Por medio de este postulado, Estados Unidos creyó apropiado intervenir en países atrasados y blindarlos de la influencia soviética a través del beneplácito hacia las dictaduras militares.

En su obra, Rivas Nieto (2009) afirma que el realismo no quería quedarse anclado en los libros y en la academia; deseaba encumbrarse como una fuerza plausible en las relaciones internacionales. El realismo quería crear conciencia de que los Estados tienen intereses egoístas que distan de ese estado utópico de armonía. No les gustaba analizar la historia a través de métodos complejos y optaban más bien por los análisis simples. Ejemplo de ello son los pangermanistas (consideraban el egoísmo como propio de toda política nacional y de todas las relaciones internacionales).

A su vez, teóricos como Morgenthau (1963) designaban las relaciones internacionales como la supervivencia de los Estados para sobrevivir en un orden internacional. En su opinión, los Estados pueden utilizar cualquier medio para sus fines en pro de los intereses nacionales. En el caso concreto de la Unión Americana, Morgenthau (1963) consideraba que el realismo ya

estaba inscrito en el Destino Manifiesto de los padres fundadores que desde esa época ya querían expandir su territorio. Eran cuestiones que siempre habían acompañado la política exterior estadounidense. Era una política de poder donde todo era legítimo, comprendido desde una perspectiva maquiavélica (Rivas, 2009). Morgenthau (1963) opinaba que el realismo político al igual que la sociedad está gobernado por leyes objetivas que tienen sus raíces en la naturaleza humana. Se debe dar una distinción entre política y verdad ya que ésta es relativa. La naturaleza humana es la misma desde la antigüedad hasta los tiempos actuales, por lo tanto, es inmodificable. El realismo y sus consabidas teorías debían estar sujetas a la experiencia y la razón (Morgenthau, 1963). El concepto de realismo está sujeto a los términos de poder: En ese sentido, la política se desarrolla en un margen diferente al ámbito económico (Morgenthau, 1963). En ese orden de ideas, Morgenthau (1963) afirmaba que:

Good motives give assurance against deliberately bad policies; they do not guarantee the moral goodness and political success of the policies that they inspired. What is important to know, if one wants to understand foreign policy, is not primarily the motives of a statesman, but his political ability to translate what he has comprehended into successful political actions (p.6).

Siguiendo esta línea de pensamiento, este teórico norteamericano asegura que “el realismo asume la llave o el acceso para definir los intereses del poder en una categoría objetiva que es universalmente válida, pero que no está dotada para aplicarse a todos los parámetros de la realidad” (Morgenthau, 1963, p.8). Asimismo, argumentaba en “La lucha por el poder y la paz” que el realismo político –ampliamente practicado por las fuerzas castrenses latinoamericanas en América Latina- era partidario que la política al igual que la sociedad, era regida por leyes objetivas cuya génesis es la naturaleza humana misma. Se trata de una teoría racional que da

cuenta de dichas leyes objetivas. En ese sentido, la naturaleza humana se ha mantenido incólume desde la antigüedad hasta nuestros días, teniendo en cuenta que el realismo siempre ha comprobado sus tesis con los hechos y conferirles así significado por medio de la razón (Morgenthau, 1963). Por lo tanto, este autor arguye que el realismo presume que “el carácter de una política exterior puede comprobarse solo a través del análisis de los hechos políticos que se llevan a cabo y de las consecuencias previsibles de estos actos” (Morgenthau, 1963 p.15).

Por su parte, siguiendo la filosofía de Morgenthau cuando intenta esclarecer el concepto, está sujeto a una política internacional, ideada con el fin de obtener poder en el orden mundial establecido; la política en ese espectro es netamente autónoma, independiente de la moral, la economía, la estética, la ética, o las cuestiones religiosas. En ese orden de ideas, los estadistas operan con la idea clara de un interés sostenido por lograr poder, conllevando que sus razones no son deliberadamente malas, aunque no persigan fines morales (Morgenthau, 1963). El estadista y sus asesores militares, no pretenden que sus actos se confundan con sus concepciones filosóficas o políticas personales: lo importante es la ubicación de su país como potencia –mayor portador del poder-en el orden internacional. Hacen uso de sus simpatías para lograr apoyo popular de sus medidas. Los gobernantes realistas establecen una clara diferenciación entre lo que es deseable y lo que es posible; lo que es deseable en un plano universal y lo que es posible según lo que indiquen el tiempo y el espacio (Morgenthau, 1963). El realismo no es un concepto inmutable, siendo en si mismo esencia de la política, cuestión que no se altera en el tiempo y en el espacio, sin desdeñar que sus concepciones no desconocen la conciencia del significado moral de sus acciones, presentando una fricción permanente entre lo que dispone la moral y los requerimientos del accionar político, sin tener en cuenta que todo acto político, considerando que todo acto en materia de relaciones internacionales, está sujeto a la paciencia de los actores que

están comprometidos en dichas políticas. Más aún, los líderes realistas en conjunto con sus fuerzas castrenses, se rehúsan a considerar las aspiraciones nacionales como morales, de acuerdo con las leyes morales que deberían regir a los hombres en un plano universal, distinguiendo la verdad de la idolatría, no identificando claramente lo que es el bien y el mal, manteniendo la autonomía del ámbito político (Morgenthau, 1963). Debe preguntarse la manera cómo las decisiones políticas afectan a su nación de acuerdo al orden internacional. Un Estado que practica el realismo político está sujeto a una concepción pluralista de la naturaleza humana, entendiendo al ser humano, como una amalgama de lo político, económico, lo moral y lo religioso (Morgenthau, 1963). Por lo tanto, la política internacional de los Estados Unidos no se reduce a las normas legales y a las instituciones; no es idéntica a lo que promueve la Constitucional Política de dicho país (Morgenthau, 1963). No es gratuito que el gran teórico del realismo político sostuviera sobre el país del norte que “podrían aceptar éxitos y fracasos sin preocuparse indebidamente. Pero ahora se han rebasado los límites de su castillo continental y ha tomado a todo el mundo político como amigo o enemigo” (Morgenthau, 1963, p.38). Teniendo en cuenta lo anterior, toda política internacional-al igual que toda política que se formule- tiene el objetivo de lograr poder, ya que el poder es el fin más próximo cuando está son implementadas. Todos los estadistas recurren a una lucha por el poder (Morgenthau, 1963). Cabe destacar que según las tesis presentadas en *La lucha por el poder y la paz*, en la política internacional, los cuerpos militares sirven para que las naciones oponentes eviten el uso de la fuerza militar; es esta una victoria desde el punto de vista de realismo político.

Por su parte, Carr (2004) en su famoso texto *La crisis de los veinte años (1919-1939)*, propone que el líder realista percibe las nociones utópicas, quien supone que sus acciones no son hechos y se quedan simplemente en aspiraciones, circunscritas al orden condicional y no

indicativo. Según lo propuesto por Carr (2004), el realista cree que no hay una igualdad de los hombres: “la igualdad de los hombres es la ideología de los no privilegiados que tratan de colocarse en el nivel de los privilegiados” (p.47). Por lo tanto, en una hipotética confrontación, triunfará el Estado que esté mejor equipado que sus oponentes. Asimismo, en opinión de Carr (2004), el líder realista puede caer en una suerte de determinismo, ya que la teoría puede ser vista como un subproducto y resulta imponente ante los hechos desencadenados en la realidad. El realista no debe regirse por lo estrictamente teórico. En el amplio recorrido histórico que realiza Carr en *La crisis de los veinte años (1919-1939)*, para sostener sus ideas sobre el realismo, estudia algunos antecedentes del mismo, en este caso, en el periodo del Renacimiento: Los realista de la época –tal es el caso de Maquiavelo– se fueron lanza en ristre en contra de la ética; buscaron la posibilidad de utilizar a la ética como instrumento de los fines políticos (Carr, 2004). En clara sintonía con las propuestas de Morgenthau, para Carr, el realista es un ente netamente racional: Posee una respuesta racional a la pregunta de por qué los débiles deben ser gobernados por los más fuertes y mejores capacitados. Igual situación repercute en el orden mundial. Los ciudadanos del común –al igual que los Estados débiles, deben someterse a los más fuertes, porque de lo contrario serían sometidos por la fuerza, ya que “los resultados de la obligatoriedad son más desagradables que los de la sumisión voluntaria” (Carr, 2004, p.84). De esa manera, para Carr, el realismo moderno adoptó el postulado del siglo XVIII de la idea del progreso, postulándose aún mucho más progresista que el utopismo. Asimismo, el realismo con su implementación en siglo XX, se fue tornando cada vez más relativista y dinámico (Carr, 2004). Por eso, siguiendo los postulados de Carr, para el realista no subyacen obligaciones morales que deban acatar los Estados modernos (Carr, 2004).

Por su parte, Waltz (1988) en *Teoría de la Política Internacional* diserta sobre los principales elementos que componen al realismo político. En primer lugar, las acciones del Estado están motivadas por los intereses del gobernante de turno; en esa misma dirección, las necesidades políticas están sujetas a la competencia no controlada entre los Estados. A su vez, en esta vertiente política, los gobernantes deberán escoger las políticas que mejor sirvan a los intereses de los Estados que administran. El realismo político señala los postulados que deben regir a la política exterior del Estado, impulsando la llamada teoría del “equilibrio de poderes”. En otra instancia, Hoffmann (1991), en *Jano y Minerva: ensayos sobre la guerra y la paz*, comenta que el realismo político contempla que las relaciones internacionales están supeditas al conflicto entre los Estados que participan en una continua pugna. Siguiendo los postulados de Hoffmann, el estadista realista deberá resaltar los intereses del Estado que representa; defendiendo el interés nacional, las políticas del orden mundial. En su opinión, los verdaderos realistas desean construir un orden netamente nuevo, considerando que el utopismo es una falacia y que no es posible instaurarlo en la realidad. Frente a lo anterior, Hoffmann sostiene lo siguiente: Los Estados deben calcular sus fuerzas de acuerdo a la consecución y obtención del poder, teniendo en cuenta que deben estar subyacentes las ambiciones nacionales, no desdeñando que los Estados mismos se defienden de aquellos que ponen en peligro su supervivencia en el sistema internacional: “la imposibilidad de una ética de la ley y de la paz a través de la ley, lo acertado de una ética de la responsabilidad en lugar de una ética de la convicción” (Hoffmann, 1991, p.65).

Otros pensadores inscritos en esta teoría como Burham, consideraban que los principios de la lucha política son idénticos a los de la lucha militar: el éxito depende de saber apoderarse de la situación a favor del país dominante. En esa misma línea, Raymond Aaron en *Paz y Guerra*

Entre las Naciones, explica que en los actos de guerra para favorecer a un pueblo, un militar no respeta las virtudes individuales, situación que no puede ser desconocida por la diplomacia y la estrategia. “Hay que conocer el régimen y la filosofía de los que gobiernan en un Estado” (Aaron, 1990, p.45).

Como ya fue expuesto, George Kennan, realista, Secretario de Estado y famoso por su Teoría de la contención, era un estudioso de la expansión soviética. Según su criterio se hace necesario aplicar esa iniciativa por medio de una contención pasiva que combine todas las formas de lucha (tanto legales como ilegales) para frenar los tentáculos soviéticos en las áreas de predominio estadounidense. Kennan (citado por Rivas, 2009) predijo la crisis soviética de los 80 en los años 60.

Por su parte, Henry Kissinger, destacado académico y Secretario de Estado de Nixon en su texto *Diplomacia*, aseguraba que era necesario alcanzar un equilibrio de poder en el orden mundial en medio de la Guerra Fría. Había que derrotar a la Unión Soviética e incorporarla en un sistema regido por los Estados Unidos. Derrotarla también en el Tercer Mundo rebosante de guerrillas y grupos de izquierda (Kissinger, 1995). Por ello, era necesaria la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional y al mismo tiempo utilizar la diplomacia internacional. Para Kissinger —como buen realista— el fin de las relaciones internacionales no era la paz. En su opinión, las naciones revolucionarias ponen en jaque al sistema internacional, entonces es indispensable optar por sistemas estables que no cuestionan el sistema. Por eso la diplomacia tradicional no funciona cuando es amenazada por una potencia revolucionaria y los tratados deben ser justos y contundentes para no llegar a sistemas de inestabilidad parecidos a los acaecidos después de Westfalia y Versalles (Kissinger, 1995). Sostiene que por efecto de la ley natural, en cada siglo y en cada orden mundial, surge una potencia capaz de regir el destino del

resto de las naciones, lugar que en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional, le corresponde a los Estados Unidos:

En el siglo XX, ningún país ha influido tan decisivamente en las relaciones internacionales, y al mismo tiempo con tanta ambivalencia, como los Estados Unidos. Ninguna sociedad ha insistido con mayor firmeza en lo inadmisibles de la intervención en los asuntos internos de otros Estados (Kissinger, 1995, p.11).

Kissinger explica en su amplio recorrido histórico que emprende en *Diplomacia*, que en medio del utopismo e idealismo de Woodrow Wilson o de líderes realistas como Theodore Roosevelt, los Estados Unidos y los asesores de su política exterior, hicieron creer la idea de que las acciones internacionales del país del norte, debían servir como el faro que iluminara al resto de la humanidad. En este sentido, Kissinger expone que Theodore Roosevelt fue el primer presidente en insistir que una de las labores de los Estados Unidos consistía en construir globalmente su influencia en el resto del globo, en relación a su concepción del interés nacional, utilizando “su fuerza para prevalecer” en el orden internacional. Por eso, con el estadista norteamericano, se daba al traste con la idea del aislacionismo (Kissinger, 1995). En ese orden de ideas, el autor de *Diplomacia* en una clara crítica al pensamiento wilsoniano, arguye en medio de su postura realista que ninguna nación que pretenda tener liderazgo, tiene el objetivo de realizar actos altruistas en otros países. Todos los que persiguen esa meta, actúan sin seguir máximas morales y éticas en su comportamiento. No obstante, pese a sus claras intenciones geopolíticas y geoestratégicas, los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX hasta la última década del mismo, han atribuido la generosidad con otras naciones, en su papel destacado de potencia. Más aún, durante la Guerra Fría, se presentó un debate interno en el que se discutía si los Estados Unidos, debían organizar la resistencia al comunismo orquestado desde Moscú. A la

larga, triunfó el pensamiento realista –sobre las ideas wilsonianas- de contenerlo a toda costa. No obstante, para camuflar sus intenciones expansionistas y hegemónicas, tanto republicanos y demócratas dicen ser partidarios del wilsonianismo ocultando camaleónicamente sus intenciones realistas (Kissinger, 1995). En opinión de Kissinger, el realismo político y la real politik, es una política exterior diseñada en cálculos de poder y en el interés nacional del Estado, evitando carreras armamentísticas y confrontaciones bélicas (Kissinger, 1995). Por lo tanto, Kissinger argumentaba para convencer a los lectores de las intenciones estadounidenses en el concierto mundial que “el sentido de unicidad norteamericano se basaba en el concepto de libertad, el de Rusia surgió de la experiencia del sufrimiento común” (Kissinger, 1995, p.138). Sobre el contexto de Guerra Fría, Kissinger sostenía que frente a la amenaza del comunismo –patente y vigente durante todo ese periodo-, si dicha amenaza se intensificara, debía ser arrancada de tajo por dichos estadistas a través del sabio consejo de sus asesores. Pero si, la amenaza es fortuita, no quedaba otro camino que utilizar el desgaste y la paciencia, síntomas fidedignos de una teoría de la contención (Kissinger, 1995).

Ahora bien, Kissinger creía que los Estados Unidos estaban llamados para configurar un nuevo sistema basado en la disuasión nuclear (como modelo de guerra limitada). Había que frenar a toda costa a la Unión Soviética e integrarla en el sistema bajo su propia influencia. Kissinger fue un férreo defensor de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina y era un abierto defensor de los generales brasileños: lo admiraban como asesor, mentor y en Brasilia era considerado una ayuda incondicional y determinante para aplastar el comunismo en dicho territorio.

Geopolítica y Doctrina de Seguridad Nacional

¿Cuál es la relación patente entre la geopolítica y la Doctrina de Seguridad Nacional? Para responder esta inquietud, primero es conveniente estudiar algunos antecedentes. En la segunda mitad del siglo XX, algunos teóricos –según Pedro Rivas Nieto- creyeron que la geopolítica fue la génesis en la que se basó la Doctrina. Uno de los objetivos de la geopolítica radica en estudiar la influencia de los factores geográficos en la vida y evolución de los Estados, a fin de extraer conclusiones de carácter político. Estas premisas pueden guiar a los estadistas en la conducción de la política interna y externa del Estado y orientar al militar en la preparación de la defensa nacional y en la conducción estratégica, al facilitar la previsión del futuro mediante la consideración de la relativa permanencia de la realidad geográfica. Les permite deducir la forma concordante con esta realidad en que se pueden alcanzar los objetivos y en consecuencia, las medidas de conducción política y las estratégicas convenientes (Rivas, 2009).

Lo anterior se aplicó con rigurosidad en varias escuelas militares como la de Cuyo en Argentina y la Escuela Superior de Guerra del Brasil. Fue utilizada porque aportaba argumentos científicos para su implementación y fue el motor dinámico para el funcionamiento de la Doctrina en cuestión. La geopolítica se estudió de la peor manera en América Latina: Arribó a las escuelas mal traducida, malinterpretada; con un antecedente deshonroso: Perdió respeto luego de la Segunda Guerra Mundial porque fue aplicada por los alemanes, los perdedores directos de la contienda mundial. La geopolítica, pese al menosprecio que se ganó, era indispensable para los países que buscaban la paz y para aquellos que querían atacar y apropiarse de territorios.

Siguiendo ese orden de ideas, Edgar de Jesús Velásquez, en medio de una postura neomarxista, considera que el “origen de la Doctrina de Seguridad Nacional está en la

geopolítica que irrumpe en la fase imperialista en expansión, que se basa en las categorías positivistas del espacio vital” (Velásquez, 2002, p. 12). En pocas palabras, esto quiere decir que una potencia en expansión necesita buscar y apropiarse de nuevos territorios que le pertenecen a otras naciones.

Al considerar a la geopolítica como un factor clave para la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en el continente, se debe partir del hecho que ésta fue condicionada según las particularidades de cada país. Más aún, la geopolítica, tal como lo argumenta el investigador boliviano Andrés Nina, se adecua de manera particular a la realidad latinoamericana. En ese contexto, bajo una perspectiva económica y política, la geopolítica se encuentra en franca disputa entre los centros de poder (las empresas y el Estado).

Esa disputa se hizo evidente en algunos regímenes dictatoriales que bajo una tendencia modernizadora intentaron sentar las bases para una sólida planeación económica, como lo hizo el régimen militar brasilero, entre 1964 y 1984. En ese sentido, Nina afirma que:

Si bien cada país tiene un planteamiento con respecto a sus objetivos geopolíticos, esto no implica que la Doctrina de la Seguridad Nacional no tenga validez “universal” o “latinoamericana”, aunque ésta se haya formulado en sus inicios en el Brasil y esté influenciada por la geopolítica brasileña y posiblemente por su política “expansionista” (Nina, 1979, p. 9).

Cabe destacar que los múltiples centros de adoctrinamiento —Escuela Superior de Guerra del Brasil en el caso de la gran nación sudamericana— se produjeron y estudiaron con notoriedad escritos militares sobre geopolítica. Documentos que también eran ampliamente estudiados dentro de los gobiernos e incluso sus gabinetes ministeriales.

En ese orden de ideas, y siguiendo su tendencia desarrollista y modernizadora, la Escuela Superior de Guerra del Brasil consideraba en sus postulados que las causas de la violencia y la creación de grupos subversivos tenían que ver con la situación apremiante de subdesarrollo, cuestión que merecía estudio y ser combatida; la creación de células terroristas y agrupaciones insurgentes estaría estrechamente ligada con la vulnerabilidad económica según el criterio de los teóricos de dicho instituto de guerra.

Una confrontación librada en un contexto de subdesarrollo —es decir, la aplicación de la Doctrina misma— cuenta con recursos económicos limitados, lo cual conlleva al atraso de las estructuras económicas de los países. De esa manera, La Escuela Superior de Guerra del Brasil observaba que:

La movilización de recursos económicos se ve limitada o restringida por la situación de estancamiento o atraso de las estructuras económicas, así como de la disponibilidad de recursos financieros para la adquisición de armamento militar. Es así que la seguridad externa se ve amenazada por la vulnerabilidad económica (Nina, 1979, p. 9).

De esa manera, la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta en territorio brasilero presentaba una visión particular de la naturaleza misma del Estado, que intenta erradicar la pobreza en medio de un espacio vital subdesarrollado y tiene por reto, aparte de luchar contra las guerrillas comunistas, motivar la integración y desarrollo económico y fomentar el desarrollo regional. Asimismo, la Doctrina de Seguridad Nacional iba de la mano con la expansión a otros mercados externos (exportación de productos nacionales) y el cubrimiento del mercado interno. Por eso, combatiendo la pobreza y las situaciones de desigualdad social, se ataca de frente al

comunismo y a los grupos insurgentes. Palabras más, palabras menos, la pobreza y la miseria son la causa de la aparición del comunismo.

Los teóricos de la Doctrina de Seguridad

Los teóricos de la Doctrina de Seguridad Nacional aseguraban que el mundo estaba en un estado permanente de guerra, una lucha frontal contra el comunismo. Kennan (citado por Rivas, 2009) decía que había que frenarlo donde estuviera amenazada la libertad por guerras revolucionarias propias de la Guerra Fría. Manejaban conceptos, ya expuestos en las páginas anteriores, como la guerra total, la guerra generalizada (que fusiona dos conceptos: el que define la guerra como fin y el que la define como sus medios).

Los militares latinoamericanos comienzan a estudiar a Ludendorff y su teoría de la guerra total, quien también populariza el concepto de guerra generalizada. Para el líder alemán, la política debía ponerse al servicio de la guerra. Preconizaba una suerte de dictadura en aquellos que dirigen una nación. Toda la nación (la población) estaba llamada a la lucha (en lo material y en lo formal) (Rivas, 2009). La paz debía estar al servicio de la próxima guerra en la que la población tenía el deber de participar. Arrinconar al enemigo con una serie de ataques en sus puntos débiles: Con encuentros violentos y espaciados. Era necesario usar todos los medios disponibles: Militares, diplomáticos, económicos, psicológicos, tanto a nivel interno como externo. La guerra absoluta debía ser concebida de esa manera. El pueblo debe estar cohesionado para ganar una guerra y creía que la disidencia es un cáncer que atenta contra la supervivencia de la nación.

También al esbozar los postulados de la Doctrina, sus teóricos crearon la relación (habitual y típica en toda guerra) de amigo-enemigo, que en este caso era un rival interno a derrotar. En opinión de Juan Rial era necesario confeccionar “la necesidad de un enemigo que diera sentido a

la acción militar y que reforzara la identidad corporativa, [y tal necesidad] fue llenada al descubrir que pueden llevarse adelante guerras de un nuevo tipo” (Rivas, 2009, p. 48).

Ante ese eventual clima de inestabilidad interna desatado por el enemigo también interno, se justificó la figura del Golpe de Estado —como el que se registró en Brasil en 1964— y lo que Leal (2005) define como “terrorismo de Estado”, política ampliamente utilizada por las dictaduras militares en las que siempre salía perdiendo la sociedad civil. Todo indicio de militarismo (en medio de esa estrecha relación entre clases privilegiadas y cúpula militar) y de irrespeto a las instituciones democráticas terminará de manera inevitable en un Golpe de Estado.

Este militarismo siempre conllevaba a un gran desprecio por las instituciones democráticas, las cuales sufrieron olas golpistas para suplantadas. Buscaron la ubicación de generales, civiles militaristas que ocuparon puestos estratégicos en los gobiernos para disimular que respetaban a la democracia y que acataban las disposiciones impartidas por los gobiernos civiles. El *modus operandi* del cuerpo castrense es intocable, se apropia de los recursos económicos del erario público sin retribuirlos a las arcas del Estado (Velásquez, 2002). Bajo esta lógica, integrantes de la sociedad civil consideraban apropiada la intervención desmesurada de los militares en la vida nacional y pensaban que eran los únicos capaces de resolver todos los problemas que aquejan a un país. De eso da cuenta el ambiente que vivió Brasil el 1 de abril de 1964, cuando Castello Branco asume el poder.

Por eso al motivar golpes de Estado e imponerse, son del criterio de acabar con la disidencia. En ese contexto, es necesario contar con una economía sólida para financiar la guerra contra el enemigo interno. En caso de no eliminar al oponente, se llegaría a una guerra generalizada entre dos bloques opuestos que terminaría en la aniquilación total de la especie humana. Consideraban que una guerra contra el comunismo era una guerra por la supervivencia.

La guerra absorbía a la política en todos los aspectos; para ello, los ejércitos utilizaban métodos de tortura psicológica —amparados por técnicas de inteligencia— para obtener información y entonces localizar al enemigo interno en la clandestinidad. Expone Leal Buitrago que “los servicios de inteligencia se militarizaron y *policivizaron* y fueron ubicados, al igual que el sistema nazi, por encima de la jerarquía que le corresponde en la organización institucional” (Leal, 2005, p. 49). De ahí que se utilizaran diversas expresiones que atentaban contra la dignidad y los derechos humanos como las desapariciones forzadas, la detención arbitraria y la tortura.

La Escuela de las Américas y otros centros de adoctrinamiento

En 1960 comienza la proliferación de los colegios militares en Panamá, diseñados y contruidos especialmente para el adoctrinamiento de oficiales y soldados latinoamericanos. Era necesario estudiar al enemigo por medio de sus más connotados y famosos teóricos. De esa manera, comienza un estudio riguroso de textos de guerra revolucionaria, ideas propuestas por personajes como Ernesto “El Che” Guevara, Ho Chi Minh, Mao Tse- Tung y Vo Nguyen Giap. Luego de acaecida la Revolución Cubana se desató miedo y pánico en el gobierno de los Estados Unidos: Un temor a que los aires revolucionarios se expandieran por todo el continente. Había que contener al enemigo a toda costa.

Para comprender los planteamientos revolucionarios, los militares norteamericanos tenían un as bajo la manga: Los estudios completos de la guerra contrainsurgente en Argelia. Se dieron cuenta de que los franceses analizaron este tipo de conflictos revolucionarios (que buscaban liberar al país africano del yugo opresor francés) como guerras de desagregación imperial de carácter “subversivo” (Rivas, 2009).

Sus luchadores las llamaban guerras de “liberación contra el yugo opresor de un imperio colonizador” (Rivas, 2009, p. 85). Consideraban que ese tipo de guerras solo podían emprenderse con el aval de un poder extranjero. Según los generales franceses Beaufre y Trinquier, la lucha revolucionaria inevitablemente conllevaba hacia la conversión de las ideas subversivas y marxistas y a la organización y el alistamiento de las masas populares en la lucha. Para el cuerpo castrense francés, la Guerra Fría era un período de guerra total, de lucha permanente. La estrategia militar pesa más que la política y los diálogos y la estrategia se basan única y exclusivamente en la coacción. Cuando participa el pueblo, se combinan diferentes métodos de lucha, que no eran exclusivamente bélicos, que también era necesario reprimir (Rivas, 2009).

Los revolucionarios utilizaban la sorpresa (las emboscadas) y la superioridad física: Atacaban, huían y se replegaban. Consideraban también acciones terroristas. Implicaba, según su criterio, el desligue y la desvinculación total del sistema capitalista, porque la nación atada a ese sistema era un simple títere de las fuerzas imperiales. Por su parte, los teóricos contrarrevolucionarios, consideraban que donde hubiera guerras revolucionarias debía estar oculta la cara del comunismo. Creían que los soviéticos consideraban la victoria del comunismo en escala planetaria (tal como lo había planteado Marx y Engels en el Manifiesto Comunista y más tarde Lenin en medio de la Revolución de Octubre) y este proceso debía pasar también por los países del Tercer Mundo, ámbito del que no estaba exenta América Latina (Rivas, 2009).

Cuando esto sucediera, el resto del mundo caería sin ningún problema. Se confiaron mucho de la experiencia de Argelia, que tenía características diferentes a las de América Latina. En Argelia, para identificar al enemigo era necesaria la utilización de servicios secretos de inteligencia. Había que eliminar a todos aquellos individuos susceptibles de convertirse en

guerrilleros pertenecientes a sindicatos, grupos campesinos y partidos de izquierda. Pero también identificar a los miembros reales de la insurgencia por medio de espionaje, infiltración, arrestos arbitrarios y torturas para obtener información. Cuestiones que no tardaron en aplicarse en América Latina.

En este mismo contexto, durante la administración de Kennedy, se emprendieron acciones cívico-militares que pretendían seducir a la población en países donde había focos revolucionarios. Se podría citar aquí el sonado caso de la operación Grupo Conjunto de Trabajo Bravo en Honduras. Contemplaba a término indefinido, el trabajo continuo de médicos, odontólogos, educadores, veterinarios y farmacéutas estadounidenses que desarrollaban planes especiales para favorecer y ayudar a la empobrecida población civil (Velásquez, 2002).

De hecho, en opinión de Rivas (2009), pese a esos paliativos humanitarios, se ha demostrado a lo largo de la historia que los pueblos ocupados nunca simpatizan con sus ocupantes. En buena medida, considera el autor español, es por eso que fracasó el proyecto humanitario del presidente demócrata. Kennedy creía ciegamente en el cambio pacífico que pretendía su Alianza para el Progreso y no en la represión violenta en todo el orbe latinoamericano.

No obstante, aún antes de John F. Kennedy y sus intenciones humanitarias, los gobiernos de Harry Truman y Eisenhower fueron partidarios de actividades conjuntas que estabilizaran al continente mediante actos donde eran habituales los golpes de Estado y las dictaduras avaladas desde el Pentágono (Velásquez, 2002).

Sin embargo, en la política real, siempre surgirán contradicciones en los actores políticos: Kennedy en medio de sus discursos pacifistas, financiaba y participaba en la modernización de los ejércitos latinoamericanos: Ordenaba a sus soldados a participar en proyectos sociales en

zonas rurales y deprimidas para sondear qué pensaba la población de la situación. En opinión de Leal (2005) “la administración Kennedy diseñó dos proyectos complementarios: La Alianza para el Progreso contra la pobreza y los programas ampliados de contrainsurgencia (Fuerzas Especiales del Ejército y la Oficina de Ayuda para la Seguridad Pública) contra la subversión” (p.38). Ahora bien, ya centrados en la Doctrina de Seguridad Nacional y ante el fracaso de la Alianza para el Progreso, cuando es desmontada por el congreso estadounidense, se opta por una postura maniquea que enmarca toda problemática social como una innegable manifestación comunista (Leal, 2005).

Más aún, ante el fracaso de este tipo de políticas, el gobierno de los Estados Unidos decide aplicar al pie de la letra los principios de la guerra contrainsurgente en Argelia impartida en los colegios militares como la Escuela Militar de las Américas (US Army School of the Americas, USARSA), localizada en Ford Gulick (Velásquez, 2005). Fue creada en 1963 por el Pentágono e impartía cursos de contrainsurgencia e ideología anticomunista en portugués (para los brasileños) y en español, que les permitiera a los militares salvaguardar la seguridad interna de sus respectivos países. A este importante centro de adoctrinamiento, llegaban integrantes selectos de las fuerzas militares latinoamericanas que buscan alcanzar niveles superiores de profesionalismo, en lo referente a seguridad interna y la colaboración militar (entre países) en el desarrollo nacional y técnicas de contrainsurgencia (Velásquez, 2002). Luego de terminar los cursos en este lugar, a los militares graduados se les hacía un seguimiento por parte de las autoridades estadounidenses cuando regresaban a sus lugares de origen. Cabe destacar que a los altos oficiales de graduación se les organizaban tours en los Estados Unidos para seducirlos con el estilo de vida de la potencia y mostrarles de primera mano los buenos índices en materia de

calidad de vida del pueblo norteamericano. Era en realidad un adoctrinamiento pro-occidental y pronorteamericano.

Por otro lado, los profesores de la Escuela de las Américas eran norteamericanos de ascendencia mexicana, puertorriqueña o cubana y a los graduados con mejores calificaciones se les invitaba después como profesores visitantes. Es bueno citar algunas cifras importantes, en materia de graduación en este centro de adoctrinamiento, aportadas por Velásquez (2002):

En septiembre de 1975 se habían graduado 33.147 alumnos en la USARSA, muchos de ellos ocuparon altos cargos en sus gobiernos. En octubre de 1973, más de 170 graduados eran jefes de gobierno, ministros, comandantes, generales o directores de los departamentos de inteligencia de sus respectivos países (p. 17).

Dictadores de línea dura en América Latina como Augusto Pinochet, Jorge Rafael Videla, Hugo Banzer, Alfredo Stroessner, Bordaberry y Humberto Castelo Branco, el primer presidente militar del régimen que gobernó a Brasil entre 1964 y 1984. La Junta Militar en pleno y los líderes que sujetaron las riendas del Estado brasilero a través de sus gobiernos de facto, se formaron según los postulados de la doctrina en cuestión: Humberto de Alencar Castelo Branco, Artur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel y João Baptista de Oliveira Figueiredo (Velásquez, 2002).

Este investigador explica que los golpes de Estado que sufrieron países como Brasil, Perú, Chile y Bolivia habían sido propiciados y concebidos por antiguos estudiantes de la Escuela de las Américas. A su vez, en aquellas naciones donde se presentaron golpes de Estado, los militares estuvieron implicados en cruentas violaciones a los derechos humanos, situación que llevó a las ONG de los Estados Unidos a presionar al gobierno en Washington para que tomara cartas en el asunto (Velásquez, 2002). Sin embargo, no era únicamente la Escuela de las

Américas, la encargada de impartir este tipo de enseñanza. También hicieron lo propio las siguientes instituciones: La Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, la Universidad del Aire, la Escuela de Comandantes de Escuadrón, la Academia de Comandos y Estado Mayor, la Academia de Guerra Aérea, la Academia de Guerra Naval y la Academia Interamericana de Policía.

En ese orden de ideas, Alfred Stepan, reconocido politólogo de la Universidad de Columbia expone en su texto *Brasil: los militares y la política* que el gobierno estadounidense tenía la prioridad de exportar su ideología anticomunista y contrainsurgente en América Latina. Tenía el monopolio y control de todos los ejércitos latinoamericanos —a excepción de Cuba y México— que se traducían en apoyo militar, técnico y asistencia social. Soldados, generales y miembros de los ejércitos latinoamericanos eran entrenados por militares norteamericanos en Panamá y Fort Leavenworth, y obedecían las directrices de las doctrinas propuestas en el Colegio de Defensa Interamericana de Washington.

Este investigador norteamericano señala que:

[Al estallar la Revolución Cubana y al desatarse el conflicto en Vietnam], el gobierno de Kennedy modificó la anterior orientación de la política militar de *Act for International Development of 1961 (AID)*² hacia América Latina, centrándola no en la seguridad del hemisferio sino en la seguridad interna. Con el fin de combatir la guerrilla interna de inspiración comunista, Estados Unidos realizó campañas a lo largo de toda América Latina, propalando la idea de que los ejércitos latinoamericanos debían concentrar sus energías en la contrainsurgencia y la acción cívica (Stepan, 1970, p. 153).

² Conocida también como *The Foreign Assistance Act*

Este autor sostiene que desde 1961, las revistas y magazines militares estadounidenses denotaban un marcado interés en contrarrestar la subversión y los grupos guerrilleros en América Latina. A finales de la década de los 50 y principios de los 60, El *Air University Library Index to Military Periodical* no contemplaba medidas de contrainsurgencia; no obstante ya entre 1962 y 1964 “existían 160 notas referidas a la contrainsurgencia y 42 referidas al estudio y capacitación de la misma” (Stepan, 1970, p. 153). Siguiendo al politólogo norteamericano, en medio de este auge de temas de contrainsurgencia en las publicaciones militares del país del norte —que se difundían ampliamente en los cuerpos castrenses latinoamericanos— se puede dilucidar el ambiente característico de la Guerra Fría, con el objetivo claro de eliminar al enemigo en las latitudes latinoamericanas.

En dichas publicaciones y en las proclamas proferidas en los centros de entrenamiento de los Estados Unidos se hacían patentes expresiones de marcado fanatismo político. El *Military Assitance Training Advisor* proponía a sus integrantes y combatientes la siguiente proclama:

Cientos de soldados aliados para la contrainsurgencia. Malditos sean los insurrectos.

Cursos de capacitación para la contrainsurgencia en todo el ejército.

Contrainsurgencia: Control global de termitas. Búsqueda y desarrollo de hombres de

Estado-soldados. Acción cívica: Contraataque y cura para la insurgencia (Stepan,

1970, p. 153).

En sus análisis sobre la contrainsurgencia era habitual estudiar a profundidad a los teóricos revolucionarios. Sobre los cursos impartidos estudiaban la manera

“Cómo funcionaba el Partido Comunista, la conquista y colonización comunista. El dominio del Partido Comunista en Rusia. La respuesta de una nación al comunismo.

¿Cómo logran y retienen el poder los comunistas? La democracia contra el

comunismo ¿Qué hacen los comunistas en libertad? ¿Cómo controla el comunismo las ideas de los pueblos?” (Velásquez, 2002, p. 17).

Se podría decir que estudiaban acciones militares preventivas para disuadir a los guerrilleros o para contrarrestar a tiempo las acciones guerrilleras.

En el caso brasilero, se presentó una lucha netamente preventiva realizada por la fuerza pública brasilera para reprimir todo lo que oliera a izquierda. Consideraban que se debía atacar al enemigo, adivinar sus movimientos y prevenir acciones terroristas que minaran al Estado. Era obvio que los militares acrecentaban el miedo y el terror y que motivaban un ambiente de paranoia absoluta, ideal para lograr sus objetivos (Rivas, 2009).

Sin embargo, tal como lo expone Comblin (citado por Rivas, 2009), “en América Latina no ha habido y no hay en ninguna parte cosa alguna que se asemeje ni siquiera de lejos a una guerra revolucionaria en el sentido de Mao” (p. 101). En la Escuela de las Américas, en territorio panameño, se estudió todo el cuerpo teórico de la Doctrina de Seguridad Nacional, que luego sería implementado con rigor en todo el espectro latinoamericano. Eso da pie, ante una amenaza exterior (en este caso de la influencia soviética) de controlar los Estados desde adentro. Por eso, y tal como se observó en la realidad, los movimientos de izquierda leales al comunismo, comienzan a controlar de entrada los centros universitarios, los medios de comunicación social, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales.

El Estado Mayor Brasilero declaraba en una reunión con sus homólogos de todo el continente que:

El enemigo es indefinido, usa mimetismos, se adapta a cualquier ambiente, y usa todos los medios, lícitos para lograr sus objetivos. Él se disfraza de sacerdote o de profesor, de alumno, de campesino, de vigilante defensor de la democracia, o de

intelectual avanzado, de piadoso o de extremado protestante, va al campo y a las escuelas, a las fábricas, y a las iglesias, a la cátedra y a la magistratura; usará si es necesario el uniforme o el traje de civil, en fin hará cualquier papel que considere conveniente para engañar, mentir y atrapar la buena fe de los pueblos occidentales (Rivas, 2009, p. 101).

En síntesis, cualquiera podía sufrir los rigores de la Doctrina y sus enemigos eran directamente una amenaza contra la cultura occidental.

Todo lo que estaba inscrito en la oposición debía ser reprimido. No había ninguna distinción para desatar la represión. No había distinción entre oposición, guerra, crítica, terrorismo, acciones armadas, grupos de izquierda y comunismo. Todo cabía en un mismo paquete. Este tipo de persecuciones distorsionaban la realidad en buena medida por acciones emprendidas por los servicios de inteligencia. Desde luego, siguiendo los centros escogidos por el comunismo para apuntalar la revolución, la represión y las acciones de fuerza, se trasladaron a las universidades, los centros de pensamiento, se coartaron las libertades y los derechos civiles de intelectuales.

Los militares adoctrinados en centros como La Escuela de las Américas pensaban con convencimiento que destruyendo cualquier tipo de disidencia también se eliminaba tajantemente el comunismo. Rivas (2009), es claro cuando expone que “los conflictos sociales, las oposiciones políticas, las discusiones de ideas o el inconformismo ideológico o cultural ya no eran tales, sino manifestaciones de una guerra revolucionaria omnipresente” (p. 102). Dicha represión era el rostro fidedigno de la Guerra Fría y su lucha habitual entre las fuerzas de occidente y el comunismo internacional. Una confrontación que eliminaba de tajo toda expresión política diferente a la impuesta por los regímenes militares.

Por otro lado, los militares estadounidenses encargados en adoctrinar a sus homólogos latinoamericanos pensaban que la efectividad de la Doctrina de Seguridad Nacional era real siempre y cuando, los miembros del ejército se ocuparan de todas las áreas de la sociedad (Stepan, 1970).

Con esta premisa, los difusores y promotores de la Doctrina, al proponer que se debían intervenir todos los aspectos de la vida cotidiana, inevitablemente estaban llamados a participar en el ámbito político, cuestión clave para entender la instauración de regímenes militares diseminados en todo el continente. En esa dirección, Alfred Stepan junto a Luigi Einaudi y el doctor en Ciencias Políticas Richard Maullin presentaron en 1969 el texto *Asuntos de seguridad latinoamericanos*. Sostuvieron en ese texto controversial para la época que los Estados Unidos sólo atendieron los problemas desatados por la izquierda, desdeñando todas las dificultades que acarreó trabajar con la derecha, fortalecerla, fortificarla, si se quiere, de manera inadvertida. Exponen en este texto clave, escrito en pleno furor de la Guerra Fría, que “la visión norteamericana de la gravedad de la amenaza comunista y la consiguiente necesidad de una acción cívica y de contrainsurgencia en las Fuerzas Armadas de América Latina produce resultados indeseables” (Stepan, Maullin, & Einaudi, 1969, p. 5).

Por otro lado, una manifestación fehaciente de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue la llamada Operación Cóndor o Plan Cóndor, implementado en los países del Cono Sur. No obstante, la Junta Militar brasileña también participó activamente en su ejecución. Se trató de un elaborado plan de inteligencia clandestino, coordinado por los regímenes militares de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, con la asesoría del Departamento de Estado de los Estados Unidos, La CIA, y El Pentágono. Se trataba de un plan mancomunado entre dichos regímenes, aplicando las ya citadas técnicas de contrainsurgencia de la guerra argelina, para

eliminar todo intento de oposición, surgiera donde esta surgiera. Por ejemplo, si un grupo de disidentes huía a un país vecino, se dio la posibilidad de que las fuerzas de seguridad de ese país lo capturaran por orden de la nación de origen de los capturados para luego torturarlos y deportarlos. En medio de esta espiral de represión coordinada por los gobiernos de facto de la región, el sociólogo Alejandro Paredes sostiene sobre La Operación Cóndor que "a mediados de los setenta, las fuerzas represivas del Cono Sur habían controlado la situación con un saldo de cuatro millones de exiliados en países vecinos, 50.000 asesinatos, al menos 30.000 desaparecidos, 400.000 encarcelados y 3.000 niños asesinados o desaparecidos" (Paredes, 2004, p 1).

Doctrina de Seguridad Nacional vs Teología de la liberación

Cuando se menciona el juego de palabras "Teología de la liberación", algunos investigadores en el mundo de la academia, no muy versados en el asunto, piensan en un extraño híbrido entre marxismo y evangelio, gestado en la Guerra Fría, en pleno periodo revolucionario y cuando la Revolución Cubana se encontraba en su momento de mayor efervescencia. Sus promotores fueron cuestionados por la Iglesia Católica en el plano doctrinario y las dictaduras los consideraron una verdadera piedra en el zapato para la consecución de sus gobiernos de facto.

No obstante, ésta sería una explicación muy simplista para abordar y detallar esta curiosa vertiente político-religiosa, que nació como respuesta y consecuencia directa a la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, reunida en Medellín en 1968 y a documentos papales como la encíclica *Populorum Progressio* y en clara oposición a la Doctrina de Seguridad Nacional.

Lo cierto es que la Teología de la Liberación fue uno de los primeros intentos que conjugaba religión, teología y política en aras de lograr un cambio social radical en América

Latina, considerado por sus partidarios como el subcontinente de los oprimidos. La fe acogiendo el llamado a la revolución, tendría de esa manera la capacidad de lograr de manera radical un cambio político, social y económico. Por ello, en opinión de sus divulgadores, como ya será ampliado más adelante, era inevitable el conflicto y la crisis del sistema actual. Sus postulados se oponían de manera sagital a los promotores de la Doctrina de Seguridad Nacional, al ser partidaria abierta de la revolución.

Desde luego, al pronunciar el vocablo, también se pueden evocar las imágenes en las que el Papa Juan Pablo II reprendía en público al religioso y poeta Ernesto Cardenal en su visita a Nicaragua en 1983, en los momentos más álgidos de la revolución sandinista, por promover sus ideas emparentadas con la Teología de la Liberación y por ser miembro del gobierno sandinista.

Más aún, en ese contexto de lucha contrainsurgente, la Teología de la Liberación se tradujo en una vertiente subversiva del cristianismo que acogía abiertamente conceptos marxistas como “la lucha de clases”, que generaron malestar en el Vaticano y en los altos mandos militares. La Congregación para la Doctrina de la Fe comenzó a considerar sus premisas y postulados como desviaciones peligrosas y subversivas de la fe cristiana³.

También relacionan el concepto con represiones y retiros de licencias para enseñar teología, a sus principales promotores y pensadores, por parte de la Congregación ya mencionada, que Joseph Ratzinger dirigió durante veinte y cinco años como Prefecto antes de ser elegido Papa. Fueron perseguidos por las dictaduras.

Desde que fue formulada, a finales de los años 60, siempre ha despertado imágenes fragmentadas, reduccionistas y simplistas. Ya han pasado más de cuarenta años desde que fueron

³ La Congregación para la Doctrina de la Fe liderada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger publicó el texto “instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la Liberación” en 1984 en la que la criticaban doctrinariamente al considerarla subversiva y en contravía de la fe cristiana.

publicados los primeros textos que esbozaron su estructura y que encontraron su punto de clímax en los años 70. Por tanto, para los lectores jóvenes que no vivieron en el clima problemático y bipolar de la Guerra Fría, el tema en cuestión no resulta algo novedoso. Lo cierto es que la Teología de la Liberación es hija de su tiempo y por consiguiente debe ser interpretada y estudiada según el contexto político, cronológico y social en el que se formuló: El tiempo de la férrea Doctrina de Seguridad Nacional.

Un sector eclesiástico no estuvo indiferente ante los aires revolucionarios; inclusive adoptó algunas de las ideas más sonadas del imaginario marxista como la “lucha de clases”. Alfred Stepan afirma que un sector de la Iglesia, otra institución importante y que siempre había actuado con sigilo, a finales de los años 50 del siglo pasado, pasó de una postura de derecha, en concordancia con las ideas de las Fuerzas Armadas brasileñas (Stepan, 1970).

Stepan sostiene que:

[La iglesia se desplazó] en forma gradual e ininterrumpida a una postura de izquierda. Las Fuerzas Armadas como institución, empero, se sentían amenazadas y no ocultaban su hostilidad hacia la política de movilización de masas. Tras el golpe de 1964 el gobierno militar aplicó sus nuevos poderes para reprimir todos los procesos citados anteriormente. En consecuencia, los militares también modificaron su posición respecto a la que albergaban a fines de la década de 1950, adoptando una postura más derechista (Stepan, 1970, p. 182).

Perseguida por los militares y ampliamente cuestionada por la jerarquía católica en Roma, la Teología de la Liberación fue una de las vertientes de pensamiento más atacadas y reprimidas durante los años de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Dos de sus más preponderantes difusores fueron abiertamente combatidos por grupos de derecha y por los cuerpos castrenses. El brasileño Leonardo Boff, sacerdote de la Orden de los Frailes Menores, teólogo, ecólogo y filósofo. En 1985 se le despojó por orden del Vaticano de sus cátedras teológicas y sus funciones académicas, al considerar sus ideas como abiertamente peligrosas. Fue declarado enemigo por el régimen militar brasileño por oponerse a los preceptos de la revolución militar de 1964. Su libro *Ideología del cautiverio y de la liberación* publicado a finales de los 70 causó revuelo en el mundo católico y generó resentimiento entre los militares. Planteaba a groso modo que la historia humana había estado signada por la opresión y la liberación. Reflexionaba que la pobreza y la miseria en si misma eran una afrenta y un pecado en contra de Dios.

Otro teórico que no se puede desdeñar es Gustavo Gutiérrez Merino. Sacerdote peruano dominico, filósofo, teólogo y ganador del Premio Príncipe de Asturias en 2003. Escribió el texto *Teología de la Liberación: perspectivas* en 1972, que cuestionaba la labor pastoral de la Iglesia; inclusive advertía que ésta ayudaba a los grupos dominantes, la derecha, los militares y no mostraba un compromiso social serio con los oprimidos. Ambos textos también incluían disertaciones teológicas que proponían una estrecha relación entre teología y política. La teología, en opinión de estos pensadores, no podía reducirse a la explicación de dogmas y verdades reveladas. También debía estar comprometida con el cambio social. Acogían sin problemas ideas provenientes de la izquierda y del comunismo, en contravía de lo que proponía la alta jerarquía católica y en discordancia con los férreos controles dictaminados por los regímenes militares latinoamericanos.

Las ideas revolucionarias de ambos autores son consecuencia directa del encuentro episcopal en Medellín, Colombia, en 1968 y de la época de contracultura que se evidenciaba en

ese entonces. Los obispos reunidos en dicha ocasión analizaron esa coyuntura con el siguiente postulado:

Estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración integral y de integración colectiva. Percibimos aquí los preanuncios en la dolorosa gestación de una nueva civilización (Episcopado Latinoamericano, 1976, p. 23).

Inclusive Boff detalla el punto de partida de la Teología de la Liberación en ese encuentro episcopal y lo compara con una verdadera “revolución” metodológica para solucionar el problema de desigualdad social patente entre los pueblos latinoamericanos y los centros urbanos. En su opinión, dicho encuentro permitió realizar una lectura y un análisis científico-teológico de la realidad social que proponía un llamado hacia una nueva praxis de la fe. Boff (1977) invita desde la teología a la construcción de una estructura metodológica y hermenéutica que clasifica en tres etapas que luego ampliaremos.

En ese sentido, Gutiérrez (1972) propone ir más allá de las metas y postulados esbozados por la conferencia episcopal de Medellín; deberán tomar forma en la realidad y adquirir compromisos concretos. Lo sucedido en esa importante reunión, no debe ser tomado como expresión del pueblo oprimido por las castas dominantes, por los militares —aún falta que éste se manifieste— es más bien la queja de un sector de la Iglesia comprometido con la realidad social. Lo cierto es que el sacerdote peruano plantea dos radios de acción: La transformación de la realidad latinoamericana y la construcción de nuevas modalidades de presencia eclesial en esa realidad.

Asimismo, el encuentro religioso en Medellín hizo un llamado para que los obispos en América Latina asumieran un compromiso de denuncia apostólica frente a los abusos de poder

—ya sea de militares o de la oligarquía— que se cometen contra lo más pobres, acciones dolorosas de opresión que constituyen pecado y una afrenta contra los designios de Dios. Es asumir los problemas sociales como problemáticas propias del clero latinoamericano. Es por eso que la Iglesia debería hacer frente a todos aquellos que detentan el poder (Gutiérrez, 1972).

En ese contexto, la Iglesia, en opinión del autor peruano, deberá acoger la solidaridad como caballo de batalla para combatir y subvertir la realidad paupérrima que azota a los pueblos latinoamericanos, y abandonar radicalmente su aval hacia el orden establecido. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, argumenta que “la miseria y la explotación del hombre por el hombre que se vive en América Latina es descrita como una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada, que produce la muerte de millares de inocentes (Gutiérrez, 1972).

Cautiverio y liberación. Un clero comprometido con los pobres: oposición directa a la Doctrina de Seguridad Nacional

En noviembre de 2009, un envejecido Leonardo Boff visitó España y fue entrevistado por el reconocido periodista español Antonio San José en el programa de opinión “Cara a cara” del canal CNN Plus. Hubo una pregunta que era una evidente perogrullada: San José le preguntó sobre lo que representaba la Teología de la Liberación, su significado, la represión sufrida por sus seguidores por la alta jerarquía católica y los regímenes de facto. Su respuesta sencilla y sin rodeos puede ayudar a descifrar un poco su naturaleza.

“Nació a finales de los 60 del siglo pasado, cuando un sector de la Iglesia se dio cuenta de la grave crisis social de injusticia, opresión y marginación dentro de un desarrollo acelerado de

las clases pudientes”⁴. Boff argumentaba que su formulación obedecía a la indiferencia hacia millones de marginados y católicos pobres, abandonados a su suerte en todo el mundo. Entonces en ese contexto, cuestionaba a la religión y su papel de legitimación, de resignación, de adormecimiento ante una situación oprobiosa de pobreza. Cuestionaba directamente aquellos que detentaban el poder.

De esa manera, la Teología de la Liberación desarrollaba una perspectiva liberadora, revolucionaria del capital simbólico del cristianismo como un proceso de movilización, de cambio social desde la fe. Provenía entonces desde las bases populares y de resistencia ciudadana, reflejada en partidos políticos, grupos sociales y sindicatos. Todos abiertamente reprimidos por los pelotones de los ejércitos que los equiparaban a movimientos guerrilleros y subversivos. Su objetivo central radicaba en promover la doctrina cristiana como un compromiso activo de justicia social que pedía cambios dentro de la Iglesia y las sociedades totalitarias de ese entonces.

Ese también era el discurso del marxismo. La estructura eclesiástica nos acusó de apoyar a grupos marxistas. Aseguraban que nuestras ideas eran caballos de Troya mediante los cuales entraría disimuladamente el marxismo. La idea era hacer una iglesia más comprometida en cuestiones sociales y eso no lo veía la jerarquía eclesiástica con buenos ojos. Yo estuve en el banquillo de los acusados en el mismo lugar donde le hicieron los procesos a Galileo Galilei y Giordano Bruno, personas mucho más respetadas que yo, aseveraba Boff en la entrevista.

Teología del cautiverio y de la liberación engloba y sintetiza las ideas de Leonardo Boff sobre el papel que estaba llamada a cumplir la Teología de la Liberación en América Latina. En

⁴ Entrevista a Leonardo Boff. Vídeo disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=MpM1ik249cE>

la introducción del texto expone que la génesis y surgimiento de la Teología de la Liberación nace única y exclusivamente en los ambientes de opresión de los países que componen el Tercer Mundo y están sumergidos en un sistema de dependencia hacia los grandes centros de producción capitalista desde los tiempos coloniales. En este caso, bajo el yugo opresor del gobierno estadounidense.

Por otro lado, uno de los métodos para despojarse de la dependencia, es traído a colación por el padre Gustavo Gutiérrez como la *educación liberadora* que el teólogo extrae directamente de la encíclica *Populorum Progressio*. Entendida como un vehículo implementado en los centros educativos que libere a los habitantes del continente de toda forma de subyugación, que debe acuñar el “libre albedrío” pues el hombre es responsable y debe decidir si fracasa o triunfa en esta campaña liberadora (Gutiérrez, 1972).

Por su parte, Boff inspirado en la fe cristiana, invoca un compromiso de liberación de un sector de la Iglesia —independientes de las prácticas religiosas tradicionales y de los grupos de derecha— que al abordar los problemas socio-analíticos acogieron teorías exógenas al catolicismo que ayudarían a la concreción del mensaje cristiano en la realidad. De esa manera, la teología debía acoger postulados provenientes de los orbes económicos, políticos, ideológicos; y conceptos marxistas como la *lucha de clases*. Más aún, la teología no debía reducirse a la explicación de conceptos (la gracia, el pecado, la Divina Trinidad, etc.) y “campos teóricos definidos hasta ahora como teológicos” (Boff, 1977, p. 5).

Asimismo, expone Boff, la Teología de la Liberación es producto del encuentro y los documentos conciliares que aparecieron en la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín en 1968. También se gesta en medio de un ambiente de cautividad y de fuertes tensiones represivas motivadas por la Doctrina de Seguridad Nacional.

Rivas afirma, como ya se expuso, que la Doctrina se gestó en medio de un ambiente de desconfianza mutua entre las naciones latinoamericanas y fue la base fundamental para la consecución de las relaciones internacionales de la época en la que el gobierno de los Estados Unidos adoctrinó a los altos mandos militares latinoamericanos para perseguir y eliminar el comunismo en la región. Los promotores de La Teología de la Liberación también estaban en la mira: también eran un enemigo a eliminar. Para la Doctrina de Seguridad Nacional, nación y patria venían siendo lo mismo y los problemas sociales —observados por los militares— son manifestaciones insurgentes y subversivas que debían ser combatidas (Rivas, 2009). Para los militares la Teología de la Liberación era un dolor de cabeza.

En opinión del teólogo brasileño esta fuerte represión se ensañaba con los sectores más pobres y desprotegidos, e incluso encontraba eco en algunos sectores de la Iglesia que eran afectos hacia ciertas dictaduras militares en el espectro latinoamericano. Para Boff, fuerte crítico de los gobiernos de facto, era indispensable y primordial motivar que:

La teología de la liberación en régimen de cautividad tiene tareas distintas de las que tiene en tiempos de gozo por las libertades conquistadas. Es preciso sembrar, preparar el terreno, mantener firme la esperanza, consolar a las víctimas, disminuir los dolores y luchar a favor de los derechos humanos (Boff, 1977, p. 10).

De esa manera, el quehacer teológico propuesto por Boff y Gutiérrez tendría que lidiar de manera constante con regímenes militares, totalitarios y dictatoriales diseminados en América Latina que consideraron sus postulados igualmente subversivos a lo expuesto y promovido por el marxismo y comunismo, que los primeros pretendían extirpar en el continente. Lo anterior llevó a asumir y elaborar una “Teología del cautiverio”, entendida como un proceso nuevo de la Teología de la liberación y que debería ser comprendida cuando ésta surge y germina en medio

de regímenes totalitarios y opresivos. En ese contexto, la Iglesia, como cuerpo pastoral de cambio social y defensa de la vida tal como lo indica el Evangelio, debería entrar en franca oposición con los Estados totalitarios y mantenerse unida, cohesionada y nunca entrar en disputas y contradicciones internas. Es vocera de aquellos que son silenciados, ignorados y oprimidos; debería estar comprometida con la defensa férrea de los derechos humanos y proteger a las numerosas víctimas del aparato militar.

Al respecto Gustavo Gutiérrez Merino diserta que muchos sectores tradicionales de la Iglesia afectos a los regímenes militares, justifican la violencia ejercida por los opresores para perpetuar el *statu quo*, por temor a que haya inestabilidad; en cambio siempre cuestionan la sublevación de los oprimidos que utilizan la violencia y el conflicto para derrumbar la realidad apremiante que los subyuga. En una abierta crítica hacia algunos sectores del clero latinoamericano, sostiene que:

Un sector importante de la Iglesia pide que en la consideración del problema de la violencia se evite por todos los medios equiparar o confundir la *violencia injusta* de los opresores que sostienen este nefasto sistema con la *justa violencia* de los oprimidos que se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación (Gutiérrez, 1972, p. 150).

Acto seguido, propone en medio de ese ambiente de represión y persecución una nueva proyección social, un nuevo estilo de “ser iglesia” nacida desde las bases del pueblo, desde el centro de las clases desheredadas. Es una nueva realidad, diferente a la liberación histórica, que el autor define como *eclesiogénesis*, concepto excluido en la teología tradicional y que discute el proceso de liberación como una *teología-reflejo*. Es a su vez teoría crítica y permanente del

sistema capitalista, motor y origen de la actual situación de opresión en la que se sumen millones de cristianos empobrecidos y de otras creencias religiosas (Gutiérrez, 1972).

Un nuevo giro hermenéutico: despojarse de la dependencia

Tanto Gutiérrez como Boff proponen un nuevo giro hermenéutico. En ese nuevo contexto de interpretación y cambio radical, la teología debería trabajar de la mano de la libertad política y de conciencia, la pedagogía, la psicología, medicina, economía, sociología y la participación de las ciencias sociales como herramientas de análisis. Campos de la vida cotidiana que eran intervenidos por la Doctrina de Seguridad Nacional y estudiados en las materias impartidas en los colegios de guerra manejados por los Estados Unidos. Al incluir en esta nueva praxis de fe y política la palabra liberación, siempre presente en el curso de la historia, implica una nueva conciencia histórica que tiene la tarea firme e impostergable de comprender y tomar partido frente a la totalidad de la historia, desentrañarla, analizarla en el pasado, tener en cuenta sus consecuencias en el presente y sus efectos en el futuro.

Boff asegura que la Teología de la liberación se engendra en un contexto de subdesarrollo patente en América Latina. El subdesarrollo no es todavía una etapa superada. El subdesarrollo como ya se anotó era también un enemigo a derrotar según los postulados de la Escuela Superior de Guerra del Brasil.

El subdesarrollo estaba vigente y se encontraba enquistado en la estructura política y económica del subcontinente; de manera sistemática, inmersos en el mundo capitalista, incluye periferias empobrecidas y centros de poder (clases privilegiadas y los Estados Unidos) que se benefician de la miseria, el trabajo mal remunerado y la inequidad de vastos sectores poblacionales, generando progreso y desarrollo en los países más ricos.

Es entonces cuando la teología propuesta por el escritor brasileño, choca de frente con un concepto presente en toda su obra: “la dependencia” —con el aval de las empresas multinacionales— que lleva a que los países subdesarrollados nunca salgan a flote de su situación de subdesarrollo, que los hace dependientes de los centros de poder de Norteamérica y Europa. “Se exige ineludiblemente una ruptura y un corte con el statu quo de dependencia, no ya para buscar a otros de los qué depender, sino para que haya una convivencia humana más fraternal o menos dominadora” (Boff, 1977, p. 21). Boff argumenta que dicha liberación tiene que ser conquistada por los propios pueblos oprimidos, para lo cual es inevitable entrar en una situación de “conflicto, el cual debe ser propiciado, es decir, una lucha de clases —si se mira el asunto desde una perspectiva marxista— y que tiene como finalidad la construcción del “hombre nuevo” tal como lo propone el Evangelio. “Una lucha de clases” que el ejército brasilero no podía tolerar y que debía ser reprimida.

La dependencia también es un vocablo ampliamente difundido en la obra de Gutiérrez (1972), al considerar que los centros donde se deciden los hechos políticos y económicos de América Latina están fuera del subcontinente, manteniéndose así un estado de neocolonialismo. Por eso, el autor peruano se atreve a afirmar que el subdesarrollo propio de los pueblos latinoamericanos surge exclusivamente de la relación de dependencia permanente y asfixiante con el orbe desarrollado. Es, si se quiere, consecuencia directa del desarrollo capitalista del mundo occidental. Por lo tanto, en opinión del religioso, todo creyente está llamado a transgredir la barrera infame de la dependencia.

Pero volvamos a Boff. En su criterio, el hombre siempre está inmerso en una situación en la que es prisionero. No obstante, por medio de una constante lucha, ad portas de una situación de conflicto, logra superarse, siempre y cuando mantenga una apertura constante hacia la

emancipación. Este dilema siempre ha sido parte sustancial de la historia de la humanidad, pero cuando se elimina de tajo esa situación de apertura, ese llamado a liberarse, surge de manera inevitable la opresión, la sumisión (Boff, 1977). Sin embargo, ese proceso de apertura aún no se podría rotular como libertad plenamente alcanzada; es una simple etapa para acceder a la libertad misma.

Más aún, Boff expone que cuando se impone la opresión, situación en la que se agota el entorno vital del hombre, se hace indispensable tomar conciencia para superar ese estadio de subyugación que puede ser evidenciado bajo dos procesos de cambio diferentes. Por un lado, las *reformas* ocurren en contextos que pueden ser mejorados, en momentos en los que aún el sistema no ha tocado fondo. Caso contrario, cuando se invoca a un cambio total del entorno, un ambiente en el que la construcción de una vida digna está perdida, se encuentra desdibujado, se exige en cambio la revolución —el conflicto pregonado también por marxistas y socialistas y en contravía de los cuerpos castrenses—, factor determinante que exige de entrada una realidad nueva a nivel global. El sistema ha entrado, pues, en crisis y al aparecer, irrumpe en escena invariablemente la revolución y se entiende el conflicto como un proceso liberador, como germen de vida (Boff, 1977).

La liberación y conflicto van siempre de la mano. Por eso la liberación deberá ser asumida en las diferentes etapas que el autor extractó del marxismo y socialismo: Al no ser aun propiamente libertad, sino más bien un medio para conseguirla, se gesta en un primer plano denominado como “conflicto”. Aparece en aquellos momentos en los que el proceso de independencia y autodeterminación parecen una tarea imposible frente a los abusos propios de la dependencia, de los regímenes totalitarios. Es así que los practicantes de la Teología de liberación se enfrentan a una paradoja o dilema: Dejarse absorber hacia un abismo del cual sea

más adelante casi imposible emerger, o asumir la protesta, lo contestatario; enarbolar las banderas de la revolución —que no riñen con las enseñanzas evangélicas— y subvertir el orden establecido. Vida, *conflicto* y liberación son una ecuación constante en todo sistema de vida. Por ello argumenta que “la existencia humana es siempre conflictiva, ya que tiene que conquistar continuamente su libertad en el esfuerzo por liberarse de unas dependencias y asumir otras. Pero pueden surgir situaciones donde el conflicto asume el carácter de paroxismo” (Boff, 1977, p. 116).

Cabe destacar que Gutiérrez proponía una praxis y una fe cristiana que asumiera los postulados propuestos por el socialismo en pro de un cambio social significativo, pese a ser catalogados erróneamente como “comunistas”. La conjunción de cristianismo asumiendo la construcción de una sociedad de tipo socialista, aseguraría la abolición de toda forma de explotación y conllevaría a la construcción de un nuevo hombre latinoamericano. Citando al sacerdote mexicano Sergio Méndez, una sociedad socialista es la única capaz de promover los valores cristianos de convivencia y fraternidad. No obstante, advierte que debe ser un socialismo democrático en el que se elimine la propiedad privada y se opte por la propiedad social de los medios de producción (Gutiérrez, 1972). Acto seguido, Gutiérrez justifica la instauración del socialismo y pone como ejemplo el caso chileno del gobierno de Salvador Allende, que fue promotor de una sociedad justa y equitativa y que promovió con solvencia valores cristianos como la fraternidad y la convivencia.

Más aún, a finales de los años 60, en sintonía con lo anterior, para algunos sectores de la Iglesia conceptos como “revolución” no eran términos prohibidos y no reñían con la praxis cristiana. Un destacado integrante de la conferencia episcopal llevada a cabo en Medellín, el Cardenal Landázuri, aseveraba que en medio de la agravante situación social, los creyentes

asumían un nuevo nivel de conciencia. Una nueva manera de actuar ante la realidad, entendida como una revolución social que se encontraba en curso y que encontraba legitimación en la comunidad católica latinoamericana (Landázuri, 1968).

Entonces el proceso de liberación se hace impostergable, debe asumirse como urgente para entrar de lleno en un periodo de *crisis*, que es inherente al desarrollo corriente y cotidiano de la vida, y que se presenta como la posibilidad de construir algo nuevo que modifique el contexto de opresión; es purificación, depuración del género humano que al querer salir de la crisis deberá ser partícipe de un nuevo *proyecto de liberación*, asumido cuando se transgrede, bajo una perspectiva ideológica, la dependencia. Por último, la sociedad entra en una etapa de *de-cisión* en la que la liberación se magnifica y materializa en actos concretos y palpables. Eso implica la autorrealización del hombre que discurre en un nuevo orden del mundo. El hombre está condenado a decidirse. Precisamente, esa decisión tiene que ser tomada resueltamente por los más pobres (marginados, obreros y campesinos) tal como atestiguaban los documentos conciliares de la época. Los oprimidos deben ser partícipes y los únicos responsables de su propia redención y liberación (Gutiérrez, 1972).

Este proceso se podría entender según la terminología utilizada por el teólogo, como proceso de *homogenización progresiva* en el que se retorna a la dignidad de ser hombre en clara concordancia con los preceptos divinos que propone el Evangelio. En ese proceso se es “hombre” de nuevo. América Latina inaugura un proceso de cambio que será replicado en todas las latitudes del mundo donde discurre el conflicto. Por consiguiente, el contexto propio de la liberación, y de su accionar teológico comprometido con el cambio social, es el cautiverio. Y su acción siempre implicará un cambio radical y contundente de la situación oprobiosa en la que se

encuentran los oprimidos, con la ayuda de ideas extractadas del marxismo y la participación de las ciencias sociales.

Boff entonces, propone una estructura metodológica y hermenéutica que divide en varias etapas para la consecución de la Teología de la Liberación. Primero exhorta a los fieles para que vivan una *experiencia espiritual ante los pobres* (Gutiérrez, 1972), y la cataloga como hija de la apabullante miseria en que se encuentran sumidos los pueblos latinoamericanos, que despertó la atención y el *amor* de un sector progresivo de la Iglesia y que se encuentra resuelta a ejercer una nueva teología de compromiso social que se expanda más allá de los monasterios y seminarios. Una nueva teología, a manera de ciencia, idónea para traducir “críticamente la racionalidad presente en la experiencia primigenia en términos de diagnóstico, de causalidad, de procesos y dinanismos estructurales, funcionamiento que allí se anuncia. La Teología de la liberación es un resultado y no una realidad primera” (Gutiérrez, 1972, p. 39).

Luego de esta disertación inicial en cuestiones hermenéuticas y metodológicas, Boff propone una *articulación sacramental*, expuesta como el descubrimiento por parte de comunidades cristianas pobres, compuestas de millones de personas, de la toma de conciencia para subvertir la situación y la oposición radical contra la sociedad dominante. Ese cambio de actitud se traduce en una nueva modalidad de asumir la fe, de interpretar los textos sagrados (Antiguo y Nuevo Testamento). Ese cambio de mentalidad se logra con el cumplimiento de cuatro pasos que fortalecen el papel de una teología comprometida con la sociedad. Un primer punto a tener en cuenta es el *horizonte de la fe cristiana* que convoca a un compromiso de amor y solidaridad con los más pobres tal como lo atestiguaba Jesucristo en los evangelios. Asimismo, los creyentes, autoridades religiosas, sacerdotes y laicos estarán capacitados para realizar una lectura de la realidad conflictiva y captar los símbolos latentes en el discurrir de la historia.

Pero no basta con eso: Los practicantes de la Teología de la liberación deberán ser portadores de una *reflexión intuitiva de fe sobre la realidad percibida*, es decir, la feligresía ante el problema social agudo, es consciente de que la pobreza y la miseria atentan contra la dignidad del hombre, ofende a Dios, lo cual constituye “pecado”.

Desde una perspectiva teológica, Gutiérrez (1972) asegura que la opresión y los atropellos cometidos contra los más pobres, es catalogada como una oprobiosa situación de pecado en la que salen a relucir desigualdades económicas, culturales, políticas y sociales. Dicho pecado que extiende cada vez más la brecha entre opulentos y empobrecidos, se constituye como un rechazo hacia Dios y al don de la paz que Jesucristo regaló a los hombres. Al ser intérpretes de la realidad, no se conformarán con reformas y acciones asistencialistas (tipo la Alianza para el Progreso de Kennedy), que no solucionan a plenitud la problemática.

El afán de asistencialismo y reformismo lleva en muchos casos a perpetuar el orden establecido, al crear falsos oasis, dando falsas impresiones y apariencias que aseguran que las crisis están superadas. Estos paliativos y paños húmedos se constituyen, a larga, en nuevos sistemas de explotación (Gutiérrez, 1972). Antes que pensar en medidas que vuelvan a los habitantes en mendigos, se debe comprender que los problemas nacen en medio de la estructura capitalista, sistema originario de la problemática de dependencia. Se exige entonces la transformación total del sistema.

Más allá del compromiso y de un cambio radical de actitud, el autor brasileño argumenta sobre la necesidad de incluir una articulación crítica. Por su parte, el religioso peruano expresa lo siguiente: “una reflexión crítica en y sobre la praxis histórica en confrontación con la palabra del Señor vivida y aceptada en la fe. Será una reflexión en y sobre la fe como praxis liberadora” (Gutiérrez, 1973, p. 244). En ese sentido, la nueva teología difiere de algunas posturas

eclesiásticas y de la teología tradicional que favorecen al *statu quo* y el bienestar de algunos de sus miembros alejados de las necesidades más apremiantes de la población. De esa manera, el teólogo es una ficha clave dentro de la Iglesia y la sociedad. El buen teólogo denuncia abiertamente los vejámenes del poder, las contradicciones propias del sistema capitalista y de consumo, los atropellos acaecidos en el sistema de dependencia que sume a los pueblos latinoamericanos en la miseria absoluta. Debe analizar la realidad social marcada por la violencia y la represión desde lo propuesto por el Evangelio (Gutiérrez, 1972).

Boff critica la teología tradicional con contundencia. La presenta incluso como abanderada del establecimiento, del *statu quo*, de los vejámenes, las torturas y el exilio desatado por los militares.

La teología elaborada a partir de ahí es fundamentalmente una teología del poder argumentativo y apologético, orientada antes a la búsqueda de la seguridad que a la de la verdad. Por eso se destaca por la claridad de las fórmulas, por su afán de ortodoxia, por el acabamiento perfecto de sus definiciones que se oponen al carácter opaco y enmarañado de la vida concreta (Gutiérrez, 1972, p. 63).

Debería ser una teología de servicio al pobre, a los más necesitados; que se diferencie de las posturas del clero tradicional que no se circunscribe solo al perímetro de una pequeña elite ilustrada. Pequeños grupúsculos aislados que favorecen el clericalismo, promueven un dogmatismo estéril, un positivismo doctrinario oficial que no permite el diálogo fraterno y abierto entre los diversos sectores de la Iglesia.

El teólogo se pregunta, y cuestiona de fondo la religión y sus instituciones: ¿Hasta qué punto la religión es opresora y liberadora? ¿Está al servicio de los opresores, de los violadores de Derechos Humanos? ¿Para tener el rótulo de liberadoras, la fe, la religión y la teología, necesitan

del concierto de teorías y ciencias externas a su radio de acción? Para responder estos cuestionamientos llega a una conclusión determinante: La fe no es liberadora en sí misma, necesita del concierto de otras disciplinas, de lo interdisciplinario para liberar y comprender una realidad inasible y permeada por muchas tendencias problemáticas. Necesita de la interpretación de otras ciencias sociales y del análisis marxista que también tiene por finalidad liberar al hombre.

Más aún, tal como se estudiará en el segundo capítulo de este trabajo, una figura predominante de la vida castrense y política brasilera de la segunda mitad del siglo XX, y que cumplió un papel destacado en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue Golbery Do Couto e Silva, destacado general, escritor y teórico de la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Desempeñó el cargo de Director del Servicio Nacional de Informaciones (SIN), organismo de inteligencia militar que aplicó técnicas de contrainsurgencia al estilo de la guerra argelina, característica habitual en la ejecución de la Doctrina de Seguridad Nacional. Asimismo, fue el autor de un reconocido libro que sentaría las bases del rol que desempeñaría Brasil como aliado de los Estados Unidos en la naciente Guerra Fría para contener la expansión del comunismo en Sudamérica. *Geopolítica de Brasil* fue determinante en ese proyecto geopolítico, que según el autor en cuestión, pretendía salvaguardar a la civilización occidental de los embates del comunismo internacional, orquestado desde la Unión Soviética. Cuestión que era compartida plenamente por una facción del ejército conocida como los Sorbonne. Cabe destacar también que Brasil ya había sido una fuerza importante para los aliados cuando combatieron a las fuerzas de Mussolini en campo italiano durante la Segunda Guerra Mundial.

Más aún, en la segunda parte de esta investigación, también es pertinente traer a colación brevemente, la manera cómo líderes populistas previos al Golpe de Estado de 1964 (Getulio

Vargas, Jânio da Silva Quadros, João Belchior Marques Goulart), gobernaron al país, aumentando el descontento en una parte de la población, incluidos importantes sectores de la Fuerzas Armadas, quienes consideraron necesaria su intervención en la política para eliminar todo intento de manipulación comunista. Comenzaría luego del Golpe de Estado, el primer gobierno militar bajo la batuta de Humberto de Alencar Castelo Branco. Una vez terminado su periodo de estadista, pronto saldrían a relucir notables diferencia, entre su administración, y la que lo sucedió en cabeza de Artur da Costa e Silva.

Capítulo 2 Doctrina de Seguridad Nacional en Brasil

Un abrebocas: Las tesis de Golbery Do Couto e Silva

El general Do Couto e Silva fue una de las figuras más predominantes de la política brasileña en la segunda mitad del siglo XX, como también lo fue dentro de las fuerzas armadas de su país en su condición de escritor, estratega militar y teórico de la Escuela Superior de Guerra del Brasil. En 1964, luego del golpe militar, fue nombrado por el presidente Humberto Castelo Branco como Director del Servicio Nacional de Informaciones (SIN) que tenía la misión de liderar políticas contrainsurgentes en todo el territorio nacional. El 15 de marzo de 1974 se desempeñó como jefe del Gabinete Civil del presidente Geisel (Do Couto, 1978). Fue un hombre influyente en la política de su país. Cabe destacar que el Servicio Nacional de Informaciones después de su gestión, logró tener un poder descomunal y se volvió casi en un gobierno paralelo al régimen militar en materia de vigilancia e inteligencia (Roett, 2010).

Su obra cumbre —escrita en 1959, cinco años antes del golpe militar—, se conoció en los círculos intelectuales, académicos y castrenses con el título de *Geopolítica del Brasil*. Fue un libro clave para comprender y estudiar el lugar ocupado por ese país en el orden mundial, que se gestó en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por una naciente Guerra Fría. Fue también el texto de estudio y guía (si se quiere una Biblia) para un considerable sector de las fuerzas armadas brasileras, fundadoras de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, en lo referente a la posición geopolítica del país en los tiempos de la disuasión nuclear, las amenazas comunistas externas y la alianza que se confeccionó entre brasileros y estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial y parte de la Guerra Fría.

El libro está compuesto por una serie de ensayos que abarcan temas diversos: La construcción de un destino manifiesto que entronizara a Brasil como la potencia más importante del espectro sudamericano, la abundancia en recursos naturales, un llamado vehemente a derrotar los grupos subversivos de izquierda que alteran el orden público y una alianza estratégica y militar con las fuerzas armadas y el gobierno de los Estados Unidos para salvaguardar la seguridad del hemisferio occidental ante la amenaza comunista proyectada desde el Kremlin en la Unión Soviética. El libro también permite estudiar el pensamiento de un grupo influyente de las Fuerzas Armadas Brasileñas conocido como los Sorbonne, que fueron la base para la creación de la Escuela Superior de Guerra del Brasil y que no ocultaban sus afinidades con el ejército de los Estados Unidos.

A leer sus reflexiones sobre este particular, el autor no esconde sus simpatías y admiración por el desarrollo alcanzado en dos siglos en materia militar, política y democrática por la superpotencia del norte.

Precisamente, Golbery do Couto e Silva tuvo su pasado de gloria bajo la tutela de las fuerzas armadas estadounidenses. En 1944, fue designado para estudiar un curso de perfeccionamiento en el ejército de los Estados Unidos. Luego fue trasladado a la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB) que desarrollaba operaciones de guerra en suelo italiano, entonces bajo el yugo de Mussolini, contingente militar que hacía parte del V Ejército Norteamericano (Do Couto, 1978). Dicho contingente militar se denominó como la División de Combate Brasileña cuyo objetivo era diezmar los contingentes nazis y fascistas apostados en Italia. Menciona Alfred Stepan que los oficiales brasileños, entre ellos Golbery Do Couto e Silva, que participaron junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, “se sintieron

impresionados por la capacidad de organización de Estados Unidos, en contraste con el debilitamiento de la Italia fascista” (Stepan, 1970, p. 109).

Sus vínculos no se reducen a lo estrictamente militar. El general también fue un reconocido líder comercial de multinacionales norteamericanas, cuando fue nombrado director de *The Dow Chemical*, importante empresa del sector petroquímico de los Estados Unidos. Bajo su asesoría en Brasil la filial norteamericana se convirtió con rapidez en líder en el comercio y fabricación de cloro y soda. Tiempo después, Do Couto fue designado presidente para toda Latinoamérica de dicha compañía (Do Couto, 1978).

Más aún, *Geopolítica del Brasil* es hija de su tiempo, del ámbito de la bipolaridad creciente y en ascenso que se dio en el periodo de la posguerra. Antes de entrar a estudiar el papel que debería ejercer Brasil en defensa de Occidente ante la amenaza comunista, el autor desentraña y estudia el orden mundial de la Guerra Fría en los años 50 y 60. La década de los 50, es observada por Golbery Couto e Silva, detalla como un periodo de “guerra fría en aumento y una bipolarización rígida del poder en el campo internacional” (Do Couto, 1978, p. 10), que llega a los 60, la década del golpe militar en Brasil, a una nueva etapa caracterizada bajo su óptica por:

Una guerra fría en declinación y un policentrismo que se ha venido afirmando tanto en Occidente, con la postura de De Gaulle y su ideal de *Europe des Patries*, como en el Oriente comunista, donde se esbozan los primeros síntomas de una desatización del este europeo, con Rumania a la vanguardia y se agudiza, desde el 61, la divergencia entre la Unión Soviética y China (Do Couto, 1978, p. 10).

En su opinión, dichas disputas de poder llevarían a un duro revés para el comunismo, a resquebrajarlo, a desvirtuar los esfuerzos de cooperación mutua entre Moscú y Pekín. La situación también cambia por el declarado “neutralismo” de algunas naciones que quieren quedar

al margen de la bipolaridad. Los años 60 están fuertemente marcados por la disuasión nuclear, según el análisis del autor brasileiro en el inicio de su texto. Dicha proliferación será determinante en toda estrategia de fuerza emprendida por las dos superpotencias, luego de la crisis de los misiles en 1962. En ese sentido, en la década de los 60, la bipolaridad se va debilitando, pero se deja sin piso cualquier intento de multipolaridad: La China comunista de Mao Tse Tung no logra alcanzar el nivel de una gran potencia continental. Lo obvio, aunque suena a una perogrullada, es que cuando Golbery Do Couto e Silva escriba sus ideas con su pluma, el ambiente se encontrará enrarecido por una lucha frontal entre Occidente en cabeza de los Estados Unidos (Brasil es su aliado sudamericano más importante) frente al Oriente comunista liderado por las fuerzas del Kremlin.

Las ideas geopolíticas y de configuración del orden mundial expuestas por Golbery Couto e Silva eran evidentemente hobbesianas: un ambiente permanente de zozobra, miedo, terror, de constante inseguridad que entra de lleno en las comunidades. Para contrarrestar ese estado de perenne amenaza, los ciudadanos deberán ser regidos por gobiernos fuertes —leviatanes— que aminoren todo síntoma de inseguridad. El estratega brasileño asegura que la inseguridad del hombre contemporáneo es mayor que la experimentada en siglos pasados. Bajo esa lógica hobbesiana, la inseguridad es una enfermedad que eternamente afligirá al género humano que hace parte de una sociedad compleja, contradictoria, algunas veces solidaria, que se debate en medio de la consecución de la libertad en nombre de la seguridad individual y colectiva. Por consiguiente, según su criterio, la humanidad atemorizada sufre en plena Guerra Fría al vaivén de los regímenes totalitarios, tanto de la izquierda como de la derecha, a la par que surge un nuevo Estado Universal —un Superleviatán— que podrá gobernar con mano dura ante una amenaza de inseguridad que aumenta mucho más con el paso del tiempo (Do Couto, 1978).

El autor sustenta que la inseguridad actual en un nivel interno (dentro de cada nación) y la anarquía del orden internacional (inseguridad de unos Estados frente a otros), la implementación de un estado de guerra permanente, ya sea guerra subversiva, civil o internacional.

[Do Couto sostenía que era una constante en un mundo bipolar y] explican, por sí mismos, esa ansiedad neurótica con que los individuos —desamparados—, las multitudes —en pánico—, los pueblos —desilusionados y afligidos—, la humanidad, finalmente, se yergue y se lamenta y se debate, decidida a esclavizarse por cualquier señor y cualquier tiranía, a condición de que le ofrezcan, en un plato de lentejas, un poco de seguridad y de paz (Do Couto, 1978, p. 15).

En sintonía con los teóricos de la Doctrina de Seguridad Nacional, Golbery Do Couto e Silva considera que la guerra es total, permanente, inevitable; es una confrontación que cobija a todos los hombres, de todas las condiciones sociales, de todas las profesiones. En ese estado de confrontación extendida y desmedida, se tiene el deber de defender la libertad, condición inviolable de la naturaleza humana y de los pueblos, ante posibles amenazas externas.

Más aún, en medio de la “guerra total”, los Estados-naciones, como el brasilero, deberán esbozar objetivos nacionales estrechamente vinculados con la geopolítica (en ella participan la sociedad civil, El Estado, la Nación) entre los que sobresalen la supervivencia en el tiempo y el espacio, el óptimo desarrollo económico y social —factor vital para el régimen militar que gobernó a Brasil entre 1964 y 1985—, y la independencia frente a otros Estados.

Por eso, la estancación, la inmovilidad y la inacción suponen, para un Estado, la muerte misma. Suponen una derrota total para un Estado en gestación como el brasilero. No obstante, dichos objetivos —ideados por Estados egoístas y que hacen parte de un sistema anárquico— pasarán a ser secundarios según las circunstancias que lo ameriten. Son objetivos perseguidos

cuando el territorio está bajo la amenaza de una agresión externa, de la conquista de territorios ajenos, cuando se trata de salvaguardar territorio, cuando se conquistan esferas económicas en determinadas regiones, cuando se trata de dominar en el ámbito político, económico y también militar (Do Couto, 1978). Entonces en ese entramado geopolítico, entran en juego las gestiones diplomáticas. Sin embargo, tal como lo expone el catedrático de la Escuela Superior de Guerra del Brasil:

En el caso de que fallen la prudencia y la astucia diplomáticas y sean realmente vitales los intereses en juego, imponiendo sacrificios de una y de otra parte, la guerra vendrá, finalmente, para solucionar, a su modo, el conflicto fatal. *Cedat toga armis*, al revés de la célebre proposición formulada por Cicerón (Do Couto, 1978, p. 18).

Cuando fracasa la diplomacia, aparece de manera inevitable la guerra. Esto mismo lo expuso Henry Kissinger en su libro *Diplomacia*.

La guerra total acaecida en la Guerra Fría posee ciertos agravantes: proliferación de armas novedosas de índole nuclear que se producen en los laboratorios de las dos superpotencias antagónicas (los misiles teledirigidos, las bombas atómicas, las bombas de cobalto e hidrogeno, los satélites localizados en la estratósfera, la guerra de guerrillas, la lucha contrainsurgencia propia de la Doctrina de Seguridad Nacional). Factores que desencadenarán en una confrontación, en una era total de aniquilación sin precedentes (Do Couto, 1978). Eran los tiempos previos a la crisis de los misiles de 1962, del terror atómico, de la disuasión nuclear tan característica de la Guerra Fría. Un contexto marcado por un antagonismo creciente y singular entre las dos superpotencias (entre Occidente y Oriente), con numerosas crisis y agravantes que fueron dejando millares de muertos —aún no sucedía Vietnam pero estaban frescos los acontecimientos bélicos de Corea—, la subversión armada que proliferó en diversas latitudes del

mundo. En la Guerra Fría, la Doctrina de Seguridad Nacional en suelo brasileiro, separó la política de la estrategia y obligó tanto a militares como a los diplomáticos a considerar que en tiempos de paz y guerra, las relaciones internacionales están sujetas, pese a los antagonismos propios de un sistema anárquico, a las mismas acciones que impulsan a la consolidación de los objetivos nacionales (Do Couto, 1978). En un contexto tradicional, la guerra sería entendida como el uso de la violencia organizada en pro de la estrategia y de la política nacional. En su opinión, la Guerra Fría, en sentido estricto de semántica, no es guerra como tal, entonces “el empleo analógico del término es, sin duda, más pernicioso que útil” (Do Couto, 1978, p. 157).

Existen genios y pensadores del quehacer político, geopolítico y de las relaciones internacionales que se adelantan providencialmente por medio de su genio y su tacto a lo que sucederá en los tiempos venideros. Alexis de Tocqueville, en pleno siglo XIX predijo la tan mencionada Guerra Fría. Decía por ese entonces el gran pensador francés que:

Hay, en los días que corren, dos grandes naciones en el mundo que, partiendo de distintos puntos, parecen tender a un mismo fin. Nos referimos a los rusos y a los norteamericanos. Ambos crecieron sin que fueran percibidos, y mientras la atención de la humanidad se concentraba en otros lugares, súbitamente se pusieron al frente de las naciones y el mundo supo de su existencia y de su grandeza casi al mismo tiempo. Sus puntos de partida son diferentes y sus trayectorias no son las mismas; sin embargo, cada uno de ellos parece destinado, por la voluntad de los cielos, a controlar los destinos de toda una mitad del universo (de Tocqueville citado por Do Couto, 1978, p. 176).

Para hacerle frente a la guerra y salir victorioso, Brasil como Estado-nación deberá acoger la integración y la sumatoria de fuerzas de los medios políticos, económicos, psicosociales y

militares que tenga a su alcance. Ese esfuerzo conjunto es definido por el autor como el “poder nacional”. La guerra concebida de esta forma va en concordancia con los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional al considerar que es necesario intervenir en todos los campos y ámbitos de la sociedad.

En el contexto de bipolaridad en cuestión, la ya citada “guerra total” propuesta por Ludendorff y ampliamente estudiada por los promotores de la Doctrina de Seguridad Nacional, es ampliada por Golbery Do Couto e Silva no solo al espacio territorial de los Estados que participan en la confrontación, sino también al orbe económico, cultural, político y militar de las naciones que se encuentran enfrascadas en medio del conflicto. “La guerra total” comprendida por los teóricos de la Doctrina como una lucha para arrasar de tajo al enemigo, tenía como objetivo declarar a sus promotores victoriosos, objetivo en el que se confundían los miembros de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil, con las mismas funciones, deberes y responsabilidades (Do Couto, 1978). Dicho dilema, al interpretar las ideas propuestas en *Geopolítica del Brasil*, violaría las libertades y derechos ciudadanos que ampara y protege un Estado Social de Derecho o en su defecto, que dicen proteger y salvaguardar el Estado, poderoso “Leviatán” que protege a sus súbditos.

Esa “guerra total” bajo la lógica de la Guerra Fría involucra regiones, continentes, disputas y conflictos internacionales; incluye también etapas de preguerra y posguerra, abarca a la guerra misma en todas sus manifestaciones. Antes era una confrontación estrictamente militar, luego se incubó una “guerra total” que sufrió una metamorfosis para inundar con sus tentáculos —pues es una guerra global— a todo el planeta. Una disputa de grandes proporciones que afecta todos los aspectos de la vida y la naturaleza humana: En lo psicológico, financiero, económico, político, religioso; es una guerra entre ejércitos, guerrillas, flotas y fuerzas aéreas. Los promotores de

dicha guerra permanente y secular, utilizan de manera maquiavélica, todos los instrumentos que tengan a su disposición para declararse victoriosos y amos del mundo. La victoria conllevará a la obtención de los “objetivos nacionales” de los vencedores y las demandas de los pueblos y comunidades que representan (Do Couto, 1978). Sobre ese contexto apocalíptico en el que Brasil se encontraba inmerso, el escritor brasileño diría:

La guerra blanca de Hitler o la *guerra fría* de Stalin sustituyeron a la paz y, en realidad, no se sabe ya distinguir dónde termina la paz y comienza la guerra —otra evidencia más, y ésta, bajo todos los ángulos funesta, de la confusión general de valores en que podría zozobrar la civilización del mundo occidental— (Do Couto, 1978, p. 28).

Los contendores de esta contienda internacional se valen de todo tipo de tácticas, estrategias y armas que van desde los acuerdos, pactos y tratados, propaganda ideológica, el terror nuclear, sanciones, bloqueos económicos, préstamos de capital, inversión extranjera, las negociaciones diplomáticas, las intervenciones y presiones en otros Estados, hasta las alianzas estratégicas con naciones afines en su filosofía y políticas, entre otros (Do Couto, 1978).

Por otro lado, el “poder nacional” mencionado por el autor, deberá actuar no sólo en los momentos de confrontación: También debe implementarse en tiempos de paz y sosiego, en los episodios propios que caracterizan las gestiones diplomáticas. Dicho poder puede renovarse, ampliarse, ante la eventualidad de una guerra cuando se materializa el poder militar en escena bajo la conducción de las Fuerzas Armadas del país; no obstante, pueden haber casos en los que el “poder nacional” se torne débil y entonces la nación y el Estado deberán tener como meta, como proyecto nacional, su fortalecimiento (Do Couto, 1978).

En ese sentido, la Seguridad Nacional es un aspecto que no se puede desdeñar en ninguna política estatal y es parte sustancial del “poder nacional”. Curiosamente se puede oponer a los parámetros de desarrollo y afectar el bienestar y la economía, pero es determinante en la consecución de la guerra total que Brasil libraba en la Guerra Fría. Dice Golbery Do Couto e Silva que “es el origen de un nuevo dilema —el del Bienestar y de la Seguridad— señalado por Goering, en las décadas pasadas, bajo la forma menos justa pero altamente sugestiva de su conocido slogan: más cañones, menos manteca” (Do Couto, 1978, p. 19). Asegura que no existe ningún método para evadir el sacrificio de la seguridad cuando se encuentra amenazada por el bienestar. Cuando una nación y un Estado desdeñan esa ecuación, su derrota es inminente y segura. Lo anterior, no significa que el Estado se debe desentender del bienestar de sus conciudadanos; debe garantizarlo porque si se reduce significativamente dicho rubro, se va en detrimento de la seguridad misma. Por consiguiente, garantizar seguridad y desarrollo, consiste en una de las premisas fundamentales para los militares desarrollistas latinoamericanos — incluidos los integrantes de la Escuela Superior de Guerra del Brasil— que se educaron en los centros de entrenamiento estadounidense bajo el radio de acción de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Cabe destacar que el autor brasileiro en cuestión es un realista político por naturaleza. En medio de la angustia patente desatada por la anarquía del orden internacional y ante la amenaza arrolladora de la guerra permanente, algunos teóricos idealistas —opina el estratega militar brasileiro— disertan sobre una utópica paz mundial que cuente con el soporte de la justicia internacional, en la libre determinación de las naciones; una armonía internacional respetada y acatada por todos los Estados.

Golbery considera que el anterior postulado es una cuestión moral pero inviable y poco traducible en el plano real, en el mundo de la *real politik*. La no utilización de la guerra como acto o instrumento de la política, es una de las ingenuidades más grandes que ha conocido la historia de las relaciones internacionales, tal como se evidenció en 1928 con la firma del Pacto de *Briand-Kellog*, en el que las 14 naciones más poderosas del orden internacional de ese entonces, a excepción de la India que también hizo parte del proceso, junto a otros cincuenta y siete países, renunciaron a toda acción de fuerza, a condenar todo tipo de actividades bélicas o de agresión para solucionar controversias internacionales.

Ahora bien, la Segunda Guerra Mundial dejaría sin peso la suscripción de dicho tratado. Organismos como la ya fallecida Liga de las Naciones fueron concebidos sin ningún tipo de viabilidad y se fueron marchitando con el tiempo por obvias razones (Do Couto, 1978).

Siguiendo este orden de ideas, inclusive organismos transnacionales como las Naciones Unidas (ONU) han sido exitosos para la gestión cultural entre las naciones y para prestar asistencia técnica, pero han sido incapaces —la realidad lo confirma— de evitar conflictos entre naciones antagónicas, con visiones y concepciones del mundo disímiles, en algunos casos, irreconciliables, tal como se presentó en el conflicto bipolar de la Guerra Fría (Do Couto, 1978).

A lo largo de su obra cumbre, Golbery Do Couto e Silva no anda con rodeos frente al comunismo que consideraba una amenaza para los intereses de Brasil, fiel integrante y defensor del hemisferio y la cultura occidental cristiana. Lo considera también una doctrina nociva, de ambigüedades filosóficas, sin proyección en la praxis. Asegura que como filosofía (la del materialismo marxista) es una consecuencia nefasta del idealismo hegeliano, que solo conserva de éste la permutación del mundo por medio de los aires revolucionarios (esa es su dialéctica) que choca de manera contradictoria con una utopía estática, inactiva, muerta dialécticamente:

Una sociedad futura sin clases, sin ambiciones, estática, una comunidad imposible de concebir en la faz de la tierra (Do Couto, 1978).

En ese sentido, el autor brasilero cuestiona el comunismo, ya que propaga por medio de métodos violentos (la combinación de todas las formas de lucha) un nacionalismo que dice negar de manera cínica su lógica de intervención (un comunismo internacional) en todos los países del orden internacional, característica propia de una dialéctica amañada y flexible, conducida y orquestada por un partido único que siembra el terror y el totalitarismo en la vieja Rusia. Un único partido que bajo métodos fraudulentos dice proteger al proletariado, clase destinada a dirigir todos los asuntos del nacionalismo. Dichas acciones fraudulentas se realizan a través de

Identificaciones totalmente ilegítimas, se realiza la doble mistificación comunista que sería simplemente ridícula si no demostrara ser, en realidad, peligrosa y trágica. Ni la denuncia candente de Djillas, desde su calabozo, sobre la usurpación por la nueva clase, ni la evidencia del destino colonial de los países satélites bajo la brutal opresión del nuevo imperialismo moscovita permiten, sin embargo, alimentar cualquier tipo de duda (Do Couto, 1978, p. 101).

Por consiguiente, el nacionalismo comunista motiva entre sus adeptos, y en aquellos que conquista por las vías de hecho y de la fuerza, la admiración, la adulación, el endiosamiento, la subyugación a todas las políticas impartidas desde Moscú. Directrices que fomentan el odio entre las naciones, el desprecio a la democracia y alientan al ataque de las democracias patentes en los países del hemisferio occidental; directrices que esconden finalidades abyectas y oscuras que poco tienen que ver con el respeto de la soberanía y la supuesta grandeza y prosperidad que desean edificar en sociedades en las que no haya lucha de clases (Do Couto, 1978).

En su perspectiva particular para abordar las relaciones internacionales, los sistemas utópicos que promueven una paz internacional idealista, han proliferado a lo largo de la historia, incapaces de prevenir guerras y confrontaciones. Por eso, Golbery es un abanderado de las tesis realistas en el juego de las relaciones internacionales; las considera más aptas y apropiadas para analizar la realidad hobbesiana que cobija las relaciones entre los Estados (Do Couto, 1978).

En ese contexto de “guerra total”, de Guerra Fría, solo las dos superpotencias (Unión Soviética y los Estados Unidos de América), son portadoras de autosuficiencia económica y militar en tiempos de paz y de guerra, son capaces de estar exentas de cualquier imposición externa. Tanto soviéticos como estadounidenses tuvieron la sagacidad para valorar, geopolíticamente hablando, el potencial de su territorio, población y recursos naturales. Es a su vez un periodo, donde los avances tecnológicos están a la orden del día; un tiempo en el que el modelo político más extendido en el mundo es el sistema de Estados-naciones, y donde las confrontaciones bélicas están presentes en todos aspectos de la vida humana (político, social, religioso, económico, militar, etc.) por lo cual, se encuadra plenamente en una “guerra total” que muta en una “guerra global”: Se vive tanto en el territorio de las superpotencias como en el de sus respectivos aliados, puesto que hay un mayor alcance de la agresión porque se cuenta con la tecnología necesaria para causar terror y disuasión en cualquier latitud del mundo. Sin embargo, dicha guerra total y global alcanza su punto máximo de violencia y por tanto, el ámbito militar es el que más relevancia tiene (Do Couto, 1978).

De esa manera, Do Couto profetizará que la Guerra Fría en los inicios de los años 60 y en la siguiente década, se caracterizará por la disuasión nuclear, la consecución de guerras limitadas o geográficamente localizadas, tal como sucedió en Centroamérica o en Vietnam bajo la amenaza de misiles teledirigidos, que someterán a todos los contrincantes a una destrucción

desmesurada, total y de grandes proporciones. Dichos conflictos localizados, en algunos casos de manera errónea, llevarán a que algunos líderes políticos consideraran que lo militar no será lo más preponderante. Como ya se ha analizado, en la Doctrina de Seguridad Nacional, también entran en juego otros terrenos importantes de la vida humana: No obstante, la no intervención del estamento militar puede traer consecuencias negativas y se correrían riesgos al no tener la capacidad militar para controlar la violencia (Do Couto, 1978). Lo que sucede es que en esas formas de guerra atenuadas, el ámbito militar es el más importante. El autor sostiene que “el concepto de guerra total es, en el fondo, un verdadero concepto límite” (Do Couto, 1978, p.157). . Por tanto, dicha política de seguridad debería contar con una metodología de planificación soterrada a la realidad y basada en los Objetivos Nacionales Permanentes de Brasil; estar sujetos a una adaptación continua de fines y medios y “adoptar el método de las aproximaciones sucesivas” (Do Couto, 1978, p. 157).

La Doctrina de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional y la planificación tienen la finalidad de ser en esencia de carácter continental (he ahí la importancia de crear un bloque continental de defensa frente al comunismo). Se clasifica entonces una estrategia de planificación interna (combatir a los insurgentes en territorio brasileiro) y otra de carácter externo en conjunción con los Estados Unidos de América y demás naciones latinoamericanas. En ese contexto, el autor de *Geopolítica del Brasil*, invita a una estrategia de coaliciones de Estados y de organismos regionales de seguridad colectiva, anclada en objetivos comunes que permitan salvaguardar las fronteras y las soberanías amenazadas. Los integrantes de la coalición de defensa pueden actuar de manera voluntaria o bajo coacción ejercida sutilmente por los más poderosos (Do Couto, 1978).

Los países en vía de desarrollo y subdesarrollados deberán reconocer esta realidad: Estudiar el contexto de la Guerra Fría; comprender el camino trazado en la historia de las dos superpotencias que los llevó a ser los amos y señores del mundo. Deberán acogerla en aras de planificar de manera acertada su visión de país, para aplicar sus proyectos geopolíticos, para sustentar la planificación de sus objetivos nacionales y construir la Seguridad Nacional; las naciones en vía de desarrollo deben aprender el camino tomado por las dos superpotencias para encumbrarse en el lugar hegemónico ocupado en el periodo de la posguerra: Nunca dejarse engañar por las posiciones aislacionista —irreales en el plano real— y abandonar la guerra y la coacción como instrumento político (Do Couto, 1978).

En cada momento histórico que ha vivido el género humano, con la aparición de un nuevo orden mundial, la humanidad siempre se ha debatido en medio de poderes hegemónicos y antagónicos, por potencias —también por coaliciones de países— que imponen los parámetros de conducta y las condiciones al resto de naciones diseminadas en la faz de la tierra que componen el sistema de Estados-nacionales. Por tanto, el autor brasileño sostiene que:

Ninguna estrategia nacional será valedera si no trata de encuadrarse en una perspectiva objetiva de la coyuntura mundial, que sólo podrá ser suministrada por el análisis estratégico del antagonismo dominante del momento. Para trazar su estrategia, un Estado cualquiera, por más débil que sea, necesita mirar el mundo a lo largo, en su totalidad global, y no sólo discernir ahí las tensiones dominantes que lo agitan, sino captarles la intensidad, sentirles la evolución y preverles el desenlace. No hará una buena estrategia el Estado que no disponga, en esta época, de un sismógrafo estratégico de la mayor sensibilidad (Do Couto, 1978, p. 158).

En otra instancia, para Do Couto, la geopolítica en Brasil debería ser un verdadero arte supeditado y subordinado a la Seguridad Nacional. Se vale de las bondades y visiones que ofrece la geografía en cuanto a su posición y localización, en cuanto a aquellos espacios en los que habitan comunidades y que son regidos por las políticas del Estado (tributos, leyes, decretos). La geografía, por tanto, es netamente política y la geopolítica es una genial proyección de las naciones a futuro (Do Couto, 1978).

¿Qué relación tiene la geopolítica con la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada en Brasil? El autor brasileño propone un matrimonio indisoluble entre Seguridad Nacional y Geopolítica. Inclusive es partidario de comprender la geopolítica brasilera como la planificación sesuda y estudiada de la política de seguridad del Estado brasileño en relación a su geografía, a los valores que se desprenden de ésta. Es importante en su opinión considerar a la geopolítica como consecuencia de las condiciones geográficas del país (Do Couto, 1978).

Precisamente, la Seguridad Nacional es parte sustancial de la política estatal brasilera y ocupa un lugar privilegiado en la planificación del ámbito económico, social, político y de índole militar tanto en los periodos de calma y paz como en los tiempos de guerra o cuando la seguridad de la nación se encuentra bajo amenaza (Do Couto, 1978).

De esa manera, la geopolítica inmiscuida en un ambiente de “guerra total”, utilizando como arma la Doctrina de Seguridad Nacional, se convierte en un programa de estrategia política de proyección global. No obstante, asevera el profesor de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, que la geopolítica (o la geoestrategia) nunca podrá suprimir a la Estrategia que debe ser combinada con esfuerzos económicos y militares; debe ser integrada de manera exitosa junto a estos aspectos y configurar en su conjunto la política de Seguridad Nacional que protegerá a la nación, el Estado y el territorio de posibles agresiones externas (en este caso del comunismo).

En ese orden de ideas, la geopolítica brasilera —con la aplicación y el amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional— deberá ser construida en aras de tener una presencia notable en el ámbito internacional, en el entramado de las relaciones internacionales, de cooperación activa con aquellos países con los que hay afinidades e intereses comunes; también entre poderosos y débiles, entre aquellos que se sientan temerosos e inquietos por los mismos tipos de amenaza a sus soberanías y territorios (Do Couto, 1978).

Por consiguiente, la Doctrina de Seguridad Nacional será conducida bajo un Concepto Estratégico Fundamental, esbozado por las fuerzas armadas del país por medio de directrices claras y expresas. Más aún, la geopolítica desplegada en Brasil, sólo podría ser plausible en la realidad, siempre y cuando esté encuadrada en unos “objetivos permanentes” que pongan de manifiesto las aspiraciones de la Conciencia Nacional, concepto último que queda poco claro en la obra de Golbery Do Couto e Silva. La geopolítica brasilera se materializa gracias una Doctrina de Seguridad Nacional legítima y amparada por el Estado; aplicada e idónea para implementarse en cualquier territorio, paralelo y meridiano (Do Couto, 1978).

Esa política de Seguridad Nacional, la geopolítica propuesta por el autor brasilero, no debe ir al margen de lo que propone el gobierno y las fuerzas armadas de los Estados Unidos, líder y principal protector del hemisferio occidental ante los ataques provenientes del espectro comunista en oriente. El autor admiraba a los estadounidenses, tanto que era un gran conocedor de su historia nacional. Por eso, consideraba que los demás países occidentales deberían estudiar a profundidad el esfuerzo emprendido por los estadounidenses para edificarse como superpotencia, por eliminar un nefasto aislacionismo que no les permitiera crear un poderoso proyecto geopolítico con peso en el orden mundial de la época (Do Couto, 1978). Por ello, pone como ejemplo la influencia geopolítica estadounidense en el Caribe y en las Antillas desde

finales del siglo XIX, que tanto preocupó a los líderes, escritores y caudillos latinoamericanos del momento.

En ese sentido, Do Couto (1978), asevera que:

Es justo reconocer que los imperativos de seguridad y los de su gigantismo económico llevaron a los Estados Unidos de América, al principio con temor, pero ahora resueltamente, a salir de su tradicional aislacionismo y a proyectarse más allá del mar, en Europa y en Asia, según una estrategia de los espacios periféricos, tan bien formulada por Spykman (p. 54).

Surge entonces en ese contexto la conocida Doctrina Monroe: Se gesta en un ambiente en el que los ímpetus estadounidenses se afianzan cuando los poderes occidentales europeos empezaban a entrar en decadencia; es la Doctrina en cuestión, un entramado geopolítico de dominio aunque sus promotores no lo reconocieran de esa manera, porque fue presentada a la opinión pública del momento como una doctrina multilateral de seguridad interamericana, que motivaba una política de buena vecindad, de la unión y la armonía continental (planes opuestos para una nación que quiere convertirse en una verdadera potencia), que le asegurara tranquilidad por el momento; en contraposición de iniciativas tipo *big steak*, defensoras del intervencionismo, propiciadoras de invasiones y violaciones de las soberanías de Estados vecinos (Do Couto, 1978).

Pues bien, los líderes estadounidenses de la unión americana en el norte, se preocuparon por construir las bases para edificar una nación fuerte en cuanto a sistema político, cómoda en su radio de acción geopolítico (la guerra contra España para liberar a Cuba lo demuestra) para navegar con habilidad como pez en el agua. Esos vestigios de grandeza y superioridad se pueden detallar desde entonces. Como es de suponer, y como sucede con toda nación que se edifica

como potencia —el caso de Inglaterra de la época victoriana es una muestra evidente—, los Estados Unidos logran primero consolidar un connotado poder insular, luego alcanzan con creces un poder descomunal traducido en una presencia permanente en todas las zonas marítimas del Planeta Tierra, acciones arriesgadas que pusieron la balanza a su favor, que reconfiguraron su política de Seguridad Nacional (Do Couto, 1978). Por eso, es posible inferir al analizar lo anterior, que el aislacionismo no es digno para un país que quiera asumir el rol de superpotencia.

El aislacionismo —irreal y utópico en el juego de las relaciones internacionales—, engañadora tesis que propone una coexistencia pacífica sólo presente en la literatura, en las “utopías” tipo Tomás Moro, no lleva a un estímulo de desarrollo tal y como sucede cuando hay una relación fraterna, competitiva, antagónica o de intereses similares entre las naciones. El aislacionismo y la paz internacional, son conceptos utópicos sin anclaje en la realidad y sin peso en el futuro de las relaciones interestatales: A finales de los 50 cuando Golbery Do Couto e Silva escribió su obra cumbre, detallaba “zonas de roce” con conflictos históricos que se agudizarían con el desarrollo de la Guerra Fría. Las regiones apartadas están integradas en un mundo en el que las nuevas tecnologías y comunicaciones acortaban las distancias. Por eso el aislacionismo no es la clave de éxito para erigir potencias. Alrededor de este tema, el autor brasileiro sostiene que:

Nada es más instructivo que el ejemplo ofrecido por la evolución histórica más reciente de Estados Unidos, tradicionalmente aferrado a los justos consejos de Washington sobre el peligro de las complicaciones europeas y finalmente inmerso en la actualidad, después de renovadas tentativas de un real aislacionismo, insostenible por sí mismo, en toda la extensión del planeta, desde el Ártico al Índico, de Alaska al

Medio Oriente y al Sudeste Asiático, en la más activa y vital confrontación de intereses, de ideologías y de técnicas avanzadas de guerra (Do Couto, 1978, p. 176).

No obstante, la era nuclear, el periodo de Guerra Fría supuso nuevos retos para los estadounidenses con sus vecinos: Consideraban a América Latina un territorio de ultramar, remoto, que merecería toda su atención ante las tentativas de ataques del comunismo proveniente de la Unión Soviética (Do Couto, 1978).

Entonces Golbery Do Couto e Silva recurre a los argumentos de reputados intelectuales estadounidenses para sustentar su tesis de las relaciones internacionales y geopolíticas entre estadounidenses, latinoamericanos y sobretodo brasileros.

Se vale entonces de las palabras del reconocido escritor, periodista y Premio Pulitzer Walter Lippman, cuando estudió una posible alianza marítima entre Brasil y los Estados Unidos de América —pues no eran aún los tiempos de lucha contra el comunismo; los enemigos eran Hitler, Mussolini y sus aliados— en aras de construir una Comunidad Atlántica cuando la guerra estaba al rojo vivo en 1943:

En el Atlántico Sur es esencial el mantenimiento de fuertes bases marítimas y aéreas en la proyección oriental de Brasil. Esas bases no pueden ser mantenidas exclusivamente por Brasil, porque ese país no es un arsenal. Por lo tanto, los brasileños tienen que ser apoyados por los Estados Unidos. Como no hay comunicaciones terrestres con Brasil, la defensa estratégica de todo el continente sudamericano del lado del Atlántico depende de las comunicaciones marítimas (Do Couto, 1978, p. 54).

Ante un eventual ataque frontal del comunismo propiciado por la Unión Soviética, Sudamérica debería estar preparada en un bloque sólido, capaz de repeler todo tipo de

provocación interna y externa. Prepararse para evitar golpes certeros del comunismo en el continente. Prepararse es el norte; evitar a toda costa un ataque porque, de suceder, los países latinoamericanos se verían obligados penosamente a pedir ayuda a los Estados Unidos de América. Era mejor prevenir que lamentar. Golbery Do Couto e Silva sobre lo anterior sustentaba que:

América del Sur necesita precaverse y prepararse desde ya, para que, en el caso de que ocurra, no nos veamos en la contingencia humillante y llena de incalculables riesgos de recurrir a fuerzas ajenas para que vengan a ayudarnos, en nuestro territorio, comprobando así nuestra incapacidad de mantener las instituciones democráticas y libres y el estilo de vida cristiano por el que siempre hemos optado (Do Couto, 1978, p. 195).

Entonces la Doctrina de Seguridad Nacional, a la luz de las tesis anteriores, deberá operar en un contexto de Guerra Fría, marcado por un creciente antagonismo entre los Estados Unidos de América y Rusia que polarizó un conflicto entre dos civilizaciones contrarias: Un hemisferio occidental cristiano en contra del materialismo comunista de oriente. Se pone en juego en esta cruenta batalla, la liberación o subyugación de todo el mundo, en la que no hay cabida ni para el aislacionismo ni para aquellas naciones impotentes que se declaran neutrales (Do Couto, 1978).

Pese a las oposiciones de algunos líderes de naciones latinoamericanas de buscar una alianza geopolítica con los Estados Unidos, el estratega militar brasilero propone lo contrario: Una alianza entre brasileros y estadounidenses es inevitable cuando se trata de la defensa del hemisferio occidental. Aseguraba que Brasil estaba en condiciones de suscribir tratados de defensa con la nación del norte, porque sus economías no son competitivas, por sus vínculos de

amistad de antaño y por las posibilidades que tiene la enorme nación sudamericana para canjear con sus aliados estadounidenses, materias primas como el manganeso y las arenas monazíticas.

Asimismo, la embocadura amazónica del tapón del Marajo y el nordeste brasileiro —en opinión del pensador brasileiro— podrían ser regiones estratégicas para configurar una posible alianza de defensa con los Estados Unidos ante posibles ataques; una alianza que también implicaría transferencia de recursos económicos, técnicos y militares que aseguren una defensa exitosa. Por tanto, la alianza comprendida en dichas regiones del país sudamericano serviría para contener posibles ataques extracontinentales, vía Dakar, Brasil y las Antillas (el litoral y la Amazonía brasileira); sería a su vez una alianza que le daría el prestigio y reconocimiento a Brasil como nación poderosa y con peso en el orden mundial y el Océano Atlántico (Do Couto, 1978).

No se trata de una amenaza imperialista que se apropiaría por la fuerza de las enormes riquezas naturales de la Amazonía, no, no se trata de ese tipo de afrenta que bajo las condiciones del momento, sólo estaría sucediendo en territorio africano pero nunca en Brasil. No se trata, asegura el autor, de una invasión de la soberanía brasileira por parte de la superpotencia estadounidense. Pues bien, lo que amenaza directamente a los Estados Unidos (y esto es una ecuación perfecta), amenaza por efecto dominó a Brasil y América Latina: Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, Washington y El Pentágono, se comprometieron en la defensa de Europa occidental ante la amenaza comunista de los países de la Cortina de Hierro, deseosa de violar sus soberanía, como también podría suceder con Brasil y los aliados latinoamericanos.

En su papel de defensor del espectro europeo, Estados Unidos utiliza al viejo continente como plataforma de agresiones ante posibles ataques vía Europa Oriental, o para la prevención de posibles escaramuzas en el norte de África, árida región geográfica en la que se construyeron numerosas bases estadounidenses para contrarrestar posibles invasiones orquestadas desde Rusia

a Europa Occidental por el mar Mediterráneo (Do Couto, 1978). En cuanto a las posibilidades geográficas de Brasil en ese juego de defensa continental, Do Couto (1978) sustentaba que “el nordeste brasileiro es un amplio e inigualable portaaviones que dará a los convoyes norteamericanos que demanden África y Europa la seguridad de la travesía oceánica, en la parte más estrecha y, por lo tanto, menos vulnerable del Atlántico” (p. 157).

No obstante, aunque se cuenta con la ayuda estadounidense, la defensa de la Amazonía y el empobrecido nordeste brasileiro, recae exclusivamente en el gobierno y las fuerzas armadas brasileras. Es una defensa de territorio brasileiro, como de las mismas latitudes latinoamericanas, pues está en juego el territorio nacional y la seguridad del Atlántico Sur. Considera el autor de *Geopolítica del Brasil* que la supervivencia y el bienestar de la nación quedarían en entredicho si se descuidan esos aspectos de defensa. Es la responsabilidad que Brasil deberá asumir en medio de las hostilidades que caracterizan a la ya estudiada “guerra total” en la que se sumen las dos superpotencias del mundo. Es un deber y una responsabilidad que no se puede desdeñar de manera irresponsable e indolente.

Pese a la ayuda estadounidense en la defensa del Atlántico Sur, debe quedar claro que el monopolio del dominio en esa vasta región, es de usufructo exclusivo de Brasil, país soberano en esa porción del continente que utilizaría sus ventajas geoestratégicas para estrechar lazos de fraternidad y concertar intereses comunes y bilaterales con los Estados Unidos; y será la ocasión propicia para consolidar una alianza continental en pro de la defensa del hemisferio occidental cristiano para cortar los feroces tentáculos del poderoso imperialismo soviético (Do Couto, 1978). En medio de este pacto de cooperación, Brasil deberá hacer valer su derecho soberano sobre el territorio que le pertenece (los estadounidenses deben reconocer esa realidad). Al igual que los Estados Unidos, la gran nación sudamericana está exhortada a escribir un “Destino

Manifiesto” que la entronice a futuro como potencia y que no reñiría con las acciones y políticas dirigidas desde la Casa Blanca (Do Couto, 1978).

El nordeste brasileiro —visto por Do Couto como una importante zona estratégica y de gran importancia en el orden mundial— es un territorio de alta vulnerabilidad ante posibles agresiones exógenas. Inclusive ante la aproximación de una posible Tercera Guerra Mundial (en la que las dos superpotencias estén en disputa), sería necesario acordar ataques —como si fuera una plataforma o una catapulta— desde territorio brasileiro con el envío de tropa y contingentes hacia Europa y África occidental. Ataques no previstos, perpetuados por contingentes soviéticos en la zona del Atlántico Sur, podrían entorpecer las comunicaciones internas del país y las conexiones con el exterior; la navegación de cabotaje quedaría seriamente afectada y la estrecha relación marítima entre brasileiros y estadounidenses podría sufrir lamentables alteraciones; no obstante los Estados Unidos no dudarían en enviar pelotones de soldados para socorrer a su incondicional aliado sudamericano (Do Couto, 1978).

La creación de un Frente de Defensa en el Atlántico será guiado bajo el liderazgo brasileiro y estadounidense, ambos involucrados en la defensa de Occidente; a su vez están comprometidos también en fortalecer la articulación de los esfuerzos de los países participantes en dicha defensa —tanto por mar, como por tierra y aire— y tendrá que considerar preponderante y primordial la defensa del nordeste brasileiro, región clave en términos estratégicos que actuaría como candado (soldadura) entre los dos amplios sectores oceánicos opuestos por el vértice. Asimismo, Brasil y Estados Unidos, aliados y amigos indeclinables, tendrán la responsabilidad de observar y estudiar lo que sucede en África, territorio expuesto a las agresiones comunistas impulsadas por los soviéticos; lugar en donde se podría planear un posible ataque contra el espectro sudamericano (Do Couto, 1978).

Se debe hacer hincapié en que la alianza planteada por los estadounidenses para salvaguardar al continente de una posible agresión soviética, corresponden no sólo a ánimos nobles, altruistas y desinteresados de la potencia del norte, sino también a su firme convicción de vigilar y dominar sus áreas ultramarinas. Más aún, la enorme responsabilidad de proteger e inspeccionar esas vastas extensiones de territorio, llevan a los Estados Unidos a encontrar tropiezos para unificar a sus vecinos en un eventual bloque de defensa continental, situación que no puede ser desatendida por Brasil en sus vertientes ideológica, política, económica y militar. Bajo la perspectiva realista (de la *real politik*) que despliega el autor brasileño en su análisis, se infiere que dicha coalición obviamente favorecía los intereses estadounidenses; Brasil quedaría en equidad de beneficios a los Estados Unidos al igual que otros países latinoamericanos, aunque es pertinente considerar que otras naciones más pobres podrían recibir un trato inequitativo; no obstante es mejor contar con vecinos portentosos que guíen el bloque de defensa (Do Couto, 1978).

Por otra parte, bordeando el litoral brasileño por el Océano Atlántico hacia el sur, se encuentra el Mato Grosso, región vulnerable y golpeada por agresiones subversivas por parte de grupos insurgentes de naturaleza comunista que Do Couto propone atacar con todos los medios que las Fuerzas Armadas tienen a su disposición. Desde luego, con el beneplácito de los gobiernos estadounidenses y sus fuerzas armadas, atendiendo los lineamientos formulados por la Doctrina de Seguridad Nacional. El autor brasileño propone también la creación de un bloque de países latinoamericanos que de manera conjunta repelen y eliminen todo tipo de manifestación comunista y subversiva (Do Couto, 1978). En ese contexto, las viejas desconfianzas, en contraste con lo propuesto por Rivas (2009), ya expuesto en este trabajo, sobre la desconfianza patente entre las naciones latinoamericanas en tiempo de aplicación de la Doctrina de Seguridad

Nacional, el estratega militar brasilero afirma que esas desavenencias y desencuentros han empezado a menguar gracias a las disposiciones de los países de la región por construir un clima de buena vecindad, cohesionados en un solo bloque geopolítico de defensa, bajo la tutela y amparo de los Estados Unidos. Esto es un hecho sin precedentes y además una vinculación fraterna en la justa causa de la defensa del mundo occidental, en medio de la disuasión nuclear, donde los propósitos revolucionarios y sus antagonistas principales son La Doctrina de Seguridad Nacional y sus postulados de lucha contrainsurgente (Do Couto, 1978).

Por eso, al defender en su conjunto a todo el hemisferio occidental, Brasil deberá ser promotor de novedosas tácticas para contener el enemigo comunista en sus modalidades de guerrillas, bajo las técnicas sigilosas de la infiltración, la propaganda revolucionaria, los ataques terroristas, la guerra de guerrillas y las emboscadas. Todas estas acciones revolucionarias del enemigo podrían triunfar y calar en suelo brasilero, si no se les pone freno por medio de la inteligencia militar y la intervención contundente de las fuerzas militares. Además, es cierto que las intervenciones insurgentes suceden en regiones en las que son patentes los conflictos sociales, el subdesarrollo y la miseria, tal como lo sustentan teóricos respetados en el orbe comunista y revolucionario como son Mao Tse Tung y Ho chi Minh (Do Couto, 1978). Se trata de enfrentar al comunismo y al subdesarrollo por igual. La afrenta del comunismo, a través de sus aliados insurgentes y subversivos, persistirá siempre y cuando sean evidentes la ignorancia, los sistemas educativos ineficientes y precarios, la corrupción y la miseria de los pueblos de América Latina. Entonces se hace imperativo combatir el subdesarrollo, en todas sus manifestaciones, en aquellas regiones apartadas de los centros de poder (Do Couto, 1978).

Sobre la tesis anterior, Do Couto (1978) sustenta que:

Lo mínimo que podemos hacer para salvaguardar la seguridad de la fortaleza sudamericana es empeñarnos, conjuntamente con toda América del Sur, decidida y de manera perseverante, en la preservación en manos amigas de las tierras del hemisferio interior; esa fortaleza sudamericana necesita desarrollarse, crear riquezas y realizar plenamente sus destinos, en esta época de vertiginoso progreso de las técnicas y de las armas arrasadoras o insidiosas, de ataques realizados sobre distancias intercontinentales (, p. 76).

No obstante, Brasil, el país líder de la región según Do Couto, se encuentra en una posición vulnerable en términos geográficos ante posibles ataques externos. Cuenta, como ya se ha visto, con una franja de litoral pobre en cuanto a defensa, susceptible de ser atacado con las técnicas más avanzadas de la ofensiva militar (el gobierno nacional deberá darse cuenta de ello) y donde se hayan los centros industriales más importantes y las ciudades más densamente pobladas de su territorio. Más aún, el nordeste brasileño posee una posición estratégica *sui generis*, frente a posibles agresiones provenientes de Dakar (actual Senegal) hacia Natal en Brasil (Do Couto, 1978).

Al respecto, el estratega brasileño lanza la siguiente tesis sobre la defensa del nordeste brasileño:

Solamente el dominio por los soviéticos de importantes bases en el litoral fronterizo de África les permitirá actuar decididamente en continuidad y potencia combinadas, contra algún punto del territorio brasileño. Y, por lo tanto, en la gran batalla del mantenimiento de la invulnerabilidad de toda esa África atlántico-meridional a penetraciones y, sobre todo, a la radicación del poder soviético ahí, se jugará el propio destino de Brasil (Do Couto, 1978, p. 138).

En otra instancia, se debe considerar que a finales de los años 50, Brasil era aún una nación con desarrollo económico y social precario, con zonas susceptibles de ser atacadas por el enemigo comunista en medio de un contexto desgarrador de “guerra total”, en la que los países poco preparados e inmaduros para la confrontación inminente, podrán sucumbir ante el peligro y las amenazas de tipo nuclear; un Brasil que poseía conflictos regionales motivados por grupos al margen de la ley, de naturaleza comunista, que alteraban el orden público (Do Couto, 1978).

Brasil, nación de peso en el orden internacional, tiene un origen cristiano que respeta los valores democráticos y liberales que sustentan al hemisferio occidental, enorme orbe de naciones comprometidas con la libertad por la dinámica imperialista e ideológica del materialismo histórico, promulgado de forma aplastante y violenta por la Unión Soviética. “Nuestra geopolítica tendrá que ser, por consiguiente, una geopolítica consciente y decididamente partícipe de la geoestrategia defensiva de la civilización occidental, a cuyos destinos tenemos los nuestros indisolublemente ligados, lo queramos o no” (Do Couto, 1978, p. 171), sostiene Do Couto en tono contundente. Dichas amenazas periféricas a la soberanía de las naciones occidentales sólo menguarán cuando se configure un real bloque de defensa panamericano. Brasil, el país más desarrollado de la región, liderará este proceso de integración entre las demás naciones latinoamericanas; también en su papel de líder de esta coalición, atenderá los problemas que achuran en las enormes fronteras compartidas con sus países vecinos en todo el perímetro continental. Sería como propone Do Couto (1978) “en ese particular, una geoestrategia de contención, en gran parte preventiva” (p. 171).

Es evidente que cuando Golbery Do Couto e Silva en su libro célebre habla sobre las confrontaciones que más caracterizaban a la Guerra Fría, él hace notar que eran guerras limitadas y contenidas en un área geográfica específica (La Guerra de Corea por ejemplo). Contendidas en

las que la amenaza comunista era indirecta pero contundente, pues se aprovechaba de los descontentos de la población local, del subdesarrollo, la corrupción de los gobernantes de turno y las hambrunas de la población. De esa manera, tal como sucedía en América Latina, el comunismo orquestado desde el Kremlin instigaba y financiaba grupos insurgentes que podrían llevar a cabo golpes de Estado, a través de una prolongada y desgastante guerra subversiva (guerra de guerrilla cuya praxis son las emboscadas) y actores de atentados terroristas contra la infraestructura del país en conflicto. En el caso concreto de la zona geográfica que comprendía la Cortina de Hierro, la Unión Soviética y China, podían atemorizar a sus vecinos sin intervenir directamente en los conflictos y propiciar una ideología que en apariencia es “igualitaria” pero que en el fondo privilegia la dictadura de un partido único (Do Couto, 1978).

“La guerra de guerrillas” como la denominó Ernesto “Che” Guevara; es un conflicto subversivo que permite provocaciones y violaciones indirectas a la soberanía de países como Brasil, coordinadas desde millones de kilómetros de distancia, desde el centro de poder comunista. Dicha guerra subversiva es apoyada por técnicos comunistas, arsenales, financiación y propaganda ideológica. En ese sentido, los comunistas no escatimarán esfuerzos para establecer alianzas subversivas de toda índole, aunque en algunos casos no compartan las ideas de sus aliados. Es si se quiere, pragmatismo político.

Eso demuestra a profundidad lo paradójico de la naturaleza del comunismo soviético y su cuestionable dialéctica. Propiciar la creación de grupos al margen de la ley de carácter comunista en Brasil, demuestra su oportunismo para generar caos, corrupción e inestabilidad en aquellas naciones que desean dominar a su antojo. Por tanto, uno de los objetivos definidos por la Doctrina de Seguridad Nacional, radicaría en imposibilitar todo tipo de comunicación entre los

grupos subversivos y la Unión Soviética. La utilización de sutiles herramientas de inteligencia militar fuera determinante para alcanzar ese objetivo.

Este conflicto revolucionario puede utilizar dos técnicas definidas para imponer la inestabilidad en la región que desea conquistar: El Golpe de Estado o putsch súbito. Desde un enfoque semántico, son acciones para las que los teóricos encuentran dificultades al definir las en medio de la terminología militar. Son acciones beligerantes imprecisas entre la guerra como tal —ya que en la defensa del país entra en el terreno de las hostilidades, el ejército— y la Guerra Fría, en las que las dos superpotencias participaban de manera indirecta (Do Couto, 1978). En algunos casos, las fuerzas armadas son dinamitadas y saboteadas desde adentro, tal como sucedió en Cuba por las fuerzas subversivas de Castro.

Surge entonces la represión de las fuerzas militares, que aún no han sucumbido, y de estamentos de la policía. Cuando el grupo insurgente controla una porción considerable de territorio, aparece un conflicto convencional, de “tipo clásico”, sin cabida para la utilización de armas atómicas ya que las superpotencias, como ya se ha visto, no participan directamente de la contienda. De no desencadenarse un conflicto convencional, de situarse las hostilidades bajo las tendencias propias de la Guerra Fría, las fuerzas armadas actúan a la espera de la consecución de una guerra regular —atómica o no— y asumen acciones de vigilia al mejor estilo de una fuerza policial (Do Couto, 1978).

En esta etapa, el conflicto es asumido por los actores del mismo, en todos los campos de la vida humana, síntoma evidente de aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en el caso de las fuerzas armadas. Se presentan boicots económicos, financieros y a la asistencia técnica prestada a las fuerzas subversivas; también ocurren acciones en la propaganda por medio de la

contra propaganda, intervenciones en lo religioso, social y político en cuanto a la utilización de censura a partidos políticos afectos a las fuerzas insurgentes (Do Couto, 1978).

Por eso, Do Couto (1978), no duda en afirmar que:

América Latina —y, en su contexto, Brasil— por sus debilidades económicas, su inmadurez política y su bajo nivel cultural, es, sin ninguna duda, extremadamente vulnerable a la agresión comunista, enmascarada bajo la forma de infiltración y subversión a la distancia y, por lo tanto, reforzarle la capacidad de resistencia eliminando las condiciones locales tan propicias a la implantación final, en esta región de capital importancia para Occidente, de una cabeza de puente comunista o depósito favorable a los rojos, es una tarea de las más relevantes y de mayor urgencia que las grandes potencias occidentales y, en particular, los Estados Unidos tan cercanos, no podrían ni deberían de forma alguna descuidar, poniéndola en un nivel muy inferior de su amplia lista de prioridades estratégicas (p. 248).

América Latina y Brasil, en opinión del autor, también podrían sufrir los coletazos inclementes del comunismo; aprovecharse de la situación de subdesarrollo, habituales en muchas latitudes empobrecidas de la región. Se podría motivar focos insurreccionales que tendrían que ser contrarrestados por medio de novedosos planes de desarrollo y de la intervención directa de las fuerzas armadas por medio de su pie de fuerza. Intentaría erigir gobiernos afines a la ideología comunista (como ya había sucedido en Cuba con Fidel Castro) que trajera inestabilidad y serios tropiezos para las instituciones democráticas del continente. Años después, el golpe militar de 1964 en Brasil fue una respuesta ante el temor de la posible instauración de un gobierno comunista en suelo brasileiro (Do Couto, 1978).

Brasil en medio de esta cruzada para defender a Occidente del terror comunista, también posee unos “objetivos nacionales” claros, desplegados junto a una política de seguridad (Doctrina de Seguridad Nacional) y una estrategia definida en el ámbito militar. ¿Cómo puede pesar la estrategia militar brasilera en pro de occidente? ¿Está sujeto Brasil —o depende— a las estrategias de defensas ideadas por las otras naciones occidentales para construir su propia Doctrina de Seguridad Nacional? ¿Qué papel puede desempeñar Brasil para defender el hemisferio occidental? Surgen de manera ineludible todas estas inquietudes al leer el pensamiento del estratega militar brasilero (Do Couto, 1978).

Por ende, la estrategia brasilera no es independiente de Occidente; su formulación deberá ser articulada en conjunto con las demás naciones occidentales bajo el amparo de los Estados Unidos. Eso no significa que Brasil esté subyugado a los dictámenes de las potencias que hacen parte del espectro occidental. No, no se trata de eso. Brasil es producto de Occidente y de la cultura judeo-cristiana que llegó proveniente de Europa a las tierras vírgenes (ricas en recursos naturales) que ahora componen al vasto Brasil, en medio de los aires de la evangelización. La cultura brasilera, aunque existan sincretismos y mestizaje, es netamente occidental y pertenece a dicha cultura por derecho propio. Brasil es occidente. Por consiguiente, tiene la responsabilidad de defender lo que le pertenece y su propia naturaleza frente a posibles agresiones que vengan del exterior en este contexto de “guerra total” (Do Couto, 1978).

La era de Getulio Vargas y el gobierno de Dutra

En materia de política exterior, tal como lo explica el famoso politólogo de la Universidad de Sao Paulo, Demétrio Magnoli, la administración de Getulio Vargas en su afán por demostrarse autónomo y un líder comprometido con el desarrollo de Brasil, antes de la Segunda Guerra Mundial, motiva un vasto comercio bilateral con Alemania. Estas acciones de Vargas

fueron tomadas por el líder populista, como contrapeso a las directrices tomadas por los Estados Unidos, que en ese momento era nueva potencia en ascenso. Más aún, con la lucha de la Fuerza Expedicionaria Brasileira (FEB) junto a los aliados en la Italia fascista, llevó a un fructífero acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, que puso a Brasil como un aliado incondicional en los campos y ciudades europeas arrasadas por la confrontación, y supuso la creación de la Compañía Siderúrgica Nacional en Brasil, gracias a la inyección del capital estadounidense (Magnoli, citado por Pinsky (Comp.), 2007).

Después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, Brasil creció exponencialmente, en cuestiones demográficas, entre 1945 y 1964. Eso se tradujo en lo siguiente: Un aumento significativo de votantes empezaron a acudir a las urnas. Los electores se duplicaron en estos años y la economía antes del gobierno de Quadros tuvo repuntes considerables; se vio entonces un leve crecimiento que no se consolidó del todo y llevó a que el país sufriera una inflación crónica que alcanzó niveles alarmantes en 1963, en pleno mandato del presidente populista João Belchior Marques Goulart (Stepan, 1970).

Asimismo durante ese periodo de la posguerra, en tanto que los militares aplicaban férreamente la Doctrina de Seguridad Nacional, acentuaron su participación en política y fueron fichas claves en algunos episodios de desestabilización en el país como fuerza moderadora. Fueron artífices de los golpes militares de 1945, 1954 y 1964. En 1961 participaron en una tentativa de golpe y en 1955 se configuró una conspiración golpista dentro del ejército, que desencadenó en un contragolpe en defensa del gobierno central y de la Constitución.

Cuando los conflictos políticos se agudizaron, los militares en ese lapso siempre actuaron como fuerza moderadora y de mantenimiento del orden; a la par, las elites políticas y económicas, los terratenientes e inclusive los mismos presidentes, utilizaron a las fuerzas

militares para alcanzar sus fines políticos. En realidad, los golpes militares, sucedidos durante un periodo en el que el temor ante las amenazas comunistas era recurrente, fueron orquestados por los militares brasileiros, pero no por ser un cuerpo monolítico que siguiera una ideología en común entre sus integrantes; estos golpes fueron orquestados por los vaivenes y crisis del sistema político brasileiro.

En ese sentido, los militares —como organismo moderador— consideraban que era necesario intervenir para subsanar las sucesivas crisis ocurridas durante la posguerra, las cuales sucedieron en periodos en los que las elites políticas y económicas, y los medios de comunicación cuestionaban la legitimidad del gobierno de turno y lo acusaban de la crisis que en el momento sufría el país, de populismo o de ser peligrosos líderes de izquierda. Curiosamente, los militares intervenían en periodos en los que las elites se encontraban divididas (Stepan, 1970).

Los golpes militares de 1945, 1954 y 1964 suscitaron un profundo debate en los medios de comunicación y las elites políticas, discusiones que se extendieron durante varios meses y daban cuenta de la percepción que tenía la opinión pública sobre la intervención militar. Los mismos militares también se hallaban divididos sobre el tipo de intervención militar que requería el país. Cuando culminó la Segunda Guerra Mundial, confrontación en la que participó con éxito en la Italia fascista la División de Combate Brasileira, los militares fraguaron un golpe que puso fin al *Estado Novo* del poderoso Getulio Vargas, si se quiere, la figura política brasileira más destacada del siglo XX (Stepan, 1970).

En 1937, el régimen erigido por Vargas con el aval militar, era de carácter semifascista en clara concordancia con los totalitarismos que se iban apoderando de Europa (el fascismo, nazismo, comunismo soviético); incluso Vargas no ocultaba su admiración por líderes de la talla de Benito Mussolini. En 1944, ante la decadencia de las fuerzas comandadas por Hitler y

Musolini en Europa, se empezó a cuestionar en Brasil los beneficios de tener un régimen autoritario y totalitario en el poder.

Los integrantes de la División de Combate Brasileira, entre ellos Golbery Do Couto e Silva, realizaban operaciones de guerra en conjunto con los aliados al mando de Dwight Eisenhower (quien comandaba las operaciones desde Argel) en suelo italiano. La FEB fue capaz de acorralar una división del ejército nazi y hacer que ésta se rindiera a sus pies. Los miembros de dicho contingente militar brasileiro, al observar de cerca el resquebrajamiento de los totalitarismos europeos, comenzaron a cuestionar el excesivo nacionalismo que el Estado Novo de Getulio Vargas había pretendido instaurar en Brasil.

Tal como lo exponía en la Escuela Superior de Guerra del Brasil, el Teniente Coronel Manoel Thomaz Castello Branco, junto a los aliados, concibieron también la idea de que el capitalismo pro norteamericano ayudaría a desterrar toda veta de subdesarrollo en suelo brasileiro. Eran paradójicamente —y esto quedaría en entredicho cuando el régimen militar asumió el poder— partidarios de que la democracia era la forma ideal de gobierno, y que una alianza estrecha con el gobierno de los Estados Unidos los encumbraría como la nación más poderosa del espectro sudamericano. El hecho de combatir junto con los aliados en la guerra, les sirvió a los hombres de la FEB para socializar con los destacados comandantes del ejército estadounidense y emularlos en aquellas acciones que les permitieran dar aportes para construir una gran nación, teniendo como modelo al país del norte. Se sintieron impresionados por la tecnología utilizada por los contingentes estadounidenses para doblegar al enemigo (Castellano, 1960).

Sobre la participación brasilera en los campos italianos al lado de los Estados Unidos, Edson de Figueiredo⁵, General de la Tercera División de Infantería durante el gobierno de Artur da Costa e Silva, le comentaría a Alfred Stepan que “en la guerra, los Estados Unidos debió darnos todo: alimentos, ropa, equipos. Después de la guerra, albergábamos menos temores que otros oficiales acerca del imperialismo norteamericano, porque habíamos visto cómo Estados Unidos nos ayudaba sin por ello encadenarnos” (Stepan, 1970, p.105). Humberto de Alencar Castelo Branco, primer presidente militar de Brasil, fue el oficial líder de las operaciones de la FEB en suelo italiano. De esa época, junto a sus compañeros de lucha, era un crítico vehemente de todo tipo de nacionalismo de carácter emocional, tal como lo ejercía el populismo de Getulio Vargas. Tiempo después, sus críticas contra el nacionalismo, le llevaron a sostener fricciones con su sucesor Artur da Costa e Silva. En su opinión, la participación de la FEB en la guerra, permitió que los militares se dieran cuenta de sus propias deficiencias y de esa manera, buscar soluciones para superarlas mediante el trabajo duro, la disciplina y el entrenamiento militar (Castello, 1960).

Los integrantes de la FEB, impresionados con la capacidad bélica estadounidense y su organización en el campo de batalla, empezaron a cuestionar abiertamente el Estado Novo de Getulio Vargas, aunque estas acciones no eran producto de la Doctrina de Seguridad Nacional, ya que ésta aún no se encontraba en ejecución. A su vez las críticas de la sociedad civil que había apoyado al presidente por su sanción de medidas que favorecieron a la clase trabajadora, no se hicieron contra Vargas, que temeroso de las nuevas presiones, convocó a nuevas elecciones: La ciudadanía no acudía a las urnas desde 1930 (Stepan, 1970).

⁵ Entrevista realizada al General Edson de Figueiredo, el 24 de septiembre de 1968.

Por su parte el General Golbery Do Couto e Silva⁶, protagonista en los campos de batalla italianos, en diálogo con el investigador estadounidense, afirmarí­a que:

La actitud de los miembros de la FEB revistió importancia para lograr la apertura del pa­ís a inversiones extranjeras, porque aquéllos no tenían tantos temores con respecto a los Estados Unidos. La FEB ansiaba lograr el rápido desarrollo de Brasil, no solo adquirió relevancia a raíz de la contienda italiana. Tal vez revista importancia el hecho de que los miembros de la FEB viajaron a los Estados Unidos y fueron testigos directos del desarrollo de una gran potencia industrial y democrática. Se ampliaron así sus horizontes. Yo también fui, y recibí una impresión muy viva; para mí saltaba a la vista que una nación pionera de la libre empresa había logrado convertirse en una gran potencia industrial (Stepan, 1970, p. 208).

Precisamente en 1944, cuando la FEB actuaba de manera sobresaliente en Europa, en Brasil, un enorme grupo opositor, compuesto por líderes políticos y algunos militares, paralizó al pa­ís para presionar a Vargas para realizar elecciones con celeridad. Es así que la legitimidad del gobierno quedó en entredicho y el debate en torno al tema en el que participaba ávidamente la opinión pública, se extendió desde 1944 hasta 1945: el año de culminación de la gran guerra en Europa, trajo consigo la publicación de editoriales de los principales periódicos del pa­ís, y de columnas de reputados columnistas, que cuestionaban al gobierno de Vargas (Stepan, 1970). Como respuesta a los cuestionamientos, importantes asesores y funcionarios del gobierno central, le restaron apoyo al mandatario populista: Oswaldo Aranha, Ministro de Relaciones Exteriores, uno de sus más fieles escuderos, renunció de manera sorpresiva y se pasó a la

⁶ Entrevista al General Golbery Do Couto e Silva, en Río de Janeiro, el 8 de octubre de 1968.

oposición. Francisco Campo, principal redactor de la Constitución Política del régimen de Vargas del Estado Novo también renunció a sus funciones públicas (Stepan, 1970).

El analista político colombiano Eugenio Gómez Martínez se refería a Getulio Vargas en 1974 de la siguiente manera:

Ambiguo como él solo —jamás se le pudo ubicar ideológicamente— sin una filosofía política, moviéndose a golpes de instinto, apoyado y combatido sucesivamente por los integralistas (extrema derecha) y los comunistas, acercándose primero a las potencias del Eje (Alemania, Japón, Italia), ya con Estados Unidos, rompió en 1930 la *vieja república*, la de los terratenientes que habían convertido al Brasil en feudo exclusivo. [...] El getulismo resultó a la postre una obra incompleta. Por las incursiones del Ejército en la vida política, por las crisis económicas, por los opositores lógicos y por la personalidad peculiar del caudillo (Gómez, 1974, p. 49).

En opinión de este autor, Getulio Vargas valiéndose de su estilo populista, intentó favorecer a las masas empobrecidas de brasileros a través de sus políticas para regular las jornadas de trabajo, establecer las vacaciones remuneradas y promover el establecimiento del salario mínimo (Gómez, 1974).

El politólogo estadounidense Riordan Roett publicó en 2010 un interesante libro sobre la historia política del Brasil bajo el título *El nuevo Brasil*. Afirma que los quince años de mandato unipersonal de Getulio Vargas (lo que duró su primera administración), produjeron una herida profunda para las instituciones del país. Asevera que en la época, muchos analistas observaron su derrocamiento como un nuevo proceso hacia el cambio democrático, luego de establecerse como Imperio, y luego como República; sería el momento para erigirse como una nación que abanderara el progreso, el orden y la posibilidad de modernizar el sistema político. No obstante,

según el criterio de Roett (2010), la inexperiencia con la democracia, las pobres decisiones económicas, los problemas financieros de la clase media y la negligencia del Estado por solucionar los problemas de miseria del nordeste, fueron hechos que truncaron el nuevo experimento de la democracia y desencadenaron en el golpe de Estado de 1964.

El economista y politólogo brasileiro Márcio Pochmann, señala que aun antes de que llegara Getulio Vargas al poder, no había una democracia plena en Brasil. Las elecciones democráticas celebradas luego de la caída del Imperio, en el siglo XIX, tuvieron una participación inferior al 5% del total de la población, “debido a la regla del voto público y exclusivo de los varones no-pobres” (Pochmann, citado por Pinsky (Comp.) 2007, p. 29). . Pochmann comenta que las elecciones bajo el matiz del voto secreto y universal (que permitieron incluir el voto femenino) sin vetos a los límites de renta, fueron estipulados luego de la terminación del periodo bautizado por Getulio Vargas como el Estado Novo entre 1937 y 1945; fue suspendido durante el régimen militar entre 1964 y 1985 y se restablecieron plenamente a partir de 1989 (Pochmann, citado Pinsky (Comp.) 2007).

Por otro lado, durante el segundo mandato de Getulio Vargas —elegido nuevamente en 1950, luego del gobierno de Dutra— se creó de nuevo un movimiento de oposición que cuestionaba la legitimidad de su mandato, que contó con un notorio aval militar en conjunción de líderes políticos y de la sociedad civil. Eran cuestionamientos que provenían desde el ámbito moral. Su segundo mandato se caracterizó por múltiples problemas económicos: Una inflación galopante, déficit en la balanza de pagos, conflictos laborales con los sindicatos más importantes del país, malentendidos con los generales que dirigían las brigadas y dudas sobre la manera como manejaba las relaciones internacionales; en este caso, su estrecha amistad con Juan Domingo Perón en Argentina (Stepan, 1970).

De esa manera, en las elecciones de 1945, el General Eurico Gaspar Dutra se presentó con el aval del Partido Social Democrático (PSD) grupo político afecto a Vargas. Había sido una destacada figura política desde 1930. Por su parte, el Brigadier Eduardo Gomes representó en las urnas al partido de oposición Unión Democrática Nacional (UDN), quien se había destacado en la huelga de tenientes que sacudió a las playas de Copacabana en 1922 y había actuado como un aguerrido crítico de Vargas durante su gestión presidencial. En un principio, según las encuestas y sondeos de opinión, parecían dar el triunfo seguro de Gomes, sin embargo, de manera sorpresiva Dutra ganó las elecciones con el 55% de los votos, frente el 35% que obtuvo Gomes, seguido con un 10% (Roett, 2010) del Partido Comunista Brasileiro.

Asimismo, el Partido de Dutra ganó las mayorías del Congreso (La Cámara de Diputados y el Senado), en el que pretendían realizar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna. Dutra asumió la jefatura del Estado a principios de 1946 y la nueva Constitución fue aprobada para finales de ese mismo año. La nueva carta política permitía que los ciudadanos pudieran realizar protestas pacíficas en las calles luego de quince años de represión ejercida por el régimen de Vargas, pero el Congreso decidió cuáles movilizaciones de masa estaban permitidas y cuáles debían ser castigadas y repelidas, ya que podían afectar el comercio y la economía del país.

Roett (2010) define al gobierno de Dutra como:

Una administración conservadora a la hora de tomar decisiones políticas. La cancelación de los derechos políticos del Partido Comunista Brasileiro durante su administración, se debió al soporte que ofrecieron los Estados Unidos a Dutra.

Asimismo, en el campo económico, el presidente tuvo un desastroso desempeño económico con pobres resultados (p. 45).

La balanza de pagos sufrió un duro revés y se impusieron controles entre 1947 y 1953 para nivelarla. Durante ese periodo, la moneda de la época, el cruzeiro, estuvo sobrevaluada, lo que favoreció a los hacendados que se especializaban en proyectos de agricultura, en detrimento de los campesinos y de los sindicatos de la industria. Dicha sobrevaluación permitió establecer un sistema de importación para mantener los bienes provenientes del extranjero bajo control. Dicho sistema se fue politizando y se tornó corrupto, restándole credibilidad al gobierno. Por tanto, los líderes brasileiros tanto de la política como de la industria, se mostraban pesimistas sobre el futuro económico del país; consideraban que la balanza de pagos se debía transformar sustancialmente con incentivos hacia las exportaciones. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con una moneda sobrevaluada, las exportaciones se vieron menguadas, lo cual repercutió de manera perjudicial en la administración de Dutra. Comenzaron a redactarse informes como los escritos por el economista Raúl Prebisch en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, en Santiago de Chile, que dieron cuenta del desbalance existente entre un floreciente mercado de importaciones de bienes manufacturados en Brasil y un menguado sistema de exportaciones. A la luz de los argumentos presentados por Roett (2010), es posible dilucidar que el programa económico de Dutra tendría serios tropiezos a largo plazo. La pobre gestión económica del gobierno, una inflación al alza y el aumento significativo de la pobreza llevarían de nuevo a Getulio Vargas al poder en 1950.

Durante el gobierno de Dutra, Brasil firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que creaba un bloque de defensa interamericano, bajo la tutela de los Estados Unidos, frente a posibles agresiones o incursiones soviéticas en suelo americano. Asimismo, Dutra, aprovechando la influencia estadounidense, era partidario de la creación de la OEA. Por

eso, su gobierno firmó con entusiasmo la fundación de dicho organismo en 1948 (Magnoli citado por Pinsky (comp.), 2007).

Durante los años en los que Dutra estuvo en el poder, Getulio Vargas se retiró a Rio Grande do Sul. En su retiro obligado estuvo ausente de la política, mientras millones de brasileiros, favorecidos por sus políticas populistas, lo aclamaban. Era sin duda, el líder y la influencia directa de varios senadores y diputados provenientes de diferentes estados. Ante el fracaso de su sucesor, Getulio Vargas esperaba el momento preciso para intervenir de nuevo en el ruedo político. Esperaba que la opinión pública estuviera de su lado. Por ello esperó hasta octubre de 1950 para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales con el apoyo de una coalición compuesta por líderes del Partido Social Democrático, el Partido Laborista Brasileiro y el Partido Social Progresista, grupo creado y liderado por el carismático gobernador de Sao Paulo Adhemar de Barros, cuya base de apoyo era de naturaleza comunista. Getulio Vargas gana las elecciones doblando a su rival Eduardo Gomes, que se presentaba por segunda vez a las urnas (Roett, 2010).

Durante la campaña presidencial, Vargas presentó un ambicioso programa económico para incentivar el sector de la industria pesada y favorecer a la clase trabajadora que alarmó a las elites tradicionales. De vuelta en el poder, el presidente apoyó la implementación del modelo de sustitución industrial. Razón por la cual, en 1952, creó el Banco Nacional Económico y de Desarrollo Social, organismo encargado para asegurar el futuro del proceso de industrialización del país, con especial énfasis en el sector energético. En 1953 Getulio Vargas nacionalizó el petróleo y fundó Petrobras, medidas que incrementaron el resentimiento de los hacendados, terratenientes, las clases altas, la clase media y el gobierno de los Estados Unidos. La oposición

lo tildó de incompetente para controlar la inflación que de nuevo se hallaba en aumento (Roett, 2010).

De esa manera, Getulio Vargas se vio obligado a cambiar en varias ocasiones los miembros de su gabinete de ministros, en un esfuerzo por aminorar la crisis social y política desatada por una inflación en ascenso. Dichas medidas llevaron a crear fricciones adentro de las Fuerzas Armadas frente los cambios en materia política, frente a las estrategias de desarrollo económico del gobierno y frente a la manera como Brasil debía construir sus relaciones internacionales en medio del ambiente bipolar de la Guerra Fría.

Por un lado, los autoritarios nacionalistas apoyaban los incentivos a la industrialización adelantada por el gobierno, quien era su vez, el encargado de regular la economía, promover una política estatista, controlar asuntos importantes como el petróleo, las comunicaciones y el transporte. Los autoritarios nacionalistas aseguraban que la inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos era un atentado directo hacia la soberanía del país. Por consiguiente, eran recelosos frente a las relaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos, y aseguraban que se debía edificar una política exterior, independiente de las directrices del país del norte. En la otra orilla, se hallaba un grupo que los primeros denominaron peyorativamente como los “entreguistas”, que argumentaban que el Estado no debía controlar ni regular los aspectos de la economía, y eran abanderados de la inversión extranjera que traería nueva tecnología al país. Los “entreguistas” estaban liderados por aquellos oficiales que conformaron la Fuerza Brasileira Expedicionaria (FEB) que luchó junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial en territorio de la Italia fascista. El propio general Golbery Do Couto e Silva y el primer presidente militar del país, Humberto de Alencar Castelo Branco hacían parte de este grupo. Más aún, posteriormente serían fundamentales para la creación de la Escuela Superior de Guerra del Brasil. Como ya fue

expuesto, los “entreguistas” eran partidarios de crear un bloque interamericano de defensa, liderado por los Estados Unidos para contener al comunismo soviético y sus manifestaciones internas de subversión armada (Roett, 2010). Getulio Vargas comenzó el primero de mayo de 1954, una agresiva campaña de corte populista para asegurar su legitimidad entre la ciudadanía, acción que lo llevaría a ser aún más repudiado por la oposición, las clases pudientes, los industriales y la clase media: anunció un aumento del 100% en el salario mínimo. La Unión Democrática Nacional de Oposición (coalición de todos los partidos y sectores de oposición), comenzó una campaña de desprestigio hacia Vargas, que polarizó el sistema político brasilero (Roett, 2010).

La situación se agrava para Getulio Vargas: El periodista y crítico más pugnaz de su régimen, Carlos Lacerda es asesinado. La investigación sobre el atentado sufrido por el comunicador social lleva a un giro insospechado: El autor intelectual resultó ser un guardaespaldas de Vargas. La situación fue acompañada por la denuncia de sonados casos de corrupción en los que los asesores más cercanos al presidente se hallaban implicados. Los Estados Unidos, en la era del presidente Dwight David Eisenhower, comenzaban a cuestionar abiertamente al gobierno de Vargas. Eran los inicios de la Doctrina de Seguridad Nacional. Ante la renuncia de importantes funcionarios de su administración, Vargas comenzó a sentirse cada vez más acorralado.

Antes de suicidarse, redactó una carta —un manifiesto si se quiere— en la que anunciaba que su muerte era producto de una alianza entre conspiradores nacionales e internacionales que querían destruir sus políticas populares y progresistas. Luego de su muerte, ocurrieron protestas masivas, orquestadas por el Partido Comunista Brasileiro, en los principales centros urbanos del

país. Las marchas y protestas fueron brutalmente reprimidas por los militares, mientras el futuro político del país era incierto (Roett, 2010).

En aras de mantener la legalidad del sistema, el vicepresidente João Fernandes Campos Café Filho fue designado presidente. Era en realidad un líder conservador que había ejercido la vicepresidencia al margen de las decisiones de Vargas; formó su gabinete con integrantes del Partido UDN y fijó la celebraciones de nuevas elecciones para octubre de 1965: los partidos procedieron entonces a elegir a sus candidatos. El Partido Social Democrático eligió a Juscelino Kubitschek como su candidato, quien se había desempeñado como gobernador de Minas Gerais; era joven, dinámico y contaba con buen respaldo popular. También recibió el aval del Partido Laboral Brasileiro. Su programa de gobierno se centraba en la modernización del país, la construcción de nueva infraestructura, la edificación de una nueva capital política y un desarrollo económico sostenido. El Partido UDN seleccionó al General Juarez Taborda como su candidato, militar quien era partidario de una campaña anticorrupción y abogaba para que la clase política mantuviera una vida honesta, sin clientelismo (Roett, 2010).

Kubitschek resultó ganador en la contienda electoral con el 36% de los votos. Joao Goulart, líder político populista, que fue escudero y partidario de Getulio Vargas y se desempeñó en su administración como Ministro de Trabajo, fue elegido vicepresidente con el aval de los laboristas y nacionalistas. Antes de que el nuevo presidente asumiera el cargo, ocurrieron una serie de hechos que convulsionaron el sistema político brasileiro: João Fernandes Campos Café Filho enfermó y tuvo que abandonar la presidencia; el presidente de la Cámara de Diputados fue apoyado por varios líderes conservadores para entorpecer la llegada de Kubitschek y Goulart al palacio presidencial. Café Filho, ya recuperado de su caprichosa salud, trató de asumir sus funciones presidenciales. No obstante, el Congreso confirmó al presidente de la Cámara de

Diputados como estadista quien entregaría el poder a Kubitschek a regañadientes en 1956 (Roett, 2010).

En los inicios de su administración, Juscelino Kubitschek aseguraba que, el país en los cinco años de su administración, lograría un desarrollo y una modernización tan exitosa que parecería que él estuviera ejerciendo el poder durante cincuenta años. En realidad, el nuevo presidente representó cambios sustanciales en la gestión económica y social. Efectivamente, la industrialización fue una de las prioridades del gobierno y Brasil comenzó un acelerado proceso de exportación de café y otros importantes productos agrícolas; asimismo la exportación de bienes industriales y manufacturados. Todas estas acciones llevaron al crecimiento económico de Brasil. La economía creció entre 1947 y 1952 un poco más de un 6% cada año, y en la mitad del gobierno de Kubitschek, el crecimiento alcanzó el 7.8%. Caso curioso: Ninguno de los diputados pertenecientes a los Estados del nordeste, dieron el visto bueno para crear dicho organismo (Roett, 2010).

Por otro lado, Kubitschek, al igual que Vargas antes de la Segunda Guerra Mundial, quería mostrarse como un líder independiente a las directrices impartidas desde Washignton. Por ello, impulsa en el ámbito latinoamericano la Operación Panamericana (OPA), que el presidente brasilero expuso como una agenda independiente para el desarrollo de América Latina. Dicho concepto sería radicalizado con la llamada Política Externa Independiente (PEI), impulsada por los gobiernos populistas de Quadros y Goulart, iniciativa que les llevaría a enemistarse con los Estados Unidos (Magnoli, citado por Pinsky (Comp.), 2007). Incluso, bajo la política del PEI, Quadros condecoró a Ernesto “El Che” Guevara en 1961, situación que enfureció a los militares: Era condecorar oficialmente al enemigo comunista (Magnoli, citado por Pinsky (Comp.), 2007).

Al final del mandato de Kubitschek, Brasil ofrecía un panorama distinto: aparecieron nuevos movimientos sociales y nuevos partidos políticos que presentaron propuestas para aspirar a las elecciones presidenciales de 1960. Súbitamente Quadros ganó las elecciones, lo cual fue un verdadero hito para su partido, que por primera vez ganaba unas elecciones presidenciales, desde el derrocamiento de Getulio Vargas en 1945. Quadros asumió la jefatura en 1961.

Durante su corto periodo de mandato, el estadista trató de aumentar los poderes presidenciales por medio de todas las vías posibles; a su vez, sus asesores económicos no hallaron la fórmula ideal para frenar la inflación. Asimismo, el presidente era partidario de una política independiente de los designios de los Estados Unidos e inició contactos con la Unión Soviética y con Cuba a la que recién llegaba Fidel Castro al poder, situación que lo llevó a enemistarse con el presidente Kennedy (Roett, 2010).

Durante los siete meses que duró su administración, Quadros firmó un importante acuerdo con la Iglesia Católica, para coordinar un ambicioso programa educativo que atendiera los graves problemas de analfabetismo y miseria que padecía el nordeste brasileiro, en contravía a lo que pensaban los terratenientes y hacendados de la región, que se encontraban atemorizados con el ascenso de Castro al poder en Cuba, y a que el líder revolucionario exportara la revolución a suelo brasileiro: de allí que este tipo de acciones fueran catalogadas de subversivas y de atentar contra el orden público del nordeste brasileiro. Las elites no dudaron en criticar a Quadros y a algunos sectores eclesiásticos por la implementación de este programa social de carácter asistencialista (Roett, 2010).

El golpe militar de 1964 a Goulart. Fuerzas Armadas Brasileñas, Escuela Desarrollista y relaciones cívico militares

1964 fue año decisivo en la historia brasileña. Inclusive se podría afirmar que el golpe militar acaecido en ese año el 31 de marzo, partió la historia de la nación sudamericana en dos partes: Estableció un antes y un después en las relaciones cívico-militares y llevó a que los militares asumieran el poder, por primera vez en setenta años de vida republicana, con el derrocamiento del presidente Goulart.

El vicepresidente Goulart llegó al poder luego de la repentina renuncia del presidente Quadros en 1961. Goulart se encontraba en un viaje diplomático en la China gobernada bajo el yugo de Mao Tse Tung, en el momento en el que Quadros dejaba la silla presidencial vacía. De esa manera, se preparó para regresar a Brasilia, mientras sus opositores movían fichas, conspiraban para impedir que se le designara como estadista, y las Fuerzas Armadas se hallaban divididas frente a su nombramiento. Los militares que pertenecieron a la FEB y las autoridades de la Escuela Superior de Guerra del Brasil no estaban de acuerdo con esta designación (Roett, 2010).

Entonces Goulart asumió como presidente, gracias a los acuerdos suscritos con un importante sector del ejército que pretendían reducir la jurisdicción del Poder Ejecutivo y así, motivar la creación de un nuevo cargo público que limitara el poder presidencial: El cargo de Primer Ministro. Dicho pacto secreto contemplaba llamar a un plebiscito en el que se consultara a la ciudadanía sobre la posibilidad de configurar ese puesto en el Alto gobierno; pero que también incluyera la opción de que el presidente siguiera con sus atribuciones actuales.

El nuevo presidente designó para cargos importantes de su mandato, a aquellos líderes militares con los que había suscrito el pacto. De esa manera, Goulart por medio de campañas

populistas —y visto por las elites políticas y por los Estados Unidos como un nocivo líder de izquierda— al principio de su mandato, adelantó una agresiva campaña a favor del plebiscito (Stepan, 1970).

Goulart asume el poder en medio del caos y la inestabilidad. Riordan Roett no lo responsabiliza de la situación, pero sí considera que contribuyó a exacerbarla: la oposición lo detallaba como un líder débil, sin poder de decisión y siempre secundado por su séquito de asesores, que tomaban las resoluciones por él. En todos los aspectos (económico, social, militar y político), Goulart encontró desorden e inestabilidad cuando asumió el cargo. El proceso de industrialización se encontraba estancado, el país se encontraba totalmente endeudado (una deuda interna creciente y la balanza de pagos estaba completamente desajustada con un saldo rojo en materia de exportaciones diversificadas). Sin embargo, Goulart no contaba con una política clara para atraer capitales extranjeros y multinacionales.

En el plano político, cuando Goulart llegó al poder, expone Roett, las diferentes tendencias políticas favorecieron un verdadero desastre y un clima creciente de inestabilidad. Se formaron coaliciones políticas de alcance nacional que pretendían llegar a la presidencia, lo cual motivó un verdadero desorden e hizo al Ejecutivo incapaz de gobernar. Los políticos comenzaron a cambiar de grupos, destruyendo la esencia misma del sistema de partidos políticos. Asimismo, en Brasilia, los debates legislativos se presentaron cada vez más intrascendentes e improductivos. Se tornaron más recurrentes las marchas estudiantiles de protesta en las calles y surgieron también grupos desde la extrema izquierda que proponían cambios radicales por medio de una revolución armada. Por su parte, la clase media que se había sentido traicionada por las políticas de Getulio Vargas y que luego consideraba haber encontrado la salvación durante el periodo de

Kubitschek y Quadros, esperaban lo peor de Goulart. Fueron si se quiere, junto a los militares, los principales opositores del nuevo mandatario (Roett, 2010).

Una vez instalado en el poder, Goulart y su gabinete forjaron una agenda y un estilo de gobierno netamente populista. Motivó una vasta reforma agraria y creó una nueva legislación para que los analfabetos y los militares tuvieran la facultad de votar; medidas que los terratenientes, los industriales y las elites tradicionales, catalogaron de comunistas. Asimismo, Goulart era partidario de que el Estado fuese el ente regulador de la economía, de modo que se abanderó de nacionalizar la industria y algunas actividades económicas importantes, marginando a algunas multinacionales, manteniendo una abierta retórica anticapitalista. El gobierno comenzó a apoyar a nuevos grupos políticos que surgieron en la arena política, incluyendo grupos radicales como el Bossa Nova, y adelantó acercamientos con el Partido Comunista Brasileiro (que se encontraba aún en la ilegalidad) y con grupos que renegaban del centralismo y pretendían descentralizar el poder. Apoyó abiertamente la creación del Sindicato General de Trabajadores en 1962, enorme entidad sindical que agitó el ámbito industrial para lograr reformas sustanciales que favorecieran a los trabajadores con aval del gobierno. De esa manera, las movilizaciones y protestas callejeras, fueron moneda corriente en Brasilia para presionar al Congreso con medidas que favorecieran a los sindicatos, espantando a la clase media, los industriales y las elites comerciales. Este tipo de acciones hicieron que la oposición, se radicalizara aún más (Roett, 2010).

En 1962, los ministros militares de su gabinete exhortaron a la población y presionaron para que se diera, como ya se había pactado, la consecución del plebiscito que habían acordado con Goulart. Ante las presiones de los militares y las gestiones presidenciales, un Congreso indeciso aprobó la realización del plebiscito para abril de 1963; por su parte Goulart presionaba

para que la realización del plebiscito fuera en octubre de 1962, fecha en la que también se realizarían elecciones legislativas. Su cuñado Leonel Brizola, el aguerrido gobernador de Rio Grande do Sul y el General Jair Dantas Ribeiro, al mando del ejército de ese Estado, amenazaron con utilizar vías de hecho para que el Congreso tomara una decisión a tiempo y sin vacilaciones. Finalmente, el Poder Legislativo, cediendo a las presiones, decidió realizarlo a principios de 1963. Pagando el favor político, Goulart nombra al líder militar, ministro de Guerra, el cargo más alto para un militar en Brasil. De esa manera, el presidente populista utilizaba a los militares como fichas de ajedrez para presionar al Congreso y lograr sus metas políticas.

Luego de la intervención violenta de Brizola, se llegó a un acuerdo por medio de un compromiso entre las partes antagónicas: una reforma constitucional —sumado al cargo de Primer Ministro— que contemplara la creación de un régimen parlamentario que le permitiera a Goulart ejercer como presidente (Roett, 2010).

Cuando Goulart llega a la presidencia, de inmediato se abre la puerta para crear el cargo de Primer Ministro. Se celebraron en 1962 elecciones legislativas y para las gobernaciones estatales, que fueron sumamente reñidas, entre los partidos del entramado político brasileiro. De manera inusitada —y contrario a lo que había pactado antes de llegar a la presidencia— Goulart comenzó una agresiva campaña para desarrollar un nuevo plebiscito que le devolviera sus atribuciones presidenciales que habían sido limitadas por el Congreso.

Durante las elecciones, los conservadores entraron en pánico con la victoria de dos candidatos afectos a Goulart: La elección del gobernador Brizola como senador por Río de Janeiro en el Congreso; quien era considerado el hombre más violento de los colaboradores del gobierno. Asimismo, la elección como senador de Miguel Arraes, líder comunista del nordeste brasileiro, gobernador de Pernambuco que abanderaba a los sindicatos de campesinos y las ligas

agrarias de la región, utilizando un discurso que atacaba al establecimiento y al statu quo (Roett, 2010).

Luego de las elecciones, Goulart presionó para que se desarrollara el plebiscito que había pactado para que se realizara en 1963. Era obvio que la irrupción de un nuevo orden parlamentario, limitaría los poderes al presidente; entonces Goulart inició su propia campaña para que los electores optaran por que el presidente mantuviera sus poderes intactos. El plebiscito se realizó en enero de 1963 y los electores apoyaron al presidente con su votación (Roett, 2010). Dicha victoria llevó a que el ala conservadora del ejército —los denominados entreguistas— observara con preocupación la radicalización y polarización que se evidenciaba en el país, lo cual según su opinión, representaba un serio desafío para las Fuerzas Armadas y para el sistema democrático. La Escuela Superior de Guerra comenzó a estudiar la inestabilidad y la polarización que se vivía en Brasil. A su vez, algunos institutos militares que habían sido creados a finales de los años 50 con el soporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), comenzaron a prepararse para una eventual confrontación con el comunismo, los grupos de izquierda y la subversión armada (Roett, 2010).

En 1964, ante un deterioro preocupante de la economía brasilera, una inflación en ascenso, un desempleo galopante y medidas populistas sin anclaje en la realidad, como la descabellada reforma agraria apoyada por el gobierno central, los militares con el apoyo decidido de los terratenientes y una vasta clase media, empobrecida por la crisis, decidieron derrocar a Goulart, presidente observado por una facción del ejército como un peligroso elemento comunista.

Para 1964, Brasil contaba con trece partidos políticos que hacían parte del juego político, incluyendo el Partido Comunista Brasileiro que se encontraba vetado. Obviamente, a excepción de cuatro grupos políticos importantes, los restantes eran grupúsculos que representaban a

minorías poblacionales; no obstante, su participación había creado resquemores entre el Ejecutivo y el Legislativo. Con la instauración del régimen militar, la mayoría de dichas agremiaciones políticas fueron barridas del ruedo político (Roett, 2010).

A principio de 1964, Goulart ya había empezado a perder legitimidad ante la opinión pública, los medios de comunicación y los cuerpos castrenses del país. Su legitimidad ya estaba en entredicho, incluso mucho antes de fraguarse su derrocamiento. Su legitimidad comenzó a menguarse en diciembre de 1963, cuando se empezó a cuestionar si el presidente respetaría los mandatos constitucionales de la Carta Magna de 1946: Si buscaría perpetuarse en el poder de manera autoritaria al mejor estilo de Getulio Vargas, o respetaría las próximas elecciones presidenciales que elegirían a su sucesor. Normalmente se tiende a pensar que Goulart recibía apoyo de los partidos de izquierda del país; sin embargo la realidad demostró que incluso dichas organizaciones políticas también cuestionaban su figura. Obviamente la derecha y la centroderecha no veían con buenos ojos al presidente populista.

Asimismo, en Brasil fue evidente que fuerzas políticas opositoras al Ejecutivo, la clase media, los terratenientes, se valieron de los militares para lograr sus intereses políticos. Dicha mutua manipulación pone en entredicho, el liberalismo que intenta desligar a los militares del sistema político, de mantenerlos como una fuerza apolítica (Stepan, 1970). Las fuerzas armadas brasileras se hallaban fuertemente politizadas, y los grupos en cuestión intentaron ganarse su apoyo para concentrar de ese modo un mayor poder político (Stepan, 1970). En el caso de los terratenientes y de las elites económicas, Stepan consideraba que:

Para mantener el orden interno, controlar el Poder Ejecutivo y poner coto a la movilización política de grupos nuevos, y a falta de otras instituciones que puedan cumplir con eficacia dichas funciones, las elites políticas con frecuencia hallan

oportuno conceder a las Fuerzas Armadas cierto grado (limitado) de legitimidad para encarar su cumplimiento en condiciones específicas. No obstante, es reducido el grado de legitimidad acordada a los gobiernos específicamente militares (Stepan, 1970, p. 80).

En ese sentido, los militares eran tentados por los grupos en cuestión que aprovechaban su falta de unidad frente a algunos temas políticos, asuntos ideológicos y de orientación del Estado. Por consiguiente, eran evidentes las diferentes vertientes opuestas adentro de las fuerzas armadas para aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional. No obstante, dichas intenciones se vieron frustradas cuando los militares no demostraron ninguna intención de entregar el poder a los civiles pronto. También cabe destacar que los cuerpos castrenses eran manipulados por los presidentes de turno; en pro de fortalecer sus intereses personales en el alto gobierno, estadistas que no fueron capaces de hacer una óptima distribución de la riqueza. Ese también fue el caso del estilo populista de Goulart y de todos los presidentes que gobernaron al Brasil desde 1937 a 1964, a excepción de Kubitschek. También intentaban ganarse su apoyo para aplastar con contundencia a la oposición, gracias al eventual aval prestado por los tres ministros militares que siempre conformaban los gabinetes de gobierno: los ministros de Aeronáutica, Marina y Guerra. También contribuía a estas acciones el hecho de que el presidente elegía a los máximos dirigentes militares de las brigadas diseminadas por todo el suelo brasileiro (Stepan, 1970).

El reconocido historiador de asuntos latinoamericanos en la Universidad de Stanford, John J. Johnson en 1964 —año en que ocurrió el golpe que llevó a Castelo al poder—, en un artículo publicado en Stanford University Press, sostenía que la debilidad de las instituciones políticas en América Latina, conllevaba a que las fuerzas castrenses se sintieran llamadas a participar en el

juego político y que eran las instituciones que más inspiraban confianza en el ajedrez político latinoamericano. Sostenía que:

Hasta tanto no se instrumente una administración pública responsable, las Fuerzas Armadas, como grupos humanos coherentes, serán tan competentes como cualquier otro grupo preocupado por la política nacional. Por añadidura, durante los próximos diez o más años constituirán, ocasionalmente, la institución más digna de confianza para asegurar la continuidad política en el país al que pertenecen. En algunos casos, se erigirán en baluartes del orden y la seguridad que, de lo contrario, podrían sumirse en la anarquía (Johnson, 1964, p. 261).

Ese era el clima de inestabilidad cuando los militares llegaron al poder, al derrocar a Goulart. Ese era el clima político que vivía Brasil en el lustro previo al golpe militar. Tras la renuncia sorpresiva del presidente Jânio da Silva Quadros y ante la eventual toma de poder por parte del entonces vicepresidente Goulart, tres ministros militares que hacían parte del gabinete de gobierno, intentaron boicotear que asumiera la presidencia. Inclusive en 1961 ya estaban fraguando un golpe de Estado, tras la renuncia de Quadros, para evitar el ascenso de Goulart. El general Golbery Do Couto e Silva era uno de los líderes militares que querían poner freno al líder populista y que participó en la conspiración. El estratega militar brasileiro renunció a su servicio activo luego de fracasar en el intento de golpe: durante tres años organizó pacientemente un movimiento cívico-militar que tornaría a la opinión pública en contra de la administración de Goulart, a finales de 1964, y apoyaría el golpe del 31 de marzo del año siguiente. En opinión del Golbery, se cometieron muchos errores de planificación en el golpe frustrado de 1961. Para 1964 esperaron que la opinión pública fuera favorable con el ejército (Stepan, 1970).

Lo consideraban una figura peligrosa, populista y que no ocultaba sus afectos con el comunismo. Publicaron un comunicado conjunto en el que aseguraban que su oposición a la designación de Goulart como presidente, obedecía a ejercer su función legal y específica de salvaguardar a la Nación de futuras amenazas (De Carli, 1961). Acto seguido, el aguerrido gobernador socialista del Estado de Rio Grande do Sul, Leonel Brizola (cuñado de Goulart), con el aval militar de las milicias estaduais de su provincia, se opuso a las intenciones de los tres ministros en mención. Les manifestó por medio de un telegrama que desconocería sus actuaciones y que su desobediencia desataría una guerra civil. Esos tres ministros, tres años después, serían los líderes militares más importantes que llevarían a que Goulart abandonara su cargo de estadista. Luego de su fracaso para evitar que Goulart llegara a ser presidente, a principios de 1962, los tres ex ministros, juntos con sus copartidarios, habían redactado una Acta Institucional —recopilada en un texto que presentó el investigador brasileiro José Stacchini un año después de la toma militar de 1964— que fijaría las pautas para gobernar cuando por la fuerza obligaran a que Goulart renunciara al poder; se estipulaban también todos los parámetros para llevar a cabo purgas en el sistema político y en las filas de las fuerzas armadas. Asimismo, designaba la creación de una Junta Militar que gobernaría el país, se disolvían los organismos de representación regionales y se eliminarían los derechos constitucionales que protegían a la ciudadanía (Stacchini, 1964).

En vista de esa fuerte oposición, y debido al desinterés de una enorme fracción del ejército para luchar contra el Tercer Ejército situado en Rio Grande do Sul, los tres ministros renunciaron a sus cargos (Stepan, 1970). Asimismo, sumado el apoyo de Brizola, Goulart también recibió el apoyo de gobernadores que pertenecían a la Unión Democrática Nacional, que en su momento fueron opositores de Getulio Vargas y en un principio del mismo Goulart. En una encuesta

realizada y publicada por el importante periódico O Jornal en Río de Janeiro, la opinión pública se mostraba a favor del nuevo presidente populista: el 91% de los encuestados tenía una opinión favorable sobre su elección como estadista (O Jornal, 1964).

Lo anterior revela y demuestra la fragmentación que padecían las fuerzas militares antes del golpe de Estado. Las milicias eran entonces instrumentos políticos de manipulación de líderes políticos y de gobernadores estatales, algunos de ellos vistos por la cúpula militar como peligrosos líderes de izquierda.

La situación era diametralmente opuesta en 1964 para el mandatario populista: La mayoría de periódicos y legitimadores de opinión exigían la renuncia del presidente; la mayoría de los gobernadores, grupos de activistas feministas, el gremio económico y el sector industrial del país, también exigían con celeridad que el presidente cesara sus funciones a la mayor brevedad. Presionaron a los cuerpos castrenses para que aquellos lo derrocaran con prontitud (Stepan, 1970).

Los militares esperaron entonces a que la opinión pública se pusiera en contra del presidente; hallando el momento propicio, aquél que les permitiera actuar de manera legítima ante la ciudadanía, para organizar y concretar el golpe del 31 de marzo. Sobre el derrocamiento de Goulart, el General Golbery Do Couto e Silva⁷ explicaría que:

Los activistas militares partidarios o contrarios al gobierno son siempre una minoría.

Si un sector de las Fuerzas Armadas desea derrocar a un gobierno, es preciso que

logre convencer a la gran mayoría de oficiales que son legalistas estrictos o,

simplemente, no activistas. Los activistas no desean provocar derramamientos de

⁷ Entrevista realizada al General Golbery Golbery Do Couto e Silva en Brasilia, el 18 de septiembre.

sangre o divisiones en el ejército, de modo que procuran esperar hasta que se forme un consenso unilateral (Stepan, 1970, p. 217).

De esa manera, el célebre autor de *Geopolítica del Brasil*, aseguraba que cuando algunos elementos militares tenían la finalidad expresa de derrocar a Goulart, era necesario que la opinión pública estuviera a su favor; era indispensable que la ciudadanía comprendiera y apoyara las razones por las cuales los golpistas arrebataron el poder al presidente. En su opinión, la misma situación había ocurrido en 1945, cuando Getulio Vargas abandonó el poder por primera vez, también en 1954, cuando se suicidó. Y las intenciones golpistas para evitar el ascenso al poder por parte de Goulart fracasan, debido a que los tres ministros militares y opositores a su designación, no esperaron a que la opinión pública los beneficiara (Stepan, 1970). Para los militares, Goulart era considerado un obstáculo real para implementar la Doctrina de Seguridad Nacional. Sólo había que esperar que la maquinaria de los medios de comunicación y la opinión pública estuvieran a su favor; que todos los estamentos de la sociedad brasilera lo vieran como un peligroso líder comunista, capaz de instaurar un régimen similar al de Fidel Castro en Brasil, para de inmediato actuar en pro de su derrocamiento. En esa dirección, fueron reveladoras las declaraciones del General Luiz Tavares da Cunha Mello⁸, fiel seguidor de Goulart, cuando afirmó: “la propaganda ha convencido a la opinión pública de que Brasil marcha hacia el caos y el comunismo; por eso el pueblo se mostró partidario del golpe, y nosotros carecíamos de poder para resistir” (Stepan, 1970, p. 242).

Luego del golpe, no se hizo esperar una fuerte represión militar que, paradójicamente, también se impuso sobre la clase media. Entonces se reprimieron sindicatos de trabajadores y de

⁸ Entrevista realizada al General Luiz Tavares da Cunha Mello en Río de Janeiro, el 10 de octubre.

campesinos, se eliminaron y vetaron importantes partidos políticos; se limitaron los trabajos de docencia en las universidades y las aspiraciones civiles a ostentar cargos públicos, lo cual iba en detrimento de la clase media, que era la que más accedía a dichos puestos de trabajo (Stepan, 1970). Los militares participaron también en el golpe, porque cuestionaban las relaciones que sostenía Goulart con los cuerpos castrenses: aseguraban que el presidente populista fomentaba la indisciplina y hacía promociones clientelistas adentro de las fuerzas armadas, con aquellos oficiales que lo apoyaran, irrespetando toda la jerarquía militar (Stepan, 1970).

Por otro lado, es posible también analizar las funciones del ejército y cómo éstas cambiaron de manera sustancial, luego de perpetuar el golpe de 1964. Antes de despojar a Goulart del poder, entre 1945 y el 64, en cuanto a relaciones cívico-militares, las fuerzas armadas cumplían un papel moderador, motivaban una pauta moderadora en medio del ajedrez político; en un ambiente de debate en los medios de comunicación, también marcaban muchos comportamientos políticos. Antes del golpe, los medios de comunicación brasileros eran los más avanzados de Sudamérica; una vez instalado el régimen militar, los medios sufrieron un serio revés al vulnerarse el derecho a la información, la libertad de expresión y de prensa. Con la irrupción del golpe de Estado, los militares resquebrajan de tajo dicha pauta de comportamiento, eliminan la pauta moderadora. Cabe preguntarse, en medio de su papel moderador ¿tuvieron éxito los militares como fuerza política antes del golpe de Estado? ¿Tuvieron suficiente legitimidad entre la sociedad civil antes de 1964? La respuesta es sencilla y sin eufemismos: las fuerzas militares demostraron un recurrente activismo político, no se marginaron en la participación política y aceleraron a su vez el activismo militar; fueron fundamentales en la asignación del poder político. La pauta moderadora permitía a las Fuerzas Armadas como “réferis” que mantenían y velaban por el respeto de las reglas políticas entre gobierno,

ciudadanos y la oposición política. No obstante, surgieron en Brasil momentos en los que se cuestionaron abiertamente esos preceptos y entonces el papel de los militares como fuerza moderadora fue perdiendo importancia. Quedaba abierta la posibilidad de que los cuerpos castrenses asumieran entonces un rol activo en la política del país: pasar de conductores, es decir, dirigentes, a moderadores. Al eliminarse la pauta moderadora con la irrupción de un nuevo régimen militar y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, las fuerzas militares asumen un nuevo rol en Brasil (Stepan, 1970).

Los militares habían depuesto presidentes, habían organizado golpes de Estado (como ya se vio en 1945 y 1954), pero nunca habían asumido funciones presidenciales: Eso solo ocurrió luego del 31 de marzo de 1964, y luego cuando el General Castelo fue investido como presidente. Nunca antes la ciudadanía y la opinión pública habían estado a favor de un gobierno militar que, con mano firme, alejara al Brasil del desorden y de la posible instauración de un régimen comunista. Al analizar estudios comparativos entre las demás naciones latinoamericanas y Brasil, en lo referente a las relaciones cívico-militares, es posible comprobar que el nivel de intervención militar en suelo brasilero antes del golpe, fue inferior si se lo compara con sus otros vecinos sudamericanos. Las fuerzas armadas brasileras se caracterizaron por su respeto a la Carta Magna y por actuar bajo el rótulo de fuerzas moderadoras del orden. La pauta moderadora se va al traste con la instalación del régimen militar en 1964. Dicho modelo moderador se caracterizaba, en los golpes, por una coalición cívico-militar: En ese juego estratégico de alianzas se le ponía límites a los militares como lo exigía la Constitución y la ley. Límites que fijaban restricciones expresas a los militares para decidir quién sería el nuevo presidente, lo cual también dejaba sin piso la posibilidad eventual de que uno de los generales asumiera el cargo de estadista. En los golpes de 1945 y 1954, la opinión pública apoyaba los derrocamientos, porque

creían en el papel constitucional de los militares y confiaban que aquellos respetarían los límites expuestos anteriormente (Stepan, 1970). Es decir, había un acuerdo tácito entre civiles y militares —cosa que no ocurrió en 1964— para que, una vez derrocado el presidente, el poder fuera entregado a los primeros. Por eso, antes del 31 de marzo de 1964, los militares golpistas mantenían una comunicación directa y fraterna con los partidos opositores e integrantes de la sociedad sobre el desarrollo del proceso golpista y acataban la designación del nuevo presidente (Stepan, 1970). Asimismo, los militares que apoyaban al presidente derrocado, no eran depuestos de sus cargos: No había purgas de ningún tipo en el seno del ejército. No eran destituidos, más aún, eran destinados a sitios remotos y alejados de los centros de poder y se le ponía restricciones a su promoción en la jerarquía militar (Stepan, 1970).

Ahora bien, en clara concordancia con la Doctrina de Seguridad Nacional y sus postulados de desarrollo, se podría afirmar, a la luz de las tesis de Lyle N. McAlister, en un texto de 1966, que es posible afirmar que las fuerzas armadas brasileñas pertenecían a la Escuela Desarrollista en el ámbito castrense, porque actuaban como un grupo burocrático modernizador que tenía un proyecto definido de construcción nacional. Por tanto, fueron una organización activa en las decisiones políticas del país. Sumado a ser determinantes en el sistema político, algunos pensadores de la Ciencia Política, impartida en la época, afirmaban que los militares son la clave para establecer el orden y orientar a las naciones subdesarrolladas a alcanzar niveles considerables de desarrollo (McAlister, 1966).

Al principio del régimen de Castelo, miembros de la cúpula militar declaraban que las fuerzas armadas brasileñas era una institución nacional que tenía por objetivo integrar al país, evitar todo tipo de fragmentación. Aseguraban que eran parte integral del pueblo (representativos de los estratos más pobres de la población) y que en sus filas no existía discriminación social.

Bajo esta óptica, el ejército derrumba las desigualdades sociales y su sistema organizacional era representativo de la población brasilera. Por tanto, el ejército era la institución más importante para cohesionar la unidad nacional de la patria y aquella que permitía confeccionar la unidad entre regiones apartadas por medio de la construcción de carreteras y caminos, desde los primeros años de la República, para poblar zonas inhóspitas y lejanas (Stepan, 1970).

Pese a las ideas anteriores, lo cierto es que cuando los militares asumieron el control del poder en 1964, Brasil estaba sumergido en conflictos políticos entre regiones y Estados. La división política interna se hallaba resquebrajada. Cada Estado poseía sus propias fuerzas policiales, denominadas milicias, que entraban en choque entre ellas mismas por cuestiones de control territorial. La junta militar que asumió el poder en 1964, fijó políticas expresas para controlar el desorden desatado por las milicias; directrices que le arrebatan el poder sobre ellas ejercido por los gobernadores regionales. El armamento y equipamiento de las milicias no se comparaban al poderío militar desplegado por el ejército brasilero. Es posible inferir que las milicias constituían un serio tropiezo para la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en suelo brasilero (motivaron en muchas ocasiones, grave fragmentación adentro de las mismas) porque no permitían una cohesión real y palpable de las fuerzas armadas del país; contaban con su propio sistema regional de reclutamiento y de manera inevitable entraban en conflicto con las decisiones del Poder Ejecutivo (Stepan, 1970).

Alfred Stepan expone una hipótesis que luego él mismo rechaza: ¿Existe una relación entre la dimensión numérica de un ejército (si tiene mayor número de efectivos, podría ser más influyentes en el campo político) y la intervención e injerencia del ejército en el entramado político? En ese sentido, en 1968, luego de cuatro años de férrea dictadura militar, los efectivos de la Marina (39.000), la Aeronáutica (28.000) y del Ejército (167.000), sumaban 234.000

miembros. Había en los tres estamentos militares, 20.000 oficiales profesionales de carrera, de los cuales 13.000 eran parte activa del Ejército (Stepan, 1970).

En ese mismo período, cuatro años después del clima de inestabilidad económica (una inflación preocupante) y política que caracterizó a la presidencia de Goulart; ahora bajo el mandato del segundo presidente del régimen militar, Artur da Costa e Silva, y en pleno auge de la Doctrina de Seguridad Nacional, el ejército sólo representaba el 0.18% de una población brasilera que ascendía a 89.373.000 millones de habitantes. Dadas estas cifras, Alfred Stepan sostiene, en este caso, que el factor numérico no influyó necesariamente en la injerencia en los asuntos políticos: los militares eran los más importantes actores políticos y sujetaban las riendas del Estado; y demuestra que las convulsiones, crisis y hechos políticos son más determinantes para que los militares intervengan que el número de integrantes que componen el ejército (Stepan, 1970). El investigador estadounidense sustenta en tono contundente, que el Ejército siempre fue—inclusive antes del golpe, en los tiempos en los que gobernaba con mano de hierro Getulio Vargas— la institución más poderosa de la nación en términos políticos, por encima de la Aeronáutica y la Marina. Su intervención (el autor la define, como en todas sus tesis sobre las relaciones cívico-militares, como la pauta moderadora) fue determinante en las crisis sucesivas que sufrió el país (en 1945, 1954, 1955, 1961 y 1964) (Stepan, 1970).

Bajo el mandato de Artur da Costa e Silva en 1968, una parte significativa de las fuerzas armadas brasileñas se hallaba asentada en sectores aledaños a Río de Janeiro y el Estado de Rio Grande do Sul. Al mismo tiempo, atendiendo los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional, el ejército adelantaba la “Operación Presencia”, remarcable política contrainsurgente que tenía la finalidad de distribuir los contingentes de manera equitativa en todo el país, en aras de eliminar de tajo algunos focos de subversión armada que alteraban el orden público en

regiones apartadas de los centros de poder (Stepan, 1970). Sobre esa problemática de orden público, Stepan advierte que “por medio de esta política el ejército esperaba poder desalentar, en razón de su simple presencia, toda posible actividad revolucionaria o, de ser preciso, sofocarla. Dicha política recibió el decidido apoyo de los Estados Unidos” (Stepan, 1970, p. 39). Las mejores bases militares, y con un óptimo equipamiento, se hallaban desplegadas cerca de Río de Janeiro; estaban ubicadas allí como medio de control político. “Los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas y casi todas las escuelas militares más importantes de las tres armas también están en Río de Janeiro” explicaba Stepan en su *Brasil: los militares y la política* (1970, p. 51).

Como ya lo estudiamos, Golbery consideraba al nordeste brasilero como un enclave estratégico para la defensa del Brasil y de Sudamérica frente a posibles incursiones y ataques soviéticos. Precisamente, el nordeste —zona clave para la defensa en bloque del hemisferio occidental— era en ese entonces el territorio más pobre y menos desarrollado del Brasil. Podría ser, por su situación patente de subdesarrollo, una zona propicia para incursiones comunistas que aprovecharían el descontento de la población, debido a la situación de miseria en la que se hallaban sumidos. La “Operación Presencia” se aplicó de manera contundente en la zona. De manera que el atraso socio-económico del nordeste brasilero, frente a las otras regiones del país (las de sur y el centro de Brasil), era notable: como ya fue expuesto, en 1959 se creó un organismo especial de desarrollo para sacar de la hecatombe al nordeste, denominado SUDENE. Dicho organismo tenía jurisdicción en nueve Estados brasileros del nordeste, cuyos habitantes representaban, cuatro años antes del golpe militar, el 33.2 % de la población brasilera.

No obstante, según estudios ponderados, entre 1964 y 1966, solo el 14 % de los estudiantes de una de las escuelas castrenses más respetadas como la Escuela Militar de Brasil, hacían parte del nordeste brasilero, cobijado por las medidas de desarrollo de la SUDENE. Para el ejército

brasileño era indispensable el nivel intelectual de sus efectivos y había una tendencia a profesionalizar a los soldados. El precario sistema educativo del nordeste, ponía en desventaja intelectual a los soldados-estudiantes de la región frente a muchachos de otros lugares, como Rio Grande do Sul. Las exigencias de la academia militar eran, por consiguiente, inalcanzables para la mayoría de estudiantes protegidos por la SUDENE.

Luego de Río de Janeiro, en cuanto a representatividad en Las Fuerzas Armadas, en su segundo orden se encontraba precisamente Rio Grande Do Sul, la región ganadera más importante del país. Contaba con una fuerte presencia militar, debido a ser zona limítrofe con Uruguay y Argentina. De ahí su importancia en los momentos en los que el gobernador Brizola, en 1961, se opuso a los tres ministros militares para evitar que Goulart asumiera el poder.

En otra instancia, en 1966, el gobierno militar de Castelo, ante la ausencia de postulantes, incentivó una nueva política de reclutamiento que mejoró la situación de manera considerable. Dicho autorreclutamiento y las mejoras adelantadas en el pensum de las escuelas militares, contribuyó a aumentar el sentido de pertenencia entre los militares. Pese a lograr ese objetivo, la medida en lo referente a las relaciones cívico-militares, conllevó a eliminar el vínculo que sostenían los jóvenes soldados con la población después de 1964, año del golpe militar (Stepan, 1970).

Sobre lo anterior, cuando los militares no daban señales y no tenían intenciones de celebrar elecciones libres, pues algunos líderes militares consideraban que debían permanecer en el poder quince años más, y luego de cuatro años de dictadura militar adentro de ellas, se afianzó aquella opinión, propuesta en principio por el General Alfonso Albuquerque Lima, de que por no haber una estrecha relación entre civiles y militares, tampoco había vínculos con las elites más poderosas del país, lo cual les daba legitimidad para gobernar. Por eso, ante la negativa de una

posible apertura democrática, según esa óptica particular de los militares, las fuerzas armadas eran la única institución que combatía la corrupción, no tenían intereses particulares, ni tenían la intención de mantener el establecimiento o *statu quo*. Esa filosofía digna de la disciplina militar, les daba las herramientas necesarias y la legitimidad para actuar en defensa de los intereses del país (Albuquerque, 1968).

Desde la llamada “revolución” que promulgaron los militares en marzo 31 de 1964, empezaron a perder apoyo popular: a medida que fue pasando el tiempo, las fuerzas militares se fueron aislando gradualmente de la población civil, fueron perdiendo legitimidad y sus medidas autoritarias se empezaron a notar con mayor fuerza y rigor. Se debatían entre ser la mayor fuerza represora del país o ser el “pueblo en uniforme”, tal como lo sostuvo Juracy Montenegro Magalhães, ex ministro de Relaciones Exteriores de Castelo, en un discurso proferido en Washignton en 1965.

En ese contexto, los militares brasileros limitaban y ponían vetos en las elecciones democráticas, pero tenían toda la libertad para ocupar cargos públicos; a su vez también tenían derecho de acudir y elegir en las urnas. Asimismo, fueron en los primeros años de régimen militar, la organización que más motivó e institucionalizó los debates en torno a la función pública o sobre el sistema político del país. Por ejemplo —en hechos que luego se materializaban en la realidad, en el terreno político y en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional— se desarrollaba un verdadero debate político, institucionalizado y legitimado adentro de las Fuerzas Armadas en el Club Militar de Río de Janeiro. Se desarrollaban votaciones internas alrededor de asuntos públicos (también alteraciones sobre el orden público y de contrarrestar escaramuzas comunistas) que luego repercutían en las decisiones de gobierno (Stepan, 1970).

Muchas veces surgían polémicas y disensos sobre la manera de gobernar, hacer frente a las amenazas de inestabilidad o sobre asuntos económicos de Petrobras. Inclusive la creación de este importante conglomerado petrolero fue propuesta en el club Militar de Río catorce años antes de ocurrir el golpe del 1964. En su momento, asuntos como el retorno de Getulio Vargas al poder, después de algunos años de ausencia en el Ejecutivo, también fue discutido por los oficiales del club: Vargas logró un apoyo notable de los militares que antes habían contribuido a que abandonara el poder en su primer mandato y a que se suicidara cuando ejercía su segunda presidencia en 1954. Lo anterior llevaba a pensar a investigadores como Alfred Stepan, en 1970, que las fuerzas armadas no eran un cuerpo monolítico: había diferencias, facciones opuestas; después comprobaremos a lo largo de este trabajo, que la hipótesis de Stepan era cierta. Había un punto en común entre los militares: La guerra frontal contra el comunismo; no obstante había posiciones contrarias para aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional. Cuando el ejército no está unificado y no es un cuerpo monolítico, en muchas ocasiones se tiende al golpismo (Stepan, 1970).

Mientras el senador Joseph McCarthy desataba una cacería de brujas para eliminar todo vestigio de comunismo en los Estados Unidos, fenómeno político conocido como el “McCartismo”, en Brasil, en el club Militar de Río, La Doctrina de Seguridad Nacional iba ganando cada vez más fuerza, mientras los sentimientos y posiciones anticomunistas se iban agudizando cada vez más entre sus integrantes. En 1952, el grupo autodenominado “Cruzada Democrática”, de fuerte filosofía anticomunista, ganaba sus elecciones internas: 8.289 votos contra 4.489. Por eso, las elecciones permitían sondear la filosofía militar que se imponía en el momento. Por ejemplo, en 1961 ya se detallaba un síntoma de malestar hacia el vicepresidente Goulart que hacía gestiones para asumir las riendas del Estado, luego de la renuncia sorpresiva

de Quadros, presidente que también intentó ganarse el apoyo de los militares para impulsar sus programas de gobierno (Stepan, 1970).

Más aún, durante los primeros años de los gobiernos militares, la Doctrina de Seguridad Nacional exigía a los oficiales y soldados una estricta preparación académica y militar. Primero, los reclutas debían atender cursos durante cuatro años en la Academia Militar das Agulhas Negras. Si deseaban continuar ascendiendo en el ejército, luego debían tomar clases en la Escuela para Oficiales Inferiores. En el caso de aspirar a ser promovido como general, o ser integrante del Estado Mayor del Ejército, todos los oficiales que provenían de los cuatro cuerpos del ejército y de las escuelas de guerra, tenían la obligación de aprobar el examen de admisión de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército.

En promedio, solo el 25% de los aspirantes lograba resultados satisfactorios en dicha prueba. En ese lugar —importante centro militar que fomentaba la lucha contrainsurgente y anticomunista— debían permanecer durante tres años. Luego, requisito indispensable de la Doctrina, debían permanecer nueve meses en la Escuela de Comando y Estado Mayor en los Estados Unidos. También, si lo deseaban, podían tomar postgrados en el país del norte o en Francia con todas las facilidades para ello; además, era norma para aspirar a cargos de general de brigada o coronel, y debían tomar cursos en la Escuela Superior de Guerra del Brasil, el más importante centro de adoctrinamiento que tuvo la Doctrina de Seguridad Nacional en el país (Stepan, 1970).

Los militares después del golpe de 1964: Sus políticas de gobierno e implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional

Luego que Goulart abandonó el poder, argumenta Riordan Roett, la incertidumbre se apoderó del Congreso, de los partidos políticos, los civiles y del sistema político brasileiro. Nadie

sabía qué camino iban a tomar los nuevos acontecimientos. Algunos miembros del Congreso sostenían que los militares asumirían el poder luego de un periodo breve y después le transferirían el poder a un gobierno civil. Unos pocos pensaron que los militares no entregarían el poder fácil y sujetarían las riendas del Estado por tiempo indefinido. Pronto descubrieron que las especulaciones y la incertidumbre llegarían a su fin. Todo quedó esclarecido cuando los militares —con el apoyo de tecnócratas civiles, industriales, habilidosos hombres de negocio y miembros de la clase media— decidieron que había llegado el momento de instaurar un régimen militar (Roett, 2010).

Dicha coalición tenía el pensamiento de que Brasil estaba sumido en el caos, las instituciones se encontraban amenazadas y se vivía un clima generalizado de crisis, con una economía colapsada, ambiente nefasto motivado por el comunismo. Por tanto era necesaria la mano dura de los militares. La clase política se encontraba dividida sobre las decisiones militares, quienes consideraban que éstos eran ineptos para gobernar. Por eso, consideraban que las viejas políticas económicas habían fallado y que se necesitaba con urgencia una drástica cirugía para reestructurar el sistema (Roett, 2010).

Se necesitaba, entonces, implementar un gobierno autoritario burocrático, término acuñado por el reconocido politólogo argentino Guillermo O'Donnell, para describir una forma de dictadura que se asocia en principio con una institución de naturaleza militar —una junta militar— que carece de un líder unipersonal. En ese sentido, este modelo de régimen militar cuenta con dos metas fundamentales: el desarrollo económico y la preservación del orden. En Brasil, el autoritarismo burocrático se tradujo en un eficiente sector público en materia de desarrollo económico, con énfasis especial en la Seguridad Nacional y la defensa, bajo la asesoría de tecnócratas y conducido por una junta militar. Todos los asesores presidenciales y el

gabinete de la primera presidencia militar, liderada por el General Humberto de Alencar Castelo Branco, provenían de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, quienes decían tener las fórmulas precisas para combatir a la subversión y el comunismo, y llevar al país a un óptimo desarrollo económico (Roett, 2010).

Pronto surgieron diferencias notables en las Fuerzas Armadas sobre la manera de gobernar: los “entreguistas” que empezaron a ser conocidos como los *Sorbonne* —afines a la Escuela Superior de Guerra, encabezados por el general Humberto de Alencar Castelo Branco— eran partidarios de restaurar plenamente la democracia, luego de la implementación de las medidas requeridas para sanear al país. La otra facción opositora era conocida como “los militares de línea dura”, bajo la dirección del General Artur da Costa e Silva, quien proponía la configuración de un Estado fuerte, netamente militar y sin contar con la participación de los civiles en el gobierno. Creían que los militares debían mantenerse en el poder de manera indefinida, que era imperativo combatir todo aquello que proviniera de la izquierda y poder contar con el tiempo suficiente para restaurar la ley y el orden (Roett, 2010).

Luego de conocerse estas marcadas diferencias, los *Sorbonne* ganaron el primer debate sobre la naturaleza de gobierno que asumiría el régimen militar en su primera fase de implementación. Decidieron mantener vigente la Constitución Política de 1946, pero eliminando y modificando todo aquello que les impidiera gobernar; se mantendría también el funcionamiento del aparato legislativo y las elecciones para gobernadores estatales, a diferencia de otras dictaduras de carácter unipersonal, que aparecieron gracias a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina. Por ejemplo las dictaduras del cono sur – algunas juntas militares pese al poder ostentado por el Comandante General, a excepción de Stroessner que fue un régimen personalista- al asumir el mando, eliminaron de tajo todas las

instituciones democráticas y vetaron todo intento de participación democrática a los ciudadanos. La primera etapa del gobierno militar en Brasil reflejaba todas las tendencias (antagonistas entre ellas) que eran patentes dentro de las Fuerzas Armadas, entre “lo moderado”, que pretendía llevar al país, luego de aplicar las medicinas necesarias, hacia la democracia; y “lo duro”, que quería gobernar con puño de hierro, sin ningún tipo de contemplaciones hacia la oposición y los grupos de izquierda (Roett, 2010).

El 2 y 3 de abril, el presidente estadounidense Lyndon Johnson felicitó públicamente a los golpistas. De inmediato, el Departamento de Estado comenzó a gestionar nuevos proyectos de asistencia técnica, económica y financiera para ayudar al nuevo gobierno militar en Brasil. Ese mismo día, paradójicamente, la Sociedad Rural Brasileira (importante agremiación campesina) publicó un comunicado en el que exigían la instalación de un gobierno militar provisional y la realización de purgas en el sistema político. Era imperativo que los militares comenzaran con prontitud una revolución. Por otro lado, la Unión de Mujeres de Río, agremiación de mujeres católicas y anticomunista, opositora de Goulart, publicaba un manifiesto en el que favorecían la elección de Castelo como presidente de la nación, ya que lo consideraban un militar honesto, sin vínculos políticos, idóneo para alejar a Brasil de la amenaza comunista (O Estado, 1964).

Una semana después del derrocamiento de Goulart y de la promulgación de la “Revolución Brasileira”, como fue bautizada por los militares golpistas, se crea el Comando Superior Revolucionario compuesto por los jefes de los principales cuerpos de las fuerzas armadas (El ejército, la Aeronáutica y la Marina). Dan a conocer un documento que denominaron como la Primera Acta Institucional. Estipulaba que el movimiento revolucionario había depuesto de manera legítima al presidente Goulart y contaba con las atribuciones legales y legítimas para establecer un nuevo gobierno. Publicada el 9 de abril, el documento establecía el nuevo rol que

asumirían las fuerzas militares en el Estado: ya no eran moderadores; una Junta Militar manejaría los destinos de Brasil. Se estipularon purgas adentro de las fuerzas militares; se destituyeron servidores públicos y congresistas opositores al régimen militar, es decir, se les retiraban sus derechos políticos por diez años. La Primera Acta Institucional echó por tierra la idea de un gobierno militar provisional, ya que, para su implementación, era obvio que los militares permanecerían en el poder de manera indefinida (Stepan, 1970). De los 29 oficiales que fueron promovidos sin criterio profesional por Goulart, solo cinco prestaban servicio activo en los registros militares de 1968. De 22 generales beneficiados por el presidente populista, solo 3 pertenecían a las Fuerzas Armadas ese mismo año (Fuerzas Armadas Brasileñas, 1968).

La Primera Acta Institucional estipulaba que sólo el presidente tenía la facultad para determinar el presupuesto nacional y todo lo referente al gasto público del Estado. Esta determinación estaría estipulada por decreto presidencial. El Acta también despojaba a los congresistas de inmunidad a la hora de ser juzgados por delitos; y el estadista tendría plenos poderes para cancelar los derechos políticos de congresistas, y actores del ruedo político, durante 10 años (Roett, 2010). Simultáneamente, el documento establecía las bases para crear unidades de inteligencia en la Policía y las Fuerzas Armadas, para perseguir y eliminar a eventuales miembros de la izquierda, el comunismo y la subversión armada, resolución que le abriría campo a la tortura y la desaparición forzada. En la primera fase del régimen militar, la prensa mantendría su independencia y se aseguraría la libertad de expresión y de opinión; se mantenía, a su vez, el *habeas corpus* para aquellos que fueran privados de la libertad o capturados por fuerzas policiales o por el Ejército (Roett, 2010).

El 11 de abril de 1964, el Congreso de la República, presionado por el Comando Superior Revolucionario, designa al General Castelo como el nuevo presidente de los brasileros. Para su

nombramiento, se realizaron elecciones indirectas y contó con el apoyo de la clase media, sectores de la oposición al gobierno de Goulart y de los líderes golpistas, ya que lo consideraban un militar apolítico. Castelo era un aliado incondicional de los Estados Unidos desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Fue un destacado oficial —inclusive, condecorado— de operaciones de la Fuerza Expedicionaria Brasileira (FEB) en la ocupación de la Italia fascista. Había sido también un alumno sobresaliente de la Escuela de Estado Mayor de Francia, donde conoció de primera mano las estrategias y tácticas contrainsurgentes, adelantadas en Argelia. Castelo se había desempeñado como docente y conferencista en la Escuela Superior de Guerra y tenía estrechos vínculos con ese centro de adoctrinamiento militar: era partidario de sus teorías sobre contrainsurgencia, seguridad nacional y desarrollo económico. El nuevo presidente se trazó la meta de adaptar los postulados de la Escuela en su programa de gobierno. Al asumir el cargo en el Congreso, prometió que llamaría a elecciones presidenciales en 1965. Los hechos contradirían lo anterior: a medida que fue pasando el tiempo, los militares consideraron que eran los únicos capaces de llevar el país a la estabilidad, para encaminarlo hacia un óptimo modelo de desarrollo económico, eliminando de lleno al comunismo y a la subversión armada. Al año siguiente de su designación, los militares continuaron aferrados al poder. Y luego Artur da Costa e Silva lo sucedió como estadista en 1967.

El 11 de abril también se efectuó la destitución de 122 oficiales que no participaron en el golpe, debido al temor del Comando Superior Revolucionario de que aquellos fraguaran una contrarrevolución. Durante 1964 acontecieron purgas similares. A muchos oficiales se les notificó que, debido a su “débil espíritu revolucionario” y a su desdén al movimiento golpista, nunca serían promovidos y ascendidos en el sistema de promociones. Eran acciones deliberadas

para llevar a esos oficiales a renunciar a sus puestos. Los líderes militares, sin proponérselo, comenzaban a crear fisuras en su estructura, que posteriormente llevaría a divisiones internas⁹.

No buscaban el apoyo para legitimarse por medio del Congreso. Sus promotores aseguraban que la revolución se legitimaba a sí misma. Por medio de la Primera Acta Institucional se destituían 40 congresistas opositores al nuevo régimen militar y se suspendían sus derechos políticos durante 10 años, tiempo en el que no podían aspirar a ocupar cargos públicos. Esa disposición se hizo efectiva el 10 de abril de 1964¹⁰. El 11 de abril de ese año, el Comando Superior Revolucionario realizó una enorme purga dentro de las fuerzas armadas: 122 oficiales afectos a la administración de Goulart fueron destituidos de sus cargos¹¹. Algunos integrantes de la alta jerarquía militar que avalaron el golpe, consideraban que algunos militares activos en el terreno político, eran corruptos y estaban influenciados por el comunismo. Era imperativo desarrollar purgas para eliminar “las manzanas podridas” en el ejército.

Cabe destacar el hecho de que en el momento de los militares asumir el poder, luego del 31 de marzo, de inmediato se produjeron fricciones y divisiones internas en las Fuerzas Armadas del país. A diferencia del apoyo que tuvo Castelo entre civiles, industriales y la Escuela Superior de Guerra al principio de su gestión, en los cuerpos castrenses no hubo un consenso general sobre las directrices impartidas por el presidente, incluso eso se hizo notorio entre algunos golpistas. A su vez, aquellos que participaron de manera activa en el golpe y no fueron tenidos en cuenta para ocupar cargos en el alto gobierno, ya sea en el gabinete o como asesores del mandatario, no dudaron en criticar con vehemencia todas las iniciativas del Ejecutivo,

⁹ Las decisiones sobre las purgas de oficiales contrarios al golpe del 31 de marzo, aparecieron publicadas en el Diario Oficial, primero el 11 y 14 de abril. Luego, el 13, 24 y 28 de septiembre. Posteriormente el 7 y 8 de octubre.

¹⁰ Primer Acta Institucional escrita por el Comando Superior Revolucionario, promulgada el 9 de abril de 1964. Publicada en el Diario Oficial.

¹¹ Purgas al interior de las fuerzas armadas, estipuladas por el Comando Superior Revolucionario, el 11 de abril de 1964.

convirtiéndose en críticos asiduos del régimen militar. Dichas fricciones y desacuerdos llevaron al desencadenamiento de conflictos políticos en las tres armas de las fuerzas militares. Alfred Stepan ilustra este fenómeno, con el ejemplo del General Olimpo Mourao Filho, militar activo en el golpe, pero ignorado en el momento en que Castelo conformó su gabinete; también se sintió decepcionado cuando se desdeñó su designación como presidente de Petrobras o cuando no se le tuvo en cuenta para ocupar el cargo de General del Primer Ejército. Entonces se fue lanza en ristre contra el régimen, aseguró que el mandatario contradecía las motivaciones golpistas del 31 de marzo y, sorpresivamente, adelantó contactos con el Movimiento Democrático Brasileiro, fuerza opositora del gobierno militar, para ser el candidato presidencial en las próximas elecciones (Stepan, 1970), situación que nunca se llegó a materializar, puesto que los electores solo acudieron a las urnas 25 años después, en 1989. El General Olimpo Mourao Filho no fue un caso aislado de oposición dentro de los cuerpos castrenses. Lo mismo sucedió con el General Amaury Krueel, quien en un principio no apoyó el golpe del 31, quiso llegar a la presidencia en oposición a Castelo. Al perder las elecciones, comenzó a criticar abiertamente al nuevo régimen; decía que el verdadero enemigo de Brasil no era el comunismo, sino que éste se hallaba oculto adentro de la fuerza golpista. El General Pery Constant Bevilaquia, quien en su momento había criticado con vehemencia a los sargentos y a las medidas populistas de Goulart para solucionar la revuelta que habían protagonizado, aseguró que el régimen militar había convertido al país en un inmenso cuartel. Se atrevió a decir que la Doctrina de Seguridad Nacional, cuya manifestación más plausible fue la Ley de Seguridad Nacional, importante medida para contener a la subversión y al comunismo, era una especie de estado de sitio permanente y “representaba una amenaza innecesaria para todo el pueblo” (Pery, 1967)¹². En medio de su desazón, fue elegido

¹² Reacciones publicadas en dos diarios de importante circulación nacional: *Jornal do Brasil*: Pery observa el país en

diputado por el partido de oposición al gobierno militar. La misma situación ocurrió con militares de línea dura, como el general Justino Alves Bastos y el general Muricy, quienes aspiraban a cargos públicos en el régimen pero fueron ignorados en el momento de la designación.

Lo cierto es que el control ejercido por el régimen sobre el sistema político, no solo perjudicó a los civiles, a su vez muchos militares también vieron coartados sus derechos para participar en el orbe político, lo cual desencadenó en conflictos y divergencias dentro de las Fuerzas Armadas. Por tanto, es posible inferir que aquellos líderes militares que participaron en la planificación y ejecución del golpe, y fueron desdeñados para ocupar cargos públicos, fueron, si se quiere, los primeros opositores a la Junta Militar, posiciones que pusieron en entredicho la unidad de las fuerzas militares en el entramado político, pero también para aplicar las políticas más agresivas y contundentes que proponía la Doctrina de Seguridad Nacional para repeler el comunismo.

Los militares creyeron que para poder impulsar su proyecto político militar, para poder consolidar la Doctrina de Seguridad Nacional, debían permanecer en el poder indefinidamente, así Castelo hubiera expresado que su gobierno era provisional y que llamaría a elecciones en 1965 para gobernadores. Para darle un matiz más democrático a su administración, decidió mantener abierto el Congreso. A medida que pasó el tiempo, se conocieron las intenciones de los militares: Su proyecto estaba estipulado para ser ejercido a largo plazo. Los militares poseían una estrategia política consensuada y compartida por todos sus integrantes, reflejada en una abierta ideología anticomunista y contrainsurgente, que chocó de manera inevitable contra las

estado de sitio permanente, artículo del 17 de marzo de 1967. También en Folha de Sao Paulo: "Pery: el país es un inmenso cuartel", nota publicada el 18 de marzo de 1967.

movilizaciones de masa como las protestas, los sindicatos, las huelgas (Stepan, 1970). Para impulsar su proyecto geopolítico de Seguridad Nacional y al gobernar a largo plazo, pese a las intenciones del presidente, comenzaron a reprimir las ligas agrarias y los sindicatos. Más aún, los militares, para poder imponer su forma de gobierno, también debían controlar los centros de pensamiento: Algunos intelectuales opositores fueron perseguidos, se realizaron despidos masivos de profesores opositores en las universidades públicas y, como ya se mencionó en este trabajo, desde los inicios del régimen militar se realizaron purgas en el Legislativo. Luego de dos años de gobierno, la estructura política y económica que impulsó en un principio Castelo, se modificó sustancialmente, lo cual puso de manifiesto un conflicto interno en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, la oposición civil declaró a los militares disidentes como la “oposición legal” del país; hicieron todo lo que estuvo a su alcance para seducirlos, hacerlos parte de sus agremiaciones políticas y enemistarlos aún más con el gobierno Central (Stepan, 1970).

La pauta moderadora era eliminada de tajo, los militares eran los amos y señores de Brasil, tal eliminación no ofrecía ninguna posibilidad de establecer coaliciones con los civiles y dejaba el terreno abonado para aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional, para eliminar todo brote de subversión que apareciera en el país, esto por medio de la “Operación Presencia” y con el apoyo resuelto de la administración de Lyndon Jonhson en los Estados Unidos.

Se formuló entonces el Documento LEEX, elaborado en abril de 1964 por el nuevo gobierno militar de Castelo, en el que culpaban de la situación (con una inflación por las nubes) a los sindicatos que militaban en la política junto a sus copartidarios comunistas; generaron una tendencia inflacionaria de serias implicaciones políticas. También denunciaban que los militares eran objeto de abuso por parte de las medidas populistas de la presidencia de Goulart.

En los primeros meses de gestión de Castelo, el régimen encontró una fuerte oposición a sus políticas en el paupérrimo nordeste brasileiro. Empezaron los arrestos masivos y la represión militar, pero curiosamente se les mantuvo el *habeas corpus* a los detenidos acusados de subversión. Se vetó el Sindicato Nacional Estudiantil, uno de los grupos de izquierda más grandes de la región. Los militares entraron por la fuerza a la Universidad de Brasilia, arrestaron a docentes y alumnos, e hicieron renunciar a aquellos docentes que consideraban que era fichas disfrazadas, e infiltradas, del comunismo y de los grupos insurgentes. Los líderes agrarios fueron perseguidos hasta la saciedad por el nuevo régimen militar. Asimismo, aquellos políticos afectos a la izquierda, que hubiesen colaborado con el comunismo, perdieron sus derechos y muchos terminaron en la cárcel. Los congresistas y jueces que fueron afines a Goulart perdieron sus antiguas posiciones y muchos se vieron forzados a exiliarse (Roett, 2010).

Cuando la Junta Militar se instaló en el poder, una facción de la Aeronáutica brasileira dio a conocer a la luz pública un manifiesto que proponía una purgación total del sistema político: La Doctrina de Seguridad Nacional prendía motores. Proponían las siguientes proposiciones para depurar el sistema político: Renuncia inmediata de los diputados afines al comunismo en el país. La suspensión de sus funciones públicas. Renuncia y retiro de los oficiales adeptos al comunismo que se encontrasen en la filas de las fuerzas armadas. La captura de estudiantes de izquierda o comunistas en el ejército. Despido de comunistas que ocuparan cargos públicos en el alto gobierno y otros estamentos del Estado. Declarar como enemigos del régimen a reconocidas figuras políticas, como el depuesto presidente Goulart, Leonel Brizola, Dante Pellacini, Darcy Ribeiro, Pinheiro Neto, entre otros, y retirarles a éstos sus derechos políticos; también negarles la posibilidad de aspirar a cargos públicos (Stacchini, 1965).

En ese orden de ideas, el Documento LEEX¹³, declaraba que:

Las Fuerzas Armadas lamentan el proceso de desmoralización que amenaza socavarlas como resultado del pernicioso vínculo entablado entre los sindicatos y los comunistas, a quienes incluso algunas autoridades gubernamentales denominan el Quinto Ejército. Como resultado de las demagógicas y anárquicas políticas salariales, se creó en la sociedad brasileña un nuevo grupo privilegiado a costa de muchos otros. Debido a la inflación galopante y los insuficientes reajustes salariales, los militares han sido objeto de nuevas privaciones y abusos (Stepan, 1970, p. 200).

Lo cierto es que el golpe del 31 de marzo fue la respuesta de los militares, de algunos sectores de la sociedad civil y de otros grupos políticos, a la cuestionable eficiencia y legitimidad del sistema político, cuyo desgaste había empezado desde la renuncia de Quadros en 1961.

En ese orden de ideas, el Documento LEEX señalaba que “las Fuerzas Armadas no aceptarán el juego destinado a dividir a los sectores integrantes de su institución, socavar su disciplina, destruir su eficiencia y, por último, reemplazarlas por una versión del ejército rojo o milicia cubana” (Stepan, 1970, p. 200). El ejército sujetaba las riendas del Estado: los cambios de reestructuración del sistema político sólo podían ser adelantados por un régimen militar. Mientras se encontraban paliativos para mejorar la situación, los militares consideraron que debían quedarse en el poder el tiempo necesario para sanear el sistema (Stepan, 1970).

Antes del golpe del 31 de marzo, los generales del ejército observaban con preocupación el modus operandi de numerosas Ligas Agrarias (sindicatos de labriegos) que se tomaron vastos territorios del nordeste brasileño por la fuerza. El nordeste —como lo había expuesto Golbery Do

¹³LEEX significaba “Documento de lealtad al Ejército”. Fue emitido y reproducido de forma oculta a principios de 1964, cuando Goulart se hallaba en la cuerda floja.

Couto e Silva—, constituía un importante enclave estratégico para contener posibles ataques del comunismo soviético desde África. El problemático gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola, apoyó y financió la creación de grupúsculos revolucionarios, que bautizó con el nombre de “los grupos de onze”. Dichas agrupaciones, aunque no se consideraban comunistas, utilizaban la retórica propia del castrismo sobre la reforma agraria, el poder, la manera como se debía repartir la riqueza en zonas empobrecidas y abandonadas por el Estado (Stepan, 1970).

Luego del golpe, el ejército no estaba dispuesto a tolerar protestas en las calles, o manifestaciones en contra de sus políticas, ni grandes movilizaciones de masa. Las Fuerzas Armadas tenían el mandato constitucional y la legitimidad necesaria para reprimirlas; era su esencia, su razón de ser, era lo que ellos disponían para dirigir al país a puerto seguro, luego de un lustro de decadencia, frustración e inestabilidad institucional. Lo cierto es que entre 1964 y 1968, existió un notable desarrollo económico; pero al mismo tiempo, se dio una fuerte represión militar a movilizaciones de masas propuestas por ligas campesinas, sindicatos, estudiantes y opositores del gobierno. Entre 1968 y 1970, la Doctrina de Seguridad Nacional tomó un curso oscuro: su férrea aplicación llevó a que se multiplicaran los casos de torturas a integrantes de la oposición, líderes comunistas, sindicalistas y estudiantes. Asimismo, pese a los éxitos económicos, las clases sociales más pobres debieron soportar la política de estabilización fiscal del régimen militar. Para 1968, el gobierno del segundo presidente militar Artur da Costa e Silva, redactó la Quinta Acta Institucional, que supuso un duro revés para la democracia: Los militares no llamarían a elecciones y permanecerían en el poder el tiempo que consideraran necesario. El gobierno militar, que en su momento se había declarado provisional, era para entonces una dictadura militar; y las mismas fuerzas armadas sufrían una acentuada crisis interna, reflejada en grupos opuestos que tenían visiones totalmente diferentes sobre las decisiones de gobierno. El

régimen militar se tornó más autoritario; quería a su vez controlar todos los aspectos de la vida cotidiana (sus acciones eran evidentemente totalitarias) (Stepan, 1970).

Sobre el ambiente de represión y torturas acaecido en Brasil, gracias a la férrea aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, Eugenio Gómez Martínez ofrecería un panorama desolador en materia de Derechos Humanos en 1974, luego de diez años de régimen militar, al citar un famoso informe de Amnistía Internacional:

Doce mil prisioneros políticos, quince mil exiliados, quinientos muertos a causa de tortura o desaparecidos. Dos mil procesos políticos cada año. Las mujeres son torturadas delante de sus maridos, los hijos ante sus padres y viceversa. La mayor parte de los presos políticos son atormentados delante de otros prisioneros, si bien cada una de las víctimas puede citar varios testigos de sus sufrimientos (Gómez, 1974, p. 53).

El informe continúa con las siguientes descripciones:

Uno de los lugares de tormento ha sido instalado en el quinto piso del Ministerio de Marina, en Río de Janeiro, al lado de las oficinas de la misión naval de los Estados Unidos. Unos militares norteamericanos testimoniaron en cierta ocasión haber oído gritos y haber visto salir hombres torturados (Gómez, 1974, p. 53).

La alianza anticomunista y contrainsurgente con los Estados Unidos

En cuanto a la participación de los Estados Unidos, Alfred Stepan explica que existían dos posiciones opuestas sobre el asunto: Algunos observadores sostuvieron que el gobierno de Johnson fue el principal auspiciador del golpe perpetrado bajo el liderazgo del Comando Superior Revolucionario a Goulart. Otros analistas argumentaban que el gobierno de los Estados Unidos era ajeno a las intenciones golpistas. En ese sentido, el embajador estadounidense de ese

entonces, Lincoln Gordon afirmó que “el movimiento que derrocó al presidente Goulart era en un 100%, no un 99.44%, sino un 100% brasilero. Ni la Embajada Norteamericana ni yo, personalmente, desempeñamos papel alguno en el proceso” (Gordon, 1966, p. 44, 45).

El investigador estadounidense aboga para que no se tomen a pie juntillas las dos posturas que considera reduccionistas. Sin embargo, el escritor propone, a su vez, que el gobierno de los Estados Unidos respaldó y dio apoyo al Comando Superior Revolucionario una vez asumido el poder. Entonces las presiones ejercidas por el gobierno de Lyndon Johnson tuvieron mayor vigor para combatir al comunismo en Brasil (Stepan, 1970), comparadas con las presiones ejercidas en las relaciones bilaterales sostenidas con otros países de la región, a excepción —por razones obvias de antagonismo—, de Cuba en cabeza de Fidel Castro y de Perú, en 1968, bajo el liderazgo del dictador desarrollista Juan Velasco Alvarado.

Lo cierto es que el sucesor de John Fitzgerald Kennedy en la Casa Blanca, consideraba a Goulart como un peligroso líder populista de izquierda. Su administración puso todo el empeño por debilitar al gobierno brasilero en la esfera económica y política. Todas esas maquinaciones habían comenzado nueve meses antes de darse el golpe del 31 de marzo. No hay un consenso general, pero lo cierto es que participara o así no lo hiciera, el gobierno de los Estados Unidos estaba al tanto de las intenciones de los líderes golpistas. En 1963, Goulart agudizó mucho más sus posturas y sus programas de gobierno de tipo populista, situación que prendió las alarmas y llevó a los Estados Unidos a asumir una postura sin tapujos de oposición hacia el gobierno brasilero. Se le retiró el apoyo financiero a Brasil y no se volvieron a formular ayudas de tipo asistencialista. Se comenzó a financiar y a apoyar a destacados líderes de la oposición en Brasil, bajo una política liderada por el Departamento de Estado, que se rotuló con el slogan: “fortificar islas de cordura en Brasil” (Stepan, 1970, p. 151).

El Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, Thomas C. Mann, sobre la situación en Brasil, expuso ante el Congreso de los Estados Unidos, en marzo de 1964, la inocultable alegría que embargaba a la administración de Lyndon Johnson por el derrocamiento de presidente brasilero y la llegada al poder de un eventual régimen militar:

No sé si con anterioridad, pero en enero, cuando llegué aquí, teníamos conciencia de que en Brasil estaba produciéndose un rápido desgaste que llevaba al comunismo. Incluso antes de mi llegada habíamos instrumentado ya una política destinada a ayudar a ciertos gobernadores estatales. Tampoco brindamos ninguna ayuda financiera para respaldar la balanza de pagos, presupuesto nacional, etc., que pudiera beneficiar directamente al gobierno central de Brasil. Todo eso se interrumpió en la época de Goulart (Mann, 1965, apéndice II, p. 21).

El gobierno de los Estados Unidos encontró afinidades y empatías con los sectores conservadores de las Fuerzas Armadas y con una clase política que consentía y daba su apoyo a una alianza con la potencia del norte. Lyndon Johnson felicitó públicamente a los líderes golpistas, incluso antes de que Goulart escapara al exilio hacia Uruguay. De inmediato, Lincoln Gordon, embajador estadounidense en Brasil, propuso aumentar el presupuesto de apoyo al Comando Superior Revolucionario. Aseguró con optimismo que la revolución emprendida por los militares era “uno de los puntos críticos de inflexión en la historia mundial de mediados del siglo XX” (Gordon, 1970, p. 379). Brasil se convertía así en el principal aliado sudamericano para exponer sus teorías contrainsurgentes y anticomunistas en pro de la defensa del hemisferio occidental.

Acto seguido, Lyndon Johnson puso a disposición del nuevo gobierno, dirigido por el General Castelo, todo tipo de ayudas económicas y financieras, asistencia técnica y asesoría

militar, para consolidar la lucha contrainsurgente en territorio brasileiro. El aparato militar estadounidense conocía a plenitud la realidad política brasileira: el General Vernon Walters, agregado militar de los Estados Unidos en Brasil, era un avezado analista de política brasileira y un aliado incondicional de las fuerzas armadas brasileiras desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando la FEB prestó un apoyo irrestricto a los aliados en los campos italianos bajo la tutela de Eisenhower (Stepan, 170).

En ese contexto, en el terreno de la Doctrina de Seguridad Nacional, como ya lo expusimos, los Estados Unidos prestaban ayuda técnica, militar, ideológica y financiera en la mayoría de países de la región, a excepción de Cuba bajo los influjos de su Revolución Cubana. Las políticas militares estadounidenses estaban encaminadas a prestar programas educativos de defensa y contrainsurgencia a los militares brasileiros, que comenzaron a capacitarse en la Escuela de las Américas en Panamá, también en Fort Leavenworth. Las clases y materias eran impartidas gracias a las doctrinas contrainsurgentes del Colegio de Defensa Interamericana con sede en Washington.

Destacados analistas políticos estadounidenses como Willard F. Barber y C. Neale Ronning, destacan que desde los tiempos de Kennedy —y ahora con su sucesor en pleno 1964— la política más importante de los Estados Unidos en relación a América Latina era la contrainsurgencia y las acciones cívicas y de carácter asistencialista, como “la Alianza para el Progreso”. Según los argumentos de estos dos investigadores, no solo era importante la seguridad del hemisferio, también era importante y central la defensa de la seguridad interna de cada país. Era imperativo combatir y eliminar a las guerrillas de naturaleza comunista que se encontraban haciendo desmanes y alterando el orden público en países como Brasil. Para ello, el gobierno demócrata de Lyndon Johnson impulsó una agresiva propaganda en Brasil y en

América Latina que fomentaba la premisa de que los ejércitos latinoamericanos debían combatir por igual a la subversión armada (aliada de los totalitarismos comunistas) y al subdesarrollo por igual (Barber & Neale, 1966).

Desde luego, los Estados Unidos de América reconocían a Brasil como un incondicional y aguerrido aliado en varios frentes de batalla y en contextos diferentes, incursiones nunca asumidas por ninguna otra nación sudamericana, tal como lo expone R. Reynolds (Reynolds, 1966). Brasil estaba dispuesto a ser una potencia con peso en el orden mundial: Primero, en la Segunda Guerra Mundial, con la participación de la FEB; y luego, fue ficha clave en la integración de tropas desplegadas por las Naciones Unidas, para conservar la tranquilidad y la armonía en el Canal del Suez, en territorio egipcio. Brasil también participó de manera activa en los cuerpos de paz de la ONU, en la guerra del Congo en territorio africano (Reynolds, 1966).

Golbery Do Couto e Silva, en 1959, ya había afirmado que Brasil tenía el destino manifiesto de ser una potencia con peso en el mundo; por eso su especial atención a estudiar las ideologías promulgadas por las dos superpotencias de la Guerra Fría. Los militares brasileros, estudiaron a fondo conceptos como “la guerra total atómica”, la “guerra limitada” (Caso Vietnam y Corea) y al mismo tiempo, con igual o mayor importancia, los mecanismos bélicos para derrotar a la sedición interna. En ese sentido, el régimen militar enviaba siempre a dos oficiales de las fuerzas armadas al U.S. *Army Command and General Staff College de Fort Leavenworth* con la misión expresa de traducir del inglés al portugués la revista *Military Review*, importante publicación del ejército estadounidense que publicaba artículos especializados en lucha contrainsurgente (Stepan, 1970).

Para el gobierno de los Estados Unidos era incuestionable mantener la alianza con Brasil en los tiempos de la Guerra Fría, la nación más grande Sudamérica que limitaba con la mayoría

de los países de la región, a excepción de Chile y Ecuador. Brasil era visto como una enorme masa de tierra, un vasto territorio que eventualmente, siendo conquistado por guerrillas de extracción comunista, podría poner en peligro los intereses estadounidenses en la región.

Por tanto, era indispensable contar con cuantiosos recursos económicos para mantener a la Junta Militar brasilera como un aliado irreductible de la Casa Blanca; Brasil fue impulsado como un destacado enclave anticomunista en Sudamérica: la misión estadounidense USAID encargada de financiar y apoyar al Brasil, fue el tercer programa, en orden de importancia, financiado por el gobierno de los Estados Unidos en todo el globo terráqueo. Una misión estadounidense compuesta por militares, académicos y civiles viajó a Brasil para crear la Escuela Superior de Guerra y permaneció en territorio brasilero hasta 1970. Estados Unidos (entre los gobiernos de Johnson y Nixon) era el único gobierno del exterior que mantenía un oficial permanente en la planilla de profesores de dicho colegio militar brasilero.

A la par, los alumnos de la Escuela Superior de Guerra realizaban habitualmente giras por los Estados Unidos, en las que visitaban los complejos militares más preponderantes de ese país; e inclusive eran recibidos personalmente por el presidente en la Oficina Oval de la Casa Blanca (Stepan, 1970). No obstante, Alfred Stepan en su libro *Brasil: los militares y la política* sostiene una tesis particular sobre la lucha contrainsurgente en el país sudamericano: Había un interés creciente por eliminar a la subversión y sedición interna, pero que no era directamente orquestada por los Estados Unidos y sus centros de adoctrinamiento, o por los centros de capacitación que los militares brasileros frecuentaban en el país del norte. El investigador norteamericano expone que reconocidas figuras, como el estratega brasilero Golbery Do Couto e

Silva¹⁴, aseguraban que Brasil había desarrollado su propia Doctrina de Seguridad Nacional. Para ello cita al autor de *Geopolítica del Brasil* y menciona que el más reputado estratega militar de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, en sus dos obras cumbres, escritas en los años 50 — *Geopolítica del Brasil* y *Planeamiento Estratégico*— ya mostraba, como lo hemos expuesto en este trabajo, preocupación por la subversión armada; inclusive manifestaba que mientras Estados Unidos en los 50 se preocupaba por la Guerra Atómica, la Escuela Superior de Guerra del Brasil empezó a contrarrestar a grupos guerrilleros, mucho antes de que la potencia del norte se preocupara por ello. Para Brasil, la disuasión nuclear era inalcanzable en esa época y la verdadera amenaza, antes del poder atómico, eran los grupos insurgentes (Stepan, 1970).

Asimismo, el autor argumenta que si bien en Brasil se desarrolló una férrea lucha contrainsurgente, con asesoría estadounidense, y que hubo un interés manifiesto para que los militares brasileños recibieran adoctrinamiento contrainsurgente en la Escuela de las Américas de Panamá, y en la Escuela y Centro Especial de Guerra de Estados Unidos en Fort Bragg en North Carolina, tenemos que si se comparan las cifras de estudiantes brasileños con oficiales provenientes de otras naciones latinoamericanas, es posible dilucidar que eran más numerosos los estudiantes de dichos países que aquellos que venían desde Brasil. Había dos razones para que ocurriera esa tendencia: la mayoría de los cursos impartidos eran en español, lo cual suponía un obstáculo lingüístico para los oficiales brasileños. A su vez, a la luz de las declaraciones de Golbery Do Couto e Silva, se podría afirmar que los militares brasileños eran expertos en estrategias contrainsurgentes y que los cursos dictados en la Escuela Superior de Guerra del

¹⁴ Entrevista realizada al General Golbery Do Couto e Silva, el 29 de agosto de 1970 en Río de Janeiro.

Brasil tenían el mismo nivel académico y de adoctrinamiento que aquéllos ubicados en suelo estadounidense.

No obstante, existe un argumento que podría dejar sin piso al planteamiento anterior: la tercera parte de los generales en servicio activo de las fuerzas armadas brasileras había tomado curso en las Escuelas militares de los Estados Unidos (Stepan, 1970). Es decir, la cúpula militar brasileña, los más importantes dirigentes militares del país, habían recibido capacitación en el país del norte. Aquellos militares eran los principales forjadores de la Doctrina de Seguridad Nacional en territorio brasiler. Pero tampoco se podría afirmar que ésta era aplicada literalmente como lo imponían los Estados Unidos, sino que los militares en muchas ocasiones fueron autónomos entorno a su implementación.

En los tiempos de Nixon y Kissinger, Pedro Rivas Nieto sostiene que:

[En] Brasil, desde el golpe de 1964, los dictadores militares, aliados con Nixon y su asesor Kissinger, fueron férreos defensores del occidentalismo, pues según la desarrollada geopolítica brasileña, las fronteras ya no eran territoriales, sino ideológicas y esto justificaba la contrainfiltración para golpear al enemigo infiltrado en un país vecino. Nixon decía que Brasil podía ser modelo para el resto de Iberoamérica (Rivas, 2009, p. 73).

En suma, tal como se abordará en el tercer capítulo de este trabajo, uno de los engranajes claves para la consecución y ejecución de la Doctrina de Seguridad Nacional, fue la Escuela Superior de Guerra, cuyos miembros habían pertenecido a la FEB, importante contingente militar brasiler que luchó junto a los aliados en territorio italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, cabe identificar que una de las acciones militares más importante, basada directamente en la Doctrina de Seguridad Nacional, fue la Operación Presencia, que se aplicó en

una de las zonas más empobrecidas del territorio brasilero como lo es el nordeste de ese país. Dicha operación conllevó a una serie sistemática de violaciones contra los derechos humanos, debido a la aplicación de métodos de tortura en contra de la población civil. Dicha estrategia militar, se aplicó a la par de acciones de asistencia social, al mejor estilo de lo propuesto por Kennedy y su conocida Alianza para el Progreso. En ese contexto, Brasil fue beneficiado económicamente de USAID de los Estados Unidos, en otro intento adicional por contener al comunismo en la región. Asimismo, este capítulo tendrá el objetivo de analizar las actuaciones de los últimos gobiernos militares (Medici, Geisel, Figueiredo), así como también la apertura democrática a mediados de los años 80, los intentos por democratizar a la nación y darle sepultura a la consabida Doctrina de Seguridad Nacional.

Capítulo 3 . La Escuela Superior de Guerra, últimos gobiernos militares y la transición democrática

La Escuela Superior de Guerra del Brasil

Como ya fue expuesto, una serie de cambios ocurridos a finales de los años 50, modificaron los criterios de los militares brasileros sobre la manera como se debía gobernar el Estado: acogieron todo tipo de doctrinas referentes a la lucha contrainsurgente, debido al temor suscitado por la Revolución Cubana en las filas del ejército; se gestó una especie de temor al comunismo, que debía ser eliminado, y se creó la conciencia de reformar el sistema para adecuarlo a posibles revoluciones de tipo comunista. Era la hora de aplicar con rigor la Doctrina de Seguridad Nacional —cuya primera manifestación palpable fue la “Operación Presencia”— a la par de las políticas de desarrollo socio-económico.

Al respecto, el investigador estadounidense Alfred Stepan argumentó que:

La estrategia de la guerrilla revolucionaria parecía difundirse en todos los aspectos sociales, la doctrina de seguridad de las Fuerzas Armadas brasileras comenzó a abarcar todos los aspectos de la existencia política y social de la población. Los militares comenzaron a interesarse por la acción cívica, por el papel que les cabía en la construcción nacional y por la instrumentación de planes globales de desarrollo (Stepan, 1970, p. 204).

Los militares, gracias al aval de los Estados Unidos, difundieron la idea en la opinión pública de que tenían todas las capacidades legítimas para gobernar, que tenían las herramientas idóneas para enrutarse al país por buen camino; que las fuerzas armadas contaban con todas las herramientas necesarias para derrotar al comunismo y a la subversión armada. Dichos postulados

eran defendidos e instruidos en las escuelas estadounidenses en las que se educaban los militares brasileiros. También conllevaron a la creación de un centro militar de estudio (el más importante en el plano de la contrainsurgencia) que bajo su orientación cortó súbitamente la anterior pauta moderadora: los militares ya no eran moderadores sino gobernantes. En ella, sus profesores y estrategas —entre ellos Golbery Do Couto e Silva— comentaron que poseían los métodos más apropiados para estabilizar a Brasil, gracias a lo aprendido en la lucha contrainsurgente en Argelia; contaban a su vez, aparte de denotadas estrategias contrainsurgentes, con un equipo de tecnócratas que fijaría las pautas para que la economía creciera, favorecería la inversión extranjera (en su mayoría proveniente de los Estados Unidos) y aconsejaría a la Junta Militar de tomar decisiones acertadas sobre el desarrollo socio-económico que ameritaba implementarse en el país (Stepan, 1970).

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, algunos integrantes de la FEB que habían luchado junto a los aliados exitosamente en Italia, regresaron al Brasil con la intención de crear nuevas instituciones que fortalecieran el aparato militar y así robustecer los métodos para reprimir posibles escaramuzas comunistas. Para ello, miembros de la FEB, como los generales Cordeiro de Farias y César Obino, propusieron en 1945 la creación de un Estado Mayor Conjunto de Servicios y un Concejo Nacional de Seguridad. Deslumbrados por la tecnología y la estrategia militar utilizada por el ejército de los Estados Unidos en Europa, ambos líderes militares propusieron estos dos organismos que intentaban emular el cuerpo de defensa castrense que operaba con éxito en el país del norte. Asimismo, dados los buenos lazos entre militares brasileiros y estadounidenses, los primeros pidieron apoyo y asesoramiento a los segundos para crear dichos organismos y sentar las bases para la configuración de la nueva Escuela de Guerra del Brasil. En aras de cumplir ese objetivo, el gobierno de los Estados Unidos, en cabeza de

Harry S. Truman, envió una misión que permaneció en Brasil desde 1948 hasta 1960. La misión fue denominada como la Misión USAID. Durante los mandatos de Quadros y Goulart, la misión sufrió un duro revés y no contó con el beneplácito del gobierno central brasileiro. Al asumir el poder, Castelo revitalizó la Misión USAID y se convirtió en la tercera misión estadounidense más grande del mundo en el exterior, después de las intervenciones en India y Vietnam. El presidente brasileiro, no tuvo vacilaciones cuando envió a un contingente de soldados brasileiros para ayudar a sus aliados estadounidenses en su intervención a la República Dominicana en 1965. También propuso durante su gestión la creación de un bloque interamericano de defensa que asegurara la paz en el continente y ayudara a contrarrestar posibles violaciones soviéticas a la soberanía de los países americanos (Castelo, 1967). Con la participación de tropas brasileiras en la isla caribeña, el nuevo régimen militar rechazó abiertamente la Política Externa Independiente, que tanto habían promulgado Quadros y Goulart, y seguía directrices impartidas por el gobierno de los Estados Unidos. No obstante, según el criterio de observadores como Demetrio Magnoli —quien cuestiona a aquellos analistas que detallan a Brasil en los tiempos del régimen militar como un gobierno títere de Washington— sostiene que:

Contrariamente a la leyenda, el régimen militar no renunció a la agenda de desarrollo autónomo. Con un compás diferente, la melodía de las disparidades Norte-Sur volvió a ser cantada por la diplomacia nacional y los temas caros del desarrollismo cepalino resurgieron bajo la envoltura del nacionalismo de Brasil, potencia, fabricada por los generales-presidentes (Magnoli, citado por Pinsky (Comp.)2007, p.44).

Cabe destacar que Magnoli hace referencia a los militares de “línea dura”, que en cabeza de Artur da Costa e Silva y Emílio Garrastazu Médici, propusieron una política de desarrollo

económico y una Doctrina de Seguridad Nacional, independiente de los Estados Unidos, en contravía a lo propuesto por Castello y sus asesores de la Escuela Superior de Guerra del Brasil.

De esa manera, el pensum y el plan de estudios de la naciente escuela militar, estuvo a cargo del general Cordeiro de Farias entre 1948 y 1949, quien estudió el modelo organizacional de la Escuela Nacional de Guerra de los Estados Unidos para implementarlo en Brasil con algunas diferencias. Para Cordeiro de Farias era fundamental instaurar una “Escuela” propia de un país en vía de desarrollo, que fuese vital para la defensa ante eventuales ataques del enemigo comunista, pero que también fuese clave para incentivar el desarrollo socio-económico de Brasil.

La Escuela Superior de Guerra debía implementarse en cuatro frentes: Construir una férrea Doctrina de Seguridad Nacional, una política seria de educación militar y motivar el desarrollo industrial y agropecuario de la gran nación sudamericana (Stepan, 1970)¹⁵. A su vez, otra diferencia notable entre la nueva escuela brasilera y su par en los Estados Unidos, radicó en incorporar civiles (tecnócratas) en su clases y cursos. Civiles que colaboraron impartiendo cursos en pedagogía, economía, industria, comercio, Teoría de la comunicación y actividades del sector bancario. La vinculación de civiles, permitió a los militares estrechar lazos con hombres pudientes, líderes de gremios industriales y empresarios que consentían que una de las mejores opciones para reactivar la economía era controlando al enemigo comunista y, de esa manera, atraer la atención de la inversión extranjera. A medida que fue pasando el tiempo, los militares fueron incorporando más civiles en los cursos, en busca de legitimar el adoctrinamiento que allí se impartía.

¹⁵ Entrevista realizada al General Cordeiro de Farias el 16 y 17 de septiembre.

Luego de siete años de continua operación —y bajo el gobierno de Castello Branco en 1966— la Escuela Superior de Guerra disponía de graduados que ocupaban cargos en el alto gobierno, la economía, el sistema político y la industria del país: 39 congresistas, 97 funcionarios públicos de organismos descentralizados, 200 funcionarios públicos que laboraban en los ministerios del gobierno, 224 líderes industriales, 599 oficiales de las Fuerzas Armadas y 107 miembros de la sociedad civil, como sacerdotes de la Iglesia Católica, escritores, economistas, politólogos y docentes de universidades públicas (Escuela Superior de Guerra del Brasil, 1967). La Escuela Superior de Guerra del Brasil era el centro contrainsurgente más importante del país: Se definía a sí misma como un centro clave para la defensa del hemisferio occidental, en plena Guerra Fría, y comprometida en la lucha anticomunista: Había que derrotar a la subversión interna. Ese era uno de sus postulados más importantes, tal como lo había propuesto Golbery Couto e Silva en *Geopolítica del Brasil* (Do Couto, 1978). Estados Unidos siempre fue un aliado incondicional de dicho centro militar desde sus inicios.

Se podría afirmar entonces que los seis hombres de confianza de Castello Branco durante su gobierno, pertenecieron a la FEB y fueron alumnos destacados de la Escuela Superior de Guerra. También fueron destacados docentes de ese centro de educación militar. Por ejemplo, el General Cordeiro de Farias —impulsor inicial de la Escuela y su primer comandante— fue un oficial condecorado por sus acciones en la Segunda Guerra Mundial como Comandante de Artillería. En su opinión, la participación de la FEB en el conflicto mundial, fue determinante para la creación de la Escuela. En diálogo con Alfred Stepan sostuvo que:

Los efectos de nuestra participación en la FEB fueron tales que regresamos a Brasil dispuestos a dar con un modelo de gobierno que funcionase adecuadamente y en el que existiera orden, planificación y financiación racional. No hallamos ese modelo

en el Brasil de la época, pero decidimos buscar el camino que permitiera implementarlo a la larga. La Escuela Superior de Guerra del Brasil era uno de esos caminos y surgió como consecuencia de la experiencia de la FEB en la guerra (Stepan, 1970, p. 207).

En su penúltimo discurso como presidente, Castelo elogió a la Escuela, la catapultó como ejemplo, como el más importante centro de pensamiento de avanzada y aseguró que la Doctrina de Seguridad Nacional y sus respectivas tesis de planificación y desarrollo económico, que se enseñaban allí, habían sido incorporadas exitosamente por su gobierno en la legislación, organización del Estado y la Constitución Política del país (Castelo, 1967a).

Alfred Stepan afirmó que el 80% de los colaboradores más cercanos de Castelo —todos alumnos destacados de la Escuela Superior de Guerra— habían recibido educación en centros militares de los Estados Unidos, donde estudiaron textos de teóricos franceses sobre las tácticas y estrategias contrainsurgentes en Argelia y también escritos de militares estadounidenses para contener al comunismo en el hemisferio occidental. También recibieron una influencia notable de tesis que ponían de la mano a la Doctrina de Seguridad Nacional con el desarrollo económico, lo cual para ellos constituía un binomio indisoluble (Lissak, 1967).

Los cursos dictados en este importante centro de adoctrinamiento contrainsurgente (la Escuela Superior de Guerra) tenían una duración de un año lectivo y eran de tiempo completo. Estaba constituido por seminarios y conferencias enseñados por ministros, tecnócratas del gobierno y líderes militares, sobre inteligencia militar, contrainsurgencia, micro y macro economía, planificación económica; cursos que permitían fijar las metas para construir una nación sólida, es decir consolidar una joven potencia en el orden mundial; se estudiaban también aquellos obstáculos que impedían consolidar a Brasil como una nación poderosa y que evitaban

construir su desarrollo socio-económico. En síntesis, las clases estaban cobijadas por una combinación —una ecuación— entre Seguridad Nacional y Desarrollo Nacional. Se estudiaron con atención problemáticas recurrentes en Brasil, que abarcaban todas las áreas de la vida humana: la inflación, sistemas electorales, religión (Teología de la Liberación), educación, economía. Muchas de sus orientaciones se aplicaron rigurosamente por los gobiernos militares, sobre todo por el gobierno de Castello Branco, afecto a los Sorbonne.

En los inicios de su creación, la Escuela Superior de Guerra del Brasil no contaba con mucha influencia adentro de las Fuerzas Armadas; no obstante, al agudizarse la crisis que desencadenó la renuncia del presidente Quadros, las voces y opiniones esbozadas desde el centro de estudios militares, comenzaron a cobrar notoriedad en las filas del ejército en lo que se refiere a seguridad interna y desarrollo.

Todas las materias y cursos, apuntaban a la construcción de una sociedad democrática —era el ideal a alcanzar— en la que se garantizara una seguridad plena para los ciudadanos. Para ello, se debían superar obstáculos estructurales (como la subversión y el comunismo; y se cuestionaba también el papel de los partidos tradicionales), tal como eran definidos por los docentes de la Escuela, que entorpecían ese propósito. Para ello, no se podían utilizar las deliberaciones y las discusiones pacíficas: era imperativo el uso de la fuerza y de la inteligencia militar y policial e ignorar el sistema de partidos políticos que era torpe, lento e ineficiente para encontrar las soluciones en medio de la inestabilidad desatada por el comunismo. Inclusive se llegó al extremo, tal como lo propuso el conferencista e investigador de derecha David Carneiro, ante un auditorio colmado de estudiantes y autoridades militares, de limitar el número de partidos políticos a través de una ley electoral, mandato que obligaría a los líderes políticos a representar a un solo partido (Cameiro, 1968).

Antes de estallar el golpe del 31 de marzo de 1964, sus doctrinas eran practicadas en la mayoría de brigadas del ejército, para contrarrestar brotes de subversión armada. Incluso, la doctrina contrainsurgente propuesta por la Escuela, también fue incorporada a la Escuela de Estado Mayor General (ECEME) —cuerpo donde se preparaban aquellos que aspirasen a ocupar el cargo de general—, cuestión que antes de los años 60 no era tenida en cuenta en sus cursos y seminarios. En ese sentido, en medio del ambiente de inestabilidad que surgió cuando Quadros abandonó el poder, en la ECEME con la orientación de la Escuela Superior de Guerra del Brasil, se comenzaron a dictar cursos específicos sobre contrainsurgencia, lucha (represión) anticomunista y Seguridad Nacional (Stepan, 1970).

Para 1968, año en que se acentuó aún más la mano dura del régimen militar, dicho organismo (clave para la designación de cargos en la cúpula militar), asignaba “guerra irregular” y 222 horas al análisis de la seguridad interna. En contravía a lo acaecido antes de la fundación de la Escuela Superior de Guerra, solo impartía 21 horas para la comprensión de conceptos clásicos de defensa tradicional¹⁶ (utilizada en confrontación tipo Primera y Segunda Guerra Mundial).

El pensum también incluía visitas a diversas regiones apartadas (con especial énfasis en las regiones empobrecidas y retiradas de los centros de poder) que tenía la finalidad de diagnosticar posibles soluciones a sus problemáticas de seguridad y subdesarrollo. En esos parajes, estudiaban a profundidad iniciativas gubernamentales como la creación de hidroeléctricas, siderurgias, nuevas empresas de capital mixto, programas asistencialistas copiados de la “Alianza para el Progreso” de Kennedy. En dichas regiones, también se analizaban las técnicas contrainsurgentes

¹⁶ Planes de Estudio de la Escuela de Estado Mayor General (ECEME). Archivados en la Biblioteca de dicho cuerpo castrense.

utilizadas por las fuerzas armadas para repeler a la subversión armada y al enemigo comunista (Escuela Superior de Guerra del Brasil, 1967).

Había que atacar a la pobreza gracias a una sesuda planificación económica que dejaría sin piso los intentos subversivos del comunismo. Aparte de la centralización, era necesario aumentar los poderes presidenciales para que el Poder Ejecutivo pudiera contar con las herramientas legales para derrotar a la insurgencia, por medio de la fuerza, amparada legalmente en la Constitución. Por tanto, en la Escuela, no tenían cabida tópicos de movilización social como las protestas (aunque fueran pacíficas) o la participación ávida de los electores en las urnas; era una obligación para aplicar una sólida Doctrina de Seguridad Nacional, mantener un férreo control de la vida de los ciudadanos, lo cual era una exigencia propia de los tiempos de la Guerra Fría. Uno de los docentes más respetados de la Escuela, Idelfonso Mascareñas da Silva, disertaba en ese sentido que:

Se vive el clima de una guerra mundial que decidirá el destino de las civilizaciones de Occidente. Todo sistema descentralizado adolece de una debilidad fundamental en tiempos de guerra, que exige una estructura centralizada y jerárquica. A medida que la guerra total absorbe al pueblo todo, sus instituciones, riquezas y recursos humanos y nacionales, para el logro de sus objetivos, parece cierto que la mayor centralización y concentración de poderes aumentará la eficacia y capacidad del poder político y nacional (Mascareñas, 1968, p. 32, 34).

Asimismo, los cursos en la Escuela Superior de Guerra, incluían una visita a las escuelas militares de los Estados Unidos y una audiencia especial con el presidente de dicho país, como sucedió en plena “Crisis de los misiles”, cuando un Kennedy preocupado profirió un discurso vehemente ante los estudiantes de la Escuela en la Casa Blanca (Escuela Superior de Guerra del

Brasil, 1964). Para aprobar el año lectivo, los alumnos agrupados en equipos de seis personas, debían presentar un trabajo final sobre política, seguridad o economía.

Sobre la ideología de Seguridad Nacional, enseñada en la Escuela Superior de Guerra del Brasil, propia de una nación con síntomas de subdesarrollo, el general Do Couto (1955) sustentaba en su texto *Planeamiento Estratégico* que “la planificación de la Seguridad Nacional es un imperativo de la hora en que vivimos en las naciones en vía de desarrollo, la planificación entonces asume aspectos de otro orden, que dan relieve a todo el resto de cosas” (p. 28).

Docentes y líderes de la Escuela Superior de Guerra, en aras de establecer una lucha contundente contra la subversión, también propusieron ejercer una mayor centralización de los poderes en manos del presidente militar en Brasilia: Reestructurando la división política (las fronteras de los Estados brasileros), para derrotar a la subversión, diezmar el poder de los terratenientes y elites de esas regiones y organizar de manera óptima los planes de desarrollo regionales.

En ese mismo texto, aseguraba que cuando está amenazada la seguridad del Estado, se hace urgente establecer una planificación estudiada y el control estricto de la estrategia puesto que la misma política (los partidos incluso), también pueden encontrarse infiltrados por el enemigo. Por tanto la Doctrina de Seguridad Nacional se expande al punto de permear todas las actividades que ocurren en el país. En sus clases en la Escuela, aseveraba que la aplicación de una doctrina de seguridad de esa índole, ya sea utilizada en una guerra tradicional (como la Segunda Guerra Mundial) ante un eventual ataque soviético, o en una contienda para contrarrestar elementos subversivos, deberá comprometer la unidad, voluntad y capacidad productiva de todo el país (Do Couto, 1955).

Igualmente, la planificación económica era otro rubro poco desdeñable en los cursos que se impartían en la Escuela Superior de Guerra del Brasil. El reputado capitán de la Marina

Brasileira, Christovao L. Barros, planteaba en sus cursos en ese centro de adoctrinamiento, que la seguridad nacional en tiempo de crisis, se encontraba amenazada y, por tanto, era necesaria una eficiente planificación económica que pudiese administrar y movilizar los recursos económicos suficientes para participar en la contienda, en la denominada “guerra total”. Proponía entonces para lograr una verdadera planificación, que los recursos fueran manejados por el Consejo Nacional de Seguridad y el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Lo anterior significa que la economía nacional estaba sujeta por las directrices que las Fuerzas armadas consideraran pertinentes para aplicar en el país (Barros, 1967). Cabe destacar que una óptima planificación económica está sujeta a una buena administración por parte del Estado, que tiene el imperativo de crear condiciones de seguridad favorables para atraer capital e inversión extranjera, tal como lo sustentaba el Mariscal Juarez Távora, segundo al mando de la Escuela Superior de Guerra. Luego se desempeñó como Ministro de Transporte de la administración de Castello Branco (Tavora, 1962).

Cuando Goulart asumió la presidencia en 1961, se empezó a crear el consenso entre profesores y alumnos de la Escuela, de que el nuevo presidente era un instigador de la anarquía, el caos y la infiltración de grupos subversivos en las zonas más empobrecidas del país. Creyeron apropiado, proponer un modelo de gobierno diametralmente opuesto al ejercido por Goulart, puesto que consideraban que el mandatario se estaba alejando del verdadero interés nacional; a su vez, descuidaba la seguridad y fomentaba la indisciplina en las fuerzas armadas al politizar el sistema de promociones. El país por consiguiente, necesitaba un nuevo modelo de desarrollo: atacar a la subversión armada y motivar una eficaz planeación económica. Aún antes de producirse su derrocamiento, la Asociación de Ex alumnos de la Escuela (ADESG) lideró una campaña de desprestigio político hacia el presidente, haciendo críticas a la agravante crisis

económica, la inflación desbordada y la inestabilidad que caracterizó el final de su administración. Distribuyeron, a mediados de 1963, un comunicado promoviendo movilizaciones de masa en contra del gobierno e invitando a conferencias y coloquios en los centros urbanos más importantes del país para cuestionar de frente al Ejecutivo (Escuela Superior de Guerra del Brasil, 1963).

Por eso, es posible comprobar que en el golpe del 31 de marzo de 1964, de 102 generales en servicio activo, los principales conspiradores —todos los integrantes del Comando Superior Revolucionario— fueron alumnos destacados de la Escuela Superior de Guerra, organismo que sentó las bases para efectuar dicho cambio político. El 60% de los militares que participaron en el derrocamiento del estadista populista pertenecieron a ese centro militar de educación contrainsurgente (Fuerzas Armadas Brasileñas, 1964). Buena parte de la nómina, el gabinete y los hombres de confianza del primer gobierno militar, el de Castello Branco, fueron estudiantes asiduos de la Escuela Superior de Guerra y también pertenecían al Concejo Directivo de dicho colegio militar. Castello Branco, antes de asumir la presidencia, se había desempeñado como Director del Departamento de Estudio de la Escuela entre 1956 y 1958. Su Ministro de Transporte, el aguerrido general Juarez Távora, había ocupado el cargo de Segundo Comandante en el centro militar. Asimismo, su Ministro de Relaciones Exteriores Juracy Magalhães, aliado incondicional del gobierno de los Estados Unidos, fue un destacado alumno de la Escuela. El General Ernesto Geisel, que en los tiempos de Branco, había ejercido como Jefe de Viviendas Militares y Secretario General del Consejo Nacional de Seguridad, y que años más tarde asumiría la presidencia del país en 1974, también fue un estudiante sobresaliente de dicho organismo. El mismo General Golbery Do Couto e Silva —el más importante estratega geopolítico de la institución— fue nombrado por Branco como el primer Director del Servicio

Nacional de Informaciones (SIN), una especie de CIA brasilera, especializada en inteligencia militar y ficha clave para desentrañar y desbaratar todos los movimientos de la subversión armada en el país. Las ideas para contener al enemigo comunista y la subversión por medio de tácticas y estrategias contrainsurgentes —también por medio de una estrecha alianza con los Estados Unidos— y su visión favorable a la inversión extranjera, era promulgada por los hombres claves del gobierno de Castello Branco, en contraposición del resto de la oficialidad que pensaba y disentía sobre esas medidas y que no habían pertenecido a la Escuela Superior de Guerra. Surgían entonces las primeras divisiones internas en las Fuerzas Armadas brasileras. Sin embargo, es un hecho innegable, reconocer que la lucha contrainsurgente motivada por el centro militar y su afán por impulsar la contrainsurgencia, la seguridad nacional y el desarrollo por igual, influyó notablemente en todas las brigadas y grupos militares que repelieron a la subversión en todo el territorio brasilero; en un principio la “Operación Presencia” dio cuenta de ello.

Otra de las medidas que caracterizaron al régimen militar, tuvo que ver con la implementación de una estricta política de estabilización y desarrollo, bajo la tutela del Ministro de Economía (civil y tecnócrata) Roberto Campos. Era un destacado conferencista en la Escuela Superior de Guerra desde antes de acontecer el golpe del 31 de marzo. También contaron con la asesoría del Ministro para Asuntos Financieros, Octavio Gouveia de Bulhoes. Ambos, Campos y Gouveia de Bulhoes, declaraban públicamente que había que reparar una deteriorada economía y restaurar el orden de las finanzas públicas. Para tal fin, crearon el Programa de Acción Económica Gubernamental (PAEG) para estabilizar el mercado y ejecutar reformas sustanciales en el ámbito económico. Ambos ministros tenían la meta de reducir el déficit público, mientras reducían los gastos estatales (Roett, 2010). Desde Brasilia, se hizo un estricto control a los

contratistas que construían obras públicas; se suprimió el subsidio para productos básicos y aumentaron los impuestos a los ciudadanos y contribuyentes. Los salarios se estipularon manteniendo el ajuste del salario mínimo inferior al índice de inflación. A su vez, para Campos y Gouveia de Bulhoes, era prioritario fortalecer el campo de las exportaciones, atraer capitales extranjeros y hacer del Brasil un país atractivo para las inversiones de las multinacionales (Roett, 2010).

Las ideas de planificación económica de los dos ministros fueron calando entre los militares y se ganaron el respeto y admiración de ellos. Campos y los militares sostenían que los avances económicos y financieros que traería consigo la nueva política de estabilización y desarrollo, solo se verían en el largo plazo (Stepan, 1970)¹⁷. Dichas políticas mejoraron notablemente el crecimiento económico, el déficit público cayó 4.3% del GDP de 1963 a 1971. La inflación tuvo una caída de 90% en 1964 y del 20% en los siguientes años que hubo gobierno militar. Algunos gobiernos, potencias extranjeras y organismos económicos volcaron su atención hacia los logros que en materia económica estaba alcanzando el régimen militar brasileiro. Ante ese ambiente de optimismo, la administración de Castello Branco recibió el apoyo moral del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la ayuda financiera del gobierno estadounidense de Lyndon Johnson. La gestión de Campos fue aplaudida en todo el mundo (Roett, 2010).

En realidad, Campos y Gouveia de Bulhoes eran una excepción: Entre los militares se fue gestando un sentimiento de que ningún líder político y civil tendría la capacidad de gobernar y llevar el país hacia la estabilidad, la bonanza económica y la derrota definitiva del comunismo. En ese momento, Campos argumentaba sobre Castello Branco que deseaba forjar instituciones.

¹⁷ Entrevista realizada a Roberto Campos, ministro de planificación en el Gobierno de Castello Branco, el 15 de septiembre.

“Sentía que las circunstancias le exigían mostrarse autoritario, pero no era necesario instituir un régimen personalista. Se requería una continuidad ideológica y estructural, pero no personal” (Stepan, 1970, p. 197).

Con el correr de los meses, en 1964, pese a los éxitos en materia económica, la situación política fue desmejorando, puesto que ya era habitual el uso de la tortura y comenzaron las primeras desapariciones forzadas. Y mientras las familias de desaparecidos comenzaban a llamar la atención por el paradero de sus seres queridos, Campos y Bulhoes mostraban los primeros éxitos de su gestión económica para darle así legitimidad al régimen militar frente a los observadores pesimistas de los primeros días de dicha administración.

Por su parte, los militares estaban destinados a derrotar la subversión armada y a aplicar la política de estabilización económica. Para 1968, se hizo evidente que no llamarían a elecciones y postergaron la fecha para 1970. Ese año, en medio de la euforia que desató el triunfo de la selección brasilera en cabeza de Pelé en el Mundial de México, los militares comenzaron a manifestar de nuevo que el país debía permanecer más tiempo bajo la mano dura del régimen militar. Tal como lo sugirió Campos sobre evitar personalismos, a diferencia de otros regímenes dictatoriales surgidos en América Latina, los líderes militares brasileros —por supuesto también los miembros del Comando Superior Revolucionario— determinaron que el régimen no sería unipersonal; el país sería gobernado por una junta militar, habría cambio de presidente con la regularidad establecida por la Constitución. Determinaron lo anterior, con la intención de darle a su gestión un matiz democrático, sin que los mandatarios militares tuvieran la posibilidad de reelegirse. Por ejemplo, el mismo Castello Branco se oponía totalmente a la reelección presidencial (Stepan, 1970).

No obstante, el apoyo popular dado al régimen se fue diluyendo con el tiempo. El apoyo civil se fue menguando como consecuencia de las medidas autoritarias y totalitarias de la administración militar. Como ya se estudió, los militares derrocaron a Goulart gracias al apoyo de importantes líderes políticos (civiles) entre los que sobresalió el aval prestado por los gobernadores de los tres estados más importantes de Brasil: Carlos Lacerda, gobernador de Guanabara, Adhemar de Barros de Sao Paulo y Magalhaes Pinto de Minas Gerais. Todos ellos eran candidatos presidenciales en 1964, pero decidieron apoyar a los golpistas, debido al temor que tenían de que Goulart se hiciese reelegir y montara de esa manera una dictadura populista y unipersonal, al estilo de Getulio Vargas. A medida que fue pasando el tiempo, y ante el hecho de no llamar a elecciones, los tres se convirtieron en acérrimos críticos del régimen. Por su parte, los gobiernos militares comenzaron a argumentar que los civiles no tenían las herramientas necesarias para doblegar a los grupos insurgentes; no tenían la disposición necesaria para derrotar a la corrupción (consideraban a los civiles como corruptos) y no tenían la capacidad para configurar una verdadera planificación económica (Stepan, 1970). Incluso los políticos, como los tres mandatarios regionales y los grupos civiles que apoyaron el golpe, comenzaron a ser catalogados por el gobierno, como corruptos y también se les retiraron sus derechos políticos y la posibilidad de ocupar cargos públicos, tal como fue el caso del ya citado Adhemar de Barros, quien fuera candidato presidencial del Partido Social Progresista. Asimismo, otros líderes políticos de renombre como el ex presidente Kubitschek, quien en su momento había apoyado la designación de Castello Branco como presidente, también fue acusado de corrupto (malos manejos financieros en la construcción de Brasilia) y le fueron retirados sus derechos políticos. Las purgas en las fuerzas armadas y los vetos hacia figuras políticas reconocidas, le ganaron las antipatías de un amplio cuerpo de electores que seguían a dichos líderes. Para imponerse no les

quedaba otro camino que vetar el derecho al voto, lo cual los hizo ver como una fuerza antidemocrática. El régimen militar temía que aquellos perjudicados en las purgas, ante el eventual establecimiento de un gobierno civil, fueran reincorporados a las Fuerzas Armadas y aprovechando esta situación, se vengarían de los superiores que ordenaron su despido del servicio activo.

Castelo tenía un objetivo claro desde que asumió la presidencia: Cohesionar a todas las Fuerzas Armadas del país, como un cuerpo único, en defensa de la seguridad nacional amenazada por el comunismo soviético y los grupos subversivos, que alteraban el orden público, en zonas empobrecidas de la soberanía nacional. Por eso, era imperativo que todos los oficiales de manera uniforme, tuvieran y practicaran una ideología anticomunista; fueran promotores de la lucha anticorrupción y se opusieran con determinación a todo movimiento de masas como protestas, huelgas, convocatorias de sindicatos y fueran auspiciadores de una óptima planificación económica, que atacase de raíz el subdesarrollo de muchas regiones — principalmente el nordeste brasileiro— en las que se podría enquistar el comunismo. No obstante, como ya fue expuesto, la cohesión que pretendía el primer presidente militar, se vio truncada, debido a la oposición que encontró en algunos colegas de la carrera militar. En uno de sus discursos más importantes, pronunciado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, hizo hincapié en la construcción de una política exterior abiertamente anticomunista, en clara armonía con los Estados Unidos y propia del espectro de la Guerra Fría —al mejor estilo de las ideas de Golbery do Couto e Silva en *Geopolítica de Brasil*—, caracterizado por un mundo bipolar, en que se oponen dos bloques ideológicamente disímiles. Afirmaba que:

En el caso de Brasil, no podemos olvidar que en política exterior hemos realizado una opción básica, surgida de nuestra fidelidad cultural y política al sistema

democrático occidental. En muchos casos, los intereses del Brasil convergen en círculos concéntricos con los del resto de América Latina, el continente americano y el mundo occidental (Castelo, 1966^a, p. 274).

Una de las políticas más polémicas de Castelo (en clara concordancia con la Doctrina de Seguridad Nacional) fue la supresión de sindicatos de labriegos y de ligas agrarias, acciones que fortificaron la posición de hacendados y terratenientes. El Ejecutivo adoptó esas medidas represivas con el objetivo de modernizar el sector agropecuario. Mientras aplastaba los movimientos de masa en los campos, el Instituto de Reforma Agraria Brasileiro adelantó estudios sobre el empleo de la tierra y la clasificó según sus usos; se implementaron tasas impositivas que determinarían los parámetros de productividad. La finalidad de dichas iniciativas radicaba en aumentar la productividad de los terratenientes, aumentar el empleo en las regiones donde se ejecutaban los programas de reforma agraria. De no existir productividad que conllevara a la creación de nuevos puestos de trabajo para los campesinos, se le expropiaban los terrenos improductivos al hacendado¹⁸.

Los ex presidentes Quadros y Goulart en su momento se habían declarado neutrales frente al comunismo; sobre esto aseguraba Castelo (1966^a), en tono aguerrido, que la neutralidad era un claro síntoma de “inmadurez emocional” (p. 274). Una evasión irresponsable de la realidad internacional. En ese orden de ideas, los Estados Unidos eran aliados incondicionales de Brasil en medio de la lucha anticomunista, y en su opinión todo ataque contra la potencia del norte, era agresión directa hacia la soberanía brasilera. Según su criterio, y tal como lo aseguró en muchas ocasiones, toda crítica contra las políticas de Seguridad Nacional y defensa de los Estados

¹⁸ Programa de Acción Económica del Gobierno (1964-1966). Hacía parte de la Misión USAID bajo la orientación de un equipo de asesores de la Universidad de Berkeley con el Ministerio de Planificación Brasileiro.

Unidos, equivalían a un acto de subversión, insurgencia e irrespeto a la Seguridad Nacional brasilera (Castelo, 1966a).

También se proscribió la participación de todos los partidos de izquierda, se los acusó de ser promotores del caos y el desorden institucional y se los vetó en el marco de la política contrainsurgente de la Doctrina de Seguridad Nacional del régimen militar.

Las intenciones del presidente de confeccionar una nueva Constitución, abrir el sistema electoral a los ciudadanos y posibilitar la participación de partidos políticos para instaurar un nuevo gobierno civil, se quedaron en eso, en intenciones. Se quedaron en el papel, debido a la crisis militar —facciones opuestas de las Fuerzas Armadas iniciaron una disputa interna por el poder—, conflicto que solo halló solución con la promulgación de la represiva Quinta Acta Institucional, durante en el periodo final del gobierno de Artur da Costa e Silva. Con ese documento oficial, se aumentaba ostensiblemente el poder represivo de los militares. El estilo de Castello Branco y de Artur da Costa e Silva para gobernar era opuesto: En cuanto a lo económico, el primero se caracterizó por la implementación de complejas medidas técnicas, gracias a los conocimientos del ministro de Planificación Roberto Campos. Ambos eran partidarios de importar sumas de capital extranjero con el objetivo de catalizar el desarrollo económico de Brasil.

La administración de Artur da Costa e Silva implementó medidas económicas diametralmente opuestas a las de su antecesor. El ex ministro Campos criticó las medidas tomadas por el nuevo gobierno que se empezó a alejar de manera gradual de las disposiciones económicas que aconsejaba la USAID, misión estadounidense que también lamentó las resoluciones económicas de Costa e Silva. Los asesores económicos del segundo gobierno militar, sostenían que era necesario superar los déficit de divisas extranjeras y de esa manera

aumentar las exportaciones. La idea de Artur da Costa e Silva también radicaba en financiar el desarrollo a través de recursos internos (Ellis, 1968).

Tal como ya fue mencionado, las purgas civiles y militares comenzaron en 1964 y se acentuaron con el correr de los años. Entre 1967 y 1969, el régimen militar en cabeza de Artur da Costa e Silva, redactó una serie de decretos en contravía a la libertad de expresión: Toda declaración pública que desacreditara a las Fuerzas Militares se traduciría en una ofensa a la que se aplicaría una sanción ejemplar. Precisamente los decretos se endurecieron, al punto de que en 1969, inclusive las declaraciones privadas en contra del gobierno y del régimen militar, se castigarían con penalidades (Stepan, 1970).

Se impusieron férreos controles a la prensa. En un principio, los medios de comunicación a través de sus columnas de opinión y editoriales, apoyaron a los golpistas del 31 de marzo. Con el tiempo comenzaron a cuestionar abiertamente las medidas represivas del gobierno y a poner en entredicho la continuidad de la Junta Militar, ya que en 1964 estuvieron de acuerdo en una intervención militar, pero provisional. Importantes diarios como el Correo de la Mañana, cuestionaban el *modus operandi* autoritario de los militares para perpetuarse en el poder. La Tribuna de Prensa, importante diario de circulación nacional, argumentó que los militares habían traicionado los principios que los habían llevado a derrocar a Goulart. A finales de 1968, decidieron endurecer la censura a la prensa por medio de la publicación de la Quinta Acta Institucional. Grandes mecenas de la prensa escrita, como los directores del Correo de la Mañana y el Jornal do Brasil fueron encarcelados tal como lo estipulaba la nueva acta institucional (New York Times, 1969).

En el momento del empalme para entregar el poder a Artur da Costa e Silva, los asesores de Castello Branco —ex combatientes de la FEB y destacados integrantes de la Escuela Superior

de Guerra— temían que sus ideas no fueran compartidas por la facción que representaba Da Silva en las Fuerzas Armadas y demostraron resquemores por que las políticas de gobierno cambiaran sustancialmente con la llegada del nuevo presidente. Por unanimidad, le solicitaron a Castello Branco que permaneciera de manera indefinida en el poder, para así garantizar la continuidad de dichas políticas. El presidente los contradijo, argumentando que el continuismo había sido nefasto para el sistema político brasileiro. A su vez, ninguno de los candidatos que nombró para ser su sucesor contaba con simpatías en las otras facciones dominantes de las Fuerzas Armadas. Además el liberalismo económico que caracterizó a su administración (por influencia directa de los Estados Unidos y de la Escuela Superior de Guerra) no era una filosofía compartida por consenso por el resto de la oficialidad. No compartían un liberalismo que entregaba en concesión grandes proyectos nacionales y empresas de extracción de hierro, como también grandes yacimiento de dicho metal a multinacionales estadounidenses. Cabe destacar también que sus críticas constantes al nacionalismo, le produjeron enemigos en la sociedad civil, todos ellos nacionalistas. Por tanto, las ideas de Castello Branco comenzaron a desgastarse con el tiempo en las filas del ejército y por tanto, le fue difícil encontrar un sucesor que continuase las políticas de su administración. Algunos oficiales no se sentían representados por el gobierno de Castello Branco y abogaron por la celebración de un plebiscito interno que impusiese cambios profundos cuando el segundo gobierno militar asumiera el poder (Stepan, 1970).

Los integrantes de la FEB, quienes lucharon junto a los aliados en la Segunda Guerra Mundial y los miembros de la Escuela Superior de Guerra, habían sido el sostén de la administración de Castello Branco. En contraposición, el gobierno de Artur da Costa e Silva, a diferencia de su antecesor, abogó por la instauración de un nuevo nacionalismo entre la población y comenzó a prescindir, en muchos aspectos, del gobierno de los Estados Unidos,

situación que lo llevó a sostener diferencias y fricciones con la potencia del norte. Por ejemplo, el segundo estadista militar no insistió en la posibilidad de crear una fuerza de defensa interamericana y se tornó en un acérrimo crítico del tratado de proscripción de pruebas atómicas firmado por los Estados Unidos (Stepan, 1970).

Al analizar las acciones del gobierno de Costa e Silva, se podría inferir que su desdén por el Estatuto de Reforma Agraria tuvo que ver con el afán de ganarse el apoyo de los terratenientes y los cafeteros, cuando no mostró interés en aplicar la ya mencionada reforma agraria, que los perjudicaría por los impuestos altos. Asimismo, para suavizar a los grupos de izquierda, decidió debilitar la alianza sostenida con los Estados Unidos. Lo cierto es que el gabinete de Castelo, en relación con los colaboradores más cercanos de Costa e Silva, tenían visiones opuestas sobre el gobierno, la gestión pública y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional para contener el comunismo. Tenían concepciones distintas sobre seguridad y defensa y también sobre las relaciones internacionales.

Lo cierto es que Artur da Costa e Silva fue el mayor opositor del gobierno de Castello Branco. Sus más importantes asesores y colaboradores también habían sido voceros de la oposición en las Fuerzas Armadas, frente a las medidas adoptadas por el primer presidente militar de Brasil. Costa e Silva, el general Albuquerque Lima, su ministro de interior, el General Syseno Sarmiento, al mando del Primer Ejército, el general Jayme Portella, jefe de Viviendas Militares y Secretario General de Concejo Nacional de Seguridad y el futuro presidente de la junta militar y su sucesor en la presidencia de la República, el general Emilio Garrastazú Médici, nombrado Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), en reemplazo de Golbery Do Couto e Silva, todo ellos habían constituido la oposición militar a los proyectos emprendidos por Castello Branco y se les conoció como los militares de “línea dura” del régimen militar. A excepción de

uno de sus asesores, ninguno luchó con la FEB en la Segunda Guerra Mundial y tampoco habían sido alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Brasil. Asimismo, tampoco tenían vínculos académicos con las escuelas militares de los Estados Unidos (Stepan, 1970).

La administración de Artur da Costa e Silva

En las elecciones indirectas de enero de 1967, resultó ganador Artur da Costa e Silva, que representaba la línea dura del Ejército. Las altas directivas de la Escuela Superior de Guerra eran marginadas del gobierno. El nuevo presidente gobernaría de una forma totalmente opuesta a lo propuesto por Castello Branco y asumiría la jefatura del Estado en marzo de ese mismo año (Roett, 2010).

Los militares de “línea dura” llegaban así al poder como opositores a Castelo y pusieron en marcha la instauración de un régimen nacionalista, tal como lo demandaban algunos sectores de la población civil y buena parte de los oficiales jóvenes en servicio activo; también tomaron esas disposiciones con el afán de ganar apoyo popular entre la ciudadanía. Artur da Costa e Silva quiso ganarse el apoyo de los nacionalistas autoritarios (así se les conocía en las Fuerzas Armadas) que habían estado comprometidos en el golpe de 1965 y que después estuvieron activos en el contragolpe militar de 1968, situación que llevó a que el régimen se enluciera mucho más y se volviera más autoritario. Estos oficiales fueron educados en la Escuela de Estudios para Oficiales (EsAO). Costa e Silva tenía deseos en convertirse en su líder y apoyaba su filosofía de construir un gobierno autoritario más comprometido con el ámbito político, sin influencia estadounidense, pero que asumiera una postura nacionalista. El nuevo presidente, asimismo, se presentó como el puente entre los liberales internacionalistas de Castelo y los grupos de autoritarios nacionalistas. No obstante, su ascenso supuso de manera inevitable una

ruptura con su antecesor. Lanzó el slogan de “austeridad y nacionalismo”, en contraste con el de “internacionalismo y humanismo” de Castelo (Stepan, 1970).

Las fricciones entre los militares se hicieron evidentes cuando Costa e Silva (en ese entonces ministro de Guerra), autodesignado luego del golpe del 31 de marzo de 1964, por ser el golpista con mayor rango, sostuvo altercados con Castello Branco en cuestiones de defensa y contrainsurgencia. Cabe destacar que también se había opuesto en su momento a su designación como presidente. Se autodenominó con sigilo, representante de los autoritarios nacionalistas. Entonces Castelo había comenzado a perder apoyo de la opinión pública y el aval de la sociedad civil y los nacionalistas autoritarios. No dudaron en lanzar duras críticas a la gestión del gobierno; con la adición de que las Fuerzas Armadas se estaban aislando y no eran representativas del pueblo que aseguraban defender. Como ya se expuso, Castelo permitió que el Congreso continuara con sus funciones legislativas, para darle cierto matiz democrático a su administración y prometió convocar a elecciones en octubre de 1965 (Stepan, 1970).

Sin embargo, fue presionado y tuvo que fijar las elecciones de nuevo para octubre de 1966. No obstante, el presidente decidió que las elecciones para designar gobernadores se celebraran en la fecha fijada con anterioridad., lo cual enquistó resentimiento en los militares de “línea dura”, en cabeza de Costa e Silva; quienes interpretaron esta acción como una debilidad del presidente, que llevaría a que en las urnas triunfaran políticos sin ningún tipo de afinidad con el régimen militar y el movimiento revolucionario que motivó el golpe del 31 de marzo de 1964. Cuestionaban el hecho de que Castelo permitiera la participación de políticos a los que se les habían retirado sus derechos, por medio de purgas y castigos. Consideraban que era un duro revés con las políticas de Seguridad Nacional, destinadas a eliminar la subversión y poner coto a todo intento de oposición (Stepan, 1970).

Eso no impidió que se celebraran elecciones para las gobernaciones estaduais el 3 de octubre de 1965: Gobernaciones importantes fueron ganadas por candidatos avalados por el ex presidente Kubitschek (al que le había retirado sus derechos políticos), situación que llevó a Costa e Silva y sus copartidarios, a declarar que la victoria se traduciría en un duro golpe contra el movimiento revolucionario que había depuesto a Goulart. Acto seguido, la administración de Castello Branco aseguró que respetaría los resultados electorales. Los autoritarios nacionalistas y los militares de “línea dura” criticaron duramente la actitud del gobierno: Dos días después de las elecciones, en la Villa Militar, la base militar más importante del Ejército, ubicada en las afueras de Río de Janeiro, se reunieron los comandantes de guarniciones para discutir una posible conspiración contra el gobierno de Castelo (Stepan, 1970).

Los militares de “línea dura” en cabeza de Artur Costa e Silva no vieron con buenos ojos a las elecciones celebradas en once estados de la República: consideraban que era una contradicción suspenderles los derechos políticos a los disidentes, mientras a algunos de sus partidarios se les permitía participar en las elecciones, lo cual podría ir en detrimento del régimen militar. Enfurecieron aún más cuando supieron que algunos opositores habían ganado gobernaciones claves en Guanabara y Minas Gerais. No dudaron en preparar el terreno para asegurarse la presidencia en 1967, al criticar con ahínco a Castelo y a sus copartidarios de la Escuela Superior de Guerra (Roett, 2010).

El Regimiento de Reconocimiento Motorizado estaba dispuesto a poner a marchar a sus hombres para acorrallar a Castelo en la sede del Ejecutivo. Costa e Silva, por entonces Ministro de Guerra, intervino y conservó la calma de los jóvenes oficiales (nacionalistas autoritarios) y le aseveró que transmitiera sus críticas al presidente. Costa e Silva se reunió en privado con el presidente y, luego de dos horas, dieron a conocer un comunicado en el que promulgaban que el

régimen militar aumentaría aún más sus poderes supremos. Era evidente una crisis de unidad en las Fuerzas Armadas y se tornaba difuso el tema de la sucesión presidencial. Costa e Silva dejaba claro que la crisis no se solucionaría si Castelo permanecía de manera indefinida en el poder, con poderes absolutos; además el Ministro de Guerra argumentó que el mismo presidente se oponía a toda tendencia que abogase por el continuismo¹⁹.

Más aún, los autoritarios nacionalistas, en cabeza Sylvio Heck, ex Ministro de Marina de Guerra y el ex General José Alberto Bitencourt, publicaron un manifiesto que el politólogo brasilero José Stacchini, reprodujo en su famoso libro *Marzo 64: una movilización de audacia* y en el que exigían cambios sustanciales a Castelo, y que después encontrarían eco en Artur da Costa e Silva. Ponían de manifiesto los siguientes asuntos: Implementación de una política exterior independiente y no sujeta a las directrices de una potencia extranjera. Contraria a toda estructura imperialista y totalitaria, respetuosa de la autodeterminación de los pueblos; que condene todo intento por sostener carreras armamentísticas. Cristiana y respetuosa de la democracia. Defensora de la nacionalización de Petrobras y de las grandes industrias estatales. No entregarlas en concesión a otras potencias extranjeras. Atención preferencial por atender los problemas de subdesarrollo de las regiones empobrecidas del nordeste brasilero. Abolir toda intervención gubernamental en los sindicatos del país. Medidas que contrarresten el alto costo de vida y la inflación. Intervención directa del Estado en el manejo de la economía. Ejecución de una Reforma Agraria que distribuya equitativamente tierras productivas a los campesinos. Disolución tajante del Congreso mediante la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente que fije una nueva Carta Magna para el país (Stacchini, 1965).

¹⁹ La declaración salió publicada en el Correo de la Mañana, con el título de “Fortalecimiento del acto revolucionario”, el 7 de octubre de 1965, en la página 5.

En la medida, que fueron sucediendo esas notables diferencias entre las facciones de las Fuerzas Armadas, entre gobiernos antecesores y sucesores, fue ganando terreno la oposición de los grupos guerrilleros que sembraron el terror en zonas marginales como el nordeste brasilero. De esa manera, las ideas de los nacionalistas fueron ganando terreno y el régimen se tornó cada vez más represivo e intolerante (Stepan, 1970). La Doctrina de Seguridad Nacional, paradójicamente, se tornó más agresiva, pero operó de manera un poco más independiente de las directrices estadounidenses: No se podía dejar crecer el monstruo de la subversión; había que contrarrestarlo, cortarlo de raíz por medio de una política nacionalista y más independiente de la potencia del norte.

Ahora bien, Castello Branco decidió proclamar la Segunda Acta Institucional — marcadamente antidemocrática— que determinaba la celebración de elecciones indirectas y no directas, abolía los partidos políticos tradicionales, el Ejecutivo controlaría a la Corte Suprema de Justicia y permitía de nuevo al régimen militar declarar la cancelación de derechos políticos de miembros de la oposición. De esa manera, el presidente atendía los consejos de su ministro de guerra. Se daban así las bases para construir un gobierno más autoritario, con las herramientas necesarias para combatir todo acto de oposición, con los métodos legales para poner a funcionar la Doctrina de Seguridad Nacional que permitiera eliminar los grupos insurgentes, que proliferaban en medio de las fricciones que sostenían los grupos antagonistas de las Fuerzas Armadas. De esa manera, el ministro de guerra garantizó que sería él mismo quien sucedería a Castello Branco en 1967 (Stepan, 1970).

La Segunda Acta Institucional estipuló que el presidente y vicepresidente serían elegidos indirectamente por un Congreso, cuyas directrices eran impartidas por los mismos militares. El presidente tendría mayores potestades para salvaguardar la Seguridad Nacional, y el gobierno

tendría el poder absoluto para redactar decretos-leyes sin necesidad de contar con la aprobación del aparato legislativo. La Segunda Acta Institucional decretaba la abolición de los partidos políticos brasileros, a quienes los militares de “línea dura”, rotulaban como la raíz de la ingobernabilidad que padecía Brasil desde los tiempos de Getulio Vargas (Roett, 2010).

Asimismo, el Acta estipulaba la creación de dos nuevos partidos políticos: la Alianza Nacional por la Renovación (ARENA) que absorbió el Partido Social Demócrata y sus integrantes conservadores. Sería en realidad el partido del régimen militar. Por su parte, el Movimiento Brasilerio Democrático, convergió las fuerzas opositoras, el Partido Laborista y los miembros más progresistas del Partido Social Demócrata. En 1967, el régimen militar decide redactar una nueva Constitución Política, al considerar que la Carta Magna de 1946 no reflejaba el espíritu revolucionario del gobierno. Los líderes del segundo gobierno militar sostenían que el régimen triunfaría sobre toda demostración de oposición con la aprobación de la nueva Constitución, que era imperativo depurar el sistema de partidos y era urgente instalar un presidente de “línea dura”. 1967 fue un año en el que se aplicó con rigor la Doctrina de Seguridad Nacional: Desde enero de ese año, se presentó una sangrienta y aguda confrontación entre la oposición (tanto legal como ilegal y subversiva) y las Fuerzas Armadas; disputa que se extendería hasta finales del régimen en 1985 (Roett, 2010).

Desde luego, la crisis desatada en las Fuerzas Armadas en 1965, llevó a que los militares perdieran apoyo de los sectores civiles, quienes criticaban el giro autoritario que adoptó el presidente para subsanar la inestabilidad institucional, con la Segunda Acta Institucional, que entorpeció el camino para celebrar nuevas elecciones. El eventual ascenso de Costa e Silva desató una avalancha de críticas por parte de la oposición y de la sociedad civil, quienes abogaban por un cambio democrático y aducían que el gobierno militar debía ser provisional. El

importante diario *Jornal do Brasil* realizó una encuesta para evaluar la percepción de los ciudadanos sobre si el inminente nombramiento de Costa e Silva contradecía los deseos de la opinión pública. El 71% de los encuestados, aseguró que en el caso de darse elecciones directas, elegirían políticos tradicionales como Kubitschek, crítico habitual del régimen militar; por su parte Costa e Silva —según el sondeo de opinión— solo obtendría el 12% de los votos²⁰. Sobre este particular, Alfred Stepan disertó en su texto *Brasil: los militares y la política*, que:

[Los militares en ese contexto se encontraban desprestigiados debido] a las austeras políticas de desarrollo del gobierno de Castello Branco, aunadas al creciente autoritarismo, convirtiendo a los militares en el blanco de la hostilidad pública. La situación llegó al punto que algunos oficiales no se decidían a vestir sus uniformes en público (Stepan, 1970, p. 305).

Costa e Silva gana las elecciones presidenciales indirectas en 1967 y en marzo de ese año asume el poder. Se presenta a sí mismo como un populista y un social humanista, dispuesto a dialogar con la disidencia y partidario de fortalecer la formación de sindicatos de trabajadores progubernamentales. En los inicios de su gestión, aseguraba ser partidario de una liberalización limitada. Después de pocos meses en la presidencia, argumenta Riordan Roett, el clima de hostilidad hacia su figura fue creciendo entre los ciudadanos, pese a los buenos resultados económicos que en el mundo fueron dados en bautizar como el “Milagro Económico Brasileño”. Costa e Silva crea un equipo de asesores económicos que el gobierno dio a conocer con el nombre de la PAEG (Roett, 2010).

²⁰ Encuesta publicada y ampliamente analizada por el diario *Jornal do Brasil*, el 15 de noviembre de 1966. Se estudiaron la manera cómo varió la opinión pública entre 1966 y 1967.

En 1967, tuvieron un relativo éxito en el control inflacionario; no obstante el crecimiento económico estuvo por debajo de lo prometido por el gobierno y el costo social del plan de ajuste se mantuvo muy alto. Dicho equipo económico, bajo la tutela del reconocido economista Antonio Delfim Netto, declaraba que la economía y el crecimiento económico debían estar plenamente regulados por el Estado, por medio de políticas gubernamentales que incrementarían los gastos estatales en inversión social, aumentarían las exportaciones de productos nacionales hacia el exterior, incentivaría las inversiones en empresas estatales, y ayudarían a la creación de programas estatales. Al retomar algunas medidas de estabilización económica adoptadas en 1964, el país experimentaría el ya mencionado “Milagro Económico Brasileiro”, un acelerado crecimiento económico entre 1968 y 1973: El crecimiento económico alcanzado cada año bajo el liderazgo de Delfim llegó a un promedio de 11.3%. Estos resultados fueron aplaudidos en el ámbito internacional (era el país más poderoso de Latinoamérica) pero no fueron aprovechados por el gobierno en el campo interno, debido a las medidas represivas emprendidas por el mismo (Roett, 2010).

Comenzaron a pesar más en la opinión pública, los abusos de autoridad, las torturas, las acciones autoritarias y represivas, que las buenas gestiones económicas del gobierno. De manera paradójica, la clase media que había sido beneficiada por el “Milagro Económico” comenzó a mostrar malestar por las acciones tomadas por el régimen militar. A la oposición política se le sumaron dos vertientes de pensamiento y de presión social que comenzaron a criticar las políticas gubernamentales represivas: La vieja elite tradicional y algunas facciones militares comenzaron a sublevarse contra el gobierno. Por tanto, la oposición comenzó a crecer notablemente como reacción a las intenciones del gobierno de fortalecer el Servicio Nacional de Informaciones (SIN) —antes liderado por Golbery Do Couto e Silva— que inició una cacería de

brujas para perseguir todo aquello que proviniera del comunismo y la subversión, y en la que cayeron muchos inocentes. Los actos represivos de la SIN quedaron en su mayoría en la impunidad (Roett, 2010).

En clara sintonía con los postulados de Leonardo Boff, un sector progresista de la Iglesia Católica, en cabeza de Dom Hélder Câmara, arzobispo de Recife y Olinda, comenzó una campaña de desprestigio hacia el régimen que finalizó con su caída en 1985. Era común y corriente su aparición en los medios de comunicación brasileros, en los que el prelado se presentaba como el vocero de las víctimas del gobierno militar, de los desaparecidos, como el defensor de las libertades civiles y democráticas, que se estaban vulnerando en Brasil, ante los ojos de la comunidad internacional. Por su parte, el Sindicato Nacional Estudiantil comienza a reagruparse en la ilegalidad y se convierte en un efectivo movimiento de movilizaciones de masa contra el gobierno. Asimismo, segmentos de la clase media y de los gremios económicos (hartos de las medidas represivas) se declaran públicamente enemigos de Artur da Costa e Silva. A principios de 1968 eran habituales las protestas callejeras de trabajadores contra el gobierno Central. A su vez, antiguos colaboradores de Goulart y Kubitschek comienzan a liderar numerosas protestas. De esa manera, el único partido de oposición legal, el Movimiento Democrático Brasileiro, comienza a ganar apoyo de dichos sectores en conflicto con el régimen militar. Ahora bien, por falta de una política de unificación entre la oposición, sus intenciones fracasan ante la férrea aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional que Costa e Silva ejecuta sin contemplaciones de ninguna índole (Roett, 2010).

En ese contexto (entre 1967 y 1968) a la Doctrina en cuestión se le presenta un nuevo reto desde el punto de vista militar: La aparición de grupos y focos guerrilleros que habían roto relaciones con el Partido Comunista Brasileiro y dieron inicio a emboscadas, ataques contra la

infraestructura y ataques contra efectivos del Ejército; activaron bombas y explosivos en consulados de países extranjeros y los secuestros y robos a entidades bancarias y financieras comenzaron a figurar en los medios de comunicación (Roett, 2010).

Con regularidad, Costa e Silva expresó el deseo de llamar a elecciones en 1970, ante el clima de hostilidad que generaban sus acciones en la ciudadanía (por los ataques cada vez más recurrentes de la subversión armada), lo cual nunca se materializaría, ante el temor de los militares de que los líderes políticos perjudicados con las purgas y aquellos que se hallaban en el exilio, retornarían y, como retaliación, los perjudicarían en caso de que un gobierno civil se instalara en Brasil, y porque consideraban que la afectación del orden público, desatado por grupos radicales comunistas (secuestros, extorsiones, robos a bancos) solo podía ser atenuado y eliminado a través de la Doctrina de Seguridad Nacional que solo sería efectiva en manos de un régimen militar (Stepan, 1970). Por otro lado, también sostuvo que los cambios económicos que habían comenzado con Castello Branco, necesitaban más tiempo, para que los efectos positivos se vieran reflejados en la realidad. Costa e Silva comenzó a ser criticado dentro del ejército por aquellos mismos aliados que decían representar y que llevaron a la crisis de 1965: Los autoritarios nacionalistas consideraban que el presidente estaba traicionando los principios de la revolución, por acceder al juego de la política tradicional. Dado su afán por permanecer indefinidamente en el poder, los militares decidieron reestructurar las reglas de juego en el sistema político del país; una reestructuración denominada por ellos mismos como menos política pero más revolucionaria. De esa manera, el régimen militar eliminó todo obstáculo legal y constitucional que les impidiera gobernar a largo plazo, lo cual desató protestas y tensiones de la sociedad civil, y llevó a que los militares asumieran una postura cada vez más autoritaria. Aumentaron las protestas callejeras de estudiantes, inconformes, líderes de la oposición en

centros urbanos importantes como Río de Janeiro, que recibieron el aval de religiosos afectos a la Teología de la Liberación y estuvo conformada, asimismo, por ciudadanos provenientes de la clase media, que en el pasado habían dado el visto bueno para la consecución del golpe de Estado del 31 de marzo de 1964. Ese mismo año, en Osaco, localidad industrial de Sao Paulo, se realizó una huelga de trabajadores de grandes proporciones, situación que no sucedía desde 1964. El régimen militar entró en pánico. Aplicando la Doctrina de Seguridad Nacional con guante de hierro, consideró que dichas manifestaciones eran subversivas, motivadas por el comunismo internacional y que debían ser reprimidas a toda costa (Stepan, 1970).

Para consumir su obra de represión y torturas (excusa para eliminar el clima de inestabilidad propiciado por las guerrillas, las protestas callejeras, los crímenes y los secuestros) el presidente Artur da Costa e Silva decidió promulgar la Quinta Acta Institucional el 13 de diciembre de 1968, como respuesta a las protestas callejeras, las movilizaciones de masas y ante el llamado que hiciera en el Congreso, Marcio Moreira Alves, diputado de oposición, cuando exhortó desde su curul a los ciudadanos a que boicotearan el día de la Independencia Militar, en gesto claro de antipatía y rencor hacia a los militares. Sus declaraciones hicieron que muchos líderes militares exigieran su captura, tal como relataba el analista político Carlos Castello Branco (sin ningún parentesco con el ex presidente) en un importante periódico de circulación nacional. La Quinta Acta Institucional —una de las manifestaciones más crudas de la Doctrina de Seguridad Nacional— fue aprobada por el presidente, debido a los consejos que recibió del Jefe del Servicio Nacional de Información, Emílio Garrastazu Médici quien luego sería designado su sucesor (Castello, 1968). El documento permitía actuar en materia de orden público sin respetar las directrices constitucionales. La SIN y otros grupos de inteligencia no tenían el

deber de pedir autorización para instigar y acorralar a grupos y ciudadanos emparentados con la subversión (Roett, 2010).

Dicha Acta dio comienzo a una campaña implacable de censura oficial hacia la prensa, clausuró el Congreso por tiempo indefinido y dio paso a una nueva etapa de purgas políticas. Costa e Silva en medio de una alocución transmitida por la televisión y radio, aseguraba que el régimen debía prescindir del Congreso, ya que éste había traicionado los principios fundamentales de la revolución de 1964. La aplicación de la Quinta Acta Institucional llevaría a la persecución de críticos moderados del gobierno militar, como Alberto Dines, director del diario *Jornal do Brasil* quien había apoyado a los líderes golpistas en las editoriales de su periódico en 1964. También fue perseguido y detenido Sette Câmara, quien se había desempeñado como primer embajador del régimen militar ante las Naciones Unidas en el año del golpe militar. Lo anterior llevó a que el gobierno militar se fuera alejando paulatinamente de la sociedad civil; llevó a que muchos oficiales jóvenes renunciaran a sus cargos y que algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia abandonaran sus intenciones de convertirse en presidentes de dicho organismo judicial (Stepan, 1970).

Curiosamente un día antes de la instauración de la represiva y cuestionada Quinta Acta Institucional en 1968, en clara concordancia con la Teología de Liberación, la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (CNBB), publicó un comunicado episcopal que tildaba como fascista a la Doctrina de Seguridad Nacional ejecutada por el régimen militar. Acusaban, además, al gobierno de Costa e Silva de ser indolente ante la violación sistemática de los Derechos Humanos y de no ofrecer soluciones a problemas básicos de la población. A finales de ese año,

el régimen comenzó el arresto masivo de sacerdotes, a quienes acusaban de ser promotores de la Doctrina de la Liberación, de amparar y auspiciar movimientos guerrilleros en suelo brasileiro²¹.

Curiosamente, como respuesta a la Quinta Acta Institucional, los jóvenes oficiales de la Escuela de Capitanes de Río de Janeiro publicaron un manifiesto en contra del régimen militar, a quien acusaban de ineficiente, provocador y autoritario; características que iban en detrimento del prestigio de las Fuerzas Armadas como institución. Criticaban también las malas condiciones salariales de los oficiales (Jornal do Brasil, 1968). Como respuesta a sus demandas, el general Albuquerque Lima, ante auditorios atestados de militares y civiles afectos al régimen militar, declararía que la revolución de 1964 no tenía marcha atrás. Aseguraba con resolución y en tono tajante que en medio de la revolución, los militares brasileños contaban con todas las herramientas necesarias para implementar reformas profundas y sustanciales, ya que no tenían vínculos que los amarraran a lo que pensarán los gremios económicos y los partidos políticos corruptos. Aseguró que su labor frente al gobierno podía extenderse durante 10 o 15 años más de gestión pública. De esa manera, Albuquerque se designaba como el candidato de los nacionalistas autoritarios para suceder en el poder a Artur da Costa e Silva²².

La represión militar contra la sociedad civil que propició la Quinta Acta Institucional, alcanzó su clímax en 1969, cuando comenzaron a llegar al Vaticano y a Europa, sonados informes sobre la implementación de diferentes técnicas de tortura, utilizadas por el régimen militar, tal como lo dio a conocer el investigador Ralph Della Cava en un artículo que tituló *La tortura en Brasil*, texto que fue ampliamente difundido en Europa y los Estados Unidos (Della,

²¹ La CNBB publicó el documento que fue reproducido ampliamente por los diarios más importantes de circulación nacional. En ese sentido, el Jornal do Brasil publicó un informe al respecto que tituló "Iglesia rebelde", el 12 de diciembre de 1968.

²² Discursos analizados y publicados en el Jornal de Brasil, entre 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 1968.

1970). Por su parte el politólogo Phillippe C. Schmitter también publicó un estudio sobre las torturas practicadas por los militares brasileros, que compiló en un artículo titulado *La persecución de los científicos políticos y sociales en Brasil* (Schmitter, 1970).

Los líderes militares, e incluso los tres primeros presidentes de la Junta Militar, negaron esas acusaciones y las presentaron como actuaciones de unidades que no siguieron las directrices de sus superiores. Lo evidente es que existían indicios de que estas prácticas eran un método inherente de la política de gobierno, bajo el amparo de la Doctrina de Seguridad Nacional, para obtener información del enemigo y también para contrarrestarlo. De esa manera, el régimen militar implementaba la tortura como forma de lucha, o anunciaba su aplicación para alcanzar fines perseguidos, sin importar los medios y eliminar todo intento de oposición. Sobre la tortura, el investigador estadounidense Stepan (1970) argumentaría que:

Muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas englobaban a la oposición estudiantil, los clérigos opositores al régimen y la prensa disidente, junto con la guerrilla urbana, como parte del mismo proceso de subversión interna desencadenado en el país. En apariencia, la tortura se convirtió en método corriente para extraer información acerca del paradero de guerrilleros; de ser cierto, la misma se habría convertido en un método común y perfectamente institucionalizado en Brasil (p. 309).

Así pues, todo intento por conducir al país hacia la apertura democrática, quedó frustrado por los hechos de represión que sucedieron antes y después de la promulgación de la Quinta Acta Institucional. Las intenciones de celebrar nuevas elecciones se desdibujaron por completo a comienzos de 1969. Luego de su implementación, pareció que el régimen militar no contaba con programas sociales; asimismo, la Constitución Política confeccionada por los militares en 1967,

fue violada ostensiblemente por medio de la nueva acta que dejaba su rol político desdibujado (Stepan, 2010).

Pese a los resquemores y las diferencias internas que surgieron en las Fuerzas Armadas, luego del golpe de 1964, se solucionaron por medio de un consenso interno para así permanecer en el poder de manera indefinida, hacer un bloque monolítico, capaz de repeler las críticas de amplios sectores, debido a sus actuaciones represivas y autoritarias. Era un consenso que trataba de persuadir a los ciudadanos para hacerlos comprender que sus políticas de Seguridad Nacional eran estrictas pero necesarias. Pese al buen desempeño de la economía (Entre 1968 y 1970, el Producto Interno Bruto creció un 8% anual) y al control absoluto sobre la inflación, el descontento de la población era evidente ante el clima generalizado de represión y ante medidas económicas que iban en desmedro de los estratos bajos: Eliminación de sindicatos, ligas agrarias, aumento del control extranjero de la economía, desdén a la sociedad civil, aplicación constante de métodos de tortura (Stepan, 1970).

En 1969 surgiría una nueva crisis en las filas de las Fuerzas Armadas que tuvo repercusiones en el sistema de sucesión presidencial: El presidente Artur da Costa e Silva cayó gravemente enfermo. Los altos mandos militares empezaron a ser presionados por los nacionalistas autoritarios en la designación del nuevo presidente. Pese a todo, logró mantener su autoridad y dio a conocer sus candidatos presidenciales. Fue entonces que los militares, en contravía a lo estipulado a la Constitución de 1967, irrespetaron las reglas de juego y no le entregaron el poder al vicepresidente civil, situación que llevó a una nueva división interna en las Fuerzas Armadas. Comenzó de esa manera una intensa campaña política en las filas del Ejército para acceder al cargo de presidente y se realizaron sondeos de opinión para estudiar las

tendencias y preferencias de los oficiales para elegir al nuevo mandatario, así como la profusa difusión de manifiestos sobre el asunto.

La situación se terminó de agravar. El 4 septiembre de 1969, el régimen militar sufrió un duro revés en el campo militar: Un grupo guerrillero, compuesto por dos organizaciones subversivas “Acción Libertadora Nacional y el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre”, en una operación coordinada, secuestraron al embajador de los Estados Unidos, Charles Burke Elbrick. Su intención era dar un golpe de pánico en la opinión pública y así arruinar las celebraciones castrenses programadas para el 7 de septiembre, día en el que se conmemora la Independencia Nacional. El secuestro también obedeció a una presión subversiva al gobierno para liberar presos políticos pertenecientes a la guerrilla y publicar un manifiesto en el que explicaban las razones de su lucha armada, rechazaban todos los métodos de tortura utilizados por los cuerpos castrenses para obtener información del enemigo. Las peticiones de los secuestradores debieron ser obedecidas por la Junta Militar: 15 presos políticos (entre los que se encontraba el legendario militante comunista Gregorio Becerra) fueron liberados y enviados a México en el Avión Hércules 56 (Osava, 2007). El hecho coincidió con la grave enfermedad que aquejaba a Artur da Costa e Silva, quien fue juzgado incapaz e inhabilitado para asumir como estadista; el Alto Mando Militar declaró vacante la presidencia y creó una Junta Militar que gobernaría provisionalmente al país. Buscó un sucesor militar digno de confianza, en contravía del mandato constitucional de elegir al vicepresidente civil en reemplazo del presidente (Roett, 2010).

Por otra parte, algunos de los presos liberados que viajaban en el avión Hércules 56, fueron arrojados al mar en pleno vuelo; no obstante, la mayoría terminaron entrenando otros guerrilleros latinoamericanos en suelo cubano. Todos fueron expulsados por el régimen militar y solo

podieron regresar a Brasil, luego de la amnistía decretada en 1979, por el último presidente militar Joao Batista Figueredo. Dos meses después del secuestro de Charles Burke Elbrick, grupos policiales y militares dieron muerte a Carlos Marighela, el líder principal de la agrupación guerrillera. El régimen militar bajo la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, intensificó aún más la lucha contrainsurgente. Tres guerrilleros que participaron en la acción subversiva pertenecieron al alto gobierno de la administración de Lula da Silva y al Congreso de la República: el periodista Franklin Martins, ex ministro de Comunicación Social, José Dirceu, que también se desempeñó en la jefatura de la Casa Civil de la Presidencia (especie de primer ministro) entre 2003 y 2005 y dos ex diputados del gobernante Partido de los Trabajadores. La acción subversiva que privó de la libertad al diplomático estadounidense, fue un verdadero efecto dominó en la lucha insurgente, ya que otras agrupaciones imitaron dicho accionar: en 1970, otro grupo subversivo secuestró a los embajadores de Suiza y Alemania y al cónsul de Japón en Sao Paulo, con la finalidad de canjearlos por más presos políticos (Osava, 2007).

Pronto la Junta Militar nombra un digno sucesor de Artur da Costa e Silva quien fallece el 17 de diciembre de 1969. Respetando el criterio y la determinación de la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas, designaron como presidente al ex Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), el general Emilio Garrastazú Médici, cuya principal preocupación era la tajante eliminación de guerrillas y grupos subversivos a lo largo y ancho del territorio brasilero (Roett, 2010). A comienzos de la administración Médici, hubo temores crecientes entre sus asesores y su gabinete en dos aspectos a tener en cuenta: La posibilidad de un golpe de Estado con la participación de nacionalistas autoritarios o el desencadenamiento de un golpe que pusiera de nuevo a los civiles frente al Ejecutivo. Lo cierto es que existía el pensamiento, entre civiles y

sectores moderados de las Fuerzas Armadas, de que éstos últimos retornarían de nuevo a ejercer la pauta moderadora (Stepan, 1970).

Luego de ser elegido en las elecciones indirectas, el General Emilio Garrastazú Médici asume el poder en octubre de 1969. Su designación coincide con elecciones para gobernadores estatales, alcaldes y corporaciones regionales. Atemorizados por las acciones violentas perpetradas por las guerrillas en los centros urbanos del país, los electores —en su mayoría de la clase media— deciden votar por el partido progubernamental (ARENA), para hacer frente a los desmanes y desórdenes causados por la subversión. Pese a los triunfos electorales, Médici comienza a construir un estilo de gobierno que de inmediato riñe con la sociedad civil: No permite ningún tipo de postura crítica, ninguna oposición hacia sus políticas; los electores que dieron su voto a favor por ARENA obedecen ciegamente las determinaciones del gobierno central. En ese sentido, Riordan Roett sustenta en su libro “El nuevo Brasil”, que la administración Médici, se podría considerar como la más represiva del régimen militar, de los cinco gobiernos militares que se sucedieron entre 1964 y 1985; sin embargo, también fue el presidente que contó con mayor apoyo popular en ese mismo periodo (Roett, 2010).

La exitosa gestión económica de los gobiernos militares, llevó a que una nueva elite de industriales y empresarios emergiera en Brasil —lo cual aumentó el consumo de productos— y tuvieron una estrecha relación con el General Médici y su esposa, quienes figuraban de manera constante en los cócteles de la alta sociedad. El gobierno incentivó grandes proyectos urbanísticos que modernizaron ciudades como Río de Janeiro y la llevaron a figurar como un importante destino turístico en el mundo. La imagen positiva de Brasil desde una perspectiva turística en la comunidad internacional, desvirtuó la terrible factura de torturas, desapariciones y represión que también caracterizó a la presidencia de Médici (Roett, 2010).

El presidente y los militares de “línea dura” hacían alarde de los logros económicos alcanzados por el gobierno, pero ignoraban el lado siniestro de la situación: La violación sistemática de los derechos, las torturas, la represión armada. Por su parte, el crecimiento económico, los beneficios de la bonanza que experimentaba el país, no eran repartidos equitativamente por el régimen militar: Algunas regiones se desarrollaban a pasos agigantados, mientras otras, como el nordeste, continuaban rezagadas; lo mismo ocurría en las ciudades: grandes sectores urbanos se modernizaban, mientras los barrios populares o favelas, se multiplicaban en las periferias, e incluso cerca de los polos de desarrollo. Sobre este particular, Roett cita al embajador estadounidense Lincoln Gordon cuando anotaba que pese a las buenas gestiones económicas, el pobre era cada vez más pobre en Brasil (Roett, 2010).

Los militares de línea dura no fueron capaces de asegurar la continuidad de sus políticas para la designación del nuevo presidente en 1974, pese a la popularidad que gozaba Médici en ese contexto. Ante los excesos represivos del Servicio Nacional de Información (SIN), las torturas y la violación de los derechos humanos, los militares sorbonne, estaban preparados para asumir de nuevo las riendas del Estado. Su candidato para suceder a Médici en el poder, era el General Ernesto Geisel, quien se había desempeñado como presidente de Petrobras y era un destacado conferencista y docente de la Escuela Superior de Guerra del Brasil. Geisel no tuvo problemas para ganar las elecciones y tomar control del gobierno en abril de 1974 (Roett, 2010).

Hacia la transición democrática y el final de la Doctrina de la Seguridad Nacional: El gobierno de Ernesto Geisel

Durante su administración, el acelerado crecimiento económico brasilero se vio truncado con la crisis petrolera de 1973, ya que Brasil comenzó a importar el 80% del petróleo que consumía. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, en retaliación a las acciones

militares contra los países del Medio Oriente que habían motivado la crisis, anunció que los precios del petróleo se cuadruplicarían. Geisel y sus asesores económicos tuvieron que sortear dichos problemas energéticos, que de manera inevitable afectarían a la economía, llevarían a un problema de divisas y también afectarían notoriamente la deuda externa del país. Desde 1964, la legitimidad que gozaba el régimen militar estaba sujeta a los éxitos económicos y al buen desempeño de la economía. Geisel comenzó a sufrir una crisis de legitimidad entre la sociedad civil debido al difícil momento económico que atravesaba Brasil. En aras de obtener aceptación popular, Ernesto Geisel, designa al General Golbery Do Couto e Silva como Jefe del Gabinete de Gobierno.

[Tal como lo expresa Roett (2010), comenzaron a] concluir que había llegado el momento para abrir el sistema político, por medio de una *apertura*. Afirmaban que era el momento preciso para iniciar una etapa de transición, para restablecer plenamente la democracia. Decidieron impulsar un plan para conceder libertades políticas y comenzar una etapa de redemocratización. Tanto Golbery como Geisel pensaban que el régimen militar debía ser transitorio y que había que construir las bases políticas para poder erigir un gobierno civil fuerte (p. 64).

La primera medida de apertura democrática del gobierno, radicó en levantar la censura a la prensa y abolir la Quinta Acta Institucional. Ambos tomaron esta decisión —que causó resquemores entre los militares de “línea dura”— presionados por la fuerte oposición política que ya comenzaba a alertar a los militares debido a los reiterados casos de tortura que ya comenzaban a figurar en los grandes medios de comunicación del mundo. Los militares se encontraban presionados por una población cansada de represiones, pero también de un cambio de posturas en las fuerzas militares, ya que los Sorbonne retornaban al poder. Golbery y Geisel

acogieron los puntos de vista de la facción militar que representaban: Los Sorbonne también estaban cansados de los casos de torturas y desapariciones. Muchos integrantes de este grupo se encontraban completamente desalentados por la enorme influencia que estaba ejerciendo la SIN en las decisiones gubernamentales y consideraban que el organismo de inteligencia estaba actuando como un grupo político sin tener en cuenta las indicaciones del Ejecutivo (Roett, 2010).

En otra instancia, las decisiones arriesgadas adoptadas por Geisel y Golbery obviamente no contaron con el consentimiento de los militares de “línea dura” y fueron debatidas durante 1974. Surgieron fricciones entre integrantes de la SIN y las facciones tradicionales de las Fuerzas Armadas. El enfrentamiento en el seno del ejército coincidió con los graves problemas que aquejaban al Brasil, debido a la crisis del petróleo, y con el deseo de una fuerte oposición civil que quería gobernar al país de nuevo. La oposición fue ganando terreno en el ruedo político (Roett, 2010). Su fortalecimiento se hizo evidente en noviembre de 1974, cuando el Movimiento Brasileiro Democrático (MBD) —único partido legal con el que contaba la oposición— logró una amplia votación para las elecciones del Congreso, en las grandes ciudades y en los Estados pertenecientes al sureste brasileiro.

En medio de ese ambiente desfavorable para el régimen militar, ocurrió un hecho que generó el repudio de la ciudadanía hacia el gobierno: Vladimir Herzog, reconocido editor de un canal estatal en Sao Paulo, fue capturado por un cuerpo contrainsurgente que lo acusaba de colaborar con grupos subversivos. En medio de su captura, murió sorpresivamente. La muerte imprevista del periodista llevó a que la oposición celebrara marchas multitudinarias en contra del régimen, a que la Iglesia Católica en pleno se volviera en una abierta crítica del mismo y abogara con celeridad por un cambio democrático. Relata Roett, que dos años después —en 1976— un líder sindicalista del sector siderúrgico perecería en circunstancias similares a las del

comunicador social en un sonado caso de represión y tortura. Ante el clima generalizado de críticas, el presidente Geisel retiró de su administración a todos los integrantes de “línea dura” y designó altos mandos militares que estuvieran de acuerdo con la apertura política que se había fijado junto a Golbery Do Couto e Silva (Roett, 2010).

Ese mismo año (1976), en noviembre el MBD ganó terreno en las elecciones municipales. Frente a las presiones constantes de la facción de “línea dura”, Geisel cerró sorpresivamente el Congreso en abril de 1977, con la intención de aprobar un paquete de medidas que el gobierno dio a conocer como el “Paquete de abril” y que le permitió a ARENA quedarse con la mayoría del aparato legislativo. Al mismo tiempo, el presidente no dudó en hacer un llamado para propiciar una verdadera apertura política y no titubeó para entablar acercamientos con la Iglesia Católica y la oposición. Súbitamente, el MBD obtuvo resultados contundentes y ganó la mayoría de las curules del Congreso en las elecciones legislativas de 1978. La administración de Geisel respetó los resultados electorales (Roett, 2010).

Cabe destacar que Geisel, por sugerencia de su más destacado consejero Golbery Do Couto e Silva, permitió las huelgas y las protestas callejeras, obviamente, con restricciones. La Iglesia Católica crea la Comisión Pastoral de Tierras, que comienza un importante proceso de movilización de masas en las zonas rurales, movimiento en el que convergieron movimientos obreros, políticos de oposición y organizaciones cívicas. Grandes movilizaciones y marchas callejeras tuvieron lugar en Sao Paulo. El presidente Geisel decidió no reprimir las marchas, aseguró que funcionaban en la legalidad pero sus palabras le trajeron de nuevo fricciones con los militares de “línea dura” (Roett, 2010).

Con el rápido proceso de industrialización que ocurrió en Brasil en los años 70, surgió una nueva generación de jóvenes sindicalistas, quienes exigían respeto por los Derechos Humanos y

los derechos de los trabajadores; constituían una verdadera fuerza de oposición al gobierno militar. Comenzaron a recibir apoyo directo de la Iglesia Católica -de aquellos partidarios de la Teología de la Liberación- en sus reclamaciones y de otros grupos sociales. Realizaron huelgas con una excelente organización logística que causaron verdadera alarma en el gobierno en plenos 1978 y 1979. Exigían el reconocimiento legal de los sindicatos, el derecho a protestar pacíficamente en la vía pública y demandaban una liberalización del sistema político. Luiz Inácio Lula da Silva, ya figuraba como el principal líder sindicalista de los obreros metalúrgicos (Roett, 2010). En 2007, Pedro Fuentes, reconocido líder sindical brasileño y por ese entonces, Secretario Internacional del Partido por el Socialismo y La Libertad (PSOL), en una entrevista que le concedió a Lee Sustar, editora de *Socialist Worker*, criticó duramente a Lula da Silva cuando ya se encontraba en el poder, pues en su opinión ya no era el aguerrido defensor de los trabajadores y era ahora partidario del sistema neoliberal que decía combatir en el pasado. No obstante, Fuentes dio algunas luces para entender el papel del Partido de los Trabajadores durante la última etapa de la dictadura y en los años de la transición democrática. Comentó que Lula empezó su participación como líder sindical en 1972, en un momento en que los sindicatos estaban ligados al régimen de facto desde 1964. Sin embargo, Lula ganaría prestigio seis años después, cuando lideró una multitudinaria huelga en Sao Paulo, dando inicio a nuevo movimiento sindical, al margen de aquellos que eran liderados por los llamados caciques, que eran controlados por el gobierno. Estos nuevos aires sindicales comandados por Lula, intentaron darle al movimiento obrero características más democráticas y eran también partidarios de la lucha de clases. De ahí surgiría la Central Única de Trabajadores (CUT) y El Partido de los Trabajadores (PT). En opinión de Fuentes, sería un tipo de agremiación similar a la propuesta por León Trostky en los Estados Unidos de los años 30. El Partido de los Trabajadores surgiría

como consecuencia de los desmanes dictatoriales. Contaría con la participación de sectores de la Iglesia Católica, ex guerrilleros y castristas (Sustar, 2007).

Ahora bien, tal como sostiene Roberto Ortiz de Zárate, en 1978, Lula y su Partido de los Trabajadores, decidieron apoyar las ideas de Fernando Henrique Cardoso, quien regresaba del exilio, reconocido sociólogo e integrante de Partido Democrático Brasileiro. La idea de Lula radicaba en la construcción de un socialismo democrático que integrara a diversos partidos de la oposición, convergencia que obligaría a los militares a adelantar la transición democrática. No obstante, dicha unión nunca prosperó. En medio de su lucha política y sindical, en 1980, mientras se encontraba dirigiendo una huelga metalúrgica, Lula y sus compañeros dirigentes serían encarcelados siguiendo los postulados de la Doctrina de Seguridad Nacional. En 1981, tal como sostiene Ortiz (2011), “un tribunal militar de Sao Paulo le condenó a tres años y seis meses de cárcel, pena que no llegó a cumplir porque el 2 de septiembre el tribunal Supremo Militar anuló la primera sentencia y solicitó un nuevo juicio" (p. 1). Ortiz de Zárate comenta que el Partido de los Trabajadores participó por primera vez en las primeras elecciones legislativas multipartidistas en 1982, desde el golpe de 1964, ocupando el quinto lugar de la contienda electoral, siendo superado por el PDT y ETB, con el 3.5 % de los votos. Asimismo, ese mismo año, Lula da Silva se presentó por primera vez a una elección popular: compitió por la Gobernación de Sao Paulo. Quedó en cuarto lugar, pero esto no lo desanimó a seguir participando de la vida política brasilera. En agosto de 1983, funda la Central Única de Trabajadores (CUT), organismo gremial del Partido de los Trabajadores. Un año antes de la apertura democrática, a comienzos de 1984, Lula da Silva, junto con Leonel Brizola -polémico líder del PMDB- y Ulysses Silveira Guimarães, organizó una serie de marchas para forzar la realización de elecciones para elegir un presidente que no fuera militar. No obstante, la

movilización fracasó, ya que el PDS, heredero de ARENA en el Congreso, en abril de 1984, logró frustrar la enmienda que autorizaba la celebración de las elecciones.

Sin embargo, pese a lo anterior, la enmienda finalmente sería reformada y fijaría 1985, como el año en que se celebrarían elecciones presidenciales pluripartidistas, luego de 19 años de dictadura militar. Pese a ello, Lula da Silva, sería marginado por otros líderes de la oposición, como las ya citados Leonel Brizola y Ulysses Silveira Guimarães, como también por Aureliano Chaves y José Sarney, quienes apoyaron abiertamente la candidatura de Tancredo Neves. Ante la falta de apoyo para catapultarlo como candidato presidencial, a Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores, no les quedó otro camino que apoyar a Neves, quien ganaría las elecciones. Pero a los pocos días enfermaría, moriría y sería reemplazado por su forma vicepresidencial José Sarney (Ortiz de Zárate, 2011). Según una crónica publicada en 2003 por los periodistas chilenos Esteban Gómez y Luis Vidal, el mérito de Da Silva es que nunca se puso al margen de los trabajadores, lo que llevaría a que su mensaje fuera captado por la clase trabajadora. El mismo Lula comentaría que en esa etapa de transición democrática:

Una vez discutíamos con otros dirigentes sobre cómo íbamos a hacer para ganar la confianza de los trabajadores. Para lograrlo organizamos un campeonato de fútbol. Antes de empezar el partido hablábamos cinco minutos con ellos y después nos tomábamos unas cervezas y en poco tiempo logramos crear una nueva conciencia en los trabajadores (Gómez & Vidal, 2003, p. 1).

En otra instancia, Geisel y Golbery cumplían el objetivo que se habían trazado al principio: Mantuvieron a raya a los militares de “línea dura”, restablecieron las libertades civiles con la abolición de la Primera y la Quinta Acta Institucional y eliminaron todas las normas que regulaban la censura y restringieron el uso de la tortura, como herramienta coercitiva para

obtener información sobre el enemigo. El Habeas Corpus y las libertades políticas quedaban de nuevo restablecidas. Asimismo, Geisel también restablecía las funciones del Congreso y le daba un carácter de autonomía frente al Ejecutivo. Se abría el camino para elegir el último presidente del régimen militar antes de llevar al país una verdadera transición democrática en 1985 (Roett, 2010).

Durante la administración de Geisel, las relaciones exteriores con los Estados Unidos bajo el gobierno de Jimmy Carter, se hallaban completamente deterioradas. El presidente estadounidense, con la creación de la Oficina para los Derechos Humanos, tenía un punto de vista diferente sobre el particular, opuesto al régimen militar brasileño. La revista colombiana Nueva Frontera, dirigida por Carlos Lleras Restrepo, en abril de 1978, explicaba la postura de Carter en los siguientes términos: “Los Estados Unidos colocan el principio de los Derechos Humanos por encima de cualquier otro, rehusando incluso la ayuda a los países que no lo respeten” (Revista Nueva Frontera, 1978, p. 28).

El presidente Geisel por su parte, aseguraba que era un abanderado por el respeto de los Derechos Humanos. Afirmaba, en respuesta a la filosofía Carter, que el régimen militar respetaba la Carta de los Derechos Humanos formulada por las Naciones Unidas. Y que los hechos de tortura no solo ocurrían en Brasil, sino también en otras partes del mundo. La Revista Nueva Frontera aseveraba que:

[En Brasil], cuando se habla de Derechos Humanos, se piensa apenas en sus aspectos políticos”. Ante este clima creciente de tensiones entre Estados Unidos y Brasil, la administración Carter aseguraba que existía un propósito fehaciente de agravar mucho más las relaciones entre ambos países. Geisel opinaba en la misma dirección, pero que no había que sobredimensionar las divergencias; y había que rescatar los

avances alcanzados por el Concejo Empresarial Brasil–Estados Unidos, espacio que el régimen militar observaba como un foro para discutir problemas generales entre ambas naciones (Revista Nueva Frontera, 1978, p. 28).

Geisel también consideraba otro espacio para deliberaciones entre brasileños y estadounidenses: El Centro de Estudios Brasileños, en la Universidad John Hopkins. Indudablemente, ya no eran los tiempos de Castello Branco y su compromiso irrenunciable a ser el aliado más importante de los Estados Unidos en América Latina. La famosa revista del ex presidente colombiano, afirmaba que la relación brasileño–estadounidense estaba disminuida. Ahora el gran socio comercial y político era Europa occidental. Sin desdeñar las relaciones establecidas con Japón, Alemania, los vecinos latinoamericanos, África, e incluso el Medio Oriente (Revista Nueva Frontera, 1978).

El último gobierno militar: Joao Batista Figueredo

La selección del nuevo presidente sucedió en medio de las grandes movilizaciones de masas que fueron mencionadas. No obstante, Geisel, y su asesor Golbery Do Couto e Silva, ya tenían el terreno preparado para elegir al General Joao Batista Figueredo —ex director de la SIN y destacada figura de la Escuela Superior de Guerra del Brasil— como nuevo presidente, pese a los resquemores de la facción de “línea dura”. Era designado entonces estadista en octubre de 1978 por el Colegio Electoral Brasileño: Tendría el reto de gobernar un país convulsionado por protestas que exigían un cambio radical hacia la democracia y con graves problemas económicos, puesto que en ese periodo, Brasil tenía una deuda externa que se había venido acumulando de manera significativa: Tal como lo explica Roett, para 1979 la deuda externa era equivalente al 63% de las exportaciones brasileñas. Para sanear la economía, el nuevo mandatario designó a Mario Henrique Simonsen —destacado economista de la administración de Geisel—

quien le daría prioridad al equilibrio de la balanza de pagos (exportaciones e importaciones) y al control de la inflación. Su política radicaba en decretar austeridad en los gastos del Estado, controlar las importaciones y reducir los créditos de subsidios del gobierno.

Pese a los problemas que la administración de Figueredo afrontaba, el presidente estaba empeñado en profundizar la liberalización política del país. En agosto de 1979, decretó una amnistía que benefició a todos aquellos políticos que habían perdido sus derechos políticos en las purgas adelantadas por los gobiernos militares y facilitó que miles de exiliados retornaran al país. No obstante, la amnistía concedía protección e inmunidad a los militares de “línea dura” que habían participado en aberrantes casos de tortura. En diciembre de ese mismo año, el presidente decretaba la abolición de los dos únicos partidos políticos legales con los que contaba el país, el MBD y el ARENA, y motivaba la creación de un nuevo sistema que permitiría la creación de nuevos partidos políticos, de cara a las nuevas elecciones que se avecinaban (Roett, 2010). El partido progubernamental ARENA se condensaría en el nuevo Partido Social Democrático, pero no volvería gozar del apoyo que había recibido en los anteriores gobiernos militares. EL MBD pasó a conocerse como el Partido Movimiento Democrático Brasileiro (PMDB): Fue el partido de algunas agremiaciones políticas que habían actuado como oposición al régimen militar. Pero tampoco se puede desdeñar el surgimiento del Partido de los Trabajadores en cabeza de Lula da Silva (cuyo epicentro político era Sao Paulo) que agrupaba a los sindicatos rurales y urbanos y contaba con el apoyo de integrantes de la Iglesia Católica (en especial de la Teología de la Liberación), la clase media y grandes movimientos estudiantiles provenientes de la universidad pública. El Partido de los Trabajadores fue uno de los grupos políticos más perseguidos por el régimen militar y sufrió con rigor los atropellos a los Derechos Humanos desatados por la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional (Roett, 2010).

Figueredo y sus asesores fijaron la celebración de las elecciones para elegir un nuevo Congreso para noviembre de 1982. Con las elecciones, la oposición mantendría su poder en Río de Janeiro, Sao Paulo y Minas Gerais. El Partido de los Trabajadores obtenía un pobre resultado electoral. Por su parte, el Partido Social Democrático ganaría la mayoría en las dos cámaras que componen el Congreso. Tanto el Partido de los Trabajadores como el PMDB centraban su atención y su energía en consolidarse como fuerzas fuertes para gobernar el país —en el Ejecutivo— en el momento de darse la transición democrática. De esa manera, las fuerzas opositoras comenzaron una intensa campaña política por todo el territorio brasileiro con el lema “Queremos elecciones directas ya”, que comenzó a calar en la mente de los electores (Roett, 2010).

La transición democrática

Pese a que el partido político del gobierno (Partido Social Democrático) le llevó cierta ventaja a los grupos de oposición; éstos tenían una estrategia que radicaba en enfrentar al régimen político precisamente en donde en términos electorales eran más fuertes: El Colegio Electoral Brasileiro, organismo que definiría y tendría la potestad de determinar las primeras elecciones democráticas en 20 años en 1985. Dicho organismo celebraría las elecciones de manera indirecta. El Partido Social Democrático eligió como candidato presidencial al ex gobernador de Sao Paulo, diputado, ingeniero y mayor del Ejército, Paulo Maluf. La oposición creó una coalición entre el PMDB, el Partido Frente Liberal y configuraron un grupo que denominaron La Alianza Democrática. Escogieron como candidato a Tancredo Neves, un reconocido líder político de Minas Gerais y como candidato vicepresidencial a José Sarney, quien no contaba con mucho respaldo popular. El 15 de enero de 1985, el Colegio Electoral

Brasileño se reunió en pleno para realizar las elecciones presidenciales indirectas. Tancredo Neves resultó electo con 480 votos, frente a los 180 que obtuvo Paulo Maluf.

Cabe destacar un hecho importante para la transición democrática. En 1984 se presenta una Enmienda que proponía celebrar elecciones directas en 1985. La iniciativa fracasó en el Congreso. El hecho fue aprovechado por el movimiento político de Neves, observado por Márcio Pochmann, como un conservadurismo de viejo cuño que gracias a la habilidad política de su líder, logró seducir a un sector poderoso que había sido la base de apoyo del régimen militar, que en el pasado se había materializado en lo que fue ARENA (Pochmann, citado por Pinsky (Comp.), 2007). Neves anunciaba que llegaba el tiempo de “La Nueva República”, luego de su victoria frente a Maluf en el Colegio Electoral Brasileño. De esa forma, Neves crea una coalición entre la política tradicional (con el Partido Frente Liberal) y lo novedoso que representaba el Partido Movimiento Democrático Brasileño. Pochmann critica dicha alianza. Se refiere a ella en los siguientes términos:

[Dicha coalición] dio como resultado, una vez más, el bloqueo de una profunda reforma política que habría hecho posible una transición política sin mediación, del bipartidismo autoritario al multipartidismo, sin límites en el uso de medidas de cooptación y formación de mayorías políticas para garantizar la gobernabilidad (Pochmann, citado por Pinsky (Comp.), 2007, p.31).

Sobre ese contexto, Demetrio Magnoli afirma que:

[Figueredo no fue capaz de manejar la transición democrática y que lo anterior] coincidió con la crisis del sistema internacional de la Guerra Fría. El Brasil de la redemocratización, inaugurado por el gobierno de José Sarney—quien asumiría el poder ante la muerte inesperada del primero—enfrentaría los desafíos de la inserción

estratégica en el Nuevo Orden Mundial, y de la búsqueda de un lugar en el escenario competitivo de la globalización (Magnoli, citado por Pinsky (Comp.), 2007, p. 44).

El nuevo gobierno de transición democrática tenía previsto asumir el poder el 15 de marzo de 1985. Días antes de la inauguración presidencial, Neves cayó gravemente enfermo debido a un severo dolor abdominal, enfermedad que le impidió asistir a su propia asunción como presidente, en un acto en que daría su primer discurso como estadista. El vicepresidente Sarney, juró entonces como presidente provisional, mientras Neves se recuperaba. No obstante, su salud se deterioró y murió el 1 de abril de 1985 en Sao Paulo, sin tener nunca la posibilidad de ejercer el cargo. Por accidente, la transición democrática brasilera comenzaba de la mano del ahora presidente José Sarney. La muerte de Neves causó mucha impresión entre la sociedad civil brasilera, que veía en su figura política el hombre que llevaría a restablecer plenamente la democracia brasilera. Neves, contaba con un verdadero apoyo popular y era siempre rotulado como un político honesto, que había actuado en la arena política regional y nacional con estoicismo y dedicación, pese a las restricciones del régimen militar. La eventual elección de Sarney —político, poeta y escritor— causó un rechazo inmediato: El vicepresidente había sido un abierto defensor del régimen militar y provenía de los sectores más conservadores de la política.

En 1961, había resultado electo vicepresidente del Directorio Nacional de la Unión Democrática Nacional (UDN), uno de los partidos más conservadores del Brasil. Sarney fue una de las figuras claves en el ruedo político de oposición al ex presidente Quadros e incluso, fue determinante para que éste anunciara su renuncia sorpresiva en 1961. Ese mismo año, Sarney fue integrante de la delegación brasilera participante en la Comisión de Política Especial de la Asamblea General de la ONU. Con el apoyo de la UDN, tenía una curul como diputado en la

Cámara de Diputados. Luego de su paso por el Congreso, se presentó a las elecciones estatales para la gobernación de Maranhão, en oposición al líder socialdemócrata Newton de Barros Belo, candidato preferido de los sindicalistas y trabajadores. Para acceder a dicho cargo, decidió apoyar el golpe militar del 31 de marzo de 1964, entonces los militares lo apoyaron en sus aspiraciones políticas (Centros de Estudio y Documentación de Barcelona, 2011).

Su gestión en Maranhão duró cinco años: En dicho Estado, a través de un estilo marcadamente populista, logró progresos poco desdeñables en materia educativa y en el terreno de las comunicaciones. De esa manera, se convirtió en un abierto adalid del nuevo régimen militar en cabeza de Castello Branco: Aprobó la aplicación de purgas, la puesta en marcha de la Primera Acta Institucional y la eliminación de las libertades políticas estipuladas por la Constitución de 1946. Posteriormente justificó en público la abolición de los partidos políticos, en la que también se incluía a la UND, su grupo político y uno de los mayores promotores políticos del golpe militar. A mediados de 1966, fue uno de los gestores principales del partido pro gubernamental (de los militares) ARENA. A comienzos de los 70, fue elegido senador por el Estado de Maranhão y fue hombre afecto a las decisiones tomadas por Artur da Costa e Silva, Emílio Garrastazú Médici y Ernesto Geisel. En pocas líneas, ese era el hombre que pretendía reactivar la democracia en Brasil: Primero defensor del régimen y ahora en el contexto en cuestión, se mostraba como el padre de la transición democrática (Centros de Estudio y Documentación de Barcelona, 2011).

Precisamente Sarney había sido contactado por los asesores de Neves para seducir a los sectores conservadores, y que se aliaran en un frente común para ganar las elecciones, frente al candidato del régimen Paulo Maluf. Por consiguiente, Sarney estaba presionado para adelantar

con éxito la transición democrática y seguir con el mismo éxito la gestión económica del ex presidente Figueredo (Roett, 2010)

Para darle mayor legitimidad a su gobierno, decidió mantener vigente el gabinete que el presidente Neves había conformado antes de morir, compuesto por destacadas figuras políticas que representaban a las mayorías del Congreso, encabezado por el PMDB. Riordan Roett, en ese orden de ideas, sostiene que “no estaba claro, si estos funcionarios estaban en posición de perdonar y olvidar o si usarían sus nuevos poderes para buscar venganza” (Roett, 2010, p. 75). Por su parte, diversos sectores políticos que habían apoyado la candidatura de Neves pedían un cambio radical de las políticas que adoptaría el gobierno central; pedían revertir algunas de las decisiones adoptadas por los militares brasileiros durante 20 años de continuos gobiernos militares. Exigía con celeridad la consecución de una nueva agenda que cambiara la naturaleza del gobierno. Pues bien, Sarney estaría al frente del gobierno junto a una coalición conformada por el Partido Movimiento Democrático Brasileiro (principal partido de oposición al régimen militar) y el Partido Frente Liberal, partido mayoritario del empobrecido nordeste brasileiro (Roett, 2010).

Lo cierto es que la administración Sarney, con el aval de la coalición, se fijó una meta de enorme calado político que dejaría sin piso, y enterrada para siempre, a la Doctrina de Seguridad Nacional: Abolir la vieja Constitución Política de 1969, de marcados aires autoritarios, y crear una nueva Carta Magna que restableciera todas las libertades políticas, estableciera una democracia real y dejara sin sostén los tiempos duros de la represión y la tortura. Para ello, la coalición se reunió con el presidente Sarney para elegir una Asamblea Constituyente y redactar la nueva carta política en el menor tiempo posible. Algunos líderes de la coalición de gobierno propusieron celebrar la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 1986, para que

coincidiera con las elecciones del Congreso, propuesta que sería acogida plenamente por Sarney. En aras de satisfacer los deseos de aquéllos que exigían un cambio rotundo, el presidente creó una Comisión de Notables que redactaría sin afanes la nueva Constitución Política que entraría en vigencia a partir de 1987. El presidente tenía el deseo de hacer un punto de quiebre con el régimen militar y demostrar que su gobierno era abiertamente democrático, que ya no existían vestigios de la Doctrina de Seguridad Nacional: No recurriría a ninguna de las herramientas represivas y autoritarias estipuladas en la Constitución vigente para reprimir a grupos de izquierda, de oposición y facciones subversivas: Decidió también respetar la autonomía del Congreso (respetar la creación de nuevos partidos políticos fue un hecho clave en la transición democrática) y no adjudicarse poderes como figura principal en el Ejecutivo o gobernar por medio de decretos-ley tal como lo hicieron los presidentes militares durante 20 años, sobrepasando y desconociendo los actos legislativos (Roett, 2010).

Fueron hechos importantes, mientras llegaba el tiempo de celebrar una nueva Asamblea Nacional Constituyente y así tener el camino abierto para redactar y aprobar una nueva carta política. Muchas de las decisiones tomadas por el régimen militar quedarían entonces sin peso jurídico y legal, mientras la Comisión de Notables comenzaba la redacción de la nueva Constitución Política. Sin embargo, las posiciones entre los miembros del gabinete de gobierno comenzarían a ser contradictorias y a reñir con el pasado dictatorial: Iris Rezende Machado, Ministro de Agricultura de Sarney, propuso una radical reforma agraria, declaración que lo llevó a enemistarse con grupos radicales y conservadores y sostener serios altercados con la cúpula militar, la que en pleno rechazó la iniciativa. Por otro lado, la ambiciosa agenda social que había prometido el presidente, quedó en entredicho por las decisiones que adoptó Francisco Neves Dornelles (sobrino del presidente Neves), ministro de economía bajo un plan conservador y

austero en materia económica. Anunció una reducción del 10% en el gasto público, la suspensión durante dos meses de los préstamos bancarios del gobierno, el congelamiento durante un año de las contrataciones públicas. Estas determinaciones llevaron a enemistarlo con las mayorías del Congreso ya que los congresistas consideraban que implementar esas medidas económicas, constituía un rechazo a la apertura política y democrática que vivía el país, ante la celebración de las elecciones legislativas y de la Asamblea Nacional Constituyente, programada para noviembre de 1986. Por su parte, el Ministro de Planeación aseguró que las medidas del Ministro de Economía llevarían a una terrible recesión económica (Roett, 2010).

Por otro lado, el presidente Sarney tuvo la habilidad política de llegar a acuerdos con Ulises Guimaraes, presidente del PMDB, para consolidar con creces la transición política y democrática. Todos los partidos políticos prendían baterías y comenzaban sus campañas para participar en las elecciones legislativas de 1986. En mayo de 1985, el Congreso aprobó algunas iniciativas del Ejecutivo para reabrir ciertas instituciones políticas y democráticas que se habían desdibujado durante los 20 años de régimen militar (Roett, 2010). El Congreso también aprobó las elecciones democráticas, enterró el sistema de elecciones indirectas del Colegio Electoral Brasileiro (organismo que era controlado por los militares en medio de la etapa transición democrática). De esa manera, quedaba claro que la Doctrina de Seguridad Nacional y su naturaleza de intervenir en todos los campos de la vida, incluyendo el campo electoral, era cosa del pasado. A su vez, los analfabetos tendrían la facultad de votar, cuando nunca lo había podido hacer durante los cinco gobiernos militares; todos los partidos políticos que cumplieran los requisitos electorales podrían participar en las elecciones, y no serían vetados ni perseguidos y se les garantizaría su legalidad. Por primera vez, desde los tiempos de Getulio Vargas, partidos de izquierda y comunistas participarían en las elecciones: El Partido Comunista Ortodoxo, que

seguía los lineamientos de la Unión Soviética, y el Partido Comunista Brasileiro. En las elecciones para alcaldes, explica Roett, el PMDB ganó 19 de las 25 capitales políticas del sistema estadual brasileiro. Luego de ese primer ejercicio electoral, ya comenzaba a agitarse el panorama político con la participación de figuras políticas del pasado que fueron vetadas políticamente por el régimen: el ex presidente Janio Quadros, luego de la amnistía decretada por Figueredo en 1979, había regresado a la arena política con el aval del Partido de los Trabajadores. Fue derrotado en la elección para gobernador de Sao Paulo en 1982; en 1985 resultó electo alcalde de Sao Paulo al derrotar a Fernando Henrique Cardoso, futuro presidente del Brasil. Figuras políticas de antaño como Leonel Brizola (cuñado del depuesto presidente Goulart) influyó notablemente en la elección del nuevo alcalde de Río de Janeiro. Ante la participación de dichos personajes, algunos analistas y observadores opinaban que con el restablecimiento de la democracia, el populismo de antaño estaba de vuelta. Sobre ese particular, Roett ofrece datos importantes para analizar el panorama posterior al régimen militar y a la desaparición de la Doctrina de Seguridad Nacional:

La tendencia política estaba clara. Los brasileiros habían optado en las urnas por los políticos de centro izquierda. El antiguo ARENA, el Partido Social Democrático era el perdedor de la contienda electoral. Sin embargo, muchos observadores formularon una pregunta importante ¿Dónde estaba el nuevo gobierno de los políticos? Los líderes políticos previos a 1964 estaban vivos y vigentes, y aún no aparecían nuevos candidatos con nuevas propuestas. Algunos pensaban que se trataba del perverso legado de los años del régimen militar. Los políticos tradicionales previos al golpe militar del 31 de marzo de 1964 volvían al terreno político sin las trabas impuestas por los militares; los electores jóvenes optaban y esperaban nuevas vías de

participación en la vida civil y también en los ámbitos políticos municipales y estatales (Roett, 2010, p. 77).

Lo cierto es que los viejos políticos dominaban en ese entonces la escena política y que los jóvenes esperaban cambios sustanciales que aquellos no fueron capaces de traducir a la realidad (Roett, 2010).

Se elegían también una Asamblea Nacional Constituyente, compuesta en su mayoría por líderes de la coalición; la nueva Constitución Política sería presentada, promulgada y aprobada en octubre de 1988. El texto restituyó a plenitud las libertades civiles, los derechos políticos y dio el paso definitivo hacia la democracia. El escritor y experto en ciencias políticas Marco Mondaini explicó que la Carta Magna:

Es el marco fundamental para cualquier tipo de análisis que pretenda llevarse a cabo sobre el desarrollo de los derechos de ciudadanía en los últimos veinte años de historia brasilera; representa el acto de fundación (o refundación) de un país que tuvo muy escasos momentos de vida plenamente democrática en sus casi dos siglos de independencia nacional (Mondaini, citado por Pinsky (Comp.), 2007, p. 64).

Este autor brasilero tiene la tesis de que los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente suscribieron la Carta Política con el afán de echarle tierra a un apabullante pasado dictatorial y autoritario (Estado Novo de Vargas y régimen militar de 1964 a 1985) y sería una herramienta para vacunar al país frente a la irrupción de golpes de Estado y de la posible instauración de nuevos regímenes dictatoriales. Era darle una vuelta de hoja a un pasado en el que Brasil estaba “en el selecto grupo de naciones tristemente célebres por hacer del irrespeto de los derechos fundamentales del individuo una práctica constante” (Mondaini, citado por Pinsky (Comp.), 2007, p. 64).

Mondaini también explica que la aprobación del documento significó una nueva época de los Derechos Humanos, al reconocer garantías civiles y políticas que Brasil no había conocido durante la era de Vargas, luego con los gobiernos populistas de Quadros y Goulart y con la aparición del régimen militar. Garantías que también tienen que ver con el ámbito individual como colectivo, en lo referente al sistema político, el ordenamiento civil, en las políticas sociales del gobierno, el desarrollo, el bienestar, la seguridad, la promulgación de principios fundamentales, la erradicación de la desigualdad social —uno de los temas que Brasil no ha podido superar, pues es una de las naciones más desiguales del continente—, la eliminación de todo tipo de prejuicio racial, religioso, étnico, social; con el ideal de construir una sociedad pluralista (Mondaini, citado por Pinsky (Comp.), 2007).

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1986, el diputado federal Ulysses Silveira Guimarães, aseguró en el momento de promulgarla que se trataba de “una Constitución ciudadana”; la carta política era la base para construir una nueva nación cuya piedra angular fuesen los Derechos Humanos. Con su promulgación, el país pasó a denominarse República Federativa de Brasil, a ser considerado un Estado Social de Derecho, bajo la aspiración de cumplir tres principios fundamentales: la representación electoral, la separación de los poderes públicos y el pluralismo político. Luego de mucho tiempo de censura, la Carta Política garantizaba la libertad de expresión y también que los ciudadanos acudieran a las urnas por medio de la ampliación del número de electores. A su vez, también motivó que éstos dejaran la apatía política y que acudieran en masa en cada elección democrática (Mondaini, citado por Pinsky (Comp.), 2007).

Desde la restitución de la democracia, los brasileros han participado en seis elecciones presidenciales (2014); en la última elección (2010) fue elegida Dilma Vana Rousseff, con el 56%

de los votos. Fue ex Jefe de Gabinete del presidente Lula da Silva y en el pasado una aguerrida militante del Partido de los Trabajadores, perseguida por el régimen militar.

Desde luego, es pertinente traer a colación algunos postulados constitucionales que le dieron un vuelco a la vida civil, política y social de los brasileros. El Título I de los Principios Fundamentales, designa al Brasil como Estado Democrático de Derecho compuesto por Estados, Municipios y el Distrito Federal de Brasilia, cuyos fundamentos principales son: La soberanía, la ciudadanía, la dignidad de la persona humana, el pluralismo político. Plasma y legitima la tesis de que “el poder emana del pueblo, que lo ejerce por medio de representantes elegidos directamente, en los términos de esta Constitución” (Universidad Nacional Autónoma de México & Fondo de Cultura Económica de México, 1994, p. 7). El Artículo 2 contempla la separación de los poderes públicos. Por su parte, el Artículo 4 estipula que en sus relaciones internacionales, Brasil se regirá por los principios de la independencia nacional, la prevalencia de los Derechos Humanos y la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en otros países, la igualdad entre los Estados, la defensa de la paz, la solución pacífica de los conflictos, el repudio del terrorismo y el racismo, cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad y la concesión del asilo político. En materia de relaciones externas, Brasil tendrá el objetivo de lograr la integración económica, política, social y cultural de América Latina (Universidad Nacional Autónoma de México & Fondo de Cultura Económica de México, 1994).

Sobre los Derechos y Garantías Fundamentales, en su Capítulo I, Artículo V, estipula:

Que nadie será sometido a tortura ni a trato inhumano o degradante; la manifestación de pensamiento será libre, quedando prohibido el anonimato; es inviolable la libertad de conciencia y de creencia. Nadie será privado de derechos por motivo de creencia religiosa o de convicción filosófica o política, salvo si las invocara para eximirse de

obligación legal impuesta a todos, y rehusarse a cumplir la prestación alternativa, fijada en la ley. Es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación, sin necesidad de censura o licencia. Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las personas. Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones (telegráficas y telefónicas), las informaciones —salvo por orden judicial— en las hipótesis y en la forma que la ley establezca para fines de investigación criminal o instrucción procesal penal (Fondo de Cultura Económica de México, 1994, p. 9).

En este mismo apartado, la Constitución también protegerá el libre acceso a la información, el derecho a reunirse pacíficamente, sin portar armas, y en lugares públicos. Libertad para crear asociaciones, se garantiza el derecho a la propiedad privada. Más adelante, fijará que se considerarán delitos no afianzables e imprescriptibles las acciones de grupos armados, civiles o militares, en contravía del orden constitucional y el Estado Democrático. Estará asegurada la integridad física y psicológica de los presos; ningún brasilero será extraditado y nadie será privado de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso. Todos los ciudadanos tendrán derecho al *habeas corpus*, siempre que alguien padeciera o se crea amenazado de sufrir actos de violencia o coacción en su libertad de locomoción, por ilegalidad o abuso autoritario de poder. En el Capítulo IV, Artículo 14, sobre los Derechos Políticos, designa que la soberanía popular podrá ser ejercida por medio del voto directo a través de elecciones, plebiscito, referéndum, iniciativa popular; el voto es obligatorio. Podrán votar los analfabetos, los mayores de 18 años, los mayores de 60 años. El Presidente y el Vicepresidente electos deberán tener, como mínimo, 35 años de edad. Los militares pueden aspirar a cargos públicos

siguiendo algunos postulados constitucionales. El Artículo 15 de dicho capítulo establece que estará prohibida la privación de derechos políticos.

Por otro lado, el Capítulo V, en el Artículo 17, fija la libre creación de partidos políticos, sus eventuales fusiones y terminación de su personería jurídica. Se consolidará el pluripartidismo, la rendición de cuentas a la Justicia Electoral, el funcionamiento de la rama legislativa, y la garantía constitucional para que los partidos políticos definan sus propias estructuras internas, estatutos y reglamentos (Fondo de Cultura Económica de México, 1994, p. 18).

No obstante, para analistas como Riordan Roett, la aprobación de la Constitución de 1986, perjudicó notoriamente la economía brasilera: Obligaba al gobierno Central a transferir el 21.5% de los impuestos de renta y de los impuestos de los bienes manufacturados a los Estados y municipios, situación que ya estaba consolidada en 1993. Medida que ayudó a los miembros del congreso a reformular sus políticas locales y regionales; asimismo era una respuesta de rechazo (ahora avalada por la Constitución) a las medidas centralistas que caracterizaron al régimen militar durante dos décadas. Dicho decrecimiento en las fuentes económicas federales no ponía énfasis en la reducción de las obligaciones, afectando el presupuesto nacional.

El período presidencial de Sarney llegaba a su fin en 1990 con la elección de Fernando Collor de Mello, por medio de la celebración de las primeras elecciones directas (Roett, 2010), que ocurrían en el país luego del golpe del 31 de marzo de 1964, situación que partió la historia del Brasil en dos. La Doctrina de Seguridad Nacional era historia, era pasado, pero sus huellas de aplicación implacable, seguían causando pavor entre muchos ciudadanos que padecieron su rigor durante el régimen militar. El reconocido historiador brasilero Jaime Pinsky argumentaría en el libro *Brasil en contexto*, publicado en 2007, que:

[22 años después de la culminación del régimen militar] la democracia formal se ha consolidado, las instituciones funcionan normalmente, los poderes son razonablemente independientes, el pueblo vota, los partidos políticos tienen libertad para funcionar, la prensa es libre, antiguos opositores al régimen militar desempeñan importantes funciones en el gobierno. Los últimos presidentes elegidos han sido un intelectual perseguido por el Gobierno Militar y un líder obrero, sin que existan condiciones para algún tipo de golpe, civil o armado (Pinsky (Comp.), 2007, p. 11).

El politólogo Leandro Fortes ha sido un permanente crítico de la gestión y la transición democrática adelantada por Sarney. Argumenta que:

El gobierno del presidente Sarney, recordado como uno de los grandes desastres nacionales, creó las bases de la corrupción política que se prolonga hasta hoy, en su parte visible, en los malos manejos del Congreso Nacional y en la arrogancia del poder económico (Fortes, citado por Pinsky (Comp.), 2007, p. 55).

Asimismo, Fortes considera que con Sarney inicia una nueva etapa de la mediocridad en la gestión pública; la presión de grupos reaccionarios y conservadores para lograr sus objetivos, por medio de concesiones de canales de radio y televisión que favorecieron a personas particulares. Los beneficiados apoyaron a Sarney para que ejerciera la presidencia durante 5 años hasta 1990, lo cual supuso un verdadero descrédito que motivó la apatía política (Fortes, citado por Pinsky (Comp.), 2007).

Tal como ya fue expuesto, el economista y politólogo Márcio Pochmann sustenta en un lúcido ensayo que luego de los áridos años en materia de elecciones, que se dieron en el periodo posterior al Imperio, el voto se vivió a plenitud luego de la terminación del Estado Novo de Getulio Vargas (1937 y 1945); fue suspendido durante el régimen militar entre 1964 y 1985. Y

fue restablecido con éxito plenamente a partir de 1989 hasta la fecha. Por ejemplo hasta 1930, los pobres, los desheredados y las mujeres no tenían derecho al voto. En ese orden de ideas, Pochmann sostiene que a lo largo de su historia, Brasil ha vivido más tiempo sujeto a los regímenes dictatoriales que a los gobiernos democráticos sumados todos juntos; han sido muchos más años de totalitarismo que aquellos tiempos en los que el país experimentó —y ha venido experimentado en los últimos 20 años— una democracia real. Por tanto, Brasil ha vivido una cultura antidemocrática, sin reformas agrarias sustanciales, con una desigualdad social galopante, con solo 50 años de instauración democrática, vivida en contextos períodos diferentes, frente a 400 años de regímenes autoritarios y dictatoriales.

Precisamente, los primeros años de restablecimiento democrático, luego del régimen militar, con la incorporación de todo tipo de partidos políticos que gozan de legalidad luego de la transición democrática.

[Sobre lo anterior Ponchamm, argumenta que], termina siendo el periodo más extenso de experimentación democrática representativa de todos los tiempos. En el periodo reciente, el régimen de la democracia de masas, con participación popular de más de dos tercios de la población, ha permitido una importante oscilación partidista que termina, en 2002, con la elección de un partido de base obrera (perseguido por el régimen militar), sin paralelo en la historia política nacional. (Ponchamm, citado por Pinsky (Comp.), 2007, p. 30).

Conclusión

Sin ninguna duda, La Doctrina de Seguridad Nacional fue el proyecto y la estrategia militar más preponderante que impulsó el gobierno de los Estados Unidos (Desde Harry Truman hasta Jimmi Carter) en el espectro latinoamericano. Su naturaleza fue configurada para contener la expansión del comunismo en los países de la región durante la Guerra Fría.

Su aplicación se sintió con mucho más peso durante la época de la posguerra (fin de la Segunda Guerra Mundial); durante los años 60 y 70, con la irrupción de las dictaduras y los regímenes de facto latinoamericanos. El primero de dichos regímenes dictatoriales fue desde luego, el régimen militar brasileño, que gobernó con mano dura el gran país sudamericano durante 21 años, a través de decretos-ley, actas institucionales que iban en detrimento de los derechos civiles y políticos y se confundía todo intento de oposición con la insurgencia armada.

Cabe concluir que la utilización de la Doctrina de Seguridad Nacional tanto en América Latina como en Brasil, propició el ambiente idóneo para la implementación de métodos contrainsurgentes que contemplaron la tortura, las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos, las más refinadas herramientas de inteligencia, represión militar hacia todo lo que se opusiera a los regímenes- en aras de contener al enemigo comunista –al mejor estilo de Kennan-, sin escatimar esfuerzos por eliminar todo aire de izquierda, ya fuera sacerdotal, oposición, partido político o fuerza que cuestionara de frente las directrices del régimen. Ahora bien, cabe preguntarse ¿Por qué en el contexto de democratización que experimentó la región en los 80, la Doctrina de Seguridad Nacional -incluido Brasil-entró en un periodo de decadencia y luego de desuso?

Como ya fue expuesto, importantes miembros de los ejércitos de la región, tal fue el caso de algunos integrantes de la Fuerza Expedicionaria Brasileira (FEB), comenzaron a capacitarse en importantes centros militares de los Estados Unidos.

Admiraban el desarrollo socio económico, político y militar alcanzado por la potencia del norte y trataron de imitar muchas de sus actuaciones en el plano económico, militar y de inteligencia, con la creación de la Escuela Superior de Guerra del Brasil. En dichos espacios estudiaron las tácticas militares para acorralar a la subversión armada, utilizando como modelo la lucha contrainsurgente ejercida por los militares franceses para diezmar a los rebeldes argelinos. La Doctrina de Seguridad Nacional dictó la lucha frontal y sin contemplaciones hacia el comunismo en Brasil; el combate indeleble contra grupos guerrilleros, tal como sucedió con la aplicación de la “Operación Presencia”, con el aval de los Estados Unidos. Algunos sostuvieron que su implementación obedecía a parámetros estipulados desde Washignton; no obstante otros observadores argumentaron que la Doctrina se aplicó en Brasil sin ningún tipo de injerencia estadounidense. ¿En el contexto brasilero, se aplicó una Doctrina autónoma, al margen de las directrices dictadas desde Washignton? o ¿hizo parte de un gran proyecto continental liderado por Estados Unidos para contener el comunismo? Lo cierto es que su aplicación conllevó de manera inevitable, la represión de todo tipo de oposición a los gobiernos militares, aunque fuera legal, la depuración del sistema político con la creación de un grupo político progubernamental y otro, supuestamente de oposición, pero que también era controlado por el gobierno militar ¿Esta apariencia democrática hacia la participación política, se trató de una supuesta democratización para hacer creer a la comunidad internacional, que estaban dispuestos a acoger a la democracia en el sistema político?

Por otro lado, a lo largo de este trabajo, se dilucidó ampliamente que dos facciones de las Fuerzas Armadas brasileras, tenían posiciones contrarias sobre la manera de gobernar. Cabe preguntarse ¿Cómo las posturas irreconciliables entre los Sorbonne y los Autoritarios Nacionalistas, influyó sobre la ejecución y puesta en marcha de la Doctrina?

También llevó a la supresión de derechos políticos durante una década con prórrogas justificadas por el estamento militar y la intervención asfixiante y dictatorial en todos los aspectos de la vida humana: La economía, la política, la religión, la educación, lo social, entre otros aspectos.

Paulatinamente, La Doctrina de Seguridad Nacional, entró en una especie de ocaso propiciada con la aparición en los Estados Unidos de Jimmi Carter. Por eso, el presidente Geisel, luego de la alianza indisoluble que propuso Castello Branco con los Estados Unidos, posterior al desgaste en las relaciones bilaterales entre brasileros y estadounidenses que comenzó con Artur da Costa e Silva, aún sostenía diferencias notables con Washignton, pese a la asesoría de Golbery do Couto e Silva. El presidente demócrata en medio de su política de multilateralismo, creó “La Oficina de los Derechos Humanos”, acciones que supusieron un duro revés para las dictaduras militares. Eran los tiempos de la “Apertura”, era el contexto preciso para adelantar los preparativos de cara a una transición que los brasileros solo conocerían en 1985.

Al retrocedernos un poco en el tiempo, se pudo comprobar que la Doctrina de Seguridad Nacional en el contexto brasiler, tuvo a principio de los 50 un importante aliado que definió sus beneficios en *Geopolítica del Brasil*: el ya citado general Golbery do Couto e Silva. A finales de los años 50, propuso en clara sintonía con la lucha contrainsurgente estadounidense, la puesta en marcha de un bloque interamericano de defensa contra la expansión del comunismo soviético. Argumentaba a través de un lenguaje metafórico, histórico y literario, que era indispensable una

estrecha relación entre brasileros y estadounidenses, para salvaguardar a la civilización occidental cristiana ante las amenazas ateas del comunismo, quien propiciaba una lucha de clases, estéril y muerta en cuestiones dialécticas e hijo espurio de las ideas de Hegel ¿Fue entonces determinante Couto e Silva para la planeación y posterior ejecución de la Doctrina, en su rol de Director de la SIN y luego en su posición de asesor presidencial?

Luego del golpe de Estado al presidente Goulart el 31 de marzo de 1964, los militares gobiernan por primera vez el país, aunque ya habían sido la fuerza desestabilizadora que llevó al fin de la primera administración de Getulio Vargas, su suicidio y la renuncia sorpresiva del presidente Quadros. Los militares pese a las divisiones internas, detentaron el poder con puño de hierro desde 1964 hasta 1985, mientras ejercían la Doctrina de Seguridad Nacional: Eliminaron todo intento de oposición, las movilizaciones de masas; reprimieron grupos subversivos y guerrilleros y de manera inevitable, ocurrieron casos de violación de los Derechos Humanos, tortura y desaparición forzada.

En Brasil, la Doctrina se construyó bajo el amparo de las siguientes directrices impulsadas por la Escuela Superior de Guerra del Brasil, que después fueron debatidas y cuestionadas por los militares de línea dura: El desarrollo económico sostenido, la preservación del orden, eliminación del comunismo (ahí cabían la oposición, grupos guerrilleros, movilizaciones de masa), represión militar y una óptima planificación económica. Por su parte el régimen militar brasilerio nunca fue unipersonal, a diferencia del Chile de Pinochet, la Bolivia de Hugo Banzer o el Paraguay de Stroessner.

Luego del golpe de Estado del 31 de marzo, ocurrieron fricciones inevitables y las diferencias entre las facciones de las Fuerzas Armadas brasileras, se hicieron notorias: Los “entreguistas” o los Sorbonne eran abanderados de la inversión extranjera, compartían los

postulados de Golbery do Couto e Silva y Castello Branco de sostener una alianza incuestionable con los Estados Unidos y eran partidarios de eliminar toda manifestación comunista. Durante su mandato, Nixon y Kissinger fueron aliados importantes del régimen militar brasilero.

En la orilla opuesta, los autoritarios nacionalistas o “militares de línea dura”, ponían en entredicho la alianza sostenida con la potencia del norte, y argumentaban que era imperativo construir una política de seguridad, al margen de las directrices dadas por los presidentes estadounidenses y El Pentágono.

Sea pertinente concluir que en el ocaso del régimen militar, los militares en cabeza de Figueredo, notaron que era el momento ideal para realizar una apertura política y se decretó una amnistía que restituyó el poder de los líderes populistas del pasado. En 1985, el país era gobernado por un presidente civil, el vicepresidente Sarney, cuando murió súbitamente Tancredo, luego de 21 años de férrea dictadura.

La Doctrina de Seguridad Nacional quedaría enterrada para siempre, sería desterrada en el pasado, sufriría un exilio inevitable con la promulgación de una nueva Carta Magna y con las primeras elecciones presidenciales directas, acaecidas en 1989 y cuyo ganador fue Fernando Collor de Mello.

Referencias

- Albuquerque, A. (1968). *Discursos*. Interpretados y condensados en el periódico *Jornal do Brasil*.
- Arriagada, A., Santos, J., Orregón, F., López, E. & Orrega, C. (1976). *Seguridad Nacional y bien común*. - Santiago de Chile: Talleres Gráficos Corporación Ltda. Funciones y perspectivas de las instituciones supranacionales europeas. Recuperado de http://www.elorbita.org/pdf/Nina_DNS.pdf
- Barber, W. & Neale, R. (1966). *Internal security and military power: contrainsurgency and civic action in Latin America*. Ohio State University Press.
- Barcelona, Centros de Estudio y Documentación (2011). Biografía de José Sarney de Araujo Acosta, Presidente de Brasil entre 1985 y 1990. Recuperado de http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/brasil/jose_sarney
- Barros, C. (1967). *Curso de movilización en el campo económico. Escuela Superior de Guerra del Brasil: Centro de Estudios*.
- Boff, L. (1977). *Ideología del cautiverio y de la liberación*. Madrid: Paulinas.
- Brasil, Escuela Superior de Guerra (1963). *Circular de la Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Superior de Guerra del Brasil (ADESG, 1*
- Brasil, Escuela Superior de Guerra del Brasil (1967). *La Guerra de los Sorbonne* (documentos). Glauco Carneiro.
- Brasil, Escuela Superior de Guerra del Brasil (1964). *Boletín para los Asociados*, 101 : 7 -8.
- Brasil. Ministério do Exército (1966). *Diretório Peral do Ensino. Guía do candidato ao Colegio Militar*.

- Brasil, Fuerzas Armadas Brasileiras (1964). Nombre de los generales y de todos aquellos oficiales que participaron en cursos de la Escuela Superior de Guerra y que participaron de manera activa en el golpe del 31 de marzo. Almanaque del Ejército
- Brasil, Fuerzas Armadas Brasileiras (1968). Sistema de Promoción. Almanaque del Ejército.
- Calderón J. (2009). Doctrina de seguridad nacional. Recuperado de <http://www.actualidadunah.files.wordpress.com/2009/07/doctrina-de-la-seguridad-nacional.pdf>
- Carneiro, D. (1968). *Organización política del Brasil. Escuela Superior de Guerra del Brasil: Departamento de Estudios*. Río de Janeiro.
- Carr. E. (2004). *La crisis de los veinte años (1919-1939)*. Madrid: Editorial Catarata. Colección de Relaciones Internacionales.
- Castello, C. (1968, diciembre 14). Columna política. *Jornal do Brasil*.
- Castello, M. (1960). *Brasil en la Segunda Guerra Mundial*. Rio de Janeiro: Biblioteca del Ejército.
- Castelo, H. (s.f.). *Archivos*. Río de Janeiro. Escuela del estado Mayor del Ejército (ECEME).
- Castelo, H. (1966). *Os idos de marco*. Extractado del Archivo del Mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, pp. 392-393.
- Castelo, H. (1966a). *Una política de revolución brasilera*. (Discurso en Ministerio de Relaciones Exteriores, el 31 de julio de 1964). Documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Castelo, H. (1967). *Seguridad y desenvolvimiento*. (Discurso en la Escuela Superior de Guerra del Brasil el 14 de marzo). Reproducido por el diario de circulación nacional Correo de la Mañana.

- Castelo, H. (1967a). *Seguridad y desenvolvimiento*. Río de Janeiro. Editorial de la Biblioteca del Ejército.
- Corrêa de Lacerda, A. (2007). Economía. En Pinsky, J. (Comp.). *Brasil en contexto: 1987-2007* (pp.17-29). Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.
- De Carli Gileno (comp.) (1961). *Brasilia e a Grande Crise*. Imaos Pongetti.
- Della, R. (1970, abril 24). Tortura en Brasil. *Commonwealth*.
- Do Couto, G. (1955). *Planeamiento Estratégico*. Biblioteca del Ejército.
- Do Couto, G. (1978). *Geopolítica del Brasil*. México: El Cid.
- Ellis, S. (1968, diciembre). *La aplicación de teorías de desarrollo económico en Brasil*. University of Wisconsin Press. Latin American Center Essay Series, 1, 5-6.
- Episcopado Latinoamericano (1976). Segunda Conferencia General CELAM. Medellín Conclusiones. Bogotá.
- F., J. (1964, octubre). *Some reflections on counterinsurgency*. *Military Review* : 76,78.
- Ferreira, O. (1964). *As Forças Armadas e o Desafio da Revolução*. Edições GRD.
- Fortes, L. (2007). Política Interna. En Pinsky J. (Comp.), *Brasil en contexto: 1987-2007* (pp. 55-63). Programa Editorial Universidad del Valle, Colombia.
- Gómez, E. (1974, abril). Brasil: una década con los militares. *Arco*. 159: 49.
- Gómez, E. & Vidal, L. (2002). *Brasil con cuatro dedos a la izquierda*. Recuperado de:<http://www.periodismo.uchile.cl/contintanegra/2002/noviembre/internacional2.html>
- Gordon, L. (1966). Declaraciones cuando aspiraba a ocupar el cargo de Secretario para Asuntos Interamericanos en audiencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, en el 89vo Congreso , Segunda Sesión, 44- 45.

- Gordon, L. (1970, 7 de agosto). Carta de su autoría y dirigida al Editor General de la *Revista Commonweal*, 92 :379.
- Gutiérrez, G. (1972). *Teología de la liberación: perspectivas*. Lima : Sígueme
- Gutiérrez, G. (1973). *Evangelio y praxis de liberación. En fe cristiana y cambio social*. Lima.
- Hoffmann, S. (1991). *Jano y Minerva: Ensayos sobre la guerra y la paz*. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano. Colección Estudios Internacionales.
- Johnson J. (1964). *The military and society in Latin America*. En Stanford University Press.
- Jornal do Brasil (1968, diciembre 8). *Capitanes comentan sobre la vida política con su manifiesto de la EsAO*.
- Jurema, A. (1964). *Los últimos días del gobierno de Joao Goulart*. Rio de Janeiro Cruzeiro.
- Kissinger, H. (1995). *Diplomacia*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Landázuri, J. (1968) *Discurso de clausura de la II Conferencia episcopal latinoamericana*. Signos.
- Leal, F. (2005). *La inseguridad de la seguridad: Colombia 1958-2005*. Bogotá : Planeta.
- Lissak, M. (1967, abril). Modernización y cambio de roles de los militares en los país en vía de desarrollo. *Revista norteamericana Sociedad e Historia*, 9: 233, 255.
- Littuma, A. (1974). *La noción de seguridad*. Caracas: Grafiúnica.
- Mascareñas, I. (1968). *El poder nacional y sus tipos de estructura. Escuela Superior de Guerra: Departamento de Estudios*. Río de Janeiro.
- McAlister, Lyle (1966). Recent research and writings on the role of the military in Latin America. *Latin American Research Review*, 11 : 5-36.
- Magalhães Juracy Montenegro. Textos e declarações sobre política externa: primeiro aniversario da revolução de 31 de marzo de 1964.1965. Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Discurso do Embaixador Juracy Montenegro Magalhães en Washignton, 16 de febrero de 1965.

Magnoli, D. (2007). Política externa. En Pinsky J. (Comp.), *Brasil en contexto: 1987-2007* (pp. 43-55). Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.

Mann, T. (1965, marzo 19). The unnecessary dollar cost incurred in financing purchases of commodities in Brazil. Apéndice II, pág 21

México, Fondo de Cultura Económica (1994). Constitución de la República Federativa de Brasil.

Mondaini, M. (2007). Derechos humanos. En Pinsky, J. (Comp.), *Brasil en contexto: 1987-2007*. (pp. 63-75).Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.

New York Times (1969, marzo 22). Crónica. *New York Times*.

Nina, A. (1979). La doctrina de seguridad nacional e integración latinoamericana. Nueva Sociedad. 27:33-50. Recuperado de http://www.nuso.org/upload/articulos/274_1.pdf

O Estado (1964, abril 4). Noticia publicada por el periódico O Estado. Sao Paulo.

O Jornal (1964, septiembre 2). Encuesta realizada y publicada por el periódico O Jornal. Río de Janeiro

Osava, M. (2007, mayo 25). Rebelión. El secuestro que supimos realizar. *Documental " Hércules 56". Brasil*. Recuperado de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=51332>

Ortiz, R.(2011). Luiz Inacio Lula da Silva. Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

Recuperado de:

http://www.cidob.org/es/documentacio/biografias_lideres_politicos/america_del_sur/brasil/luiz_inacio_lula_da_silva

- Paredes, A. (2004). La Operación Cóndor y La Guerra Fría. *Revista Universum (Talca)*. 1(19), 122 - 137, 2004. Recuperado de /www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762004000100007&script=sci_arttext
- Pinsky J. (Comp.) (2007). *Brasil en contexto: 1987-2007*. Programa Editorial Universidad del Valle, Colombia.
- Pochmann, M. (2007). Trabajo y renta. En Pinsky J. (Comp.), *Brasil en contexto: 1987-2007*. (pp. 29-43). Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle.
- Rivas, P. (2009). *Doctrina de Seguridad Nacional y regímenes militares en Iberoamérica*. Madrid: Club Universitario (ECU).
- Reynolds, R. (1966, noviembre). Brazil overseas military operations. En *Military Review*. 46: 85-91.
- Roett, R. (2010). *El nuevo Brasil*. Nueva York: Brookings Institution Press.
- Saunders J.(1964, mayo). A revolution of agreement among friends: the end of the Vargas Era. *Hispanic american Review*. 44, 45.
- Schmitter, P. (1970). La persecución de los científicos políticos y sociales en Brasil. *P.S.*, 3, 123, 128.
- Stacchini, J. (comp.) (1965). *Marco 64: Una movilización de audacia*. Sao Paulo: Nacional.
- Stepan, A. (1970). *Brasil: Los militares y la política*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Stepan, A., Maullin, R. & Einaudi, L. (1969, abril). Latin American Security Issues. *The Rand Corporation*, P-4109:5.
- Stepan, A., Maullin, R. & Einaudi, L. & Fleet M. (1969). *Desarrollo institucional latinoamericano: los cambios en la Iglesia Católica en América Latina*. Santa Mónica: *The Rand Corporation*, p. 26.

Sustar, L. (2007). Lula: De rebelde a amigo de los banqueros. Recuperado de:

http://socialistworker.org/Obrero/036/036_02_Lula.shtml

Tavora, J. (1962). *Una política para el desenvolvimiento del Brasil*. Río de Janeiro: José Olimpio.

Velásquez, E. (2002). *Historia de la Doctrina de Seguridad Nacional*. Estudios Sociales Universidad del Cauca.


Waltz, K. (1979). *Teoría de la Política Internacional*. Buenos Aires: Gel. Grupo Editor Latinoamericano. Colección Estudios Internacionales. Recuperado de

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-23762004000100007&script=sci_arttext

DECLARACIÓN ORIGINALIDAD

"Declaro que esta tesis (o trabajo de grado) no ha sido presentada para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o cualquier otra universidad". Art. 82 Régimen Discente de Formación Avanzada, Universidad Pontificia Bolivariana.

FIRMA AUTOR (ES)

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to read "Juan Manuel Julián" followed by a large, stylized flourish that resembles the letter "R".

